**Orden del Día de la Novena Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**23 de abril del año 2020.**

**1.-** Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.

**2.-** Declaratoria de apertura de la Sesión.

**3.-** Lectura, Discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día propuesto para el desarrollo de la Sesión.

**4.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Minuta de la Sesión Anterior.

**5.-** Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.

**6.-** Lectura de Iniciativas de Reforma Constitucional:

**A.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de la ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, que presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.

**B.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**C.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el numeral 1 del Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución democrática, en materia de Derecho Electoral.

**D.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para adicionar un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 84, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de establecer la obligación del Gobernador para que, ante una epidemia de carácter grave, dicte las medidas preventivas y operativas necesarias para enfrentar la emergencia sanitaria**.**

**E.-** Iniciativa con Proyecto de decreto que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con relación al reconocimiento de las personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos de Coahuila.

**F.-** Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 29 y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ,que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución democrática, en materia electoral.

**7.-** Lectura de Iniciativas de Diputadas y Diputados:

**A.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado, a cargo de las y los Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura.

**B.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María del Rosario Contreras Pérez, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, con el objeto de reconocer a la alienación parental como una forma de violencia familiar.

**C.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se propone reformar la fracción V, del artículo 46-C, de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el efecto de establecer expresamente en dicho ordenamiento, que para promover la formación profesional de especialistas en las diversas disciplinas que concurren en el estudio y atención del trastorno del espectro autista, se destine una partida económica especifica que determinara el comité de administración del fondo para la investigación y atención al autismo, y así mismo, para que dentro del texto legal a que se alude, se disponga explícitamente que la dirección del centro de investigación y atención del autismo, deberá de celebrar los convenios de colaboración interinstitucional con las instituciones de educación superior del estado, para la formación de profesionales de la atención de esa condición, que presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.

**D.-** Iniciativa con Proyecto de decreto que expide la Ley para la Determinación de Acciones y Medidas Administrativas Extraordinarias en el Estado de Coahuila de Zaragoza, que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**E.-** Iniciativa con Proyecto de Decretoque presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, por el que se reforma el Artículo 2 de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, a efecto de que esta dependencia cuente con una delegación en cada de las seis regiones del Estado.

**F.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley para la Protección del Personal Sanitario y de Emergencias del Estado de Coahuila de Zaragoza, que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo,

**G.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jaime Bueno Zertuche, mediante la cual se adiciona un último párrafo al artículo 58 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de establecer un mecanismo que coadyuve a lograr el pago oportuno del ISAI.

**H.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, por la que se reforman diversas disposiciones de Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de fortalecer el cuidado y trato digno hacia los animales y fomentar la participación de la sociedad en esta tarea.

**I.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Diana Patricia González Soto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de reforzar las facultades de las autoridades con acciones encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres.

**J.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 96 y un segundo párrafo al artículo 109 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de regular la celebración de sesiones de cabildo y comisiones de forma virtual.

**K.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Josefina Garza Barrera, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incorporar el tipo penal de turismo sexual dentro de dicha legislación.

**L.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jaime Bueno Zertuche, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir en los delitos de lesiones y homicidio calificados, cuando se cometan en contra de personas que desempeñen cargo, profesión, oficio, o actividad relacionados con la prestación de servicios de salud; y en el de daños calificados, cuando se cause daño a edificios destinados a la prestación de servicios de salud o vehículos destinados al traslado de enfermos.

**M.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, mediante la cual se crea la Ley de Salud Mental y Bienestar de las personas con trastornos mentales para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**8.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictamen en cartera:

**A.-** Dictamen con vista del sentir de los ayuntamientos de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, a cargo de las y los Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, y la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza.

**B.-** Dictamende la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso H de la fracción II del artículo 2-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**C.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la fracción XI, recorriendo su contenido y se agrega la fracción LXVII al artículo 3; se agrega una porción normativa al artículo 12 bis; y se reforma la fracción XXXII, recorriendo su contenido agregando la fracción XXXIV al artículo 12 bis 6 a la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**D.-** Dictamende la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 90 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, presentada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**E.-** Dictamende la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso I, a la fracción IX, del artículo 12 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**F.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, relativo la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea el artículo 314 Bis del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**G.-** Dictamende la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea el numeral 1.9.5, del apartado 1 del artículo 9; y la creación del artículo 23 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**H.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 972.74 M2., ubicado en la colonia “Valle Hermoso” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, con objeto de dar certeza jurídica al predio donde actualmente se encuentra el edificio del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, garantizando su existencia y funcionamiento, el cual fue desincorporado con Decreto número 204 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de febrero de 2019.

**I.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 192,143.89 M2., ubicados en la “Congregación Hidalgo” en ese municipio, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 309, con objeto de llevar a cabo la construcción del plantel educativo identificado como CBTA No.309, el cual fue desincorporado con Decreto número 343 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 24 de septiembre de 2019.

**J.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 33,405.99 M2., ubicado en la colonia “21 de Marzo” conocido como “El Despepite” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, para ser destinado a la Secretaría de Salud, con objeto de llevar a cabo la construcción de un centro de salud mental, el cual fue desincorporado con Decreto número 345 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 24 de septiembre de 2019.

**K.-** Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, “Mediante el cual se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado, para que promuevan políticas sobre el arte urbano y se brinden espacios públicos específicos para que los jóvenes exhiban sus expresiones artísticas”.

**L.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Josefina Garza Barrera, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se adiciona el artículo 33 Bis, a la Ley para la Protección de los No Fumadores en el Estado de Coahuila, con objeto de prohibir el uso y comercialización de cigarros electrónicos en la Entidad.

**M.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, por el que se adicionan la fracción V del artículo 3º, la fracción XXVII del artículo 11 y la fracción XI del artículo 25, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de arborización.

**N.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se adiciona el artículo 16 Bis a la Ley para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso y la Obesidad para el Estado de Coahuila, con el objeto de reforzar las acciones de prevención de la obesidad infantil y juvenil.

**Ñ.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se adiciona la fracción VI al artículo 56 de la Ley Estatal de Salud, a fin de proteger la salud materno infantil.

**9.-** Proposiciones de Grupos Parlamentarios, Fracción Parlamentaria y Diputadas y Diputados:

**A.-** Proposición con Punto de Acuerdo en la Vía de Urgente y Obvia Resolución, que presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional” con el objeto de que esta Soberanía realice un respetuoso exhorto al Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Ingeniero Salvador Hernández Vélez, así como a las Universidades Privadas del Estado, y a las que se aglutinan en el Organismo denominado Comunidad de Instituciones de Educación Superior de la Laguna, “CIESLAG”, a través de su Presidenta la Maestra Martha Silvia Argüelles, para que en sus planes académicos puedan implementar las carreras técnicas o profesionales que se requieren para atender a aquellas personas que padecen del trastorno Autista en nuestro Estado, dada la falta de profesionistas certificados para atender a los que padecen la condición del Autismo”.

**B.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Berino Granados, **“**Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a las autoridades del IMSS y del ISSSTE en Coahuila, para que durante la contingencia sanitaria decretada por el covid-19, implementen en los hospitales de nuestra entidad, un mecanismo mediante el cual se garantice de manera oportuna la entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, cardiovasculares e inmunodeprimidos, sin tener que acudir directamente a los nosocomios o clínicas que atienden a enfermos de covid-19, pues son los más vulnerables de contagio”.

**C.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que este H. Pleno solicite al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que explique lo siguiente: 1) El total de dinero que se ha generado durante la administración actual por concepto de combate a la corrupción; 2) El total de dinero que se ha generado durante el mismo periodo por concepto de planes y acciones de austeridad; 3) El destino o aplicación que se ha dado a los recursos obtenidos; 4) Los motivos por los que el Presidente decidió extinguir una gran cantidad de fidecomisos; y 5; el destino o aplicación que se dará a los recursos obtenidos de estos fideicomisos”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**D.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, “A través de la que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que autorice la utilización de los recursos indispensables para que las instituciones de salud públicas puedan adquirir los insumos necesarios para enfrentar la pandemia covid 19”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**E.-** Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, “Con objeto de que se exhorte atentamente a los 38 ayuntamientos de la Entidad a que, a través de sus respetivos organismos operadores, implementen las estrategias necesarias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, los cuales resultarían inadmisibles, ante al inicio de la temporada de calor, pero, sobre todo, en vista de la actual pandemia por coronavirus, así mismo, se envíe un enérgico extrañamiento a la administración del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, por la suspensión, de hasta cuatro días de la semana anterior, del abasto de agua potable a decenas de colonias de la ciudad, en plena cuarentena por coronavirus, y se le exhorte, por las razones expuestas, a que en lo consecutivo el organismo operador Aguas de Saltillo (Agsal) se abstenga de volver a interrumpir el suministro del vital recurso”.

**F.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas Blanca Eppen Canales y Zulmma Verenice Guerrero Cazares, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila así como la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con objeto de que este H. Pleno solicite al Cabildo del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, aplicar las sanciones que correspondan al C. Hugo Jurado Estrada, director de comunicación social de ese ayuntamiento, por emitir públicamente expresiones misóginas, discriminatorias y violatorias de derechos humanos en contra de las mujeres, en este caso, de las madres solteras

**De urgente y Obvia Resolución**

**G.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con el objeto de que esta Soberanía haga un exhorto oportuno al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, para que en su calidad de Mandatario Estatal, a la brevedad posible pueda convocar a las Instituciones Bancarias acreedoras de los adeudos contraídos con motivo de la Mega deuda que padece nuestra entidad, para el efecto de que se analice la posibilidad y viabilidad de celebrar un convenio modificatorio o “ADENDUM”, de las reestructuraciones de la misma, para que durante todo el periodo que dure la emergencia sanitaria y económica que está provocando en el estado la Pandemia del Virus denominado Covid-19, se omitan los pagos de las mensualidades pactadas, así como sus respectivos intereses, sin ninguna penalidad o acumulación de dichas prestaciones, porque dadas las circunstancias actuales que padecemos los Coahuilenses, este apoyo que se les solicita resulta necesario e indispensable para atemperar las graves condiciones que se nos avecinan, y este es el justo momento para que dichos bancos sean solidarios con nuestro pueblo, en aras de que tales recursos que puedan ahorrarse se destinen específicamente al apoyo del sector salud y productivo de nuestra entidad, porque hoy más que nunca es cuando necesitamos dicho numerario”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**H.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, “A fin de que, esta Soberanía solicite respetuosamente al Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, el otorgamiento de créditos, derivados del cobro de adeudos fiscales a importantes consorcios del país, a las micro, pequeñas y medianas empresas de Coahuila, pero de manera preferencial a las que operan en sus regiones Centro y Carbonífera, con objeto de reactivar la economía estatal”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**I.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional” “Con el objeto de que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Presidente de la Republica, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que a la brevedad posible realice en términos económicos una restructuración de los Programas Sociales del Gobierno Federal, y mediante un mejor manejo del gasto público, de manera urgente se orienten y destinen mayores recursos monetarios, para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la Pandemia Mundial del virus denominado Covid-19, particularmente para que se materialicen incentivos económicos o bonos extras que pudieran ser de hasta un 100 % o más, del salario actual que perciben todos y cada uno de los trabajadores del sector público de la salud, particularmente para aquellos que están atendiendo a la población que ha sido víctima de esa enfermedad, entre los que se encuentran Médicos, Enfermeras, Camilleros, Técnicos, así como el personal de Cocina, Limpieza, Choferes de Ambulancias y Mantenimiento, de aquellos nosocomios donde se está atendiendo esa enfermedad, ya que tales personas heroicamente todos los días están arriesgando su salud e inclusive su propia vida, y como consecuencia la de sus seres queridos, dada la gravedad de los contagios, más aún, porque tales seres humanos vienen a ser el primer frente de contención y atención sanitaria de dicha Pandemia

**De urgente y Obvia Resolución**

**J.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que este H. Pleno, solicite al titular de la Secretaría de Salud Federal y al Titular del Seguro Social (IMSS) lo siguiente: La implementación inmediata de un plan de medidas para proteger la salud y la integridad de todo el personal que labora en las instituciones de salud del país, especialmente del IMSS y de los hospitales donde se atiende a pacientes de Covid-19. Asimismo, que informen a este poder legislativo lo siguiente: 1) El total de recursos o partidas asignadas a proveer de insumos y equipo a los hospitales del IMSS y en su caso, a los demás, para hacer frente al Covid-19; 2) El tipo de insumos, materiales y equipos comprados para los hospitales del IMSS; y, 3) El plan o medidas que ha implementado la dirección del IMSS para proteger al personal de los hospitales

**K.-** Proposición con Punto de Acuerdo en la Vía de Urgente y Obvia Resolución, que presenta el Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional” “Con el objeto de que esta Soberanía exhorte tanto al Titular del Gobierno Federal, Licenciado Andes López Obrador, como al responsable de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Doctor Arturo Herrera Gutiérrez, para que a la brevedad posible liberen los recursos que tengan a su alcance, para destinarlos inmediatamente al mantenimiento y óptimo funcionamiento de los centros y refugios para la protección y cuidado de la integridad de las mujeres que son víctimas de violencia, debido a que con las actuales condiciones de la cuarentena decretada por el propio Gobierno Federal, dichas personas en situación de vulnerabilidad, pueden ser receptoras del incremento de la violencia al estar en el mismo domicilio de sus agresores”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**L.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal para que en su página oficial publique material digital destinada a alumnos de nivel básico, como libros, material didáctico, que contribuyan a fortalecer el aprendizaje desde casa.

**M.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, conjuntamente con el Diputado, Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, “Por el que propone medidas para prevenir la violencia familiar”.

**N.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, “A través de la que se exhorta respetuosamente a los medios de comunicación nacionales y estatales a que se abstengan de publicar información falsa o desautorizar, contrariar o invitar a desobedecer las recomendaciones de salud y contingencia realizadas por las autoridades sanitarias del país”.

**Ñ.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputada María Esperanza Chapa García, “Con el objeto de exhortar al Instituto Coahuilense del Adulto Mayor y a la Secretaría de Salud Estatal, para que coordinen acciones y realicen visitas de inspección a los asilos y casas de reposo de adultos mayores, con la finalidad de corroborar las condiciones en que se encuentran y que cuenten con los insumos necesarios para enfrentar y prevenir el covid 19.”

**O.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, “Mediante el cual respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, para que realice las acciones conducentes para asegurar que los niños menores de edad reciban las vacunas que la Secretaría de Salud estime necesarias, de manera oportuna, para prevenir futuros brotes de enfermedades como sarampión”.

**10.-** Agenda Política:

**A.-** Pronunciamiento que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, “A fin de reconocer la gran labor que el personal del sector salud realiza para combatir el problema del covid-19.

**B.-** Pronunciamiento que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, “En relación con el informe presentado el domingo, 05 de abril, por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador”.

**C.-** Pronunciamiento que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, “Con relación al día internacional de la Madre Tierra”.

**D.-** Pronunciamiento que presenta el Diputado Jaime Bueno Zertuche, conjuntamente con las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, “Para hacer un merecido reconocimiento al Gobernador Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, por la extraordinaria manera con que ha conducido todas y cada una de las acciones de prevención y control de la propagación del covid 19”.

**11.-** Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima Sesión.

**MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 10 HORAS, CON 24 MINUTOS, DEL DÍA 3 DE ABRIL DEL AÑO 2020, DIO INICIO LA SESIÓN ESTANDO PRESENTES 19 DE 25 DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA, INFORMANDO LA PRESIDENCIA QUE LAS DIPUTADAS JOSEFINA GARZA BARRERA, ESPERANZA CHAPA GARCÍA, BLANCA EPPEN CANALES, GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ, Y LOS DIPUTADOS JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA Y JESÚS BERINO GRANADOS, DIERON AVISO QUE NO ASISTIRÍAN A LA SESIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA.

**1.-** SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDA.

**2.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MINUTA DE LA SESIÓN ANTERIOR EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDA, DISPENSÁNDOSE SU LECTURA.

**3.-** SE DISPENSO LA LECTURA DEL INFORME SOBRE EL TRÁMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO QUE SE PRESENTARON EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 1° DE ABRIL DE 2020.

**4.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMENDE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A CARGO DE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA, Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR EL DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS, DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”, POR LO QUE HABIÉNDOSE APROBADO DICHA REFORMA, LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE SE PROCEDIERA A LA PUBLICACIÓN DE ESTA REFORMA CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO A SU ENVIÓ A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA QUE RESUELVAN SOBRE SU APROBACIÓN.

**5.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMENDE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO AL OFICIO DEL SENADOR SALOMÓN JARA CRUZ, VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE BIENESTAR.

**6.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMENDE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO AL OFICIO ENVIADO POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO SE AMPLÍE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PERIODO ENERO-MARZO DEL PRESENTE AÑO 2020, A MÁS TARDAR EL 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

**7.-** SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMENDE LA COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V., GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V. Y DE LA CONTRALORA INTERNA DE AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V., MEDIANTE LOS CUALES SOLICITAN REFORMAR EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO 275, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019, ATREVES DEL CUAL SE AUTORIZÓ A LA PARAMUNICIPAL AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. (AGSAL), PARA QUE CONTRATE CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES CREDITICIAS, UN CRÉDITO HASTA POR LA CANTIDAD DE $60,000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), MÁS INTERESES, ACCESORIOS FINANCIEROS E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, QUE SERÁN DESTINADOS PARA EL PROYECTO DE REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ALOJADA EN LOS DIEZ PUNTO SEIS (10.6) KILÓMETROS, OBJETO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS-SALTILLO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES (SCT), A TRAVÉS DE UN FINANCIAMIENTO CON UN PLAZO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS (2026) Y QUE PROVENGA DE UN PROCESO COMPETITIVO.

**8.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMENDE LA COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA VALIDACIÓN DE UN ACUERDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO, PARA PERMUTAR UN BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO COMO ÁREA DE CESIÓN MUNICIPAL DE LA MANZANA “R”, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 32,296.90 M2., UBICADO EN EL “FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL PYMES TORREÓN” DE ESA CIUDAD, POR EL LOTE 1-3 CON UNA SUPERFICIE DE 32,296.90 M2., UBICADO EN LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL GLOBAL PARK LAGUNA DE ESA CIUDAD, A LA PERSONA MORAL GLOBAL PARK LAGUNA S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL INICIO DE LAS OPERACIONES E INSTALACIÓN DE LA EMPRESA TECHRONIC INDUSTRIES CO. MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., EL CUAL FUE DESINCORPORADO CON DECRETO NÚMERO 407 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DIO POR CONCLUIDA LA SESIÓN SIENDO, LAS 11:00 HORAS, CON 9 MINUTOS DEL MISMO DÍA Y AÑO, CITANDO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS A LA NOVENA SESIÓN, QUE SE CELEBRARA A LAS 10 HORAS, DEL MIÉRCOLES 22 ABRIL DE AÑO EN CURSO.

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE.**

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ**  **SECRETARIA** | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA.**  **SECRETARIA** |

**INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

**RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO**

**23 DE ABRIL DE 2020**

**1.-** CUENTA PÚBLICA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES:

- CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y EL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO

- FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO.

- PROMOTORA INMOBILIARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE COAHUILA.

- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

**SE TURNARON A LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA**

**2.-** OFICIO ENVIADOPOR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA UNA INICIATIVA EN LA QUE SE SOLICITA LA REFORMA DEL DECRETO 834 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 31 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, ASÍ COMO, DEJAR SIN EFECTOS EL DECRETO 931 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 71 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EL DECRETO 1004 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 90 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 CORRESPONDIENDO ESTE, A UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**3.-** INICIATIVA PRESENTADA POR EL CIUDADANO INGENIERO ERICK RODRIGO VALDEZ RANGEL, MEDIANTE LA CUAL PLANTEAN UNA REFORMA AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA PARA LOS EFECTOS DE LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**4.-** ESCRITO DEL CIUDADANO FÉLIX GERARDO CABELLO DUEÑAS, MEDIANTE EL CUAL PROPONE QUE SE ANALICE Y SE HAGAN DEBATES, FOROS, MESAS DE TRABAJO, TESIS EN RELACIÓN CON EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LAS FAMILIAS, PARA TODAS LAS MUJERES DE LOS 38 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA PARA LOS EFECTOS DE LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**5.-** ESCRITO DEL CIUDADANO FÉLIX GERARDO CABELLO DUEÑAS, MEDIANTE EL CUAL PROPONE QUE EN LOS 38 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, SE LES PROPORCIONE UN PERRO ADIESTRADO A LAS MUJERES QUE HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA PARA LOS EFECTOS DE LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**6.-** ESCRITO DEL CIUDADANO FÉLIX GERARDO CABELLO DUEÑAS, MEDIANTE EL CUAL PROPONE QUE SE APRUEBE EL USO DE GAS PIMIENTA E INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO PARA DEFENSA PERSONAL A TODAS LAS MUJERES DE LOS 38 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO Y SE MODIFIQUE EL ARTICULO 280 SECCIÓN QUINTA ESTABLECIENDO UN CONTROL DE GRAMOS Y VOLTIOS RESPECTIVAMENTE.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA PARA LOS EFECTOS DE LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**7.-** ESCRITO DEL COORDINADOR Y DELEGADO ESTATAL DE INDECO Y CONAINORCO A.C., MEDIANTE SEÑALAN QUE ANTE LAS EVENTUALIDADES QUE PADECEN LOS TRANSPORTISTAS DEL SECTOR TURISMO Y EXCURSIÓN DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 Y ACATANDO LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES, SOLICITAN SER BENEFICIADOS CON LOS APOYOS ECONÓMICOS ANUNCIADOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

**TÚRNESE AL COMITÉ DE GESTORÍA Y QUEJAS**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A CARGO DEL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.**

El que suscribe, **Marcelo de Jesús Torres Cofiño,** Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**,** en ejercicio de la facultad legislativa que concede el artículo 59 fracción I, 65 y 67 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de ésta Honorable Representación iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La rendición de cuentas, no solo se refiere a lo que el gobierno gasta, son tres capítulos:

Por un lado, tenemos lo que ingresa la entidad y lo que gasta. Aquí los números que arrojan estos dos capítulos deben de cuadrar a la perfección salvo la eventual participación del tercer capítulo que es cuando el gasto es superior al ingreso derivado de la deuda pública, que es precisamente, el tercer capítulo.

El gasto público debe aprovecharse de manera óptima y así están obligadas las entidades por mandato constitucional. La política de gasto del Gobierno del Estado se debe apegar a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así lo señala el artículo 171 de nuestra Constitución Local.

Ahora bien, es importante tener una idea de a lo que se refiere el capítulo del gasto público, y el Doctor Alberto Ibarra Mares, Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona nos da una idea con su definición de éste concepto de gasto público el cual dice es “la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad”.

Luego entonces, hay que rendir cuentas y estas cuentas se tiene que revisar, por lo que la obligación de transparentar y rendir cuentas la tienen todos los entes que ejercen recursos públicos, cada año, bajo el principio de anualidad.

En ese sentido, la Ley nos dice que las entidades tienen que entregar su respectiva cuenta pública anual al Congreso, y esto es así porque de la clásica distribución de poderes que se atribuye a Montesquieu, el poder ejecutivo se encargaba de la fuerza, la espada; el judicial se encargaba de la razón y el poder legislativo era, y es, el poder de la bolsa.

Entonces siendo el poder de la bolsa, el legislativo autoriza donde ejercerá el estado la potestad tributaria para obtener ingresos, y posteriormente decidirá y vigilará el destino de esos recursos que fueron obtenidos por el Estado en uso de su potestad tributaria.

Bajo esa lógica, el Congreso además de hacer leyes, se encarga de la bolsa, es decir, de lo que se ingresa, de lo que se gasta y como se gasta es decir la rendición de cuentas, y éstas las revisa y audita la Auditoría Superior del Estado.

Así pues, a más tardar el 31 de diciembre la Auditoría Superior debe revisar su trabajo de fiscalización de la cuenta pública del año anterior y al terminar su trabajo debe la ASE entregar al congreso a más tardar el 31 de diciembre un informe de su revisión, el cual es el Informe de Resultados de la Cuenta Pública.

En ese orden de ideas, la Constitución establece que “El Congreso concluirá la revisión de las cuentas públicas en un periodo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que reciba el Informe Anual de Resultados por parte de la Auditoría Superior del Estado, emitiendo el dictamen correspondiente con base en el análisis de su contenido, en las conclusiones técnicas del mismo y, en su caso, en la glosa…”, sin embargo, tanto el texto de la Constitución Local como el texto de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del

Estado son omisos al señalar la votación requerida para la aprobación de dicho dictamen al que ambas legislaciones hacen referencia.

En ese sentido, y bajo la lógica constitucional que establece en su artículo 62 Bis fracción I inciso 4) el requisito de votación de las dos terceras partes de los diputados presentes en iniciativas o decretos en materia de Fiscalización superior del Estado y los Municipios, es que la presente iniciativa pretende dar ese alcance a la votación requerida para la aprobación del dictamen al que hace referencia el tercer párrafo de la fracción XXXIV del artículo 67 de la Constitución Local así como el artículo 57 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se reforma el tercer párrafo de la fracción XXXIV del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 67.** Son atribuciones del Poder Legislativo:

I a XXXIII…

**XXXIV.** …

…

El Congreso concluirá la revisión de las cuentas públicas en un periodo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que reciba el Informe Anual de Resultados por parte de la Auditoría Superior del Estado, emitiendo el dictamen correspondiente con base en el análisis de su contenido, en las conclusiones técnicas del mismo y, en su caso, en la glosa, **el cual deberá ser aprobado por el Pleno del Congreso, por las dos terceras partes de las y los diputados presentes**, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en la ley de la materia.

…

…

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Se reforma el artículo 57 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 57.**

El Congreso concluirá la fiscalización superior de las cuentas públicas en un periodo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que reciba el Informe Anual de Resultados, dentro del cual la Comisión someterá a consideración del Pleno del Congreso el dictamen correspondiente, **el cual deberá ser aprobado por las dos terceras partes de las y los diputados presentes,** sin que ello signifique que se aprueban o no las cuentas públicas, ni que se suspenda el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta ley.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**ATENTAMENTE,**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 25 DE MARZO DE 2020.**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRÍGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA.**

El que suscribe, **Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor,** Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado por el Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila**, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares** en ejercicio de la facultad legislativa que concede el artículo 59 fracción I, 65 y 67 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, someto a consideración del pleno de esta Honorable Representación iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

Partiendo de la base de que los recursos públicos son de todos los mexicanos, ya que derivan de la facultad del Estado para recaudar a través de los impuestos que la sociedad paga al gobierno, por la explotación de los recursos naturales del país, por la prestación de bienes y servicios de las dependencias, organismos públicos y empresas paraestatales, así como con los fondos de endeudamiento que se hubieran contraído.

En consecuencia, podemos asumir que los recursos públicos son siempre limitados y que, aun alcanzando cifras de miles de millones de pesos, no alcanzan para atender todas las necesidades de un país, esto obliga a decidir, con mucha cautela, en qué conviene más utilizar los recursos públicos de acuerdo con las necesidades de la población.

En este sentido, el Presupuesto forma parte del proceso de planeación y estrategia económica que anualmente debe diseñarse desde las entidades gubernamentales, y seguirse a pie juntillas para poder alcanzar los objetivos prioritarios, en este caso del Estado, de los municipios, de los órganos autónomos, etc.

Esta es la base teórica en la que encontramos el fundamento de la versión actualmente vigente del **artículo 134 Constitucional**, que contiene disposiciones dirigidas a regular el adecuado uso de los recursos públicos, estableciendo en primer lugar, los principios a que debe sujetarse el gasto que autorizan aquellos en quienes recae esa función y que son ***eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez***.

Pero, además, para los efectos que nos ocupa ahora, producto de una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre del año de 2007, a este artículo le fueron adicionados tres párrafos relativos a la obligación de sujetar el gasto público en materia de comunicación social al principio de imparcialidad, en primer lugar, pero también a un proceso de programación para el más eficiente uso de los recursos públicos.

Desde esa fecha, el artículo 134 de la Constitución General impone en sus párrafos séptimo, octavo y noveno para quedar como sigue:

*Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,* ***tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad,*** *sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.*

***La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.***

***Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores****, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.*

En el caso de la Constitución de nuestro estado, es el **artículo 171** el que prescribe las reglas aplicables a los servidores públicos y su conducción en cuanto al uso de recursos se refiere. De su redacción se advierte que si bien, sí se replica la sujeción de aquellos a los principios **de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez**, ésta no contempla lo relativo al uso imparcial de los recursos públicos ni tampoco el debido cuidado del ejercicio presupuestal destinado a la comunicación social de los entes públicos.

A fin de comprobar lo anterior, se transcribe el texto vigente:

*(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2009)*

***Artículo 171.*** *Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.*

*(ADICIONADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2009)*

*Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezca el Estado, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 67 fracción XXXIV y 158P fracción III.*

*Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes; la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras, que realicen el Estado, los Municipios y las entidades paraestatales y paramunicipales, se adjudicarán o llevarán a cabo mediante convocatorias y licitaciones públicas, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, el cual será abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.*

*Cuando las licitaciones a que se refiere el párrafo anterior, no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, se observaran las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos que establezcan los ordenamientos legales aplicables, para acreditar la economía, eficacia, imparcialidad y honradez requeridas.*

*(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)*

*Asimismo, el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas, según corresponda.*

*(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)*

*El manejo de los recursos económicos del Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en sus correspondientes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas, en los términos del Título Séptimo de esta Constitución.*

*(ADICIONADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)*

*En los talleres tipográficos del Gobierno, se publicará el Periódico Oficial del Estado y se harán únicamente lo trabajos oficiales del mismo Gobierno. En consecuencia, queda prohibido utilizar dichos talleres para hacer otros trabajos que no sean los expresados en el presente Artículo.*

Como podemos apreciar, las bases constitucionales impuestas por la Reforma del Estado del año de 2007 mediante la inserción de reglas específicas de uso imparcial de recursos públicos y de orientación y límites a los destinados para el rubro de comunicación social, no llegaron al Poder Legislativo de nuestro estado a pesar de que en el año de 2009 ya se realizaron adecuaciones al artículo en estudio por cuanto hace a los cambios del sistema de fiscalización de entes públicos.

En consecuencia, frente a este vacío legislativo, advierto la necesidad de llevar a cabo, en primer término, la armonización constitucional correspondiente.

La armonización legislativa es el proceso mediante el cual se lleva a cabo una labor de uniformidad entre la legislación de federal con la de las entidades federativas, o entre leyes de la misma naturaleza y rango, para conseguir los objetivos comunes establecidos en la Constitución General o los Tratados y Acuerdos Internacionales que, por supuesto, debe respetar las concepciones jurídicas y técnicas legislativas propias de cada demarcación.

En el caso de referencia, resulta relevante adecuar el artículo 171 de la Constitución local a fin de contar con una redacción conforme al texto del diverso 134 de la Constitución General para incluir los párrafos que establezcan, en forma homóloga a lo prescrito por la Carta Magna, estas reglas sobre la imparcialidad de recursos, entre ellos los relativos a comunicación social, para dar paso con ello a la emisión de la legislación secundaria sobre ese punto en particular.

En el mismo orden de ideas y relevancia, es importante referir que producto de una resolución de un Juicio de Amparo en Revisión, el identificado con el número 1359/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión expedir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, lo cual fue cumplido y la Ley General de Comunicación Social fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018.

La emisión de la citada Ley General, produjo también un mandato a las entidades federativas, concretamente a los órganos legislativos como el que nosotros integramos, para emitir a la brevedad la legislación secundaria homóloga de aplicación estatal.

En resumen, este Congreso Local, debe llevar a cabo las acciones necesarias para expedir una Ley de Comunicación Social aplicable en el Estado de Coahuila, sin embargo, resulta incongruente que procedamos conforme nos ordena el artículo tercero transitorio de la Ley General de Comunicación Social sin adicionar lo propio en nuestra propia Constitución.

Por ello es que se considera pertinente, que este Congreso del Estado de Coahuila, asumiendo la responsabilidad que nos ha sido confiada, proceda a la armonización de las disposiciones, tanto Constitucional como de la legislación secundaria, que permita dar cumplimiento a ese mandato constitucional tanto de regular el gasto en comunicación social, como de su correlativo cumplimiento por parte de las entidades ejecutoras, siendo ello fundamental para terminar o al menos limitar los efectos negativos de lo que ya ha sido explicado puede ser consecuencia de un gasto incorrecto en el rubro de comunicación social.

Como ya lo dije, la urgente aprobación de la presente iniciativa de Reforma a la Constitución de nuestro estado, es paralela a la correspondiente emisión, en el plano de las normas secundarias, de la Ley de Comunicación Social para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cerrando con ello la obligación derivada del artículo tercero transitorio de la Ley General de Comunicación Social.

El citado artículo transitorio estableció un plazo de 90 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (11 de mayo de 2018) para que las Legislaturas Locales expidiéramos las leyes homólogas de aplicación estatal. Como puede advertirse, el plazo se encuentra más que vencido y ante ello, la demora de este Congreso de emitir la Ley de Comunicación Social que expondré en una diversa iniciativa, y de armonizar la Constitución para incorporar a ésta las bases de esa obligación prevista desde 2007, únicamente podría interpretarse como oposición a un mandato legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del honorable Pleno, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, a fin de que sea, una vez turnada por la Presidencia de esta Mesa Directiva, se dictamine a la brevedad y sea sometida a esta Soberanía.

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. - Se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, recorriéndose el actual párrafo séptimo como párrafo décimo, para quedar como sigue:**

**Artículo 171.** Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.

…

…

…

…

…

**Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.**

**La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.**

**Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo aquí previsto, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.**

…

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNANDEZ"**

**SALTILLO, COAHUILA A 25 DE MARZO DE 2020**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el numeral 1 del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El sistema electoral mexicano se ha construido con base en un fuerte entramado de normas jurídicas que buscan dar legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad equidad e independencia a los procesos electorales como a las instituciones que se encargan de llevarlos a cabo.

No obstante, como en todo sistema legal, pueden existir casos en los que la realidad no siempre puede atender a lo que la norma jurídica establece por más que la norma jurídica sea de interpretación literal. Los casos fortuitos o de fuerza mayor no previstos en la norma obligan a los operadores jurídicos a buscar mecanismos para solucionar problemas reales que desgraciadamente y sin la voluntad de los sujetos de la norma, sobrepasan los límites de las leyes.

Tal es el caso reciente acuerdo del Consejo General del INE, número 83/2020[[1]](#footnote-1), en el cual se aprobó por unanimidad, la atracción de los procesos electorales locales de las entidades federativas de Coahuila e Hidalgo, y en el cual, también se decidió la suspensión temporal de los procesos electorales en ambos estados.

Desde luego, compartimos la decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral, la cual es a todas luces necesaria e imperativa en un contexto de pandemia global como la que desgraciadamente nos ha tocado vivir con el Covid 19. El hecho de que el Consejo General del INE haya tomado esta medida en favor del derecho de la salud, como el mismo Consejero Presidente Lorenzo Córdova Villanelo ha mencionado, es una decisión de estado y un precedente nunca antes visto en nuestra historia democrática, en favor de la vida y la integridad personal de miles de coahuilenses e hidalguenses.

Sin embargo, y no obstante lo anterior, es importante destacar que tal acuerdo puede controvertir las reglas constitucionales que en materia electoral están dispuestas por el artículo 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Federal, en las cuales se ordena que:

“Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda”.

Como se puede observar la Constitución es bastante clara y específica sobre el día en el cual se deben celebrar los comicios, y como si esto fuera poco, las normas electorales secundarias, son incluso más específicas al señalar las horas en la cuales se debe recibir la votación, siendo este plazo entre las 8:00 am y las 6:00 pm de la jornada electoral que corresponda.

Pero además la protección de los derechos político-electorales está reforzada por el artículo 29 de la Constitución Federal que establece que ni siquiera en estado de emergencia estos derechos pueden ser suspendidos, tal disposición también es convencional pues en los mismos términos lo suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 27.2.[[2]](#footnote-2)

De ahí que, si nos ciñéramos literalmente a lo establecido por los artículos 29 y 116 de la Constitución cualquier aplazamiento, suspensión temporal o pospuesta de los comicios podrían ser impugnados por los ciudadanos o partidos interesados, ya que el máximo ordenamiento del país, no deja lugar a dudas sobre las reglas que deben seguirse en los procesos electorales.

La pregunta que debemos hacernos aquí es si la pandemia ¿es una causa que fuerza mayor que bajo algunas condiciones puede vencer a la norma constitucional para proteger un derecho que se considera de mayor valor como lo es el derecho a la salud?[[3]](#footnote-3) Desde nuestra perspectiva sí, por lo que, consideramos responsable, necesaria y adecuada la decisión tomada por el Consejo General del INE, de suspender los procesos electorales en curso.

A pesar de ello debemos hacer notar que la norma constitucional a nivel nacional tiene que cambiar de tal forma que los casos fortuitos o de fuerza mayor estén contemplados en la norma jurídica con el objeto de que en un escenario futuro similar, las instituciones electorales tengan una vía constitucional efectiva que pueda hacer frente a tal situación, sin que esta pudiera devenir en algún vicio de inconstitucionalidad.

Es por estos motivos que el día de hoy, sometemos a consideración de este Honorable Congreso, la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 27 numeral 1 de la de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para establecer la posibilidad de aplazar los procesos electorales cuando las condiciones de gravedad, caso fortuito o de fuerza mayor, puedan poner en riesgo la vida, la integridad o la salud de los electores, como se está viviendo en la actualidad.

Desde luego, sabemos que para lograr la reforma a Constitucional Local que proponemos necesitamos primero que haya cambios sustantivos en los artículos 29 y 116 de la Constitución Federal, por lo que en esta misma sesión propondremos una iniciativa de reforma al máximo ordenamiento del país, con el objetivo de que este sea enviado al Congreso de la Unión, previo trámite en esta legislatura, y de ser el caso sea analizada y aprobada por el legislativo federal. A fin de que en futuros escenarios similares se pueda hacer frente a la problemática sin algún tipo de vicio constitucional.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma el numeral 1 del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 27…**

**1.** **Las elecciones ordinarias se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda,** **salvo en los casos en los que exista una causa grave, caso fortuito o de fuerza mayor que ponga en riesgo la vida, la salud o la integridad de los electores o torne imposible la realización de los comicios.**

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-**Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicito que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 22 de abril del 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), PARA ADICIONAR UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 84, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A EFECTO DE ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DEL GOBRERNADOR PARA QUE, ANTE UNA EPIDEMIA DE CARÁCTER GRAVE, DICTE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS NECESARIAS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA.**

Honorable Asamblea Legislativa:

Con fundamento en el artículo 196, fracción I, de la Constitución Política del Estado y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso, la suscrita, DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), respetuosamente comparezco para presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona los párrafos segundo y tercero a la fracción XII, del artículo 84, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para los efectos de que ante una epidemia grave, dicte las medidas preventivas y operativas que resulten necesarias para enfrentar la emergencia sanitaria, las que serán de cumplimiento y aplicación obligatoria en el territorio del estado.

Sustento mi Iniciativa al tenor de la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política del país dispone (y cito): “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” (fin de la cita)

La salud no solo es un derecho individual. También es un derecho colectivo, esto es, el pueblo mexicano, como comunidad tiene derecho a la salud. Una de las peores amenazas a este derecho colectivo son las epidemias, como la que actualmente azota a nuestro país y al mundo entero.

En la fracción XVI del artículo 73 constitucional destacan las tres primeras bases que, por su importancia, las reproduzco a continuación:

“1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.”

De lo anterior se desprende que, en caso de epidemias graves, el Ejecutivo Federal tiene la responsabilidad de dictar, a través de las autoridades sanitarias, las medidas las medidas que resulten necesarias para enfrentar la contingencia sanitaria. Además, la base tercera deja en claro que la autoridad sanitaria será ejecutiva y que sus disposiciones serán de acatamiento obligatorio para las autoridades administrativas del país.

Ahora bien, en el artículo 84 de la Constitución del Estado, relativo a los deberes del Gobernador se establece, en la fracción XII (y cito): “Procurar la conservación de la salubridad e higiene públicas.”

En mi opinión es el momento de actualizar este precepto constitucional. Por tanto, se propone adicionar dos párrafos a la fracción XII para establecer que en caso de epidemia de carácter grave, el Gobernador tenga facultades para dictar las medidas fiscales, presupuestales, administrativas y financieras que considere necesarias, en el ámbito de su competencia, para desarrollar las acciones de prevención, contención y mitigación de la epidemia, dando cuenta posteriormente al Congreso del Estado.

Es necesario dejar claro que, en el caso de epidemia grave, la actuación del Gobernador deberá darse en coordinación con las autoridades sanitarias federales y en los términos dispuestos por la citada base tercera de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución federal.

Por lo anterior se propone disponer que el Gobernador también podrá dictar las medidas preventivas y operativas que resulten necesarias y que, dichas medidas tengan el carácter de obligatorias en su aplicación y cumplimiento dentro del territorio del estado.

Finalmente es necesario señalar que para enfrentar una epidemia de carácter grave, como la que actualmente padecemos, es indispensable que el titular del Ejecutivo Estatal tenga, en estos casos excepcionales, las herramientas normativas constitucionales que le permitan proteger, lo más eficientemente posible, el derecho colectivo a la salud.

Resulta indispensable que, desde el texto constitucional, en momentos críticos donde la salud pública se ve gravemente amenazada, el Ejecutivo Estatal pueda dictar medidas fiscales, presupuestales, administrativas y financieras para enfrentar la epidemia.

Aunque técnicamente estas atribuciones pueden catalogarse como facultades, deben inscribirse dentro de los deberes y obligaciones del Ejecutivo Estatal pues su propósito es enfrentar una contingencia sanitaria grave para proteger la salud y la vida de todos los habitantes del Estado.

Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta honorable asamblea, a efecto de que se le de el trámite que corresponda, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO:** Se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción XII, del artículo 84, de la Constitución Política del Estado de Coahuila para quedar como sigue:

**Artículo 84**. - - - - -

**I** a **XI**. - - - - -

**XI**I. - - - - -

En caso de epidemia de carácter grave el Gobernador, en los términos del artículo 73 fracción XII base tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en coordinación con las autoridades sanitarias federales, dictará de las medidas preventivas y operativas que resulten necesarias. Estas medidas serán de cumplimiento y aplicación obligatoria en el territorio del estado.

En el supuesto anterior, el Gobernador podrá dictar las medidas fiscales, presupuestales, administrativas y financieras que considere necesarias, en el ámbito de su competencia, para desarrollar las acciones de prevención, contención y mitigación de la epidemia, dando cuenta posteriormente al Congreso del Estado.

**XIII** a **XX**. - - - - -

**TRANSITORIOS**

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y

**Segundo.** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de abril de 2020.

**DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES CONJUNTAMENTE EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA CON RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS DE COAHUILA.**

**C. Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del H.**

**Presente.**

La que suscribe, Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor integrantes de este Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 67 fracción I de la Constitución Política del Estado y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito someter a la consideración de ese Honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en relación a EL RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS DE COAHUILA, acorde a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.**

En Coahuila de Zaragoza, según la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se estima que en 2015 habitaban 13,349 personas indígenas,[[4]](#footnote-4) así como 253 personas afromexicanas pertenecientes al pueblo mascogo en el año 2013, según el Gobierno del Estado.[[5]](#footnote-5) A nivel nacional, para 2015 en Coahuila habitaban el 0.5% de la población indígena de México. Las leyes de Coahuila, sin embargo, apenas han reconocido su existencia.

Aunque si bien, por un lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha reconocido con los derechos de la población indígena desde el año 2001, fue apenas, por otro lado, que en 2019 que se reivindicó a la población afromexicana en dicho texto constitucional, asimilando sus derechos con los de la población indígena. Esto es muestra del poco avance Constitucional y legal que posee nuestro país sobre derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En Coahuila, las omisiones normativas son más evidentes.

De esta forma, en el Estado, desde el punto de vista Constitucional y legislativo, apenas se han visibilizado a los pueblos indígenas y tribales del Estado. Así, la Constitución local apenas prevé a la población indígena, mientras que omite totalmente a la población afromexicana de Coahuila. Por su parte, las leyes locales, en las pocas referencias legislativas que prevén a este sector de la población, lo hace insuficientemente y con confusiones conceptuales elementales.

Estas circunstancias no tienen justificación desde el punto de vista de las referencias normativas. Estas son abundantes y de ninguna forma justifican las omisiones regulatorias en el Estado. Así, en primer lugar, destaca el “Convenio (No. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, en vigor en México desde el 5 de septiembre de 1991, que realiza distintas distinciones útiles para la legislación nacional de México.

Por un lado, este instrumento internacional distingue entre “los pueblos tribales en países independientes” y “los pueblos en países independientes, considerados indígenas”. Conceptualiza a los primeros como aquellos “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”. Mientras tanto, los segundos son calificados “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban (...) en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” En una legislación que ignora esta distinción, como lo es la coahuilense, esta es valiosa para precisamente conceptualizar las mismas.

En segundo lugar, más recientemente, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por México, alienta a los Estados “a que respeten y cumplan eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados”. Esta circunstancia, podemos ver, aún no se logra en nuestro país ni siquiera desde el punto de vista legislativo.

Así, por ejemplo, el “Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México”, en relación con el marco jurídico, político e institucional del país, concluyó que:

“96. Se debe reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales, como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Ello conlleva la modificación o reforma de legislaciones federales y estatales en materia indígena. Un primer paso para resolver los problemas mencionados en este informe es reconocer la deuda histórica del país en esta materia y adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. La modificación o reforma de dichas normas debe realizarse en consulta y con la participación de los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales.”[[6]](#footnote-6)

Las anteriores circunstancias, por tanto, orillan a adoptar medidas tanto Constitucionales y legislativas como administrativas para garantizar los derechos señalados y, además, crear una normatividad que tenga en cuenta las distinciones conceptuales referidas. Como se ha mencionado, sin embargo, las referencias normativas nacionales y locales han sido más bien escasas.

Así, por ejemplo, las referencias provenientes desde la administración pública local también han sido escasas y, en su caso, confusas. En los últimos años destaca el Decreto 803 del martes 16 de mayo de 2017 mediante el que “Se autoriza que se declare como grupo étnico del Estado de Coahuila de Zaragoza a la Tribu de Negros Mascogos”. Dicho decreto, sin embargo, equivocadamente considera a la mencionada tribu como “pueblo indígena”. Es decir, contrario a las distinciones conceptuales ya mencionadas anteriormente.

La reforma que hoy se presenta, por tanto, pretende comenzar a reparar esas graves omisiones a través de dos objetivos iniciales: marcar una pauta para la adecuación de la legislación local a los más altos estándares internacionales e interamericanos a través de una reforma a la constitución local, y reconocer expresamente la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos que habitan en el Estado, corrigiendo las distinciones que se han ignorado entre estos pueblos en la legislación nacional y las medidas administrativas locales.

Así, por lo anterior, se propone el reconocimiento de las personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales de Coahuila desde la Constitución, garantizando a través de esta sus derechos a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social dentro del marco internacional, Constitucional federal y local, y acorde a las leyes del Estado. Además, dispone la sola conciencia de la identidad o pertenencia de las personas indígenas y afromexicanas a estos pueblos y comunidades como criterio fundamental para que se les apliquen dichas disposiciones. Finalmente, dispone desde el texto constitucional local la protección, promoción y garantía del desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas y tribales asentadas en el Estado, garantiza a sus integrantes el acceso pleno a los derechos señalados en el marco normativo aplicable, y dispone que la legislación reglamentaria que se emita garantizará a los pueblos indígenas y tribales su condición de sujetos de derecho público con personalidad jurídica colectiva.

Como señalan los indicadores más recientes:

“La situación de la población indígena históricamente ha estado marcada por altos niveles de carencias sociales y económicas que denotan condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad en relación con la población nacional. El 55.5% de la población indígena habita municipios de alta y muy alta marginalidad, asimismo el 87.5% de los municipios indígenas se encuentran en condiciones de alto grado y muy alto grado de marginalidad”.[[7]](#footnote-7)

Las adecuaciones Constitucionales aquí expuestas tienen por objetivo, en términos generales, ayudar a la garantía de los derechos de las personas indígenas y afromexicanas con la finalidad de revertir esas circunstancias. De esta forma, es mediante la formulación de instrumentos legales y constitucionales de avanzada que, a través de disposiciones acordes a los más altos estándares internacionales, se busca lograr la igualdad sustancial de los grupos socialmente desfavorecidos, en plena observancia a la justicia social.

Por lo expuesto anteriormente, me permito someter a esa Honorable Legislatura para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. –** Se añade al actual Título Primero denominado “Del Estado y sus Habitantes” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza un Capítulo Quinto denominado “Personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales”, que contiene los artículos 25 Bis, 25 Ter, 25 Quater y 25 Quinquies, para quedar como sigue:

**CAPÍTULO QUINTO**

**Personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales**

**Artículo 25 Bis. Esta Constitución reconoce y protege los derechos a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales que habiten en el Estado de Coahuila, los cuales se ejercerán dentro del marco internacional, Constitucional federal y local, y acorde a las leyes del Estado.**

**Artículo 25 Ter. Esta Constitución reconoce tanto a los pueblos indígenas que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del País al iniciarse la colonización o que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio al momento del establecimiento de las actuales fronteras, y a los tribales que descienden de poblaciones afromexicanas, así como los de aquellos que pertenezcan a otros pueblos indígenas y tribales y que por cualquier circunstancia se encuentren asentados dentro del Estado, y que en todo caso conservan condiciones e instituciones sociales, culturales y económicas o partes de ellas que les distinguen de otros sectores de la colectividad del País.**

**Artículo Quater. Para la determinación de la aplicación de las disposiciones sobre personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales, la conciencia de la identidad o pertenencia de las personas de forma individual o colectiva a estos será el criterio fundamental.**

**Artículo Quinquies. La legislación que reglamente los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales que habiten en el Estado deberá respetar, proteger, promover y garantizar el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas y tribales asentadas en Coahuila, y el acceso pleno a los derechos señalados en el marco normativo aplicable en el Estado, además de garantizar a los pueblos indígenas y tribales su condición de sujetos de derecho público con personalidad jurídica colectiva.**

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO. –** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. –** El Congreso del Estado emitirá en un plazo no mayor a 180 días desde la entrada en vigor de este Decreto la legislación reglamentaria a que se refiere el Capítulo Quinto del Título Primero de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**TERCERO. –** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicitamos que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México, a 25 de marzo de 2020

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

Por un Gobierno de Concertación Democrática

Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila “Brigido Ramiro Moreno Hernández”

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 116 FRACCIÓN IV INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA ELECTORAL.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, nos permitimos presentar a esta soberanía la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 29 y 116 fracción iv inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El sistema electoral mexicano se ha construido con base en un fuerte entramado de normas jurídicas que buscan dar legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad equidad e independencia a los procesos electorales como a las instituciones que se encargan de llevarlos a cabo.

No obstante, como en todo sistema legal, pueden existir casos en los que la realidad no siempre puede atender a lo que la norma jurídica establece por más que la norma jurídica sea de interpretación literal. Los casos fortuitos o de fuerza mayor no previstos en la norma obligan a los operadores jurídicos a buscar mecanismos para solucionar problemas reales que desgraciadamente y sin la voluntad de los sujetos de la norma, sobrepasan los límites de las leyes.

Tal es el caso reciente acuerdo del Consejo General del INE, número 83/2020[[8]](#footnote-8), en el cual se aprobó por unanimidad, la atracción de los procesos electorales locales de las entidades federativas de Coahuila e Hidalgo, y en el cual, también se decidió la suspensión temporal de los procesos electorales en ambos estados.

Desde luego, compartimos la decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral, la cual es a todas luces necesaria e imperativa en un contexto de pandemia global como la que desgraciadamente nos ha tocado vivir con el Covid 19. El hecho de que el Consejo General del INE haya tomado esta medida en favor del derecho de la salud, como el mismo Consejero Presidente Lorenzo Córdova Villanelo ha mencionado, es una decisión de estado y un precedente nunca antes visto en nuestra historia democrática, en favor de la vida y la integridad personal de miles de coahuilenses e hidalguenses.

Sin embargo, y no obstante lo anterior, es importante destacar que tal acuerdo puede controvertir las reglas constitucionales que en materia electoral están dispuestas por el artículo 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Federal, en las cuales se ordena que:

“Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda”.

Como se puede observar la Constitución es bastante clara y específica sobre el día en el cual se deben celebrar los comicios, y como si esto fuera poco, las normas electorales secundarias, son incluso más específicas al señalar las horas en la cuales se debe recibir la votación, siendo este plazo entre las 8:00 am y las 6:00 pm de la jornada electoral que corresponda.

Pero además la protección de los derechos político-electorales está reforzada por el artículo 29 de la Constitución Federal que establece que ni siquiera en estado de emergencia estos derechos pueden ser suspendidos, tal disposición también es convencional pues en los mismos términos lo suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 27.2.[[9]](#footnote-9)

De ahí que, si nos ciñéramos literalmente a lo establecido por los artículos 29 y 116 de la Constitución cualquier aplazamiento, suspensión temporal o pospuesta de los comicios podrían ser impugnados por los ciudadanos o partidos interesados, ya que el máximo ordenamiento del país, no deja lugar a dudas sobre las reglas que deben seguirse en los procesos electorales.

La pregunta que debemos hacernos aquí es si la pandemia ¿es una causa que fuerza mayor que bajo algunas condiciones puede vencer a la norma constitucional para proteger un derecho que se considera de mayor valor como lo es el derecho a la salud?[[10]](#footnote-10) Desde nuestra perspectiva sí, por lo que, consideramos responsable, necesaria y adecuada la decisión tomada por el Consejo General del INE, de suspender los procesos electorales en curso.

A pesar de ello debemos hacer notar que la norma constitucional a nivel nacional tiene que cambiar de tal forma que los casos fortuitos o de fuerza mayor estén contemplados en la norma jurídica con el objeto de que en un escenario futuro similar, las instituciones electorales tengan una vía constitucional efectiva que pueda hacer frente a tal situación, sin que esta pudiera devenir en algún vicio de inconstitucionalidad.

Es por estos motivos que el día de hoy, sometemos a consideración de este Honorable Congreso, la presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 29 y 116 de la Constitución para establecer la posibilidad de aplazar los procesos electorales cuando las condiciones de gravedad, caso fortuito o de fuerza mayor, puedan poner en riesgo la vida, la integridad o la salud de los electores, como se está viviendo en la actualidad.

Por todas las razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforman los artículos 29 párrafo segundo y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 29…

*En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a lano discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.*

Artículo 116….

I..

III…

*IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:*

*a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda,* ***salvo en los casos en los que exista una causa grave, caso fortuito o de fuerza mayor que ponga en riesgo la vida, la salud o la integridad de los electores o torne imposible la realización de los comicios****.* ***El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, será la autoridad responsable acordar la suspensión temporal del proceso electoral del que se trate, siempre y cuando la decisión sea tomada por la mayoría calificada de sus integrantes, bajo los estrictos principios de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad.*** *Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;*

**b)…**

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicitamos que las reformas presentadas sean analizadas con el propósito de que previo dictamen, sean presentadas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 22 de abril de 2020**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y DEL REGLAMENTO INTERIOR Y DE PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A CARGO DE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA.**

Los que suscriben, Diputadas y Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado**,** en ejercicio de la facultad legislativa que concede el artículo 59 fracción I, 65 y 67 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, sometemos a consideración del pleno de ésta Honorable Representación iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, y del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza al tenor de la siguiente:

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La aparición e inusitada expansión del COVID-19 ha puesto a la mayor parte de los países del mundo frente a enormes desafíos cuyos impactos son aún difíciles de prever. En esta coyuntura, todos los gobiernos del mundo se han visto obligados a reordenar sus prioridades y a tomar decisiones en tiempos de crisis de manera eficaz, efectiva y oportuna, muchas de las veces por fuera del proceso de toma de decisiones conocido y establecido.

En este contexto, y conscientes de la necesidad de fortalecer el rol del Poder Legislativo del Estado, para que éste pueda adaptarse a esta nueva realidad que nos presenta la pandemia, y continuar ejerciendo sus funciones de representación, legislación y control político, fue que el pasado 03 de abril, el Congreso del Estado tuvo a bien aprobar una reforma constitucional, para autorizar en nuestra carta magna local, de manera excepcional, en caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas especiales lo acordase el Pleno por mayoría calificada, que las sesiones se pudiesen realizar de forma virtual, por medios electrónicos, para desahogar los asuntos concretos acordados.

Y es que el rol del Poder Legislativo en este contexto de crisis sanitaria, económica y social es fundamental para tomar decisiones de política pública que respondan a las necesidades ciudadanas. Por ello resulta primordial garantizar que los procesos sean transparentes en la toma de decisiones que competen a este poder.

Lo anterior, no ha sido ajeno a otras latitudes, pues los Poderes Legislativos de otras naciones han actuado de distintas formas, pero en el mismo sentido, para hacer frente a esta situación y asegurar la continuidad de las funciones parlamentarias. Así, en al menos siete países de América y Caribe, los órganos legislativos han comenzado a experimentar con la modalidad de trabajo virtual, como Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Honduras y Jamaica. México, y en el caso particular de Coahuila, no son la excepción y hemos reformado nuestra constitución local para adaptar nuestras funciones y respetar las pautas de distanciamiento social y las recomendaciones de las y los funcionarios nacionales y especialistas internacionales para mitigar la propagación de COVID-19.

Y es que el pasado 23 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de México anunciaron formalmente que el país había entrado en la fase 2 de la pandemia del coronavirus, por lo que naturalmente, la única prioridad de los coahuilenses y los mexicanos debe ser la lucha contra esta pandemia y la preservación de la salud de nuestros ciudadanos, es algo te tenemos que tomar con la máxima seriedad y responsabilidad.

Ahora bien, resulta fundamental reforzar el rol del Poder Legislativo: en contextos de crisis los órganos colegiados y deliberativos muestran, una vez más, su relevancia política. Los legisladores cumplen la importante función de representar, legislar y controlar. Es el Poder Legislativo el espacio natural para que el debate suceda. Son las y los legisladores quienes discuten y acuerdan, preguntan y fiscalizan, consensuan y aportan para que las decisiones de política pública sean plurales, y les otorgan legitimidad.

Es precisamente este motivo por el que hoy presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, y el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, encaminada a contemplar la realización de sesiones de este H. Pleno del Congreso de manera virtual, como consecuencia de las contingencias que pudieran ocurrir en nuestro entorno, con el objeto de seguir cumpliendo nuestra función de legisladores, a la par de que cumplimos con las medidas preventivas y de control sanitario, para evitar que se propague el virus COVID-19, que hoy nos tiene en un aislamiento obligado.

Así pues, es objeto de esta iniciativa el regular las sesiones virtuales, entiendo que este tipo de sesiones se realizarán de manera excepcional, cuando se actualice alguna situación de emergencia prevista por la ley y que, debido a ello, no pueda realizarse de manera habitual, es decir, de manera presencial en el recinto oficial del H. Congreso del Estado.

Es por lo anterior que se pretende reformar, por un lado, la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la cual establece en su artículo 8° párrafos segundo, tercero y cuarto lo siguiente:

*“Se consideran recintos oficiales, todas las instalaciones, inmuebles u oficinas del Congreso del Estado que sean utilizadas para los trabajos del Pleno, comisiones y dependencias directivas o administrativas.*

*El Congreso del Estado sesionará únicamente en los recintos oficiales, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas especiales lo acuerde el Pleno por mayoría calificada, y sólo provisionalmente para desahogar los asuntos concretos*

*acordados”.*

*El decreto que autorice la declaratoria de nuevos recintos oficiales,*

*deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”.*

Visto dicho contenido, se considera que la Ley Orgánica podría en su caso establecer la posibilidad de sesionar en manera virtual, lo cual no queda fuera del alcance de lo que el Poder Legislativo, en uso de su autonomía normativa, pueda determinar dentro del cauce constitucional, esto es así porque la misma Constitución en su artículo 55, a raíz de la reforma del pasado 03 de abril, la cual la mayoría de los ayuntamientos han tenido a bien aprobar, otorga no solo la autonomía suficiente al Poder Legislativo para determinar el lugar de sesiones, sino la posibilidad de que éstas puedan ser llevadas a cabo de manera excepcional en forma virtual.

En ese sentido, y para dar claridad a la ley, es que la presente iniciativa

pretende reformar el tercer párrafo al artículo 8° de la Ley Orgánica para establecer de manera expresa la posibilidad de que el Congreso del Estado pueda sesionar en una sede diversa, de carácter virtual, en casos excepcionales y de fuerza mayor, como lo es el caso de la pandemia del coronavirus que hoy estamos viviendo. De igual forma se agrega, bajo el principio de “quien puede lo más, puede lo menos”, que esta modalidad de sesión virtual sea extensiva a las sesiones de las comisiones, que es donde se desarrolla con carácter técnico el grueso de los trabajos legislativos.

Adicionalmente se adaptan también disposiciones del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso para estar en sintonía con el andamiaje legislativo que a raíz de la contingencia se ha reformado.

En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**PRIMERO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 8°, la fracción I y XII del artículo 72, el primer párrafo del artículo 121, el primer y segundo párrafo del artículo 217, y se adiciona un artículo 221 bis, todos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:**

**Artículo 8°. …**

…

El Congreso del Estado sesionará únicamente en los recintos oficiales, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas especiales lo acuerde el Pleno por mayoría calificada, y sólo provisionalmente para desahogar los asuntos concretos acordados. **En este último caso también podrá celebrar sesiones virtuales a través de medios electrónicos.**

…

**Artículo 72.** Son funciones de la Junta de Gobierno, las siguientes:

**I.** Colaborar para la optimización de las funciones legislativas del Congreso **y emitir los acuerdos que considere necesarios para el buen desarrollo de las sesiones**;

**II.** a la **XXI.** …

**XII.** Hacer propuestas sobre el desarrollo **y forma en que deba realizarse** las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, así como de la Diputación Permanente; y sobre las comparecencias de las y los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, relacionadas con el análisis del informe del Gobernador del Estado;

**Artículo 121.** Para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados por el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, las comisiones se reunirán a convocatoria de su coordinador, donde se señalará lugar, fecha y hora de la sesión o cuando lo acuerden las dos terceras partes de sus integrantes. **Estas se podrán realizar de manera excepcional, en forma virtual, a través de medios electrónicos, por causas especiales, de caso fortuito o fuerza mayor.**

…

…

…

**Artículo 217.-** Las sesiones del Pleno serán Ordinarias, Extraordinarias o Solemnes, su desarrollo y trabajos estarán regulados en términos del Reglamento **Interior y de Prácticas Parlamentarias** del Congreso de Estado.

A solicitud de la Junta de Gobierno, el Pleno del Congreso del Estado podrá autorizar que las sesiones del Pleno se realicen bajo la modalidad del Congreso Itinerante; **asimismo el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente en su caso, autorizarán que las sesiones se realicen de manera virtual, a través de medios electrónicos, cuando concurra alguna las causas a que se refiere el artículo 221 Bis de esta Ley, previo acuerdo de la Junta de Gobierno.**

...

**Artículo 221 Bis.- Se podrán realizar sesiones virtuales, a través de medios electrónicos, cuando concurra alguna situación emergente que impida realizarlas de manera habitual, como las siguientes:**

**I. Declaratoria de emergencia de salud pública, emitida por autoridad competente;**

**II. Declaratoria de emergencia ocasionada por desastres naturales, que hagan imposible la realización de las sesiones en los recintos oficiales, o que dificulten el traslado de los legisladores a los mismos;**

**III. Situación de riesgo por seguridad pública;**

**IV. Por cualquier otra causa de fuerza mayor, que dificulte o imposibilite la realización de las sesiones del Pleno o de la Diputación Permanente en los recintos oficiales.**

**SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 79 y la denominación del Título de la Sección Quinta; se adiciona el artículo 88 Bis al Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:**

**Artículo 79.-** Las Sesiones del Congreso tendrán el carácter de ordinarias, extraordinarias o solemnes; todas las sesiones serán públicas, salvo las que de manera excepcional, sean consideradas como privadas.

A solicitud de la Junta de Gobierno, el Pleno del Congreso del Estado podrá autorizar que las sesiones del Pleno se realicen bajo la modalidad del Congreso Itinerante; **asimismo el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente en su caso, autorizarán que las sesiones se realicen de manera virtual, cuando ocurra alguna situación emergente a que se refiere el artículo 221 Bis de la Ley Orgánica, previo acuerdo de la Junta de Gobierno.**

**Sección Quinta**

**Sesiones Privadas y Sesiones Virtuales**

**Artículo 88 Bis.-** **Se consideran sesiones virtuales, públicas o privadas, aquellas en las que se autoricen realizar bajo esa modalidad, a través de la plataforma digital del Congreso del Estado, y que debido a alguna situación emergente a que se refiere el artículo 221 Bis de la Ley Orgánica, impida que se realicen de manera habitual.**

**Será la Junta de Gobierno, la que mediante acuerdo determine que los trabajos de la sesión o sesiones que estime se deban llevar a cabo de manera virtual, por encontrarse ante alguna de las situaciones emergentes que establece la Ley, dicho acuerdo será sometido a consideración del Pleno o de la Diputación Permanente, según corresponda.**

**La coordinación técnica para la celebración de las sesiones virtuales, estará a cargo de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, quien se auxiliará del personal necesario, para el óptimo desarrollo de dichas sesiones**.

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 20 de abril de 2020**

**LAS Y LOS DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ**

**DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA**

**DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**

**DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA DIP. JESÚS BERINO GRANADOS**

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO**

**DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ**

**DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**

**DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA**

**DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**

**DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ**

**DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA**

**DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA FAMILIA DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY DE PREVENCION, ASISTENCIA Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, CON EL OBJETO DE RECONOCER A LA ALIENACIÓN PARENTAL COMO UNA FORMA DE VIOLENCIA FAMILIAR.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada María del Rosario Contreras Pérez, conjuntamente con Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este Honorable Pleno del Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, con el objeto de reconocer a la alienación parental como una forma de violencia familiar, conforme a la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos[[11]](#footnote-11), la alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta llegar al odio.

Tales conductas si se realizan de manera reiterativa, manipulan la mente del menor e influyen de manera negativa hasta lograr un cambio de conciencia con respecto a alguno de sus progenitores, pues no tiene la capacidad de comprender o resistir los actos de manipulación que un adulto ejerce sobre el para lograr un objetivo: el impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos contra el otro progenitor.

Este tipo de conductas, suelen darse previo, durante o después de un proceso de divorcio, en el que debido a la separación y designación de quien temporal o definitivamente tendrá la custodia de los menores, suelen utilizar a los hijos como un pretexto para desquitarse de su excónyuge o conseguir beneficios económicos por la disolución del vínculo matrimonial, a costa de una convivencia pacífica entre los hijos con alguno de los progenitores.

Esta situación coloca a los menores en un campo de batalla entre sus padres, en el que se forja un conflicto de lealtades, lo que genera una perturbación psicológica hacia el menor, que afecta de manera significativa su desarrollo emocional, lo cual trae efectos negativos en diversos ámbitos de su vida.

La alienación parental se genera a través de conductas negativas, que en muchas ocasiones no suelen ser sutiles sino violentas por parte de alguno de los progenitores, pues tratan desesperadamente crear en los menores sentimientos de rechazo contra uno de los progenitores, mediante maniobras de desprestigio o injurias, lo cual poco a poco los menores asumen como suyo ese rechazo y esos argumentos que reiteradamente lo acechan, hasta generar un cambio en su comportamiento que lo hace rechazar a mantener un contacto con alguno de sus progenitores, haciéndolo extensivo muchas veces a familiares como abuelos, tíos o primos, pues cortan toda relación de parentesco.

Esto sin duda alguna, constituye una forma de violencia familiar, pues se juega con las emociones de los menores. La alienación parental no solamente afecta la dinámica familiar, sino el desarrollo normal de los menores, además constituye una violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pues atenta su derecho a la identidad, al apego, y a desarrollar una convivencia pacífica y permanente con el padre o madre que no tenga su custodia.

La protección de los derechos de los menores debe anteponerse a los derechos, deberes e intereses de los padres que transitan en un proceso de divorcio, por lo que es necesario frenar esas conductas de conflictos interparetales que constituyen una violencia familiar hacia los menores.

Es por ello, que resulta necesario establecer en la legislación estatal normas que garanticen la protección integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en el que prevalezca el interés superior de los menores, reconociendo a la alienación parental como una forma de violencia familiar y como tal, ejercer acciones para prevenirla y erradicarla.

Por lo cual, esta iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, con la finalidad de prevenir violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que puedan ver afectado su normal desarrollo, como consecuencia de conductas de alienación parental.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**PRIMERO.-** Se reforma el contenido de la fracción VI, recorriéndose la actual a la siguiente del artículo 647 y se adiciona la fracción V al artículo 437 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

* **Artículo 437.** Los derechos que confiere la patria potestad se suspenden:
* **I.** a la **IV.** ...
* **V. Por alienación parental acreditada ante la autoridad judicial competente.**
* **Artículo 647.** La violencia familiar se puede presentar mediante los siguientes tipos de violencias:
* **I.** a la **V.** …
* **VI. La alienación parental.- Es una forma de violencia familiar que se presenta cuando el padre o la madre manipula a un menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores, y**
* **VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas que integran la familia.**

**SEGUNDO.-** Se adiciona el inciso g) a la fracción III del artículo 10 de la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, para quedar como sigue:

**Artículo 10.** En orden a los sujetos y supuestos de aplicación de esta ley, se entiende por:

**I.** a la **II. ...**

III. “Violencia familiar”: …:

a) al f) …

* **g) “Alienación parental” Toda conducta que ejerza el padre o la madre para manipular a un menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores.**

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, marzo de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ**  **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA FAMILIA DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY DE PREVENCION, ASISTENCIA Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, CON EL OBJETO DE RECONOCER A LA ALIENACIÓN PARENTAL COMO UNA FORMA DE VIOLENCIA FAMILIAR.

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.**

**INICIATIVA QUE PRESENTA EL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”; EN EJERCICIO DE LA FACULTAD LEGISLATIVA QUE CONCEDE EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN I, 65 Y 67 FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 21 FRACCIÓN IV, Y 152 FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE LA CUAL PONGO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 46-C, DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EFECTO DE ESTABLECER EXPRESAMENTE EN DICHO ORDENAMIENTO, QUE PARA PROMOVER LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESPECIALISTAS EN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS QUE CONCURREN EN EL ESTUDIO Y ATENCIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA, SE DESTINE UNA PARTIDA ECONÓMICA ESPECIFICA QUE DETERMINARA EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN AL AUTISMO, Y ASÍ MISMO, PARA QUE DENTRO DEL TEXTO LEGAL A QUE SE ALUDE, SE DISPONGA EXPLÍCITAMENTE QUE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DEL AUTISMO, DEBERÁ DE CELEBRAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN DE ESA CONDICIÓN, LO ANTERIOR, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Igualmente, nuestra Ley Fundamental señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Así mismo, en nuestro país está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

Ahora bien, sobre la condición del espectro autista, los expertos coinciden en que existen posibilidades y herramientas para que a través de una habilitación terapéutica integral se puedan superar las limitantes en el desarrollo del lenguaje, de la comunicación, de la socialización y la auto-estimulación que realizan a través de movimientos repetitivos calificados de estereotipados.

Esta condición, desde el punto de vista de la ciencia médica, no tiene una causa específica y afecta a cualquier persona sin importar la condición social, económica o de raza, pero una de las hipótesis es que se trata de un problema genético y ambiental.

Su tratamiento debe de ser integral, en el cual deben intervenir médicos psiquiatras infantiles, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros, encargados de realizar historias clínicas completas, integrar un psicodiagnóstico a través de pruebas psicológicas específicas, proponer el tratamiento farmacológico de algunos síntomas cuando esto es necesario, y ofrecer terapia psicológica de diversas modalidades.

Así mismo, se pueden requerir exámenes de laboratorio y gabinete, y tratamientos complementarios como electroencefalografía, laboratorio clínico, atención neurológica, pediátrica, odontológica, de rehabilitación y médica en general, el tratamiento también involucra a toda la familia del niño, para que responda de manera adecuada a las terapias de comunicación, cognición, de lenguaje y ocupacional.

Conforme a lo anteriormente expuesto, y atendiendo las justas y legítimas propuestas de los familiares de personas autistas de la Región Lagunera, quienes, en voz de uno de sus integrantes, el Licenciado Fernando Vázquez Camacho, quien preside la agrupación denominada **“SONRISA AZUL LAGUNA A. C.”**, es que se plantea la presente iniciativa de reforma, para que se destinen fondos para la formación profesional de especialistas en las diversas disciplinas que concurren en el estudio y atención del trastorno del espectro autista, y se celebren los convenios interinstitucionales con las Universidades Públicas como Privadas del Estado, para dicho objeto, de ahí, que se someta a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMA LA FRACCIÓN V, DEL ARTICULO 46-C, DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 46-C.** Son atribuciones del Centro de Investigación y Atención del Autismo, las siguientes:

1. **…**
2. **…**
3. **…**
4. **…**
5. **Promover la formación profesional de especialistas en las diversas disciplinas que concurren en el estudio y atención del trastorno del espectro autista;** para el cumplimiento de tal objeto se deberá destinar una partida económica especifica que determine el Comité de Administración del Fondo a que aluden los artículos 46-G, y 46-H, de este ordenamiento. Así mismo, la Dirección del Centro de Investigación y Atención del Autismo, deberá de realizar con las Instituciones de Educación Superior Publicas y Privadas del Estado, los convenios de colaboración interinstitucional que sean necesarios para concretar la debida formación y acreditación profesional de los especialistas para la atención integral de las personas con la condición del espectro autista.

TRANSITORIOS

**ÚNICO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

GRUPO PARLAMENTARIO DEL “PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 23 DE ABRIL DEL 2020.

DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO

DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ

DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES

DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ

DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE

HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 46-C, DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EFECTO DE ESTABLECER EXPRESAMENTE EN DICHO ORDENAMIENTO, QUE PARA PROMOVER LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESPECIALISTAS EN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS QUE CONCURREN EN EL ESTUDIO Y ATENCIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA, SE DESTINE UNA PARTIDA ECONÓMICA ESPECIFICA QUE DETERMINARA EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN AL AUTISMO, Y ASÍ MISMO, PARA QUE DENTRO DEL TEXTO LEGAL A QUE SE ALUDE, SE DISPONGA EXPLÍCITAMENTE QUE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DEL AUTISMO, DEBERÁ DE CELEBRAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN DE ESA CONDICIÓN

**INICIATIVA CON PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY QUE PRESENTA LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES CONJUNTAMENTE EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA DE COAHUILA QUE EXPIDE LA LEY PARA LA DETERMINACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORDINARIAS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**.

**C. Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del**

**H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente. –**

La que suscribe, Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, integrantes de este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 67 fracción I de la Constitución Política del Estado y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito someter a la consideración de ese Honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto de ley que expide la Ley para la Determinación de Acciones y Medidas Administrativas Extraordinarias en el Estado de Coahuila de Zaragoza, acorde a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.**

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud emitió la Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario ‎Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV). En dicha declaración, el mencionado organismo decidió declarar dicho brote una emergencia de salud pública de importancia internacional. En términos prácticos, como señaló el Director General de la Organización, se trata de una pandemia.

A partir de dicha declaración, diversos países del mundo tomaron diversas medidas. En México, a nivel federal, el lunes 30 de marzo, emitió el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Dicho acuerdo dispone que:

“Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior.”

En seguimiento a dicho acuerdo, el 31 de marzo se expidió el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.” En este, se acordó la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; se señalaron las actividades que se considerarían esenciales; se señalaron una serie de prácticas obligatorias; se exhortó al resguardo obligatorio de las personas dentro del territorio nacional, entre otras medidas.

A partir de dicha determinación, todos los órganos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los órganos constitucionales autónomos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación decretaron diversas medidas en consonancia con la mencionada determinación. Las acciones y medidas adoptadas van desde la suspensión de labores hasta la implementación de labores de forma remota, pasando por medidas de carácter preventido y de mitigación de la referida enfermedad, entre muchas otras.

En Coahuila, la reacción sucedida fue similar. El Gobierno del Estado anunció medidas preventivas en relación con las actividades educativas, la cancelación de eventos masivos y el cierre de establecimientos. Por su parte, tanto el Tribunal Superior de Justicia y sus órganos como el Tribunal Electoral del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa suspendieron sus actividades. Mientras tanto, este Congreso anunció la realización de las sesiones del Pleno del Legislativo de manera remota mientras persista la contingencia.

En todas acciones y medidas hay, sin embargo, un en comùn: la falta o deficiencia de un marco jurídico quede certeza sobre dichas circunstancias durante las situaciones extraordinarias como la que ahora acontece. La variedad de las medidas, la disparidad de términos en que estas fueron dictadas, y la disonancia en los fundamentos y las motivaciones que la sustentan demuestran las omisiones que nuestro orden jurìdico, sobre todo el local, padece. Y si bien en la situación en que actualmente nos encontramos, pese a la reacción no coordinada en que sucedió, las autoridades reaccionaron con cierta sintonía en las acciones y medidas determinadas, esta situación de incertidumbre jurídica, sin embargo, no puede ni debe prevalecer.

La Ley que ahora se presenta pretende, efectivamente, dar una solución a esta situación de incertidumbre jurídica.

De esta forma, la presente Ley busca regular la determinación de acciones y medidas de naturaleza material y formalmente administrativas, de carácter extraordinario y de condición temporal y provisional para el enfrentamiento de situaciones excepcionales en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por un lado, la presente legislación crea un marco jurídico que nos permite decidir en qué circunstancias, criterios y excepciones será posible para las autoridades realizar dichas acciones y medidas administrativas extraordinarias. Por el otro, regula las diversas materias en las que dichas acciones y medidas podrán ser emitidas, a partir de las competencias que le corresponde regular al Estado. Además, señala una serie de prohibiciones que permiten resguardar los derechos y los objetivos de las leyes sobre los cuales no pueden dictarse ciertas acciones y medidas. Y finalmente, señala mecanismos de rendición de cuentas y protección de los derechos humanos durante la determinación de las acciones y medidas reguladas en esta legislación.

Efectivamente, las acciones que aquí se regulan son de carácter material y formalmente administrativo, pues no podrían ser de otra forma. El acto administrativo, como reconoce la doctrina, se trata de “la declaración de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la facultad administrativa, con efectos jurídicos directos respecto de casos individuales específicos.”[[12]](#footnote-12) Esta naturaleza, por tanto, permite que la voluntad referida sea a la del sujeto activo, es decir, el órgano emisor de dicho acto. En este caso, tanto los órganos de la Administración Pública Estatal como el Congreso del Estado y la Judicatura del Estado.

Por otro lado, la presente Ley tiene diversas pretensiones. En primer lugar, busca otorgar un marco de certeza a las acciones y medidas extraordinarias dictadas por las autoridades en los casos de contingencias, emergencias o situaciones extraordinarias. En segundo lugar, busca otorgar a las autoridades que no las tengan los fundamentos legales para dictar las acciones y medidas que estas necesiten expedir para hacer frente a las situaciones que se presenten. Y, en tercer lugar, busca proporcionar un catálogo amplio de opciones administrativas a disposición de las autoridades sobre el cual puedan construir sus propias estrategias en las situaciones que esta Ley permite.

Finalmente, es oportuno mencionar que las acciones y medidas reguladas en esta Ley tratan de otorgar facultades desmedidas que en circunstancias ordinarias serían ilegales o inconstitucionales. Al contrario, en muchos de los casos se trata de facultades que ya poseen las autoridades en virtud de reglas generales existentes o que se derivan de la legislación vigente. Y en otros casos, se trata de reglas administrativas que otras autoridades ya poseen y que a partir de una interpretación amplia es posible arrogar también a las autoridades autorizadas en virtud de esta ley. En los pocos casos, se trata de acciones medidas creadas por efecto de esta Ley, aunque con un alcance acorde a la normatividad vigente.

Las situaciones como las que ahora nos encontramos, en las cuales es necesario tomar decisiones rápidas, concisas y efectivas, pero sobre todo dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, parece que en futuro serán cada vez más frecuentes. Así, la Ley que ahora se presenta busca, mediante un marco amplio de reglas creadas para ese fin, proporcionar el marco legal útil, pertinente y apropiado para dichas circunstancias.

Por lo expuesto anteriormente, me permito someter a esa Honorable Legislatura para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. –** Se expide la Ley para la Determinación de Acciones y Medidas Administrativas Extraordinarias en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**LEY PARA LA DETERMINACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORDINARIAS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**Capítulo I. Previsiones generales.**

**Sección Primera. Generalidades**

**Artículo 1.** La presente Ley es de orden público e interés social, y de observancia obligatoria en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 2.** El objeto de esta Ley es la regulación de la determinación de acciones y medidas de naturaleza material y formalmente administrativas, de carácter extraordinario y de condición temporal y provisional para el enfrentamiento de situaciones excepcionales en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 3.** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Ayuntamientos: Los ayuntamientos del Estado;

II. Comisión de los Derechos Humanos: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza;

III. Congreso del Estado: El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza;

IV. Congreso de la Unión: El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. Constitución Local: La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

VII. Estado: El Estado de Coahuila de Zaragoza;

VIII. Gobierno del Estado: La Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza;

IX. Gobierno Federal: La Administración Pública de los Estados Unidos Mexicanos, y

X. Ley: La presente Ley para la Determinación de Acciones y Medidas Administrativas Extraordinarias en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 4.** En todo lo no previsto por esta Ley se aplicará supletoriamente lo señalado en las leyes del Estado que regulen las materias de las acciones y medidas señaladas en esta Ley.

**Sección segunda.**

**Determinación, contenido y excepciones**

**Artículo 5.** Las acciones y medidas que se decreten con fundamento en la presente Ley deberán:

I. Ser las necesarias para enfrentar la situación que se necesite;

II. Tener un carácter extraordinario y una condición temporal y provisional, y

III. Obedecer a los principios de proporcionalidad y necesidad en su determinación.

**Artículo 6.** Las acciones y medidas señaladas en esta Ley podrán ser decretadas por las autoridades competentes sin mayor requerimiento, de acuerdo con la normatividad aplicable, cuando:

a) Las autoridades competentes emitan las declaratorias correspondientes en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional;

b) Las autoridades competentes emitan las declaratorias de emergencia o de desastre natural;

c) El titular del Ejecutivo del Estado decrete medidas en caso de urgencia o peligro grave para el Estado;

d) El Congreso del Estado conceda al Ejecutivo del Estado las autorizaciones para que enfrente los casos de invasión, grave perturbación de la paz pública, o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en peligro, o

e) El Congreso de la Unión haya decretado la restricción o suspensión de los derechos y las garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución Federal.

**Artículo 7.** Las autoridades competentes podrán decretar de forma restringida las acciones y medidas señaladas en esta Ley, conforme a lo señalado en el artículo 8 de esta Ley, cuando:

a) El Congreso del Estado decrete la creación, supresión o modificación de la extensión de los Municipios del Estado;

b) El Congreso del Estado decrete provisionalmente el cambio de residencia de los Poderes del Estado, o

c) El Ejecutivo del Estado asuma el mando directo e inmediato de todas las corporaciones de seguridad pública o de los elementos de seguridad privada en el Estado.

**Artículo 8.** Cuando se trate de los casos señalados en el artículo 7 de esta Ley, las acciones y medidas señaladas en esta Ley sólo se podrán en decretar respecto de los municipios o regiones que comprendan los decretos correspondientes.

**Artículo 9.** Además de decretar las acciones y medidas señaladas en esta Ley, las autoridades competentes podrán decretar todas las que sean necesarias para la ejecución y cumplimiento de aquellas.

**Artículo 10.** En todo caso, los acuerdos que se dicten en virtud de esta Ley deberán señalar:

I. Las acciones o medidas decretadas;

II. El fundamento jurídico de las acciones o medidas;

III. Las consideraciones fácticas que sostienen la necesidad de las acciones o medidas;

IV. La temporalidad en la que se prolonguen las acciones o medidas aprobadas;

V. La extensión territorial sobre la que se extienden las acciones o medidas, y

VI. Las excepciones determinadas respecto de las acciones o medidas,

VII. Las consideraciones relativas a la perspectiva de género e interseccional respecto a la necesidad de las acciones o medidas y sus efectos, y

VIII. Los demás requisitos señalados en la normatividad aplicable para los acuerdos dictados por las autoridades competentes.

**Artículo 11.** Las acciones y medidas extraordinarias que se decreten conforme a esta Ley sólo podrán autorizarse ordinariamente por un plazo máximo de treinta días, con excepción de los beneficios y efectos trascendentales señalados en esta Ley.

**Artículo 12.** Para decretar las acciones y medidas señaladas en esta Ley por más de treinta días, las autoridades competentes deberán realizar una nueva determinación, con los mismos requisitos señalados en el acuerdo originario.

**Artículo 13.** Con excepción de los casos señalados en esta Ley, las acciones y medidas señaladas decretadas no trascenderán a las situaciones ordinarias, por lo que los decretos que las determinen no generarán:

a) Algún tipo de derecho sobre su otorgamiento ordinario, o

b) Mayores derechos o beneficios para los particulares o autoridades que decreten o a los que se dirigen las acciones o medidas.

**Artículo 14.** Cuando la autoridad que determine las acciones o medidas respectivas así lo acuerde, los efectos de las siguientes acciones y medidas podrán perdurar después de la situación que motivó las acciones o medidas, tratándose de:

I. Los beneficios, estímulos e incentivos fiscales señalados en el artículo 31 de esta Ley, y

II. Los acuerdos generales que otorguen beneficien en materia de procuración de justicia y ejecución de penas señalados en los artículos 46 y 47 de esta Ley.

**Artículo 15.** Las acciones y medidas señalas deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado cuando:

a) Se dicten acciones y medidas de carácter general,

b) Los efectos de las acciones o medidas se extiendan a terceros,

c) La autoridad que las emita así lo determine, o

d) Conforme a la normatividad aplicable deban ser publicadas.

**Sección Tercera.**

**Derechos humanos**

**Artículo 16.** En ningún caso, las acciones o medidas decretadas por la presente Ley podrán restringir o suspender el ejercicio de los derechos humanos reconocidos u otorgados en la normatividad aplicable.

**Artículo 17.** Las autoridades que decreten las acciones o medidas previstas en esta Ley verificarán reforzadamente que las mismas no violen los derechos humanos y las garantías judiciales que protegen:

a) La vida;

b) La integridad personal;

c) La prohibición de la esclavitud y la servidumbre;

d) La prohibición de encarcelamiento por incumplimiento de obligaciones contractuales;

e) Los principios de legalidad y no retroactividad;

f) El reconocimiento de la personalidad jurídica;

g) Las libertades de pensamiento, conciencia y de religión;

h) La protección a la familia;

i) El nombre;

j) Los derechos de la niñez;

k) La nacionalidad;

l) Los derechos políticos;

m) La no discriminación;

n) La prohibición de la pena de muerte, o

o) La prohibición de la desaparición forzada y la tortura.

**Artículo 18.** Los acuerdos que se dicten con fundamento en esta Ley deberán evaluar y señalar las discriminaciones que de derecho o de hecho puedan sufrir hombres o mujeres directa o indirectamente con motivo de la aplicación de las acciones o medidas decretadas, así como las formas en que éstas protegerán en contra de dichas situaciones.

**Artículo 19.** Los acuerdos que se dicten con fundamento en esta Ley deberán evaluar y señalar las discriminaciones de hecho o de derecho puedan sufrir las personas directa o indirectamente en virtud de la combinación de categorías sospechosas como género, raza, clase, sexualidad, capacidad, entre otras, con motivo de la aplicación de las acciones o medidas decretadas, así como las formas en que éstas protegerán en contra de dichas situaciones.

**Capítulo III.**

**Acciones y medidas extraordinarias**

**Sección Primera.**

**Modificación de condiciones laborales**

**Artículo 20.** Los órganos, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Ayuntamientos podrán modificar las condiciones laborales de los servidores públicos con la finalidad de proteger a estos y a la ciudadanía a la que le prestan sus servicios.

**Artículo 21.** Para los efectos del artículo 20 de esta Ley, se podrán tomar acciones o medidas consistentes en:

I. La modificación del horario laboral;

II. La implementación de trabajo de forma remota;

III. El adelanto o cambio de periodos vacacionales por períodos laborables;

IV. La suspensión de labores presenciales para grupos de personas en riesgo de acuerdo con la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias;

V. El cambio del lugar de trabajo del servidor público, con consentimiento plenamente comprobado del mismo;

VI. La alternación de los días de días de trabajo para para sectores o grupos de personas en riesgo de acuerdo con la causa de la determinación de la medida, y

VII. El escalonamiento de los horarios de entrada para quienes asistan a los centros de trabajo.

**Artículo 22**. La aplicación de las acciones y medidas señaladas en el artículo 21 no implicará la autorización de vacaciones, viáticos, pasajes o erogación adicional alguna.

**Artículo 23**. Corresponde a los órganos internos de control en los órganos, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Ayuntamientos la vigilancia del cumplimiento de los presentes criterios.

**Artículo 24.** Las determinaciones que se tomen en virtud del artículo 21 de esta Ley serán tomadas en acuerdos generales, y comunicadas oportunamente a los funcionarios que conformen dichas instancias.

**Artículo 25.** En todo caso, los órganos, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Ayuntamientos deberán seguir los acuerdos que al respecto dicten los órganos que presiden, administra o dirigen los mismos.

**Artículo 26.** El despido de los servidores públicos durante la duración de las acciones y medidas señaladas en esta Ley se presumirá ilegal, a menos que se demuestre que se realizó por causas distintas a las permitidas por la misma.

**Artículo 27.** En ningún caso podrán modificarse las condiciones laborales de los servicios que de acuerdo con la normatividad aplicable estén clasificados como esenciales.

**Sección Segunda**

**Suspensión de labores**

**Artículo 28.** Los órganos, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Ayuntamientos podrán determinar la suspensión de labores de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y en la demás normatividad aplicable.

**Artículo 29.** La suspensión de labores tendrá efectos generales, con las excepciones señaladas en esta Ley y la normatividad aplicable.

**Artículo 30.** En ningún caso podrá suspenderse las labores de los servicios que de acuerdo con la normatividad aplicable estén clasificados como esenciales.

**Sección Tercera**

**Beneficios, estímulos e incentivos fiscales**

**Artículo 31.** El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos podrán determinar la aplicación de beneficios, estímulos e incentivos fiscales relativos a impuestos, derechos, contribuciones o sus accesorios consistentes en:

I. Ampliar los plazos de pagos de impuestos, derechos, contribuciones y sus accesorios;

II. Condonar o eximir total o parcialmente el pago de impuestos, derechos, contribuciones y sus accesorios;

III. Descontar o eliminar los montos por recargos en impuestos, derechos, contribuciones y sus accesorios;

IV. Eliminar las tasas en el cálculo de recargos;

V. Suspender temporalmente actos de fiscalización;

VI. Aplazar la realización de trámites o procedimientos fiscales, y

VII. Suspender o aplazar los procedimientos administrativos de ejecución.

**Artículo 32.** El acuerdo por el que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos determine beneficios, estímulos e incentivos fiscales deberá señalar al menos:

I. Los beneficios, estímulos e incentivos fiscales aprobados;

II. Los plazos por los que se aplicarán dichas acciones o medidas;

III. Las excepciones a los beneficios, estímulos e incentivos fiscales aprobados, y

IV. Los casos en los que se suspenderán o cancelarán los beneficios, estímulos e incentivos fiscales aprobados.

**Artículo 33.** En el caso de las determinaciones del artículo 31 de esta Ley, los acuerdos serán publicados en el Periódico Oficial del Estado en un plazo no mayor a tres días desde la expedición del acuerdo respectivo.

**Artículo 34.** Los órganos de la Judicatura del Estado y el Congreso del Estado podrán determinar la eliminación del pago de derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de aquellos, así́ como por recibir servicios que prestan aquellos en sus funciones de derecho público.

**Sección Cuarta**

**Protección de servicios públicos**

**Artículo 35.** Los órganos, dependencias y entidades del Estado y los Ayuntamientos y las entidades paraestatales competentes garantizarán la provisión de los servicios públicos básicos, de acuerdo con la normatividad aplicable.

**Artículo 36.** Para garantizar la provisión de los servicios básicos, las autoridades podrán:

I. Suspender temporalmente el pago de cuotas como contraprestación pagada por los usuarios a los organismos prestadores de servicios públicos;

II. Aumentar temporalmente los copagos, y

III. Decretar la expropiación u ocupación temporal, total o parcial, de los bienes de propiedad privada y gestionar dichos actos y acciones respecto a los bienes ejidales o comunales, de acuerdo con la normatividad aplicable.

**Sección Quinta**

**Asistencia y programas sociales**

**Artículo 37.** Los órganos, dependencias y entidades del Estado y los Ayuntamientos que presten servicios de asistencia social o que implementen u operen programas de desarrollo social podrán:

I. Extender los grupos de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y sus familias que tengan derecho a la asistencia social;

II. Modificar los criterios generales para la prestación de los servicios de asistencia social pública, y

III. Celebrar convenios con los sectores sociales y privados para prestar los servicios de asistencia social de emergencia para confrontar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias.

**Artículo 38**. En ningún caso, los acuerdos que se dicten con fundamento en el artículo 37 de esta Ley podrán:

a) Modificar la Política Estatal de Desarrollo Social y Humano o la Política Social del Estado;

b) Permitir prácticas discriminatorias en la creación o ejecución de las políticas públicas y programas sociales y de asistencia social derivados de estas, o

c) Contener disposiciones que permitan inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

**Sección Sexta.**

**Elecciones y procedimientos electorales**

**Artículo 39**. El Instituto Electoral del Estado podrá expedir los reglamentos, circulares y lineamientos generales de acuerdo con sus atribuciones y competencias que sean necesarios para el funcionamiento de los órganos y la realización de los procedimientos electorales durante la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias.

**Sección Séptima**

**Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios**

**Artículo 40**. Los órganos, entidades y dependencias de la Administración Pública del Estado y los Ayuntamientos competentes en la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios podrán:

I. Simplificar los trámites del procedimiento de adjudicación directa previsto en la normatividad aplicable;

II. Contratar el personal necesario de carácter eventual o por honorarios para solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias, a efecto de fortalecer las capacidades de respuesta de las autoridades competentes, por el tiempo que dure la situación;

III. Otorgar los pagos y anticipos necesarios que permitan obtener las mejores condiciones de oportunidad de adquirir a las autoridades competentes los recursos necesarios para solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias, a efecto de contar en el menor tiempo posible con los mismos;

IV. Prestar asesoría inmediata y expedita a órganos, entidades y dependencias competentes para llevar a cabo la adquisición de los bienes y servicios de que se trata, en el menor tiempo posible y bajo condiciones de calidad y seguridad;

V. Realizar el acompañamiento preventivo de los procedimientos de adquisición de los bienes y servicios, así como de las mercancías y objetos a que se refieran los acuerdos respectivos;

VI. Adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, que resulten necesarios para solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla;

VII. Importar y autorizar la importación, así como la adquisición en el territorio nacional de los bienes y servicios necesarios para solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontar dicha situación, y

VIII. Llevar a cabo las acciones o medidas necesarias para evitar la especulación de precios y el acopio de insumos esenciales necesarios para solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias.

**Sección Octava**

**Tránsito y movilidad**

**Artículo 41.** Las autoridades competentes en materia de tránsito y movilidad podrán decretar como acciones o medidas provisionales en materia de movilidad y tránsito las siguientes:

I. Otorgar concesiones y permisos temporales de todo tipo de servicio de transporte;

II. Modificar los procedimientos y requerimientos para el otorgamiento de concesiones y permisos para disminuir los plazos de entrega de entrega de estos;

III. Eximir del cumplimiento de condiciones no esenciales para el otorgamiento de estas;

IV. Prorrogar la vigencia de la concesiones o permisos otorgados;

V. Modificar provisionalmente las rutas, itinerarios y horarios de transporte;

VI. Eximir del pago de las tarifas de transporte a determinadas personas o integrarlas a la tarifa preferencial, o determinar la tarifa especial temporalmente;

VII. Permitir la operación de vehículos automotores, tarjetones de circulación o elementos de identificación de los vehículos.

VIII. Dispensar de la revisión físico mecánica de los vehículos de transporte público o de la verificación de emisiones contaminantes;

IX. En materia de servicio público de estacionamiento y guarda de bicicletas, motocicletas y vehículos

X. Otorgar licencias o permisos provisionales para prestar el servicio;

XI. Modificar los procedimientos y requerimientos para el otorgamiento de concesiones y permisos, así como para disminuir los plazos de entrega de entrega de estos;

XII. Eximir del cumplimiento de condiciones no esenciales para el otorgamiento de estas;

XIII. Aplazar la realización de inspecciones de verificación y evaluación del servicio, y

XIV. Reducir el plazo para la emisión de la declaratoria de abandono de vehículos, accesorios o componentes abandonados.

**Artículo 42.** En ningún caso, las acciones o medidas que dicten las autoridades competentes en materia de transporte y movilidad podrán:

a) Modificar o restringir los derechos de los peatones, ciclistas y usuarios de transporte y de los concesionarios y permisionarios;

b) Suspender la implementación de los programas de transporte y movilidad sustentable estatal y municipales;

Dejar de operar el Registro Público de Transporte del Estado de Coahuila;

c) Modificar las medidas de seguridad, infracciones y sanciones establecidas en la normatividad aplicable;

d) Suprimir o reformar los medios de defensa previstos en la normatividad aplicable, o

e) Restringir los principios rectores de la bicicultura.

**Artículo 43.** Los permisos, concesiones, autorizaciones y demás actos que se autoricen de acuerdo con esta Ley tendrán una vigencia máxima de treinta días.

**Sección Novena**

**Educación pública**

**Artículo 44**. La Secretaría de Educación del Estado podrá decretar como acciones o medidas provisionales en materia de educación las siguientes:

I. Autorizar los ajustes al calendario escolar para cada ciclo lectivo de educación básica y normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica;

II. Eximir del cumplimiento de condiciones no esenciales para la expedición de autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios;

III. Prorrogar del cumplimiento de requisitos para autorizar a los particulares a impartir la educación;

IV. Eximir del cumplimiento de requisitos no esenciales para otorgar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de normal y demás para la formación de docentes de educación básica que impartan los particulares

V. Modificar los requisitos que deberán satisfacer los trabajadores de la educación para ejercer la docencia y las labores de administración y de apoyo en las instituciones de educación, y

VI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica

**Sección Décima**

**Salubridad pública**

**Artículo 45.** Las autoridades sanitarias del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, podrán decretar como acciones o medidas provisionales las siguientes:

I. Formular y desarrollar programas locales de salud para solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias;

II. Otorgar recursos extraordinarios para la promoción, constitución y el funcionamiento de establecimientos destinados a la investigación para la salud que permitan solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias;

III. Autorizar con fines preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación, el empleo en seres humanos de medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos;

IV. Modificar las normas técnicas en materia de salubridad local para solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias;

V. Aplazar la validez de las autorizaciones sanitarias otorgadas o eximir del pago de derechos para su expedición;

VI. Modificar la normatividad relativa a los certificados expedidos por las autoridades sanitarias competentes;

VII. Realizar verificaciones extraordinarias de vigilancia sanitaria ejercida por las autoridades sanitarias competentes;

VIII. Ordenar acciones o medidas de seguridad sanitaria provisionales sin el dictamen médico requerido en la normatividad aplicable hasta por veinticuatro horas, y

IX. Clausurar temporalmente los locales o centros de reunión de cualquier índole;

**Sección Décima Segunda**

**Administración de justicia**

**Artículo 46.** Los órganos del Poder Judicial del Estado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado podrán emitir acciones y medidas extraordinarias de carácter provisional consistentes en:

I. Decretar la suspensión de labores;

II. Modificar el calendario de labores;

III. Suspender plazos o términos de los procedimientos que les corresponda conocer;

IV. Prorrogar hasta por un mes los plazos de nombramiento existente de sus integrantes;  
V. Realizar sesiones extraordinarias públicas o secretas;

VI. Realizar las sesiones en lugar distinto de la sede de los órganos jurisdiccionales, previa notificación de los integrantes de estos;

VII. Realizar sesiones no presenciales o a distancia mediante el uso de sistemas tecnológicos;

VIII. Cambiar la adscripción de los jueces o magistrados;

IX. Acordar la creación de órganos auxiliares;

X. Realizar visitas extraordinarias a los órganos que los conforman;

XI. Dictar providencias necesarias de carácter urgente para asegurar la eficacia, prontitud y expeditez de la administración de justicia;

XII. Aplazar las licencias económicas con goce de sueldo otorgadas hasta por un periodo igual al otorgado, siempre que no exceda de un mes;

XIII. Reforzar el servicio de vigilancia de los edificios donde residan las diversas oficinas de dichos órganos;

XIV. Solicitar el auxilio urgente de las corporaciones de seguridad estatales y

municipales a fin de garantizar y dar cumplimiento a sus resoluciones;

XV. Ordenar la práctica extraordinaria de diligencias para el desahogo o perfeccionamiento de pruebas, en los procedimientos que lo permitan, y

XVI. Determinar la discusión y resolución únicamente de los asuntos urgentes durante la duración de la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias.

**Sección Décima Tercera**

**Procuración de justicia y ejecución de penas**

**Artículo 47.** El Ministerio Público podrá dictar acuerdos generales que, de acuerdo con la normatividad aplicable, beneficien a uno o más víctimas, ofendidos o inculpados, cuando la normatividad aplicable lo permita, para:

I. Proporcionar colectivamente atención a las víctimas y a los ofendidos del delito;

II. Otorgar la libertad caucional a los inculpados que se encuentren a su disposición;

III. Solicitar ante la autoridad judicial la libertad de los inculpados;

IV. Turnar a las autoridades correspondientes las indagatorias que no sean de su competencia;

V. Restituir provisionalmente a los ofendidos en el goce de sus derechos;

VI. Acordar el archivo provisional de las indagatorias;

VII. Desistirse de ejercitar la acción penal;

VIII. Determinar el no ejercicio o la suspensión de la acción penal o acotar su pretensión de pena, y

IX. Ejercer las demás facultades señaladas en la normatividad aplicable en materia de procuración de justicia en forma de acuerdos que beneficien a uno o más víctimas.

**Artículo 48.** Las autoridades de ejecución de penas del Estado podrán, de acuerdo a la normatividad aplicable, dictar acuerdos generales que beneficien a uno o más personas privadas de su libertad para:

I. Trasladar a las personas privadas de la libertad;

II. Realizar propuestas o hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma a favor de las personas sentenciadas;

III. Presentar al juez de ejecución los diagnóstico médicos sobre padecimientos físicos o mentales para modificar la ejecución de las penas, y

IV. Ejercer las demás facultades señaladas en la normatividad aplicable en materia de ejecución de penas en forma de acuerdos que beneficien a uno o más personas privadas de su libertad.

**Artículo 49**. El Poder Legislativo del Estado podrá conceder amnistías acorde a lo señalado en la Constitución Política del Estado con motivo de la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias.

**Artículo 50.** El Poder Ejecutivo del Estado podrá conceder indultos conforme a lo señalado normatividad aplicable con motivo de la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias.

**Sección Décima Cuarta**

**Economía y servicios**

**Artículo 51**. Las autoridades competentes podrán, de forma provisional, dictar acuerdos generales para:

I. Dispensar o aplazar el cumplimiento de requerimientos legales para realizar actos de comercio,

II. Abreviar los procedimientos para la creación de empresas y sociedades mercantiles, y

III. Ejecutar programas de apoyos específicos que sean necesarios para atraer inversiones al Estado.

**Sección Décima Quinta**

**Seguridad pública**

**Artículo 52.** Las autoridades competentes en materia de seguridad pública podrán, de acuerdo con la normatividad aplicable:

I. Celebrar convenios para prestar coordinadamente los servicios de seguridad pública;

II. Convenir y operar el esquema operativo de mando único en forma temporal por solicitud de los ayuntamientos, y

III. Celebrar convenios o acuerdos específicos para la realización conjunta de operaciones policiales de combate a la delincuencia.

**Artículo 53.** El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública podrá convocar a reuniones extraordinarias del Consejo Estatal de Seguridad Pública con motivo de las declaratorias señaladas en los artículos 6 y 7 de esta Ley.

**Artículo 54.** Los presidentes municipales podrán convocar a reuniones extraordinarias de los consejos de seguridad pública de los municipios con motivo de las declaratorias señaladas en los artículos 6 y 7 de esta Ley.

**Capítulo III. Poderes del Estado**

**Sección Primera.**

**Poder Legislativo**

**Artículo 55.** La Junta de Gobierno del Congreso del Estado podrá dictar acuerdos generales para:

I. Realizar sesiones no presenciales o a distancia del Pleno del Legislativo, la Diputación Permanente, las comisiones o comités mediante el uso de sistemas tecnológicos;

II. Permitir la presentación de iniciativas y decretos mediante el uso de sistemas tecnológicos;

III. Aplazar las licencias económicas para separase del cargo otorgadas hasta por un periodo igual al otorgado, siempre que no exceda de un mes;

IV. Habilitar plataformas tecnológicas para que sus miembros puedan acceder a todos los documentos del Congreso del Estado, cuentas públicas de los sujetos obligados y a toda la información financiera que se presente ante la legislatura, sus comisiones y comités;

V. Realizar los servicios parlamentarios relacionados con la celebración de las sesiones mediante el uso de sistemas tecnológicos, y

VI. Programar y ejecutar los trabajos legislativos a distancia mediante el uso de sistemas tecnológicos:

**Sección Segunda.**

**Poder Ejecutivo**

**Artículo 56.** Los órganos, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, podrán.

I. Suspender todas las actividades de órganos, dependencias y entidades que no realicen actividades esenciales para solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias;

II. Convocar al personal estrictamente necesario para lo siguiente atender los asuntos urgentes relacionados con la administración de la Entidad o cualquier tipo de diligencia que sea necesaria para solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias;

III. Levantar medidas provisionales impuestas dentro de un procedimiento administrativo, habilitando las horas o días necesarios, previa solicitud;

IV. Suspender la realización de determinados trámites, procedimientos administrativos y/o procesos que no sean esenciales para solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias;

V. Determinar procesos críticos que no se suspenderán y que sean indispensables a fin de solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias;

VI. Modificar o dejar sin efectos temporalmente aquellas disposiciones jurídicas emitidas autoridades y particulares que sean necesarias para dar las facilidades administrativas que se requieran para solventar la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias;

VII. Autorizar el cumplimiento de requerimientos legales mediante plataformas creadas para tales efectos o formatos simplificados;

VIII. Otorgar facilidades administrativas a los particulares, en el marco de la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias, para lo cual considerará las características de cada caso concreto;

IX. Habilitar plataformas electrónicas para el cumplimiento de obligaciones;

X. Suspender la atención presencial de los particulares;

XI. Determinar la reanudación del cómputo de los plazos y términos, en aquellos trámites y procedimientos administrativos en los que existan las condiciones para levantar la suspensión;

XII. Determinar el desahogo en los plazos que al efecto se señalen o conforme a las instrucciones administrativas correspondientes de las actuaciones, informes, diligencias, promociones, requerimientos y actos que resulten urgentes a juicio de los titulares de los órganos, dependencias y entidades o que no sean susceptibles de suspensión conforme a la normatividad aplicable;

XIII. Habilitan días y horas que resulten necesarios durante la situación que motivó las acciones o medidas extraordinarias con el objeto de que los órganos, dependencias y entidades, en el ámbito de su competencia, provean sobre los asuntos que consideren necesarios, y

XIV. Prestar asesoría inmediata y expedita a los órganos, dependencias y entidades competentes para llevar a cabo las facultades, deberes y atribuciones legales que les competen.

**Artículo 57.** Si durante el periodo referido en el acuerdo dictado fenece algún término para el cumplimiento de una obligación por parte de los particulares que se haya fijado en alguna ley, reglamento, disposición, acto o hecho administrativo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente a aquel en que termine el periodo a que se refiere el acuerdo decretado.

**Sección Tercera**

**Judicatura del Estado**

**Artículo 58.** Sólo podrán decretar las acciones o medidas señaladas en el artículo 46 de esta Ley los órganos de la Judicatura del Estado, de acuerdo con la normatividad aplicable.

**Artículo 59.** En ningún caso, los órganos del Poder Judicial del Estado podrán suspender el conocimiento de los asuntos relativos a los procesos en materia:

a) Penal, en cualquiera de sus instancias, o

b) Familiar, en casos urgentes,

**Artículo 60.** Para la determinación de urgencia en los casos de los procesos penales y familiares, se estará a lo señalado en la normatividad aplicable.

**Artículo 61.** Para los efectos de los casos urgentes, se habilitarán los días y horas que resulten necesarios con el objeto de que se provean, en el ámbito de su competencia, sobre los mismos y se ejecuten las actuaciones judiciales que resulten necesarias para la eficacia de lo determinado en los proveídos respectivos.

**Artículo 62**. Los decretos emitidos con fundamento en esta Ley deberán señalar las horas en que las oficialías de partes permanecerán abiertas.

**Capítulo IV.**

**Prohibiciones**

**Artículo 63.** En ningún caso, las acciones y medidas dictadas con fundamento en esta Ley podrán:

a) Afectar los derechos laborales existentes en la normatividad aplicable;

b) Suspender o restringir los derechos humanos señalados en el artículo 17 de esta Ley o las garantías que los protegen;

c) Restringir de cualquier forma derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo;

d) Infringir los principios que organizan las acciones y servicios en materia de protección civil;

e) Menoscabar las finalidades que persigue el derecho a la protección de la salud;

f) Dejar de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, o

g) Dictarse por un período mayor a noventa días.

**Capítulo V.**

**Rendición de cuentas**

**Sección Primera**

**Comparecencias ante el Congreso del Estado**

**Artículo 64.** El Congreso del Estado será el órgano fiscalizador de las acciones medidas decretadas con fundamento en esta Ley, de acuerdo con los procedimientos señalados en la misma.

**Artículo 65.** El Congreso del Estado, de acuerdo con la normatividad aplicable, podrá citar a comparecer a los titulares o representantes de las autoridades que hayan determinado acciones o medidas con fundamento en esta Ley cuando tengan conocimiento de:

a) La violación de los derechos humanos o sus garantías durante la determinación de acciones o medidas señaladas en esta Ley;

b) La transgresión grave de las reglas señaladas en esta Ley;

c) La aplicación desproporcionada de las facultades señaladas en esta Ley, o

d) La contravención a las reglas señaladas en esta Ley relativas al carácter extraordinario y condición temporal y provisional de las acciones y medidas, y los principios de proporcionalidad y necesidad en su determinación.

**Artículo 66.** El Congreso del Estado conocerá de las denuncias señaladas en el artículo 65 de esta Ley que sean presentadas por la ciudadanía, y las integrará al expediente que conforme para las comparecencias respectivas.

**Artículo 67.** El Congreso del Estado remitirá copia certificada de las denuncias recibidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de esta Ley a la Comisión de los Derechos Humanos.

**Artículo 68.** Una vez realizada la comparecencia señalada en el artículo 65 de esta Ley, el Congreso determinará el procedimiento que se iniciará y la responsabilidad que se imputará, de acuerdo con la normatividad aplicable.

**Sección Segunda**

**Informe Especial**

**Artículo 69.** La Comisión de los Derechos Humanos publicará uno o varios informes especiales relativos a las acciones o medidas decretadas con fundamento en la presente Ley, en un plazo no mayor a noventa días desde que tenga conocimiento del inicio de las acciones o medidas determinadas.

**Artículo 70.** En caso de que las acciones o medidas decretadas conforme a la siguiente Ley se extiendan por un plazo mayor a treinta días, la Comisión de los Derechos Humanos emitirá un informe previo en dicho plazo, que contendrá las características del artículo 71 de esta Ley, además de un informe final que recopilará los contenidos de los informes previos.

**Artículo 71.** El informe especial que publique la Comisión de los Derechos Humanos deberá de contener, al menos:

I. Una relación del número, clase, tipo y naturaleza de las acciones y medidas adoptadas;

II. Las autoridades que dictaron y ejecutaron las acciones o medidas adoptadas, con una descripción detallada de la forma en que participación,

III. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se hayan recibido o que se adviertan de la participación de las autoridades;

IV. Una opinión técnica relativa a la observancia de los derechos humanos respectivos durante la duración de cada una de las acciones o medidas adoptadas, y

V. Una relación de recomendaciones generales donde se señalen las acciones o medidas que deban de tomarse para la protección, garantía y restitución de los derechos humanos durante la determinación de acciones o medidas en el futuro.

**Artículo 72.** La Comisión de los Derechos Humanos determinará si inicia procedimientos en virtud de las denuncias que le remita el Congreso del Estado, de acuerdo con la normatividad aplicable.

**Artículo 73.** En el informe que rinda de acuerdo con lo señalado en el artículo 71, la Comisión de Derechos Humanos dará cuenta de las denuncias que le remita el Congreso del Estado.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO. –** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. –** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicitamos que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO**

**DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México,

a 22 de abril de 2020.

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

Por un Gobierno de Concertación Democrática

Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila

“Brigido Ramiro Moreno Hernández”.

Iniciativa con Proyecto de Decreto **que presenta el suscrito, Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, por el que se reforma el Artículo 2 de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, a efecto de que esta dependencia cuente con una delegación en cada de las seis regiones del Estado.**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Diputados y diputadas, como bien sabemos todos, es hora, no sólo de preocuparnos, sino de ocuparnos por el cuidado del medio ambiente. Actualmente, tenemos serios problemas ambientales y una autoridad que no hace prácticamente nada por cambiar esta situación. Me refiero a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

La ley que crea esta dependencia data del año 2009, la cual dispone, textualmente, en su artículo 2: *“establecerá su despacho central en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sin perjuicio de que pueda establecer en otras poblaciones del Estado las delegaciones y oficinas que se consideren necesarias”*. Las preguntas aquí, son: ¿Por qué no hay más delegaciones? ¿Por qué actualmente sólo hay una oficina *“central”*?

El estado de Coahuila es territorialmente muy extenso y cuenta con 38 municipios, por lo que es imposible que, con una sola oficina, se pueda hacer un trabajo eficiente, menos aún si consideramos el gran número de problemas ambientales, que van desde empresas que no respetan las leyes ecológicas, hasta basureros clandestinos en zonas urbanas.

Si bien existen, afortunadamente, personas interesadas en la preservación del medio ambiente, el hecho de contar con una sola oficina central implica que resulte muy costoso y retardado para dichos ciudadanos el trasladarse hasta la capital del estado para presentar sus denuncias en este tema.

Es verdad que para realizar dicha diligencia y otros trámites se pueden aprovechar los medios electrónicos, pero tenemos que ser realistas, es decir, si haciéndolo de forma presencial la autoridad se muestra negligente, mucho más vía internet, así que, para los efectos de investigación, es mejor contar con delegaciones regionales que puedan satisfacer con eficiencia la necesidad de hacer respetar las leyes en la materia.

Por ello, considero necesario que la procuraduría a la que hago referencia tenga una delegación en cada región, para que de esta forma los ciudadanos y organizaciones ocupadas en el cuidado del medio ambiente puedan presentar sus denuncias, y no solo eso, sino que se les dé, en forma oportuna y menos costosa, el seguimiento correspondiente.

Se anexa al presente planteamiento una tabla comparativa referente a la modificación que propongo a la disposición en comento:

|  |  |
| --- | --- |
| **Artículo 2, vigente** | **Artículo 2, reformado** |
| *La Procuraduría dependerá orgánica y administrativamente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Administración Pública del Estado de Coahuila y establecerá su despacho central en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sin perjuicio de que pueda establecer en otras poblaciones del Estado las delegaciones y oficinas que se consideren necesarias para la realización del objeto que le corresponde.* | La Procuraduría dependerá, orgánica y administrativamente, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Administración Pública del Estado de Coahuila, establecerá su despacho central en la ciudad de Saltillo, Coahuila **y tendrá una delegación por cada región del estado,** para **una** realización **más eficiente** del objeto que le corresponde. |

Con base en todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracciones I y IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presento ante este Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la siguiente Iniciativa con...

**PROYECTO DE DECRETO**

**PRIMERO. -** Se reforma el Artículo 2 de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2. - La Procuraduría dependerá, orgánica y administrativamente, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Administración Pública del Estado de Coahuila, establecerá su despacho central en la ciudad de Saltillo, Coahuila **y tendrá una delegación por cada región del estado,** para **una** realización **más eficiente** del objeto que le corresponde.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de abril de 2019.**

***“Por el Camino de la Cuarta Transformación”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”**

**H. Pleno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.**

El que suscribe Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, 159 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, pongo a consideración de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea la Ley para la Protección del Personal Sanitario y de Emergencias del Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:

**Exposición de Motivos**

Compañeras y compañeros diputados, como todos ustedes saben el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el brote de COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Inicialmente, la mayoría de los casos se presentaron en China y en personas que habían viajado  a este país, posteriormente se situaron brotes en Estados Unidos, Italia, España, y en casi todas las regiones del mundo.

De acuerdo a la propia Organización Mundial de la Salud el COVID-19, es el coronavirus que se ha descubierto más recientemente, causante de la enfermedad de infección respiratoria, que puede ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), y que se caracteriza por su fácil transmisión en humanos. Con un índice de mortalidad más alto en adultos mayores de 60 años y en personas con afecciones previas como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes o cáncer.

Así, en el contexto internacional se registran al día 20 de abril del presente año alrededor de 2.4 millones de personas infectadas y más de 169 mil decesos.

Por su parte EE UU supera los 41 mil decesos y los 778 mil 806 contagios al día 20 de abril de este año, de ahí, que Donald Trump, presidente de ese país, ha  implementado medidas de mitigación contundentes.

En México, según la publicación oficial de la Secretaría de Salud al día 20 de abril  el número de muertos por este fatal virus escaló a 712 casos, y un total de 8,772 confirmados, pero lo más alarmante de esto es que la Secretaría de Salud estima que hay otros 49 mil 654 casos no observados directamente con lo que sumarían poco más de 58 mil casos en todo el país.  Como sabemos por desgracia, el presidente de la bolsa mexicana falleció por el virus y el Gobierno firmó un convenio con hospitales privados para la cesión de 3115 camas al sistema de Salud público.

Por lo que hace a nuestra entidad federativa, al día 20 de abril del presente año, se reportan 275 casos confirmados de COVID-19 y 23 lamentables decesos, motivando en el ámbito local de manera correcta  la emisión por parte del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís de instrumentos y medidas con el fin de prevenir y controlar la propagación del virus.

Las cifras anteriores tanto a nivel mundial, nacional como local, no muestran un panorama alentador ya que por desgracia seguirán aumentando si no se cumple con las medidas pertinentes para evitar su propagación.

Entre las medidas que se han dictado de manera correcta por parte de las autoridades sanitarias de los distintos órdenes de gobierno, se encuentra la suspensión de actividades no esenciales, el lavado continuo de manos, evitar el contacto de ojos, nariz y boca y sobre todo la implementación de la estrategia de distanciamiento social, a fin de disminuir en forma importante el número de contagios.

El día de hoy, presento esta iniciativa de ley, con el fin de hacer un justicia a los héroes y heroínas, que día a día están luchando contra este terrible mal que les aqueja a ellos y a la humanidad entera, me refiero a todas y todos los trabajadores que  prestan sus servicios en el área de salud, que se encuentran en primera línea brindando atención a cada persona que debido a este terrible padecimiento la han requerido.

Sin lugar a duda, su trabajo incansable, así como su sacrificio muestran lo mejor de la humanidad, por tanto merecen ser protegidos y respaldados siendo inaceptable que no cuenten con el equipo de protección básico, pues se encuentran permanentemente expuestos al contagio, lo que refleja un factor importante de riesgo para cada uno de ellos, por desgracia en nuestro país hasta hace unos días, 535 trabajadores de la salud se encontraban contagiados por coronavirus, lo que representa el 10% del total de enfermos por este padecimiento, cifra que de igual forma seguirá aumentando hasta no tener controlado al cien por ciento este virus mortal.

En ese contexto, la iniciativa que se somete a la consideración de todas y todos ustedes el día de hoy, no solo reconoce la valía de quienes protegen nuestra salud e integridad; sino que pretende establecer una base legal mínima sobre la que descanse la protección de mujeres y hombres responsables con gran sacrificio, de nuestra salud y cuidado.

Efectivamente actualmente todos los trabajadores del área de la salud, así como de emergencias, se encuentran totalmente desamparados, pues no tienen ningún mecanismo de protección y seguridad tanto para ellos como para su familia directa.

Es por ello, que el partido Verde Ecologista de México, consciente de esa falta de la protección adecuada y amparo para nuestros héroes y heroínas, por mi conducto, así como se ha estado presentando en diversos estados de la república, proponemos la presenta esta iniciativa de ley, con el fin de proteger a quienes nos protegen día con día, es momento de saldar una cuenta pendiente con la historia y con la vida misma.

En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente:

**Iniciativa de Decreto por el que se crea la Ley para la Protección del Personal Sanitario y de Emergencias del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**ARTÍCULO 1.** La presente Ley es de orden público e interés social y de aplicación general en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Tiene por objeto la protección de los servidores públicos al servicio de la salud y de emergencias del Estado de Coahuila mismo que es prestado por el Estado en los términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7°, 8° 173 y 173 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el artículo 6 de la Ley Estatal de Salud.

**ARTÍCULO 2.** Son servidores públicos al servicio de la salud y de emergencias del Estado de Coahuila de Zaragoza:

**I.** Los médicos, generales o especialistas y personal de enfermería que presten servicios sanitarios y  de emergencias, contratados por el organismo público Servicios de Salud o por los Ayuntamientos;

**II.** Los internos de pregrado en la licenciatura de medicina, residentes de especialidad, personal de enfermería practicante y prestadores de servicio social en campos médicos a cargo del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el personal médico, paramédico y de socorro contratado o voluntario adscritos a los servicios de ayuda y socorro, oficiales o no gubernamentales;

**III.** El personal encargado de la alimentación, limpieza, mantenimiento y de apoyo administrativo que prestan servicios en los campos médicos a cargo del Estado y los municipios;

**IV.** Los químicos, radiólogos, laboratoristas, dietistas, almacenistas y en general toda persona que brinde servicios de apoyo sanitario en los campos médicos a cargo del Estado y los municipios.

Conforme lo establece la ley Estatal de Salud, se considera personal sanitario a los profesionales de las siguientes ramas: medicina, odontología, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, psiquiatría, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares, y las especialidades a que se refiere la ley de salud en el Estado, como enfermería, radiología, bomberos, rescatistas, paramédicos, camilleros, cocineros, vigilantes, operarios y  cualquier otra actividad relacionada a la prestación de servicios médicos, contaran de los beneficios de esta ley.

**ARTÍCULO 3.** Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley general y local en materia de salud, las Normas Oficiales Mexicanas, reglamentos y lineamientos de carácter general, la función sanitaria, urgencias y emergencias, serán consideradas de utilidad pública y el personal a cuyo cargo corresponda su prestación, protegido por el Estado.

**ARTÍCULO 4.** La protección al personal sanitario y de emergencias, deberá considerar:

**I.** El descanso obligatorio, conforme establece la NOM- 033-SSA3-2018;

**II.** La alimentación nutritiva y suficiente;

**III.** El suministro de insumos para la protección oportuna y eficiente del personal en riesgo, conforme las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y conforme lo disponga el Comité Paritario que deba integrarse.

El Comité al que se hace referencia estará integrado por tres vocales representantes de los Servicios de Salud, tres vocales representantes del Sindicato titular y tres vocales especialistas en salud pública designados por la Comisión de Salud del Congreso del Estado y será presidido por el Secretario de Salud del Gobierno del Estado.  El Comité deberá aprobar su reglamento a propuesta de su Presidente.

**IV.** La dotación de vestuario y accesorios de protección necesarios para garantizar la protección del personal sanitario y de emergencias;

**V.** La sanitización de espacios, equipos, vehículos y alijos necesarios para la prestación de servicios sanitarios y de emergencias;

**VI.** La prestación de servicios médicos, quirúrgicos y farmacológicos al personal médico y de emergencias y a su familia directa; y

**VII.** El apoyo funerario en caso de fallecimiento del prestador de servicios médicos y de emergencia.

**ARTÍCULO 5.** Queda prohibida la práctica de jornadas extraordinarias con motivo de castigos laborales. Los turnos máximos de labores serán de veinticuatro horas, iniciando y concluyendo según lo estipulen las reglas internas del campo sanitario. Dado el caso de que en aplicación de declaratorias generales el campo clínico sea administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, el Comité al que se refiere la fracción III del artículo 4 de la presente ley, designará vocales que representen en número de tres a la dependencia encargada de la administración del campo clínico, además de ello, prevalecerán las normas de protección contenidas en la presente ley y en ningún sentido se entenderán sustituidas las relaciones originarias de trabajo, por lo que el personal no será sujeto a las normas militares.

**ARTICULO 6.** En el caso de declaratorias generales de emergencias sanitarias que restrinjan el libre tránsito, el personal sanitario y de emergencia, tendrán prioridad de desplazamiento a sus centros laborales y domicilios, para lo cual los concesionarios de transporte público estarán obligados a prestar sus servicios de manera gratuita previa la identificación del usuario. El servicio referido solo se constriñe al traslado al lugar de trabajo y al domicilio del prestador al término de su jornada laboral, o bien el traslado del lugar de residencia al donde se asiente el centro de adscripción y viceversa.

**ARTICULO 7.** Los medicamentos, sustancias, equipos, vestuario, accesorios y demás insumos para la salud, serán utilizados por el personal sanitario de acuerdo a la actividad que realice en los campos médicos.

**ARTICULO 8.** El personal de emergencias adscritos a las unidades estatales y municipales de protección civil y a la Cruz Roja mexicana, son motivo de protección conforme se dispone en la presente ley.

**ARTÍCULO 9.** Identificado un riesgo que pueda ser considerado de gravedad manifiesta, tanto Servicios de Salud y las Unidades de Protección Civil, dispondrán inmediatamente mecanismos de capacitación a los profesionales de la salud y  de emergencias que permitan conducir la labor del estado y los municipios para afrontar las consecuencias.

**ARTÍCULO 10.** Es obligación del personal sanitario y de emergencias concurrir y acreditar la capacitación a la que se refiere el artículo anterior.

**ARTÍCULO TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente decreto iniciará su vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** El Comité previsto por el artículo cuatro de la presente ley, deberá ser conformado en un plazo máximo de siete días a partir de la publicación del presente decreto.

**TERCERO.-** Para los efectos de financiar el sistema de protección objeto de la presente ley, el monto que se recaude por concepto del Impuesto a la Educación durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de dos mil veinte, serán destinados a un fondo especial que se constituya en los términos de ley, para sostener las acciones previstas en este ordenamiento.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 21 de Abril del 2020**

**Dip. Edgar Sánchez Garza**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER UN MECANISMO QUE COADYUVE A LOGRAR EL PAGO OPORTUNO DEL ISAI.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.**

El suscrito Diputado Jaime Bueno Zertuche, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a este Honorable Pleno del Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que seadiciona un último párrafo al artículo 58 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de establecer un mecanismo que coadyuve a lograr el pago oportuno del ISAI, de acuerdo a la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

Las contribuciones inmobiliarias representan para el municipio, la base esencial de la tributación. Para muchos municipios en el Estado, la recaudación del Impuesto por Adquisición de Inmuebles, constituye después de las participaciones federales y el predial, una de las principales fuentes de ingresos.

El impuesto sobre adquisición de inmuebles, conocido por sus siglas como ISAI, se causa cuando el dominio (propiedad) de un inmueble es trasladado a otra persona física o moral, es decir se adquiere un inmueble; este traslado se materializa la mayoría de las veces a través de un instrumento público notarial.

El Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, regula como todos los impuestos, el sujeto, el objeto, la base, la tasa y por supuesto el periodo de pago del ISAI, en este sentido:

* ***El sujeto*** al pago de este impuesto son las personas físicas o morales que adquieren inmuebles o derechos sobre los mismos.
* ***El objeto*** es la adquisición de un bien inmueble o derecho sobre el mismo.
* ***La base*** o valor grabable es el que resulte más alto entre el valor declarado en la operación o el avalúo que sobre el bien inmueble realice la autoridad catastral.
* ***La tasa*** es del 3% sobre la base gravable, manejándose estímulos e incentivos fiscales en cada ley de ingresos municipal.
* Y ***el periodo de pago*** del ISAI, es de quince días hábiles contados a partir de la fecha de escritura pública que contiene el acto que traslada el dominio del inmueble.

El artículo 381 del propio Código Financiero establece que cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno.

Dichos recargos se calcularán conforme a la tasa que fije anualmente la Ley de Ingresos de los municipios, que para este ejercicio fiscal 2020 es del 3% por cada mes o fracción que transcurra, a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.

Tratándose del ISAI, para poder realizar el pago se requiere previamente la determinación y liquidación del impuesto por parte de la autoridad catastral, de ahí que en un gran número de operaciones no se llega a dar el pago oportuno del impuesto, por causas no imputables al contribuyente, cobrándole los recargos correspondientes.

En nuestro Estado son pocos los municipios en los que sus unidades catastrales cuentan con el personal técnico y suficiente para poder realizar los avalúos catastrales de los inmuebles y determinar la liquidación del impuesto, para estar en posibilidad de pagarlo.

Es el Instituto de Catastro del Estado, quien a través de un convenio de coordinación con los municipios, coadyuva y apoya con su personal técnico las diversas tareas en materia catastral del municipio, entre ellas la valuación catastral y determinación del ISAI en cada operación inmobiliaria.

En estos casos, los municipios solo validan la determinación que realiza el Catastro del Estado y autorizan en definitiva la cantidad a pagar, entregando al contribuyente o al notario público en su nombre, el formato de pago del ISAI con los correspondientes recargos.

Reconocemos la labor que Catastro del Estado realiza para apoyar la función catastral de la mayoría de los municipios, pues solo Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras cuentan con unidades catastrales especializadas, las restantes reciben soporte técnico del Estado.

Esto no se resolvería con la contratación de más personal para el Catastro, esta no es la solución y menos en tiempos de austeridad, lo que aquí se propone tampoco es aumentar el periodo de pago del ISAI sino establecer un mecanismo que interrumpa el plazo, cuando los documentos necesarios para la determinación y liquidación del impuesto se encuentran en poder de la autoridad catastral.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**I N I C I A T I V A C O N P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**ÚNICO. –** Seadiciona un último párrafo con dos incisos al artículo 58 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 58.-** …:

**I.** a la **IV.** ...

Tratándose de traslado de dominio de un bien inmueble elevado en escritura pública, los quince días para la presentación de las declaraciones y el pago del impuesto a que se refiere este artículo correrán de la siguiente manera:

1. La declaración para la determinación del pago del impuesto deberá de presentarse, ante la autoridad catastral, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la autorización preventiva del acto.
2. Entregada por la autoridad catastral la determinación y liquidación del monto total del impuesto causado, se tendrán 5 días hábiles para su pago en la oficina recaudadora correspondiente.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, abril de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE HOJA, FORMAN PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE PROTECCIÓN Y TRATO DIGNO A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE FORTALECER EL CUIDADO Y TRATO DIGNO HACIA LOS ANIMALES Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ESTA TAREA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Verónica Boreque Martínez González, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los Artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este Honorable Pleno del Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

Basándonos en las nuevas corrientes sociales que marcan la pauta de convivencia humana, del desarrollo y adopción de diferentes estilos de vida, tanto personal como familiar, nos hemos percatado la gran importancia que guarda la inclusión de los animales en la vida cotidiana del ser humano.

Tanto para producir un beneficio directo, hablando de animales que se usan para consumo alimenticio o aquellos que usan para realizar alguna labor, como los que de manera indirecta nos causan alegría y gusto, enfocándonos en los animales de compañía y domésticos, podemos decir que la fauna siempre fue, es y será parte de la historia de la humanidad.

Antes se veían sin importancia, como simples animales y algunos los veían como si fueran una cosa, pero con el paso del tiempo, percibimos su importancia, y hoy la sociedad moderna les ha dado un valor mucho más grande que el de un simple ser vivo; hoy día los vemos como un ente dotado de derechos, protegido por la ley, por la sociedad y principalmente por su amo, compañero o propietario, quien le llega a querer y demostrar su afecto como si fuera parte de su familia.

Por eso que cuando algún cuadro de violencia se presenta contra nuestro perro o gato, cuando vemos animales maltratados en la calle, rápidamente la sociedad alza la voz y pide justicia, unen las manos para salvarlos y cuidarlos, algunos aportan en dinero para su manutención, otros en especie para su desarrollo natural, pero el común denominador en todos es, sin duda alguna, el sentimiento latente de cariño, de respeto y sobre todo de empatía hacia ellos.

Como lo señale en sesiones pasadas mediante un punto de acuerdo dirigido en apoyo al Programa de Bienestar Animal, en nuestro Estado contamos con una base normativa que deja clara la postura defensora de animales, que hace ver la seriedad dada por la misma autoridad para sancionar, para castigar y poner fin a todas las acciones humanas que vayan en contra de los derechos de la fauna doméstica y silvestre.

Ahora, la presente iniciativa se suma a dicha postura y mediante la modificación de diversos artículos buscamos continuar transitando dicho camino y sumar con aportes al mejoramiento y modernización de nuestras leyes para el beneficio de los animales, y por supuesto, para tranquilidad de nuestra gente.

Sabemos que el Gobierno Estatal, sigue firme con el compromiso de mantener este ámbito en completa tutela, sosteniendo el interés de mejorar cada vez las condiciones naturales para nuestros animales.

Con la presente iniciativa de reforma buscamos asegurar que la calidad de vida y el trato hacia los animales sea más que digno, y por supuesto, se fomente en la sociedad la participación y contribución activa para alcanzar los objetivos trazados. En este sentido se actualizan algunos conceptos y definiciones, y se hace una demarcación de límites, atribuciones y facultades para la autoridad, para asociaciones protectoras de animales, veterinarias y para las personas que tengan en su cuidado algún animal dentro del territorio del Estado.

El inculcar respeto y responsabilidad frente a otras formas de vida dará como resultado una sociedad más armoniosa, con una conciencia de ayuda al bienestar animal. Hoy en día el bienestar para ellos se traduce en bienestar para todos nosotros, ya que nuestras actividades diarias van ligadas directamente con ellos; los necesitamos al igual de lo que ellos nos necesitan.

Para algunas personas, un animal o una mascota significan más que compañía, son parte de sus labores diarias, de su estabilidad emocional, y del desarrollo como personas.

Es por eso, Diputadas y Diputados que se presenta ante este H. Pleno del Congreso el siguiente:

**P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**ÚNICO. –** Se reforman: las fracciones I y VII del artículo 2, la fracción XXI del artículo 4, la fracción IV del artículo 15, el artículo 17, la fracción IV del artículo 19, la fracción IV del artículo 20 y la fracción VIII del artículo 78; se adiciona: una párrafo al artículo 20 y un párrafo segundo al artículo 55; y se derogan: las fracciones XIII y XXIX del artículo 4, todas estas de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 2.-** Las disposiciones de esta Ley tendrán los siguientes objetivos:

**I.-** Proteger a la fauna en general erradicando **y sancionando** los actos de crueldad, **mutilación estética, modificación corporal,** abandono **explotación** o maltrato provocados por seres humanos.

II al VI.-

**VII.** Apoyar la creación y **regular** el funcionamiento de **asociaciones** protectoras de animales.

**Artículo 4.-** Para los efectos de esta Ley, las siguientes expresiones se entenderán en la forma y términos que se indican:

I al XII.-

**XIII. Se deroga.**

XIV al XX.-

**XXI.-** **Campañas**: Acciones públicas **y privadas** realizadas de manera periódica y sistemática por **asociaciones protectoras de animales,** la Autoridad o por quien la misma asigne, para el control, prevención o erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para controlar la población **y reproducción** de animales o para **promocionar y** difundir el trato digno y respetuoso a los animales;

XXII al XXVIII.-

XXIX.- **Se deroga**

XXX al LI.-

**Artículo 15.-** El Padrón Municipal de Animales estará a cargo de cada Municipio y llevará el registro de:

I al III.-

**IV**. Las asociaciones protectoras de animales, **veterinarias y clínicas de atención animal,** los rescatistas independientes de animales, miembros y clubes de perros de raza, y entrenadores y adiestradores caninos para guardia y protección;

V al X.-

**Artículo 17.-** Con el objeto de prevenir, **diagnosticar,** controlar o erradicar la presencia de enfermedades y plagas **de origen animal**, y a efecto de mejorar y mantener las condiciones de salud **para la fauna** en el estado, se establecerán campañas zoosanitarias **permanentes por parte de la Autoridad, en coordinación con asociaciones protectoras de animales y clínicas o centros veterinarios.**

**Artículo 19.-** Toda persona tiene la obligación de cumplir con lo siguiente:

I al III.-

**IV.- Contribuir voluntaria y directamente con el cuidado de los animales mediante acciones individuales que promuevan un ejemplo social de cuidado y trato digno hacia los animales, así mismo,** participar en las instancias de carácter social y vecinal, que cuiden, asistan y protejan a los animales y;

V.-

**Artículo 20.-** Queda prohibido en el Estado de Coahuila de Zaragoza por cualquier motivo:

I al III.

IV. Abandonar a los animales en la vía pública **o en lugar lejano de su hábitat natural,** **cuando no exista justificación alguna;**

V al XVII.-

…

**Toda persona que se encuentre en alguno de los supuestos antes mencionados o que de manera dolosa violente alguna de las prohibiciones demarcadas por el presente artículo, será acreedora de las sanciones económicas y/o penales marcadas por esta ley y demás leyes en la materia, según lo que la autoridad competente determine en base a lo dispuesto por el artículo 90 de la presente ley**

**Artículo 55.-** Los cadáveres de animalesdeberán tener una disposición final adecuada o ser incinerados o inhumados.

**Para cumplir con el principio de trato digno, se tendrá que realizar de manera profesional por quien tenga los conocimientos técnicos para la realización de cualquiera de dichas actividades, y por ningún motivo, será el tutor o poseedor del animal quien realice la disposición final del cadáver.**

**Artículo 78.-** Tendrán derecho a realizar visitas de inspección como observadores en:

I al VI.-

**VIII.-** Establecimientos para la venta de animales **y veterinarias o clínicas de atención animal;** y

IX al X.-

**T R A N S I T O R I O S.**

**PRIMERO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, abril de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LAINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE PROTECCIÓN Y TRATO DIGNO A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO,** **POR LA QUE** **SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE REFORZAR LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES CON ACCIONES ENCAMINADAS A PREVENIR, ATEDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJERES.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.**

La suscrita Diputada Diana Patricia González Soto, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a este Honorable Pleno del Congreso, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que seadicionan las fracciones XX y XXI al artículo 12, la fracción XVI y XVII al artículo 48, las fracciones VI, VII y VIII al artículo 68, y se reforman la fracción VI del artículo 15, la fracción XV recorriéndola a la fracción XVIII del artículo 48, la fracción X recorriéndola a la XI del artículo 51, y el último párrafo del artículo 60, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza,bajo la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

En varios medios informativos se ha advertido sobre el aumento de la violencia doméstica y sobre la desigualdad que enfrentamos las mujeres en esta contingencia por el Covid 19[[13]](#footnote-13).

La representante de ONU-Mujeres en México[[14]](#footnote-14), indicó que de acuerdo a los datos que la propia Secretaría de Gobernación ha emitido, existe un 25% aproximado de incremento de llamadas a la línea 911 que atienden a víctimas de violencia de género, mientras que la Red Nacional de Refugios (RNR) ha recibido al menos un 60% más de solicitudes de apoyo.

Actualmente hemos sido testigos de la discriminación hacia el personal femenino de salud, el impacto económico en los hogares sostenido por una mujer, la desigualdad del rol de cuidados que tiene que enfrentar la mujer, así como el incremente de sufrir violencia domestica por el confinamiento de las personas en sus hogares.

El instituto Nacional de las Mujeres[[15]](#footnote-15) (INMUJERES) se encuentra alertando sobre el incremento de las agresiones dentro del ámbito familia derivado de la crisis sanitaria por el contagio del coronavirus, según estadísticas en el rubro de salud el 80 por porciento de las enfermeras son mujeres, un 40 por ciento de los médicos son mujeres por lo que las mujeres están enfrentando un doble rol tanto laboral como familiar.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, tiene por objeto el establecer la coordinación entre la Federación, las entidades Estatales y los Municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

La violencia contra las Mujeres es cualquier acción u omisión, basada en su género, que nos cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.

Existen diversas formas, modalidades y manifestaciones de la violencia, por lo que se buscó contar con una legislación especializada en atenderla desde una perspectiva de género que consiste en una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres.

Se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.

Se promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; para contribuir a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Se busca empoderar a la Mujer, eliminando cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

En lo que respecta a nuestro Estado de igual manera, se cuenta con una Ley de Accesode las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual establece los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a la:

* La igualdad formal;
* La igualdad sustantiva;
* El interés superior de la niñez;
* El libre desarrollo de la personalidad;
* La no revictimización;
* El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
* La no discriminación;
* La libertad de las mujeres; y la
* La transversalidad de la perspectiva de género;
* La integración de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado; y
* La debida diligencia.

En cuanto a las acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las Mujeres, las entidades públicas en nuestro Estado, tienen funciones específicas que atender estableciendo políticas públicas encaminadas a eliminar la violencia contra la mujeres por ello que consideramos importante adicionar la elaboración de protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación y atención a la discriminación ya sea por feminicidios, trata de personas o por la comisión de cualquier delito, en este mismo rubro establecimos la importancia de informar a la víctima de algún delito cuando la persona generadora de violencia recupere su libertad a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes, esto es, que conozcan que quien les ha vulnerado sus derechos ejerciendo violencia sobre ella, ha recuperado su libertad, para que de considerarlo pertinente, acuda a las Instituciones correspondientes para garantizar que no habrá reincidencia por parte de la persona generadora de violencia.

Así mismo las acciones del Estado y los municipios estarán encaminadas a la prevención, efectuando acciones de asistencia social, por lo que consideramos importante adicionar que sea a través de convenios de coordinación con los sectores públicos, sociales o privados.

En cuanto a la distribución de competencias en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia es importante facultar a través de la Secretaría del Trabajo, el promover campañas informativas en los centros de trabajo, dando a conocer el tipo y modalidades de violencia contra las mujeres, informando las dependencias que existen para la atención a víctimas y reconocer e incentivas a toda empresa que se abstenga de solicitar a las mujeres certificados de no gravidez, así mismo orientar a las receptoras de violencia laboral sobre la promoción de denunciar e informar sobre las instituciones que contamos en Coahuila para defenderlas como lo es el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

Siguiendo en el ámbito de competencias y con el fin de establecer dentro de las responsabilidades de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, en coordinación con la Secretaria de Salud se brinde o se continúe optimizando y brindando atención medica obstétrico ginecológica y pediátrica durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios de nuestro Estado, esto es que la mujer recluida y su hijo o hija en gestación y posteriormente al nacimiento, reciban atención médica que les garantice el derecho a la vida y su bienestar físico, lo cual es totalmente acorde con los derechos humanos tanto de las personas privadas de su libertad por mandato judicial, como de los niños y niñas, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las leyes que de ella se emanan.

En lo referente de la atención a victimas contempladas en nuestra legislación vigente de la Ley de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consideramos importante señalar que la atención en materia de violencia contra las mujeres consiste en brindarles atención de servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad y calidez para su empoderamiento, el desarrollo integral de sus potenciales y el acceso efectivo a su derechos, era importante establecer que serán gratuitos y expeditos, con el fin de que no se pueda lucrar con las victimas de violencia ofreciendo servicios como los citados con anterioridad aprovechándose de la vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer violentada.

Por ultimo y con el fin de reforzar los servicios integrales que proporciona el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado, consideramos necesario que tengan acceso al servicio de las bolsas de trabajo que el Gobierno a través de la Secretaría del Trabajo pueda proporcionarles con el fin de obtener una remuneración, también consideramos importante el que no se obligue a la victima en participar en mecanismos de mediación a través de la conciliación con la persona generadora de violencia.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**I N I C I A T I V A C O N P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**UNICO. –** Se adicionan las **fracciones XX y XXI** al **artículo 12** de la **Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza**, para quedar como sigue:

**Artículo 12.** … :

I. a la XIX..- …

**XX.- Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual;**

**XXI.- Informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes.**

Se reforma **la fracción VI** del **artículo 15, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza** para quedar como sigue:

**Artículo 15.** … :

1. a la V..- …

**VI.** Efectuar acciones de asistencia social que contribuyan a su pleno desarrollo, en coordinación con las entidades correspondientes, según sea el caso; **a través de convenios de coordinación y concertación con los sectores públicos, sociales y privados en la materia**;

VII. a la XI. .- …

Se reforma **la fracción XV recorriéndola a la fracción XVIII y se adiciona la fracción XVI y XVII** del **artículo 48**,dela Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragozapara quedar como sigue:

**Artículo 48.** … :

I. a la XIV. .- …

**XV.- A través de la Secretaría del Trabajo, Promover campañas de información en los centros de trabajo sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas;**

**XVI.- Reconocer e incentivar a las empresas a través de la Secretaría del Trabajo, que se abstengan de solicitar a las mujeres certificados de no gravidez;**

**XVII.- En Coordinación con la Secretaría del Trabajo, Orientar a las receptoras de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres; y**

**XVIII.- Las demás previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.**

Se reforma **la fracción X recorriéndola a la XI del artículo 51** de **Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza** para quedar como sigue;

**Artículo 51.** … :

I. a la IX. .- …

**X.- La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Secretaría de Salud, brinde atención medica obstétrico ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres recluidas en centros penitenciarios, esto es, que la mujer recluida y su hijo o hija en gestación y posterior al nacimiento, reciban atención médica que les garantice el derecho a Ia vida y su bienestar físico;**

**XI. Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.**

Se reforma **el último párrafo del artículo 60** de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue;

**Artículo 60.** Las medidas de atención en materia de violencia contra las mujeres consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad y calidez para su empoderamiento, el desarrollo integral de sus potencialidades y el acceso efectivo a sus derechos, **los cuales deberán ser gratuitos y expeditos**;

Se adiciona las **fracciones VI, VII y VIII al artículo 68**, para quedar como sigue;

**Artículo 68.** … :

I.- a la V..- …

**VI.- Las mujeres podrán acceder al servicio de las bolsas de trabajo que existan en el Estado, para tener una actividad laboral remunerada;**

**VII.- Las víctimas no podrán ser obligadas a participar en mecanismos de conciliación con la persona generadora de violencia;**

**VIII.- Informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes.**

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a abril de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
|  | | |
| **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** | | |

LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE HOJA, FORMAN PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LAS FRACCIONES XX Y XXI DEL ARTÍCULO 12, LA FRACCIÓN XVI Y XVII DEL ARTÍCULO 48, LAS FRACCIONES VI, VII Y VIII AL ARTÍCULO 68, Y SE REFORMAN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 15, LA FRACCIÓN XV RECORRIÉNDOLA A LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 48, LA FRACCIÓN X RECORRIÉNDOLA A LA XI DEL ARTÍCULO 51, Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60, TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 96 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE REGULAR LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE CABILDO Y COMISIONES DE FORMA VIRTUAL.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jesús Andrés Loya Cardona conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 96 y un segundo párrafo al artículo 109 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de regular la celebración de sesiones de cabildo y comisiones de forma virtual, misma que se presenta bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Todas las naciones del mundo nos encontramos afrontando una de las crisis de salud pública más graves de los últimos tiempos, que ha puesto a prueba la solidez de nuestras instituciones, el temple de los gobernantes y la corresponsabilidad social de los individuos. Prácticamente casi todos los países del mundo han visto afectada su estabilidad a causa de esta emergencia sanitaria y millones de personas han tenido que cambiar su estilo de vida de forma intempestiva.

En las circunstancias actuales que vivimos, centradas en restringir y controlar la pandemia de salud del COVID-19, las autoridades sanitarias competentes han establecido diversas medidas de intervención pública y comunitaria para prevenir se extienda el número de contagios de esta enfermedad, las cuales incluyen un distanciamiento social, el cierre de espacios públicos y la suspensión de actividades educativas y laborales, entre muchas otras.

En este escenario, tanto autoridades como el sector privado y empresarial, han impulsado acciones para mantener el funcionamiento esencial de los espacios laborales más esenciales, al tiempo en que preservan la salud de los ciudadanos, los empleados y sus familias.

Tratándose del sector público, existen funciones que no pueden detenerse, pues ello implicaría vulnerar la voluntad popular, tal es el caso de los representantes populares. Hemos sido testigos de cómo el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ha intensificado su trabajo, manteniéndose en permanente contacto con los diferentes ámbitos de gobierno, con la iniciativa privada, el gremio de salud y sus pares de los Estados colindantes. Todo ello con el objetivo de minimizar los riesgos sanitarios y decretar medidas coherentes con el objetivo de proteger a los coahuilenses.

De la misma forma, el Pleno de este Congreso no ha suspendido sus funciones, concentrándose en cumplir con su labor legislativa, pero garantizando en todo momento el trabajar conjuntamente para mitigar las consecuencias de esta contingencia y atender las medidas preventivas y de control sanitario establecidas. Es así que días atrás la totalidad de las Diputadas y Diputados que integramos la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, presentamos una iniciativa para regular las sesiones virtuales celebradas por este cuerpo legislativo.

A la par, quienes integran los 38 Ayuntamientos del Estado han continuado realizando sus labores, celebrando a su vez y en la medida de lo posible, sus reuniones y sesiones de Cabildo de forma virtual, en amplio cumplimiento con las disposiciones en materia de prevención establecidas.

Quienes suscribimos la presente iniciativa respaldamos las acciones decretadas por las autoridades sanitarias, al tiempo que celebramos que en nuestros municipios, sus alcaldes estén tomando con seriedad el llamado público realizado para atenuar el ritmo de contagios y evitar que se saturen los sistemas de salud de la entidad, sin descuidar en ningún momento el bien de la ciudadanía.

Es por ello que con el fin de dotar de certeza las medidas aprobadas por los ayuntamientos, presentamos esta iniciativa de reforma al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el fin regular la celebración de las sesiones de forma virtual cuando se actualice alguna situación de emergencia prevista por la ley y que, a causa a ello, no puedan realizarse de la forma habitual, es decir, de manera presencial en los recintos oficiales destinados para tal efecto. Esta acción sin duda abonará a dar continuidad al trabajo edilicio, tanto de las sesiones como del trabajo en comisiones, haciendo uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación existentes.

Para las Diputadas y los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, es prioridad seguir las recomendaciones en materia de prevención y promoción de la salud de forma permanente, redoblando esfuerzos para hacer frente a este problema de salud público y cuidando en todo momento el bienestar de los coahuilenses.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se **adiciona**  un segundo párrafo al artículo 96 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 109 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 96.** ...

De manera excepcional, en caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas especiales lo acuerden las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, las sesiones se podrán realizar de forma virtual, por medios electrónicos, para desahogar los asuntos concretos acordados.

**ARTÍCULO 109.-** …

En caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas especiales lo haya acordado las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, las sesiones de las Comisiones se podrán realizar de forma virtual, por medios electrónicos, para desahogar los asuntos del ramo correspondiente o los que se le hubieren encomendado.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de abril de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA |
| DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,  DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
|  |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA |  | DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA |
|  |  |  |
| DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ |  | DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA |
|  |  |  |
| DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE |  | DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ |
|  |  |  |
| DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ |  | DIP. JESÚS BERINO GRANADOS |
|  | | |
| DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO | | |

**ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 96 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA JOSEFINA GARZA BARRERA, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE INCORPORAR EL TIPO PENAL DE TURISMO SEXUAL DENTRO DE DICHA LEGISLACIÓN.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Josefina Garza Barrera, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona el artículo 229 BIS y se reforman diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El turismo sexual ocurre cuando turistas extranjeros o nacionales se trasladan a ciertos Estados del territorio nacional con motivos de negocios u ocio, con el doble propósito de contratar encuentros sexuales con menores de edad durante su estancia.

Es importante aclarar que estos menores de edad, no llegan por su voluntad a tener relaciones sexuales con los turistas, sino que son contactados por personas relacionadas con el ramo turístico, como trabajadores de hoteles, restaurantes, guías turísticos, taxistas, los llamados antros, entre otros, cuya complicidad se encuentra a la vista.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) refiere que cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales, donde el 20 por ciento de paseantes buscan sexo. De este total, 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas, es decir, que al menos tres millones de personas van por el mundo buscando relaciones íntimas con menores de edad.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cada mes, cien niños mexicanos son reclutados para prestar servicios sexuales.

Es preocupante ver casos de niños que son prácticamente alquilados a los turistas en destinos de playa, de grandes ciudades y en las zonas fronterizas de nuestro país.

Son varios Estados de la República Mexicana tales como Baja California, Yucatán, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, que prevén en sus códigos penales el delito de turismo sexual, así como en el Código Penal Federal.

Ante esta situación, en el año 2015 el Congreso de la Unión, exhortó a los Estados de la federación de la República Mexicana en los que no estaba tipificado el delito de turismo sexual, para que se legislara en los **congresos locales** con la finalidad de incluirlo dentro de los códigos penales estatales, atendiendo a lo establecido en el contenido obligacional de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 47, fracción III, que establece:

*“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:*

*III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;”.*

Aunado a lo anterior, en el presente mes la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el artículo 203 y 205 bis del Código Penal Federal, para aumentar de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa las sanciones para quien cometa el delito de turismo sexual, pues en la actualidad es de 7 a 12 años, dicho documento fue remitido al Senado de la Republica para sus efectos constitucionales.

Es por ello que resulta indispensable que la legislación de nuestro Estado contemple este delito, a fin de prevenir que se lleguen a presentar este tipo de conductas delictivas que atentan contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes.

Coahuila, debido a su ubicación geográfica posee una zona fronteriza que colinda con los Estados Unidos de Norteamerica, lo que implica el cruce de extranjeros que ingresan al territorio nacional y extranjeros que usan nuestro territorio estatal para cruzar a aquel país, por lo que se vuelve una zona de constante tránsito y debido a esa situación pueden surgir ese tipo de conductas delictivas, por lo que es necesario y urgente que incluyamos en nuestra legislación estatal este tipo penal, con el propósito de prevenir y perseguir este delito que lastima a la sociedad, pero aún más a la niñez.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se adiciona el Artículo 229 BIS y se reforman el primer párrafo de los Artículos 230 y 231 y el Artículo 233 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 229 BIS (Turismo Sexual)**

**Se considera turismo sexual y se impondrá de 6 a 12 años de prisión y multa, a quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del estado con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no se pueda resistir a éste.**

**Se impondrá una pena de prisión de 10 a 20 años y multa a quienes ingresen a territorio del estado con la finalidad de realizar actos sexuales reales o simulados con las personas a que hace alusión el párrafo precedente.**

**Artículo 230** (Modalidades agravantes de los delitos previstos en **los** artículos 229 **y 229 BIS** de este código).

Se incrementarán en una mitad los mínimos y máximos de las sanciones que señalan las tres fracciones del artículo 229 **y 229 BIS;** según corresponda; cuando concurran cualquiera de las circunstancias siguientes:

I. a la II. …

**Artículo 231** (Otras modalidades agravantes de los delitos previstos en **los artículos** 229 **y 229 BIS** de este código)

Se incrementarán en una mitad los mínimos y máximos de las sanciones que señalan **los artículos** 229 **y 229 BIS;** según corresponda; cuando concurran cualquiera de las circunstancias siguientes:

I. a la V…

**Artículo 233** (Omisión de denuncia respecto a los delitos de violación equiparada, violación impropia, abuso sexual**, o turismo sexual** contra personas menores de edad)

Se impondrá de cuatro meses a tres años de prisión y multa, a quien le conste cualquiera de las conductas de violación equiparada, violación impropia, abuso sexual **o turismo sexual,** contra una persona menor de quince años de edad, previstas en este capítulo, o le conste cualquiera de dichas conductas cuando sean cometidas contra incapaces, y no acuda a denunciarlas, a menos que haya causa de licitud o excusa legal para esa omisión.

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO.** - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, abril de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MA. ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 229 BIS Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE INCLUIR EN LOS DELITOS DE LESIONES Y HOMICIDIO CALIFICADOS, CUANDO SE COMETAN EN CONTRA DE PERSONAS QUE DESEMPEÑEN CARGO, PROFESIÓN, OFICIO, O ACTIVIDAD RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD; Y EN EL DE DAÑOS CALIFICADOS, CUANDO SE CAUSE DAÑO A EDIFICIOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD O VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRASLADO DE ENFERMOS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.**

El suscrito Diputado Jaime Bueno Zertuche, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a este Honorable Pleno del Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir en los delitos de lesiones y homicidio calificados, cuando se cometan en contra de personas que desempeñen cargo, profesión, oficio, o actividad relacionados con la prestación de servicios de salud; y en el de daños calificados, cuando se cause daño a edificios destinados a la prestación de servicios de salud o vehículos destinados al traslado de enfermos, conforme a la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

Actualmente nos enfrentamos a la mayor emergencia sanitaria del siglo XXI, debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, con ello nos afrontamos diversos desafíos que van desde proteger no solo la salud de las personas, sino también su integridad, buscando en todo momento salvaguardar sus derechos humanos.

Si bien es cierto, nuestra Constitución Política reconoce los derechos humanos que tienen las personas por simple hecho de serlas, es obligación del Estado, garantizar el ejercicio pleno de los mismos, mediante mecanismos que permitan conservar, cumplir y desarrollar el goce de los derechos.

El disfrute de esos derechos, se han visto en riesgo para las personas que desempeñan un cargo, profesión, oficio, o actividad relacionados con la prestación de servicios de salud, pues han sufrido no solo actos discriminatorios, sino incluso han sido objeto de agresiones que han atentado en contra de su seguridad e integridad física, mediante agresiones perpetradas en su contra por personas que ante el miedo de ser contagiadas por el virus que causa el COVID-19, reaccionan de manera infundada y violenta.

Esta reprochable conducta parece aumentar en la medida que la contingencia sanitaria avanza, por lo que es necesario frenar ese tipo de conductas, pues de no hacerlo puede atentar no solo a la integridad sino también a la vida de las personas que laboran en algún centro de salud.

Aunado a la crisis sanitaria provocada por la pandemia, la sociedad se encuentra inmersa en una crisis emocional, debido al aislamiento decretado para lograr controlar que el virus del COVID-19 avance, ante esa situación existen personas que no comprenden esas medidas para contener el virus, mayormente los familiares de las personas hospitalizadas a quienes no se les se le permite el contacto con su paciente familiar, ocasionando respuestas negativas de parte de familiares de los pacientes contra el personal de salud que los atiende; asimismo existen personas a quienes les invade el miedo desenfrenado de contraer el virus del COVID-19 y ven en el personal que labora en los centros de salud, como un riesgo de contagio, por lo que reaccionan de manera agresiva y hostil hacia ellos.

En las últimas semanas hemos sido testigos, a través de diversos medios de comunicación y por las distintas redes sociales, de la agresividad o amenazas a la que se han visto afectadas las personas que laboran en centros de salud, vulnerando su seguridad e integridad.

El Partido Revolucionario Institucional ha condenado tajantemente los actos de agresión que se han registrado en diversos lugares de nuestro país, en contra de las personas que prestan sus servicios en el sector salud. Incluso Diputadas y Diputados de nuestro partido en los Congresos del Estado de Hidalgo, Morelos, Oaxaca, por citar algunos ejemplos, han promovido iniciativas para endurecer las sanciones a quien lesione o atente contra la vida de quienes laboran para el sector salud, con el objeto de salvaguardar su integridad.

Hoy queremos reconocer a quienes laboran en el sector salud, médicos, personal de enfermería, laboratorio, paramédicos, intendencia, a todos aquellos que día con día salen a trabajar para salir adelante de esta contingencia y ganar esta lucha contra el COVID-19, a todos ellos nuestro reconocimiento por su valentía y profesionalismo.

Nuestra manera de reconocer es legislando normas que inhiban conductas delictivas en contra de personas que desempeñan algún cargo, profesión, oficio, o actividad relacionada con la prestación de servicios de salud, endureciendo su castigo; es por ello que presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal, con el objeto de fijar una mayor penalidad a las conductas delictivas, que pudieran cometerse en su contra.

En ese sentido, proponemos incluir en los delitos de lesiones calificadas y homicidio calificado, cuando se cometa en contra de personas que desempeñan algún cargo, profesión, oficio, o actividad relacionada con la prestación de servicios de salud, es decir, no solo el personal médico, sino enfermeras, personal de laboratorio, camilleros, etc. que con motivo del ejercicio de sus funciones, atenten contra su integridad física.

Asimismo, consideramos necesario también incluir dentro del delito de daño calificado, cuando este se cause daño a edificios destinados a la prestación de servicios de salud o vehículos destinados al traslado de enfermos.

Al incluirlo dentro de estos delitos calificados la penalidad es mayor que si se tratare de un delito simple, en ese sentido, se estarían fijando penas de hasta 9 a 21 años de cárcel por lesiones graves; 25 a 45 años de cárcel por homicidio doloso; 6 a 12 años por daños en propiedad ajena tratándose de hospitales, laboratorios, consultorio, edificios en los que se presten servicios de salud, ambulancias y vehículos destinados al traslado de enfermos.

De igual manera, consideramos necesario aumentar la penalidad en el delito de Discriminación por odio, vejación o exclusión, cuando se realicen en contra de personal de salud, durante una emergencia sanitaria declarada por autoridad competente.

Finalmente se incorpora un artículo referente a los delitos contra personal de salud cometidos durante una emergencia sanitaria, en el que se contempla que con independencia de la pena que le corresponda por la comisión de otros tipos penales, se impondrá de seis meses a tres años de prisión, a quien cometa un delito en contra de médicos, personal de enfermería, auxiliares de estos o de personas que laboren en una institución de salud pública o privada, en el acto del ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, durante una emergencia sanitaria declarada por autoridad competente.

Con esta iniciativa, queremos refrendar nuestro compromiso de generar que las y los trabajadores de la salud, reciban un trato digno y respetuoso por parte de parientes, familiares, así como de la población en general, pues es su derecho ejercer lícitamente sus funciones, de una manera libre y sin discriminación alguna.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**I N I C I A T I V A C O N P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**ÚNICO. –** Se reforma la fracción XIII del artículo 184 y se adicionan: un último párrafo al artículo 201, un antepenúltimo párrafo recorriéndose los siguientes párrafos del artículo 239, las fracciones VIII y IX al artículo 303 y el artículo 314Bis del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 184 (Homicidio calificado)**

El homicidio doloso será calificado cuando se cometa con una o más de las circunstancias siguientes:

**I.** a la **XII.** …

**XIII.** (Por calidad de la víctima)

Cuando el agente cometa el homicidio por la condición social o económica de la víctima, o por su vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; o por su origen étnico, su nacionalidad o lugar de origen, o por su color o cualquier otra característica genética; o por su religión, edad, opiniones, discapacidad, condiciones de salud, apariencia física, preferencias sexuales, estado civil u ocupación, o en función de la clase de actividad profesional de la víctima, en especial dentro del periodismo **o en la prestación de los servicios de salud**, o porque aquélla auxilie o colabore con alguna institución de seguridad pública, o en razón de que la víctima labore en alguna institución de seguridad pública estatal o municipal, o en otra institución o dependencia oficial que actúe en auxilio de las mismas, o en contra de testigos en razón del testimonio que vayan a rendir o hayan rendido en procedimiento o juicio, o bien, en razón de las funciones de la víctima como juez, magistrado o magistrada, o servidor público del poder judicial.

...

**XIV.** a la **XVII. …**

...

...

...

**Artículo 201 (Lesiones calificadas)**

...

...

...

...

…:

1) al 3) ...

...

...

...

**Se aumentará en una mitad del mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples, conforme al artículo 200 de este Código, cuando se infieran a una persona que desempeñe cargo, profesión, oficio, o actividad relacionados con la prestación de servicios de salud.**

**Artículo 239 (Discriminación por odio, vejación o exclusión)**

…:

**I.** a la **VI.** …

Se aumentará en un tanto el mínimo y el máximo de las penas previstas en el primer párrafo, cuando cualquiera de las conductas descritas en las fracciones anteriores, se realicen en contra de médicos, personal de enfermería, auxiliares de estos, o personas que laboren en instituciones de salud pública o privada, durante una emergencia sanitaria declarada por autoridad competente.

La autoridad judicial competente estará obligada en su resolución a señalar a favor de la víctima lo relativo a la reparación del daño y las medidas afirmativas correspondientes que garanticen que los actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias no se repitan en su perjuicio.

Los delitos de este artículo se perseguirán por querella.

**Artículo 303 (Daños calificados)**

…:

**I.** a la **VII.** …

**VIII.** (**Edificios destinados a la prestación de servicios de salud)**

**Hospitales, clínicas, consultorios médicos, laboratorios y edificios destinados a la prestación de servicios de salud.**

**IX.** **(Vehículos destinados al traslado de enfermos)**

**Ambulancias y vehículos automotores que estén destinados al traslado de enfermos.**

**Artículo 314 Bis. (Delitos contra personal de salud cometidos durante una emergencia sanitaria)**

**Se impondrá de seis meses a tres años de prisión, con independencia de la pena que le corresponda por la comisión de otros tipos penales, a quien cometa un delito en contra de médicos, personal de enfermería, auxiliares de estos o de personas que laboren en una institución de salud pública o privada, en el acto del ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, durante una emergencia sanitaria declarada por autoridad competente.**

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, abril de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE HOJA, FORMAN PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, MEDIANTE LA CUAL SE CREA LA LEY DE SALUD MENTAL Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jesús Andrés Loya Cardona conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa mediante la cual se crea la Ley de Salud Mental y Bienestar de las Personas con Trastornos Mentales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que se presenta bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Promover y garantizar el bienestar integral de los individuos es la función primordial que tiene a su cargo el Estado. Y es que con este concepto se abarca una complejidad de acciones que inciden en la esfera del ser humano, abarcando factores de equilibrio entre su salud física, seguridad financiera, tener una integración social y familiar adecuada, así como posibilidades de recreación y esparcimiento. Todo lo anterior, de forma general, es relacionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la salud mental, la cual es definida como un estado en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

Si bien alcanzar el bienestar integral es un propósito del individuo y cada uno decide cómo se realiza, también es cierto que gran parte de éste depende del entorno en que se mueven las personas: su trabajo, escuela, familia y comunidad por ejemplo. De ahí que una de las dimensiones de la salud pública esté conformada por la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales, y el tratamiento y rehabilitación de las personas con enfermedades mentales y discapacidades.

Al igual que la promoción de la salud física, la promoción de la salud mental envuelve acciones que incitan a adoptar y mantener estilos de vida saludables y a crear condiciones de vida y ambientes que apoyen la salud. Sin embargo, la salud mental y las enfermedades mentales están determinadas por muchos factores de interacción social, psicológica y biológica. De ahí que una correcta política de atención a la salud mental sea siempre transversal, considerando las experiencias individuales, la interacción social, las estructuras y recursos de la sociedad y los valores culturales.

Pero hablar de salud mental no es sólo referirse a la ausencia de enfermedades mentales. Es común observar cómo permanece en muchas partes un estigma sobre el concepto de enfermedad mental, motivando a equiparar el término *“salud mental”* para describir los servicios de tratamiento y apoyo a personas con trastornos mentales y otros asuntos relacionados con los problemas de salud mental, lo que conlleva a la marginación y discriminación de quien la padece, así como a la ausencia de políticas públicas adecuadas para promover y preservar la salud mental de la ciudadanía en general.

La discriminación, los estereotipos negativos y la estigmatización conlleva a una constante violación de sus derechos humanos en el marco de la comunidad, la familia, la escuela y el trabajo, impidiendo la consolidación de relaciones sanas y de una interacción social integradora necesaria para el bienestar de todos.

Dentro del contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas aprobó en el año 2016, una resolución específica sobre la salud mental, reconociendo la necesidad de proteger, promover y respetar todos los derechos humanos en la respuesta global a las cuestiones relacionadas con la salud mental. Este documento insta a los Estados a que *“adopten, de manera activa, medidas para incorporar plenamente una perspectiva de derechos humanos en los servicios de salud mental”* reafirmando la obligación que tienen de *“proteger, promover y respetar todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y de velar por que las políticas y los servicios relacionados con la salud mental se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos.[[16]](#footnote-16)* En base a ello, la Organización Mundial de la Salud impulsa el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020, que plantea objetivos específicos de promoción, prevención y atención en el campo de la salud mental.

Por su parte,en México el derecho a la salud mental está reconocido en la Ley General de Salud, inserto como un concepto clave dentro del término general de salud en su artículo 1º y desdoblado específicamente en el articulado de este ordenamiento. Por lo que hace al nivel local, la gran mayoría de las entidades, incluida Coahuila, no cuenta con una legislación propia que proteja, promueva y mejora las vidas y el bienestar mental de los ciudadanos.

La necesidad de contar con una ley en materia de salud mental surge de la creciente comprensión de la carga persona, social y económica que implican los trastornos mentales en todo el mundo. En efecto, de acuerdo a las Naciones Unidas, una de cada cuatro personas padecerá de un trastorno mental en alguna fase de su vida. Esta organización estima que aproximadamente 450 millones de personas en todo el mundo sufren trastornos mentales o neurológicos o tienen problemas de índole psicosocial.[[17]](#footnote-17) Además, señala que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030.

En el país, el Instituto Nacional de Psiquiatría indica que alrededor del 30% de la población, en un momento de su vida, se ven afectados por algún trastorno mental.[[18]](#footnote-18) Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó en el 2019 información sobre la condición de salud mental, incluyendo la emocional y sentimientos depresivos, morbilidad sobre trastornos mentales y del comportamiento, suicidios y relación respecto de las muertes violentas.[[19]](#footnote-19) Estos datos muestran un incremento sostenido en cuanto a las defunciones por suicidios registrados hasta el año 2018, situando a Coahuila como el tercer estado con mayor porcentaje de muertes por suicidio con respecto al total de muertes violentas por entidad federativa.

A ello hay que considerar que durante el 2018 se diagnosticaron en la entidad 819 casos de depresión,[[20]](#footnote-20) siendo alarmante que de la población coahuilense de siete años o más, el 46% aseguró haber tenido depresión, es decir, 1.19 millones de personas.[[21]](#footnote-21)

En base a lo anterior, es que me permito presentar esta iniciativa de ley que se centra en la promoción, prevención y atención de la salud mental, retomando con ello uno de los compromisos asumidos por el entonces Diputado y mi compañero Samuel Rodríguez, de brindar ayuda a la población que vive estos trastornos.

Cabe destacar que la legislación que hoy se propone da cumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la salud mental, así como a estándares técnicos generados por la Organización Mundial de la Salud, publicados en el Manual de Recursos sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación.[[22]](#footnote-22)

Esta iniciativa consta de cuatro títulos y un total de 82 artículos, desarrollados de la siguiente forma:

***TÍTULO PRIMERO. DE LA SALUD MENTAL.***

Plasma el objeto de la ley de proteger, promover y mejorar la vida y el bienestar mental de los ciudadanos, así como garantizar en todo momento el pleno goce de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales.

Así mismo, establece que la determinación de un trastorno mental no se efectuará nunca fundándose en la condición política, económica o social, ni en la afiliación a un grupo cultural, racial o religioso, ni con su identidad u orientación sexual o cualquier otra razón que no se refiera directamente al estado de la salud mental de la persona.

En ese mismo contexto, se señalan los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental en el Estado, garantizando el acceso efectivo, digno, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios de salud mental mediante la combinación de intervenciones de promoción de la misma, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.

***TÍTULO SEGUNDO. DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL***

En este apartado se destacan las atribuciones de las autoridades intervinientes, tanto del sector público como de los prestadores de servicios.

De igual forma contempla las acciones específicas de promoción y prevención de la salud mental, incluyendo acciones de difusión y sensibilización en la materia.

Incluye lo relativo a la evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud mental, estableciendo las bases para llevar a cabo estas actividades clínicas.

De forma particular se destaca el derecho del consentimiento informado de la persona usuaria, debiendo al efecto de recibir información clara y precisa con respecto al tratamiento que se le pretende aplicar.

Se regula lo relativo al internamiento en instituciones de salud pública y privadas, con énfasis en que se trata de un recurso que sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social, y por el menor tiempo posible. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente. En todo caso, las instituciones que presten este servicio deben contar con instalaciones para actividades de recreo y esparcimiento, de educación, así como aquellas para emprender ocupaciones activas, entre otras. Lo anterior a fin de salvaguardar los derechos humanos de la persona usuaria.

En este tema se regula también de forma relevante los tipos de ingresos que pueden darse, como el ingreso voluntario, involuntario, de emergencia y por orden de autoridad, estableciendo al efecto los requisitos a cumplir en cada uno de éstos. Es relevante señalar que tratándose de ingresos involuntarios, se regula además una revisión periódica, no mayor a 30 días naturales, realizada por un Comité Institucional de Revisión, a fin de reevaluar si persisten las razones para continuar con dicha medida.

En este título se establecen a su vez los derechos de los familiares y otros cuidadores de personas con trastornos mentales.

***TÍTULO TERCERO. DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES.***

Regula lo relativo al Consejo de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como un órgano técnico de consulta, análisis, asesoría y participación, en coordinación con los sectores público y privado, que tiene por objeto la promoción, prevención y atención de la salud mental y las adicciones, para reducir la morbilidad, mortalidad y la discapacidad atribuida a los trastornos mentales, así como para el desarrollo de planes, programas y proyectos que en materia de salud mental aplique el Gobierno del Estado.

Cabe destacar que este Consejo se constituyó en nuestro Estado el pasado 14 de febrero de 2020, mediante la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, del Decreto que crea el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

De igual forma se estructura un capítulo correspondiente al Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) y el Hospital Psiquiátrico de Parras de la Fuente, a fin de establecer sus funciones.

Se crea el Comité Institucional de Revisión del Tratamiento y Atención de la Salud Mental, como un órgano colegiado de revisión de las decisiones aplicadas por los profesionales de la salud mental, relativas al tratamiento prescrito para la atención de los trastornos mentales, así como las relativas al internamiento de pacientes en las instituciones que prestan servicios de salud mental en el Estado, tanto públicas como privadas. Lo anterior en el marco del derecho de las personas usuarias de los servicios de salud mental en el Estado tienen derecho a disponer de un procedimiento de revisión para cualquier decisión adoptada por los responsables de la toma de decisiones, sean funcionarios, representantes o prestadores de la atención de la salud.

***TÍTULO CUARTO. DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN EN SALUD MENTAL.***

Se crea el Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental, funcionará como un centro de información técnico, permanente y estratégico de consulta cuyo objetivo principal será llevar a cabo estudios científicos en materia de salud mental, dirigido hacia la población del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de salud mental y de conformidad con lo establecido en la Ley de Salud y demás ordenamientos aplicables.

El tener una legislación propia en la materia, ofrece un importante mecanismo para garantizar la protección de los derechos humanos, el asegurar cuidados y tratamientos adecuados a quien padece un trastorno mental, así como promover la salud mental en toda la población, destapando tabúes, desterrando estigmas e integrando en la comunidad a los individuos. Asimismo, se constituiría como un medio para llevar a cabo el cumplimiento de las políticas en salud establecidas por el Estado, al promover una estructura legal para su implementación y aplicación.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE SALUD MENTAL Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se **crea la Ley de Salud Mental y Bienestar de las Personas con Trastornos Mentales para el Estado de Coahuila de Zaragoza**, para quedar como sigue:

**TÍTULO PRIMERO**

**DE LA SALUD MENTAL**

**CAPITULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1.-** La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general para las instituciones públicas, sociales y privadas que planifiquen, administren, coordinen, faciliten, proporcionen u ofrezcan cualquier tipo de servicio relacionado con la salud mental en el Estado en términos de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 2.-** El objeto de la presente ley es proteger, promover y mejorar la vida y el bienestar mental de los ciudadanos, así como garantizar en todo momento el pleno goce de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, a través de:

1. Diseñar y definir los mecanismos para la promoción, prevención, diagnóstico, conservación, tratamiento, rehabilitación y mejoramiento de la salud mental en el Estado;
2. Promover la calidad y el acceso a los servicios de salud mental en el Estado de Coahuila de manera equitativa, eficiente y orientada a la satisfacción del interés superior del usuario de los servicios de salud mental;
3. Regular el acceso y prestación de los servicios de salud mental en instituciones de salud pública del Estado, así como en lugares que operen personas físicas o morales de los sectores social y privado;
4. Respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, favoreciendo su integración en la comunidad y eliminando toda forma de discriminación y estigmatización;
5. Fomentar la participación de la población en el desarrollo de programas de salud mental en el Estado;
6. Las demás que señale la presente ley y las disposiciones vigentes aplicables.

**Artículo 3.-**  Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

1. **Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica**: Conjunto de servicios que se proporcionan a las personas usuarias, con el fin de proteger, promover, restaurar y mantener la salud mental en forma continua con calidad, calidez, seguridad y con enfoque comunitario, sensibles a las diferencias de género. Comprende las actividades de promoción de la salud, las preventivas, las diagnósticas, las terapéuticas que incluyen la prescripción farmacológica y psicoterapéutica y las de rehabilitación psicosocial, las cuales, se ejercerán con pleno respeto a los derechos humanos de las personas usuarias;
2. **Atención Psicológica**: La que es brindada por personal de psicología clínica entrenado, que forma parte del equipo multidisciplinario de salud mental, quien trata diferentes trastornos mentales y del comportamiento, así como, problemáticas de salud mental utilizando psicoterapia y otros recursos terapéuticos entre los que se pueden mencionar, enunciativamente mas no limitativamente, psico-educación, terapia grupal, entre otros, dependiendo de la gravedad de la patología.;
3. **CESAME:** El Centro Estatal de Salud Mental de Coahuila de Zaragoza;
4. **Comité Institucional de Revisión:** El Comité Institucional de Revisión para el Tratamiento y Atención de la Salud Mental de Coahuila de Zaragoza;
5. **Consejo:** El Consejo de Salud Mental y Adicciones del Estado de Coahuila de Zaragoza;
6. **Consentimiento informado**: Los documentos escritos, signados por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, de conformidad con las disposiciones aplicables, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación, una vez que se ha recibido información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente;
7. **Diagnóstico psicológico:** Informe que resulta del análisis e interpretación de los datos obtenidos en las distintas medidas de evaluación que se aplican a una persona o a un grupo, con el objetivo de detectar los síntomas que interfieren en su adaptación o que podrían desencadenar algún tipo de alteración, detectar disfunciones mentales, conocer el perfil de habilidades, aptitudes o personalidad, así como ubicar la evolución y constitución de grupos que alteran la estabilidad social;
8. **Enfoque o perspectiva de género a la salud mental:** Se refiere a la consideración de que mujeres y hombres presentan diferencias biológicas, poder y control desigual sobre los determinantes socioeconómicos de sus vidas y su salud mental, su posición y condición social, el modo en que son tratados dentro de la sociedad y su susceptibilidad y exposición a riesgos específicos para la salud mental;
9. **Equipo de atención en salud mental:** Grupo de profesionales para la atención integral en salud mental, el cual estará conformado por una persona profesional en psiquiatría, una en psicología, una en enfermería y una en trabajo social;
10. **Evaluación psicológica:** Conjunto de exámenes mentales que realiza el psicólogo para estudiar el comportamiento humano en su interacción recíproca con el ambiente físico y social para describir, clasificar, predecir y explicar su comportamiento e identificar las variables que conforman la estructura intelectual, emocional, conductual, perceptual, sensorial, familiar, psicoeducativa y neuropsicológica;
11. **Gobierno:** Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza;
12. **Ley de Salud:** Ley Estatal de Salud;
13. **Ley:** Ley de Salud Mental y Bienestar de las Personas con Trastorno Mental en el Estado de Coahuila de Zaragoza;
14. **Paciente**: Persona que está sometida a atención y tratamiento en una institución especializada en el cuidado y atención de la salud mental;
15. **Persona usuaria:** Toda persona que reciba el beneficio de cualquier programa o campaña de promoción de salud mental, de prevención o manejo de trastornos mentales o tendencias suicidas, de forma presencial o por cualquier otro medio, encaminadas a la preservación de su salud mental y calidad de vida;
16. **Prevención de riesgos en salud mental:** Conjunto deacciones contenidas en los planes, programas, campañas y proyectos gubernamentales locales, estatales y nacionales, con la finalidad de informar y educar a la población en relación a cualquier aspecto vinculado a la salud mental e intervenir en las comunidades para evitar situaciones de riesgo para la enfermedad mental, con el propósito principal depreservar la calidad de vida;
17. **Profesional de salud mental:** Los médicos, psicólogos clínicos, profesionales de enfermería, trabajadores sociales u otra persona debidamente capacitada y calificada en una especialidad relacionada con la atención de la salud mental;
18. **Promoción de la salud mental:** Conjunto de acciones desarrolladas a fin de sensibilizar a la población en general respecto de los trastornos mentales y del comportamiento, su tratamiento y las instituciones que ofrecen estos servicios;
19. **Red:** Grupo de psicólogos para la atención de la salud mental en el Estado de Coahuila de Zaragoza;
20. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Promoción, Prevención y Atención de la Salud Mental en el Estado de Coahuila de Zaragoza;
21. **Rehabilitación:** Conjunto de procedimientos dirigidos a las personas usuarias de los servicios de salud mental, los cuales se ocupan de la evolución del padecimiento y de aquellos factores como la calidad de las relaciones interpersonales y el desempeño en la vida cotidiana. Su objetivo es mejorar la calidad de vida, para que el paciente en salud mental pueda actuar en comunidad tan activamente como sea posible y de manera independiente en su entorno social;
22. **Rehabilitación Psicosocial**: Conjunto de acciones y programas dirigidos a la utilización del potencial máximo de crecimiento personal de mujeres y hombres que les permitan superar o disminuir desventajas adquiridas a causa de un trastorno mental y del comportamiento en los principales aspectos de su vida diaria;
23. **Salud mental:** Estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.
24. **Secretaría de Educación**: Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza;
25. **Secretaría:** Secretaría de Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza;
26. **Titular de la Secretaría:** Persona titular de la Secretaría de Salud del Estado;
27. **Trastorno Mental**: Conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociados la mayoría de los casos con el malestar y la interferencia con el funcionamiento personal alteración de la cognición, regulación emocional o el comportamiento del individuo. Sus manifestaciones suelen ser comportamentales, psicológicas o biológicas;
28. **Tratamiento:** Diseño, planeación, instrumentación y conducción de estrategias médicas, farmacológicas ypsicológicas encaminadas a restaurar, mejorar o mantener la calidad de vida de la persona que presenta algún trastorno mental;
29. **Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica**: Los establecimientos públicos, sociales y privados que prestan servicios de atención médica especializada a personas que padecen un trastorno mental;
30. **Usuario internado:** Persona con algún trastorno mental que requiere atención médica hospitalaria y que reside de forma temporal en una institución de salud, psiquiátrica, residencia o similar, administrado por el sector público y/o privado.

**Artículo 4.** La determinación de un trastorno mental no se efectuará nunca fundándose en la condición política, económica o social, ni en la afiliación a un grupo cultural, racial o religioso, ni con su identidad u orientación sexual o cualquier otra razón que no se refiera directamente al estado de la salud mental de la persona.

Los conflictos familiares o profesionales, o la falta de conformidad con los valores morales, sociales, culturales o políticos o con las creencias religiosas dominantes en la comunidad de una persona en ningún caso constituirán un factor del diagnóstico de un trastorno mental.

El hecho de que un paciente tenga un historial de tratamientos o de hospitalización no podrá ser un factor determinante para justificar en el presente o en el porvenir la determinación de un trastorno mental.

**Artículo 5.** Ninguna persona o autoridad clasificará a una persona con trastorno mental o indicará de otro modo que padece un trastorno mental salvo para fines directamente relacionados con la misma o con las consecuencias de éste.

La determinación de que una persona padece una enfermedad mental se formulará exclusivamente por profesionales de la salud mental y con arreglo a normas médicas aceptadas internacionalmente.

La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado.

**Artículo 6.** Son principios rectores de la atención de la salud mental:

1. **Protección de los derechos humanos.** Todas las personas que padezcan una enfermedad mental o que estén siendo atendidas por esa causa, serán tratadas con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana, y tendrán derecho a ejercer todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza, los Tratados Internacionales de los que México sea parte y demás leyes aplicables;
2. **Promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales.** Todas las personas tienen derecho a participar y beneficiarse de las campañas, planes, programas y servicios que proporcione el Gobierno y las instituciones sociales, públicas y privadas en materia de salud mental;
3. **Acceso a la atención básica de la salud mental.** Todo paciente tendrá derecho a recibir la atención sanitaria y social que corresponda a sus necesidades de salud y será atendido y tratado con arreglo a las mismas normas aplicables a los demás enfermos;
4. **Calidad en la atención**. Todas las personas tienen derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental, que será parte del sistema de asistencia sanitaria y social;
5. **Trato digno.** Todas las personas que padezcan un trastorno mental o que estén siendo atendidas por esa causa, serán tratadas con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana;
6. **Vida en comunidad**. Toda persona que padezca una enfermedad mental tendrá derecho a ser tratado y atendido, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que vive;
7. **Alternativa menos coercitiva.** A las personas con trastorno de salud mental se les proveerá una atención que sea mínimamente restrictiva en su libertad personal, estatus y derechos sociales, incluyendo su capacidad para seguir con su trabajo y vida cotidiana. Para ello se promoverá la atención basada en la comunidad, recurriendo a tratamientos institucionales sólo en circunstancias excepcionales. Si el tratamiento institucional es necesario, se promoverá el ingreso y tratamiento voluntarios, autorizando el ingreso y tratamiento involuntarios sólo en circunstancias excepcionales;
8. **Autodeterminación de procedimientos médicos**. El sometimiento a tratamiento médico o a continuar el ya iniciado queda a voluntad del paciente, quien deberá contar con información completa, oportuna y veraz acerca de su condición, el tratamiento a seguir, así como sus efectos y consecuencias;
9. **Derecho a ser asistido en el ejercicio de la autodeterminación**. En el caso de que un paciente experimente dificultades para apreciar las implicaciones de una decisión o sea incapaz de decidir, podrá beneficiarse con la ayuda de un tercero, conocedor e informado, de su elección;
10. **Consentimiento informado y libre**. Toda persona tiene derecho a otorgar o negar la atención y tratamiento sobre la base del consentimiento libre e informado. El tratamiento sin consentimiento (involuntario) se permitirá sólo en situaciones excepcionales previstas en la presente ley;
11. **Confidencialidad**. Todas las personas con trastorno mental tienen el derecho a la confidencialidad de la información que les concierne en cuanto a su condición de salud y tratamiento. Queda prohibido la revelación, examen o divulgación de los archivos médicos del paciente sin su consentimiento expreso;
12. **Reintegración comunitaria**. La atención y tratamiento de personas con trastorno mental atenderá a la reincorporación del paciente a su medio familiar y social;
13. **Independencia**. El tratamiento de cada paciente estará destinado a preservar y estimular su independencia personal.

**CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS**

**DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL**

**Artículo 7.** Toda persona que tenga su residencia permanente o se encuentre en el Estado de Coahuila de Zaragoza en situación transitoria tiene derecho a la salud integral, tanto física como mental.

El Estado garantizará el acceso efectivo, digno, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios de salud mental mediante la combinación de intervenciones de promoción de la misma, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.

**Artículo 8.** La evaluación de la salud mental deberá realizarse de acuerdo con los principios médicos aceptados internacionalmente, incluyendo el diagnóstico, la elección de tratamiento, la determinación de la capacidad y la determinación de un potencial daño a sí mismo o a terceros. La evaluación de la salud mental debe llevarse a cabo solamente con fines directamente relacionados con la enfermedad mental o las consecuencias de la misma.

La respuesta integral y coordinada con respecto a la salud mental se proporcionará mediante una política transversal con respeto a los derechos humanos y con un enfoque de perspectiva de género, en alianza con múltiples sectores públicos, tales como los de la salud, educación, empleo, justicia, vivienda, social y otros, así como con el sector privado.

**Artículo 9.** Son derechos fundamentales de las personas usuarias de los servicios de salud mental, los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y los ordenamientos que de ellas deriven; así como los establecidos en los Tratados y Convenios Internacionales de los que México sea parte.

Además las personas usuarias de los servicios de salud mental tienen los siguientes derechos:

1. Al acceso oportuno y adecuado de los servicios de salud mental para lograr un diagnóstico certero y oportuno, acorde con sus antecedentes culturales;
2. Conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia;
3. Recibir atención médica especializada;
4. Recibir un trato digno y humanitario por parte del personal de salud y los profesionales de la salud mental, independientemente de su diagnóstico, situación económica, sexo, edad, raza, ideología, religión o cualesquier otra condición que entrañe discriminación o estigma;
5. Recibir información veraz, concreta, respetuosa y en lenguaje comprensible para ellos y sus representantes legales, con relación al diagnóstico médico, así como con el tratamiento que se pretenda aplicar;
6. Ser protegidos contra toda discriminación, estigmatización, explotación, abuso o trato degradante;
7. Que la atención psiquiátrica o psicoterapéutica que se le preste sea de conformidad con las normas éticas pertinentes que rigen a los profesionales de la salud mental, en particular con normas aceptadas internacionalmente;
8. Contar con un representante que cuide en todo momento sus intereses. Para esto, la autoridad judicial deberá cuidar que no exista conflicto de intereses por parte del representante;
9. Otorgar o no su consentimiento informado respecto a decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento siempre que cuente con la capacidad para ello y no afecte derechos de terceros, o bien a través de su representante o de quien ejerza la patria potestad o tutela en caso de incapaces. Esto sólo se exceptuará en el caso de internamiento involuntario, cuando se trate de un caso urgente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del paciente;
10. A ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar en donde habiten sus familiares o amigos y, cuando el tratamiento se administre en una institución especializada, a ser tratado cerca de su hogar o del hogar de sus familiares y a regresar a la comunidad lo antes posible;
11. La confidencialidad de la información proporcionada a los profesionales de la salud mental y al personal de salud, así como la contenida en sus expedientes clínicos;
12. Solicitar la revisión clínica de su caso o a recibir una segunda opinión médica;
13. Que el tratamiento que reciba esté basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, examinado con el paciente, revisado periódicamente y modificado llegado el caso;
14. Ser tratado con la alternativa terapéutica más adecuada a sus necesidades, que menos restrinja o limite sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria;
15. A ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con trastorno mental designe;
16. A no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona;
17. De ser necesario, a ser ingresado en una institución especializada en salud mental por prescripción médica, cuando la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen, conforme a las mejores prácticas de la psiquiatría y medicina en general, con autorización por escrito del paciente o familiar responsable, con excepción de los casos de ingreso involuntario o de emergencia previstos en esta ley;
18. Recibir la rehabilitación que le permita la reintegración familiar, laboral y comunitaria;
19. Acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y a no ser excluido por causa de su trastorno mental;
20. Presentar quejas e interponer solicitud de revisión con respecto a las decisiones médicas sobre su tratamiento, así como las relacionadas con su internación, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley;
21. Negarse a participar como sujeto de investigación científica o, en todo caso, que dicha participación sea autorizada expresamente por el paciente, en armonía con el interés superior del paciente, previo conocimiento de los objetivos, riesgos y beneficios, y que en tal autorización no influyan presiones de ningún tipo ni que ello demerite la calidad de su atención hospitalaria;
22. Recibir un trato digno y con respeto a sus derechos humanos por parte de sus familiares y a que éstos le proporcionen alimentos y cuidados necesarios para su rehabilitación integral;
23. Solicitar por sí mismo o a través de su representante legal o familiares, a reunirse con el equipo de profesionales de las unidades de atención médica o con los responsables de los establecimientos de asistencia social que lo estén tratando o atendiendo respectivamente, y
24. Las demás que establezca esta ley, la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 10.** Las personas usuarias internadas en instituciones dedicadas a la atención de la salud mental, además de lo previsto en esta ley, tienen derecho a:

1. Que a su ingreso al hospital se les informe, a ellos o a sus representantes legales, de las normas que rigen el funcionamiento del nosocomio y saber los nombres de quienes serán los miembros del personal de salud, médicos y enfermeras encargados de su atención;
2. Recibir atención médica oportuna en caso de sufrir una enfermedad no psiquiátrica y, de así requerirlo, de tratamiento adecuado en una institución que cuente con los recursos técnicos para su atención;
3. Recibir tratamiento orientado a la reintegración a la vida familiar, laboral y social, por medio de programas de terapia ocupacional, educativa y de rehabilitación psicosocial. El paciente podrá elegir el trabajo que desee realizar, para el cual recibirá una remuneración justa producto de su participación en actividades ocupacionales o trabajo comunitario que impliquen producción de objetos, obras o servicios que pudieran ser comercializados;
4. Acceder a talleres de actividades recreativas, deportivas y de inducción laboral;
5. Ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar en donde habiten sus familiares o amigos;
6. A que le sean impuestas únicamente las restricciones necesarias para garantizar su protección y la de terceros. En todo caso, se deberá procurar que el internamiento sea lo menos restrictivo posible y a que el tratamiento a recibir sea lo menos alterador posible. Cuando haya limitación de libertad, esta será la mínima posible de acuerdo con la evolución del padecimiento, las exigencias de su seguridad y la de los demás;
7. No ser sometido a internación involuntaria salvo con arreglo a procedimientos legalmente establecidos y solo cuando sea el único medio disponible para impedir un daño inmediato o inminente a sí mismo o a terceros, o se trate de una situación grave y el paciente este afectado en su capacidad de juicio y, en el case de no aplicarse el tratamiento se afecte su salud, conforme a lo previsto en la presente ley;
8. Ser alojados en áreas específicamente destinadas a tal fin, con adecuada iluminación natural y artificial, bien ventiladas, con el espacio necesario para evitar el hacinamiento y en condiciones de higiene;
9. Obtener alimentación balanceada y en cantidad suficiente para una adecuada nutrición y servida en utensilios decorosos. Asimismo, a recibir vestido y calzado o tener autorización para utilizar los propios, si así lo desea, así como a no portar uniforme hospitalario con el objeto de ayudar a eliminar el estigma y favorecer la reinserción social;
10. Tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar;
11. A la privacidad e intimidad;
12. Comunicarse libremente con otras personas que estén dentro de la institución; a enviar y recibir correspondencia privada sin que sea censurada, así como a tener acceso a los servicios telefónicos y a los diferentes medios de comunicación;
13. Gozar de permisos terapéuticos para visitar a sus familias o amistades, de acuerdo con el criterio médico;
14. Recibir o bien rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus convicciones y creencias;
15. Ser egresado del centro de internamiento mental cuando el médico tratante considere que puede continuar su tratamiento en forma ambulatoria y que ya no exista el riesgo que su conducta o acciones puedan causarle daño físico inmediato o inminente a sí mismo o a terceros;
16. La accesibilidad de familiares u otras personas en el acompañamiento del paciente, salvo que medie contraindicación profesional;
17. Que en el caso de internación involuntaria, de emergencia o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por las autoridades competentes, y
18. Las demás que establezca esta ley, la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 11.** Todas las personas usuarias tienen derecho de acceso libre y gratuito a la información relativa a sus propios datos clínicos registrados por las instituciones y los profesionales de la salud mental. Este derecho podrá estar sujeto a restricciones para impedir que se cause un perjuicio grave a la salud del paciente o se ponga en peligro la seguridad de terceros. Toda información de esta clase que no se proporcione a la persona usuaria se proporcionará al representante personal del mismo, siempre que pueda hacerse con carácter confidencial.

Cuando no se proporcione a la persona usuaria cualquier parte de la información, ésta o su representante si lo hubiere, será informado de la decisión y de las razones en que se funda, estando la decisión sujeta a revisión.

Toda observación por escrito de la persona usuaria o de su representante personal deberá, a petición de cualquiera de ellos, incorporarse al expediente.

**Artículo 12.** El profesional de salud mental tiene la obligación de estar debidamente acreditado para ejercer sus funciones lo que incluye, al menos, contar con Cédula Profesional, Título Profesional y, en su caso, certificados de especialización expedidos y registrados por las autoridades educativas y de profesiones competentes, con la finalidad de que la persona usuaria y la autoridad corroboren que es un especialista en materia de salud mental.

**Artículo 13.** Las personas con trastornos de salud mental tienen el derecho de recibir tratamiento de la misma calidad y estándares que las personas que reciban otro tipo de tratamientos médicos para la salud física.

**Artículo 14.** Sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad, todo niño tiene derecho a expresar su conformidad con los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. En el caso que, conforme a esta ley se requiera contar con el consentimiento escrito, deberá dejarse constancia que el niño ha sido informado y que se le ha oído. En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño a participar o continuar en ella deberá ser respetada.

**TÍTULO SEGUNDO**

**DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD**

**Artículo 15.** La promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, seguimiento y fomento en materia de salud mental tiene carácter prioritario y se basará en el conocimiento de las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental.

El Estado promoverá la atención en salud mental con un enfoque multidisciplinario, con personal debidamente capacitado y acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas médicas, de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.

El proceso de atención debe realizarse preferentemente de forma ambulatoria, con personal interdisciplinario y encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos sociales, la inclusión y la participación del paciente en la vida social.

**Artículo 16.** La provisión de atención en salud mental se llevará a cabo primariamente en el nivel comunitario, a fin de evitar el desplazamiento de los pacientes de su entorno familiar y de facilitar su rehabilitación e integración social.

La internación se concibe como una medida terapéutica de carácter excepcional y transitorio, una vez agotadas todas las formas y posibilidades terapéuticas previas, aplicándose con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario conforme a la práctica médica. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de los pacientes hospitalizados con sus familiares y su entorno social.

**Artículo 17.** La atención de la salud mental comprende:

1. La promoción y fomento de la salud mental en la población;
2. La prevención de los factores de riesgo a la salud mental;
3. La atención de personas con trastornos mentales, la evaluación diagnóstica y tratamientos integrales, y la rehabilitación de las personas con trastornos mentales;
4. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales;
5. La reintegración de la persona con trastornos mentales y adicciones a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación y a través de otros sectores como educación, trabajo, vivienda y
6. La vigilancia epidemiológica.

**Artículo 18.** Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las demás que se encuentren estipuladas en esta Ley y demás ordenamientos legales, las siguientes acciones:

1. Elaborar el Programa Estatal de Salud Mental de Coahuila de Zaragoza, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas y el presente ordenamiento, fomentando en todo momento la participación del núcleo familiar y comunitario, así como de los sectores social y privado;
2. Implementar de manera formal y sistemática programas en materia de salud mental, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género;
3. Fijar los lineamientos de coordinación para que los municipios, en el ámbito de su competencia, intervengan en la promoción de la salud mental, incentivando la participación social;
4. Llevar a cabo los convenios de coordinación necesarios con los municipios del Estado, para que en los municipios se cuente, por lo menos, con un Módulo Comunitario de Atención en Salud Mental;
5. Diseñar y llevar a cabo campañas que reduzcan los factores de riesgo que pudieran afectar la salud mental, y colaborar en el desarrollo de las mismas cuando sea requerido por otras instancias de gobierno o instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable;
6. Diseñar y evaluar políticas de prevención y atención integral en materia de promoción a la salud mental, educación para la salud mental, atención integral médico-psiquiátrica, rehabilitación integral y participación ciudadana;
7. Participar en las acciones de atención psicológica a personas afectadas en situación de emergencia o desastre;
8. Diseñar y ejecutar de manera permanente en los medios de difusión masiva campañas educativas para orientar, motivar e informar a la población sobre el concepto de salud mental, los estigmas imperantes, los diversos trastornos mentales existentes, los síntomas que se presentan, las formas de prevención y modos de atención, en coordinación con las dependencias e instituciones competentes;
9. Promover la capacitación de todo el personal que desarrolle actividades de salud mental en los sectores público, social y privado;
10. Llevar un registro y supervisar los centros de atención a la salud mental administrados por particulares y organismos de la sociedad civil, a fin de garantizar que se respeten los derechos humanos de los pacientes y suspender, en su caso, aquéllos centros que incumplan con el presente ordenamiento;
11. Elaborar, difundir y llevar a cabo los programas de prevención de suicidios, así como las características y síntomas de alerta de acuerdo con la normatividad aplicable;
12. Integrar la Red, así como, coordinar y supervisar las acciones para la salud mental y la prevención del suicidio;
13. Instalar, administrar y operar módulos de atención en salud mental en el Estado;
14. Implementar una línea telefónica de ayuda, una página de ayuda en Internet y un servicio de intervención en crisis que asegure el seguimiento de las personas que se han contactado a través de este sistema y de aquellas que han realizado un intento de suicidio o presentan síntomas de algún trastorno mental;
15. Instrumentar acciones de difusión en medios masivos de comunicación con la finalidad de proporcionar información precisa, objetiva y con base en criterios científicos enfocada a la detección, atención y prevención de los trastornos mentales;
16. Implementar estrategias de coordinación de índole institucional con los prestadores de servicios de salud mental del sector público, social y privado, con la finalidad de generar convenios y acciones de coordinación para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación en prestación de los servicios de salud mental;
17. Coordinarse con la Secretaría del Trabajo del Estado y demás dependencias y entidades, a efecto de establecer acciones para que las personas con trastornos mentales sean incluidos en las acciones de fomento al empleo público y privado;
18. Presentar al Consejo un informe anual sobre las políticas públicas implementadas en materia de salud mental, así como el estado de avance en el cumplimiento del Programa de Salud Mental y los diversos programas generados, el cual deberán remitir al Consejo, y
19. Las demás acciones que contribuyan a la promoción, prevención y protección de la salud mental de la población.

**Artículo 19.** La Secretaría buscará dar prioridad a la niñez, adolescencia, juventud, mujeres en condiciones de embarazo, puerperio, menopausia, personas adultas mayores, mujeres y hombres con afecciones mentales y personas que se encuentran en situación de calle, de emergencia o desastre.

**Artículo 20.** Para la prevención y atención de los trastornos mentales la Secretaría contará con la estructura orgánica administrativa necesaria para garantizar la atención oportuna y expedita, tomando como base el presupuesto que para tal efecto se le asigne y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 21.** Las instituciones del sector público, privado y socialque participen en programas y acciones en materia de salud mental, deberán remitir a la Secretaría un informe anual sobre las estrategias implementadas y sus resultados.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS**

**Artículo 22.** Todos los prestadores de servicios de salud mental e instituciones o centros de rehabilitación de adicciones del sector social y privado, participarán y coadyuvarán con las instancias involucradas en el diseño, operación y seguimiento de programas de educación para la salud mental, adicciones y prevención de suicidios que contemplen la detección temprana de los trastornos mentales mismos que serán dirigidos a la población en general; para tal efecto deberán:

1. Registrarse y rendir su informe anual de actividades a la Secretaría;
2. Asistir a las convocatorias que realice la Secretaría;
3. Coordinarse con la Secretaría para fomentar la suscripción de convenios o acuerdos para beneficio de la sociedad;
4. Participar en la difusión y publicación en los diversos medios de comunicación sobre la importancia de la deteccióntemprana de los trastornos mentales y las alternativas para su atención en los sectores público, social y privado, y
5. Llevar a cabo cursos de capacitación para la población en general a efecto de crear condiciones para la detección oportuna de los trastornos mentales, conforme a los lineamientos que dicte la Secretaría.

**Artículo 23.** Todo prestador de servicios de salud mental, de rehabilitación de adicciones de los sectores público, social y privado, en caso de que observe algún tipo de lesión, discriminación, maltrato o cualquier otro signo que presuma la comisión de un delito en la persona que tenga algún trastorno mental, deberá de dar aviso inmediato al Ministerio Público correspondiente.

**Artículo 24.** La formación profesional en materia de prevención de riesgos en salud mental requiere de la capacitación de los profesionistas de las ramas médica, paramédica y afín, en los métodos para la elaboración de programas preventivos y actualizados en las diferentes campañas y programas gubernamentales internacionales, nacionales y estatales vinculados con la salud mental.

Todo servidor público que tenga acercamiento o contacto con personas usuarias para la orientación, detección, tratamiento y rehabilitación del mismo, recibirá previamente capacitación, la cual se realizará de acuerdo con las necesidades del personal prestador de servicios, de manera continua y sistemática. La Secretaría realizará convenios con instituciones sociales y privadas para la consecución de dicho fin.

La capacitación comprende el acceso al conocimiento sobre los avances científicos de los padecimientos crónicos, deterioro de la calidad de vida y posibles riesgos ante situaciones críticas o de desastres naturales, así como actualización en los distintos tipos de seguimiento y sus consecuencias.

**CAPÍTULO TERCERO**

**DE LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL**

**Artículo 25.** La promoción de la salud tiene como objetivo promover la salud mental positiva mediante el aumento del bienestar psicológico, competencia y resiliencia, creando condiciones individuales, sociales y ambientales que permitan un desarrollo psicológico y psicofisiológico óptimo de la población.

**Artículo 26**. La Secretaría llevará a cabo acciones de difusión y sensibilización en materia de salud mental a través de los medios de comunicación y otras campañas orientadas a reducir la estigmatización y la discriminación, y promover los derechos humanos de las personas con trastorno mental y sus familiares.

**Artículo 27.** La prevención del trastorno mental tiene como objetivo reducir la incidencia, la prevalencia y la recurrencia mental trastornos, el tiempo dedicado a los síntomas o la condición de riesgo de una enfermedad mental, previniendo o retrasando las recurrencias y también disminuir el impacto de la enfermedad en la persona afectada, sus familias y la sociedad.

**Artículo 28.** Para la promoción de la salud mental y la prevención de riesgos en materia de salud mental, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría y de las autoridades estatales educativas, laborales y demás dependencias en sus respectivos ámbitos de competencia, llevará a cabo las siguientes acciones:

1. A través de la Secretaría de Salud:
2. Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal los programas, políticas y estrategias transversales a adoptar en materia de salud mental e impulsar su implementación;
3. Implementar programa de apoyo psicosocial en situaciones de emergencias o desastres que pretendan dar respuesta a la demanda de intervención psicológica en sucesos que causan impacto social, proporcionando soporte psicológico y social a las personas que sufran una situación de emergencia o desastre, facilitando el afrontamiento y aceptación de la pérdida ya sea personal o material, alivio inmediato a los síntomas agudos de estrés y previniendo las reacciones diferentes ante éste;
4. Desarrollar campañas de concientización sobre los factores de cambio en la salud física y mental de las mujeres durante y después del embarazo;
5. Detectar y atender de manera inmediata a personas que practiquen actividades que pongan en riesgo su vida y a personas con problemas de adicciones;
6. Desarrollar proyectos de investigación, educación y prevención que aborden problemas específicos de prevención de la violencia y de lesiones vinculadas a la depresión, el suicidio y el intento de suicidio;
7. A través de la Secretaría de Educación:
8. Implementar programas psicosociales en las escuelas para reducir la prevalencia de los trastornos de la conducta y los relacionados con el acoso, la violencia escolar, así como el abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas;
9. Capacitar a la planta docente a fin de identificar un posible trastorno mental que presenten niñas o niños, debiéndolos canalizar a algún Módulo de Atención Mental o Centro Hospitalario, así como informar a sus padres o tutor y dar la orientación correspondiente;
10. Proporcionar material informativo básico en salud mental a los padres o tutores con la finalidad de identificar algún tipo de trastorno en el menor y aplicar las medidas preventivas en un primer momento;
11. Promover la contratación en las escuelas públicas y privadas de personal capacitado y actualizado en la materia de psicología y pedagogía infantil con el objetivo de llevar un seguimiento en la atención mental de las niñas, niños y adolescente desde la edad escolar;
12. Proporcionar material informativo básico en salud mental a los padres o tutor con la finalidad de identificar algún tipo de trastorno en el menor y aplicar las medidas preventivas en un primer momento;
13. Implementar programas de información sobre los efectos adversos de los trastornos mentales y de las medidas para detectar, atender y prevenir aquellos factores que induzcan al suicidio;

La Secretaría de Educación deberá coordinarse con las instituciones de educación privada, a efecto de que se apliquen las acciones señaladas en el presente Capítulo.

1. A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia:
2. Detectar y manejar de manera oportuna conflictos en la convivencia en el núcleo familiar y social, previniendo conductas de negligencia y/o abuso físico, sexual, emocional o económico, en especial en mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos mayores;
3. Informar acerca de las consecuencias del abandono, el maltrato y explotación de menores, personas con discapacidad y adultos mayores;
4. Implementar programas de apoyo a madres solteras, personas adultas mayores y en situación de exclusión social especialmente para las poblaciones en alto riesgo;
5. A través de la Secretaría del Trabajo:
6. Promover programas para la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el ámbito laboral;
7. Impulsar programas de manejo del estrés laboral, en coordinación con el sector público y privado.

**Artículo 29.** La prevención debe ser accesible a cualquier población y pondrá especial atención a padecimientos crónicos donde la calidad de vida del paciente esté involucrada, de tal manera que dichos programas tengan una orientación psicoeducativa.

**CAPITULO CUARTO**

**DE LA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO**

**Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD MENTAL**

**Artículo 30.** La evaluación y diagnóstico clínico se realizará mediante la aplicación de diversos procedimientos que, dependiendo del caso, incluyen desde entrevistas, pruebas psicométricas e instrumentos de medida que buscarán lo siguiente:

1. Elaborar un diagnóstico diferencial que conduzca a la prevención y tratamiento para conocer el perfil cognoscitivo, conductual y emocional de las personas, y
2. Contar con elementos con fines diagnósticos, ya sea de carácter clínico, psicoeducativo, neuropsicológico, psicofisiológico, laboral, forense, orientación vocacional, social y de desarrollo.

**Artículo 31.** La evaluación clínica se lleva a cabo para identificar la multiplicidad de agentes etiológicos a los cuales puede atribuirse el trastorno mental, destacando los factores orgánicos y psicológicos, así como la manera en que el entorno social y cultural influyó en la situación actual del usuario de salud mental.

Se conforma de lo siguiente:

1. Fase Diagnóstica: se efectúa una valoración psiquiátrica y psicológica a través de:
   1. Entrevista inicial;
   2. Historia clínica;
   3. Entrevista psicológica, y
   4. Estudio psicológico o psicométrico.
2. Tratamiento: se realiza a través de:
   1. Farmacoterapia;
   2. Terapia Psicológica Individual, y
   3. Terapia Grupal.

**Artículo 32.** La evaluación y diagnóstico clínico deberá incluir el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las distintas medidas personales o degrupo, con el objetivo de detectar los síntomas que interfieren en su adaptación o que podrían desencadenar algún tipo de alteración, detectar disfunciones mentales, conocer el perfil de habilidades, aptitudes o personalidad, así como ubicar la evolución y constitución de grupos que alteren su estabilidad social.

**Artículo 33.** La evaluación y el diagnóstico clínico deberá realizarse profesionales certificados en instituciones públicas y privadas en psicología y/o medicina psiquiátrica según sea el caso, y deberán cumplir con los lineamientos y estándares emitidos por organismos internacionales y nacionales en materia de salud mental, así como la Ley General de Salud y las Normas Oficiales respectivas.

El profesional que realice la evaluación y el diagnóstico a los que se refiere el artículo anterior, debe contar con la capacitación adecuada con la finalidad de garantizar que conoce las limitaciones de los instrumentos y la aplicación de un procedimiento de esta naturaleza en sus distintas variedades.

Asimismo, para la emisión de dictámenes solicitados por las autoridades, deberá acreditar la especialidad de perito en psicología forense, expedido por institución con validez oficial.

**Artículo 34.** El Reglamento determinará el procedimiento para la valoración y diagnóstico clínico de las personas usuarias de los servicios de salud mental.

**Artículo 35.** El profesional en salud mental deberá diseñar materiales y programas, así como aplicar procedimientos y técnicas apropiadas para cada condición, con el objetivo de que la persona usuarialogre recuperar su conducta y comportamiento deteriorados.

La rehabilitación debe preverla conservación y preservación de la integridad del usuario en salud mental.

**Artículo 36.** El profesional en salud mental debe proporcionar información clara y precisa a la persona usuaria y a sus familiares respecto al tratamiento con el que se le pretenda tratar. En ningún caso podrá iniciarse sin antes haber sido exhaustivos en proporcionar la información al respecto, así como haber sido aceptadas las responsabilidades y compromisos que implican la aplicación del tratamiento.

No se administrará ningún tratamiento a una persona usuaria sin su consentimiento informado, salvo las excepciones previstas en esta ley.

Para ser válido, el consentimiento debe satisfacer los siguientes criterios:

1. La persona usuaria que otorga su consentimiento debe tener capacidad para hacerlo; la capacidad se presume a menos que se demuestre lo contrario;
2. El consentimiento debe ser obtenido libremente, sin amenazas ni inducciones impropias. La información relevante debe proporcionarse de manera apropiada y adecuada;
3. Debe proporcionarse información sobre el propósito, método, duración estimada y beneficios esperados del tratamiento propuesto. Deben discutirse adecuadamente con la persona usuaria los posibles dolores o molestias, y los riesgos del tratamiento propuesto;
4. Deben ofrecerse alternativas, si éstas existieran, de acuerdo con las buenas prácticas clínicas, especialmente aquellas que sean menos intrusivas;
5. La información debe proporcionarse en un lenguaje y de manera que resulten comprensibles para el paciente;
6. El paciente tiene el derecho de negarse a recibir tratamiento o de abandonarlo. Deben explicársele al paciente las consecuencias de negarse a recibir tratamiento, que pueden incluir la externación del hospital;
7. El consentimiento debe ser documentado en la historia médica del paciente.

**Artículo 37.** El consentimiento obtenido o mantenido con dolo, debidamente comprobado por autoridad judicial, harán al profesional de la salud mental a cargo y al director de la institución de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

**Artículo 38.** El consentimiento informado sustitutorio solo se podrá otorgar cuando el paciente carezca de capacidad necesaria de discernir para otorgarlo o el paciente se encuentre en el supuesto de incapacidad legal. En el caso anterior, se deberá recabar la mayor evidencia posible para la determinación de falta de discernimiento en el paciente.

Podrán otorgar el consentimiento informado sustitutorio el familiar, responsable legal o tutor del paciente, con apego a las disposiciones sanitarias y civiles aplicables, así como en su caso la autoridad sanitaria o judicial. El paciente cuando mejore sus condiciones podrá apelar el tratamiento o internamiento involuntario otorgado de forma sustitutoria.

El consentimiento informado obtenido o sostenido con coerción o dolo, deberá notificarse a la autoridad sanitaria y judicial competente para su investigación y, en su caso, aplicación de la sanción correspondiente. No será necesario el consentimiento informado cuando se trate del internamiento involuntario en los términos de esta ley.

**Artículo 39.** Las personas con trastornos mentales que estén en supuestos de restricciones a la personalidad jurídica, de forma transitoria o permanente, como minoría de edad, falta de discernimiento, incapacidad mental o intelectual, no deben ser sujetos para menoscabar la dignidad de la persona, ni atentar contra el ejercicio de sus derechos humanos, y en estos casos, deberán aplicarse las disposiciones civiles, a fin de garantizar que cuenten con un representante legal o tutor y un curador.

**Artículo 40.** Con la finalidad de dar seguimiento a las personas usuarias de los servicios de salud mental, se deberá concertar citas subsecuentes de acuerdo a las necesidades del caso y posibilidades del paciente y, cuando el caso lo amerite, se realizará visita domiciliaria. Se pondrá especial atención a la recuperación de pacientes con baja adherencia terapéutica.

**Artículo 41.** El tratamiento y los cuidados de cada paciente se basarán en un plan prescrito individualmente, examinado con el paciente, revisado periódicamente y modificado llegado el caso, debiendo ser aplicado en todo momento por personal profesional calificado.

El uso de tratamiento farmacológico deberá ser prescrito por un profesional de salud mental, preferentemente especialista en psiquiatría y se registrará en el historial del paciente. La medicación responderá a las necesidades fundamentales de salud del paciente y sólo se le administrará con fines terapéuticos o de diagnóstico y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática.

**CAPÍTULO QUINTO**

**DEL INTERNAMIENTO EN INSTITUCIONES**

**DE SALUD PÚBLICAS Y PRIVADAS**

**Artículo 42.** Para efectos de la presente ley, el internamiento es considerado como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente.

El internamiento debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica.

**Artículo 43.** El internamiento de personas con trastorno mental se debe ajustar a principios éticos, sociales, científicos y legales, así como a criterios contemplados en la presente Ley, la Norma Oficial Mexicana para la prestación de Servicios de Salud y la Ley de Salud en el Estado.

**Artículo 44.** Sólo puede recurrirse al internamiento de un paciente cuando el tratamiento no pueda efectuarse en forma ambulatoria o domiciliaria, y previo dictamen de los profesionales acreditados por la Secretaría. El reglamento señalará las características para este procedimiento.

De ningún modo la internación podrá indicarse para dar solución a problemas exclusivamente sociales o de vivienda.

Ninguna persona podrá permanecer en internación indefinidamente en razón de su discapacidad y/o condiciones sociales. Es obligación del prestador de servicios de salud mental agotar todas las instancias que correspondan con la finalidad de resguardar sus derechos e integridad física y psíquica.

**Artículo 45.** El personal que presta servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica debe ofrecer atención médica, psiquiátrica y psicológica de calidad a las personas usuarias que requieren de estos servicios en las unidades del sector público, privado y social.

**Artículo 46.** Las instituciones que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica deben contar con las instalaciones específicas necesarias para dar atención a las personas usuarias, de acuerdo a lo siguiente, según sea el caso y considerando sus características:

1. Instalaciones para actividades de recreo y esparcimiento;
2. Instalaciones educativas;
3. Instalaciones que permitan a emprender ocupaciones activas adaptadas a sus antecedentes sociales y culturales y que permitan aplicar medidas apropiadas de rehabilitación para promover su reintegración en la comunidad.

Tales medidas comprenderán servicios de orientación vocacional, capacitación vocacional y colocación laboral que permitan a las personas usuarias internadas obtener o mantener un empleo en la comunidad.

1. Instalaciones organizadas de modo de proteger la privacidad de las personas usuarias en la mayor medida posible;
2. Instalaciones separadas para menores de edad, apropiadas a su edad y que considere las necesidades de desarrollo de niñas, niños y jóvenes;
3. Con espacios plenamente identificados y separados para la atención de hombres y mujeres.

La Secretaría realizará visitas de supervisión a las instituciones de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica o cualquier otra afín que preste servicios de salud mental con opción de internamiento, a efecto de asegurarse de que se cumplen estas condiciones y se respetan los derechos de los pacientes internados, aplicando las sanciones que establezca esta ley y su reglamento.

**Artículo 47.** El consentimiento informado de las personas usuarias de algún familiar, tutor/a o representante legal, es la base para el ingreso a las unidades que prestan atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.

En las unidades médico hospitalario el ingreso puede ser:

1. Ingreso Voluntario. Se requiere la solicitud firmada de la persona usuaria y la indicación del personal profesional médico a cargo del servicio de admisión de la unidad, ambos por escrito, haciendo constar el motivo de la solicitud e informando a sus familiares o a su representante legal;
2. Ingreso Involuntario. Requiere un diagnóstico psicológico, neurológico, psiquiátrico y de aquellas especialidades médicas necesarias, según la condición clínica de la persona usuaria. El diagnóstico deberá acompañarse de un informe del área de trabajo social, el cual deberá estar avalado por los análisis y estudios conforme a sus síntomas y la solicitud de un familiar responsable, tutor/a o representante legal, todos por escrito. En cuanto las condiciones de la persona usuaria lo permitan, deberá ser informado de su situación de internamiento, para que en su caso, su condición cambie a la de ingreso voluntario;
3. El ingresode emergencia se presenta en el caso de personas con trastornos mentales severos que requieran atención urgente o representen un peligro grave, inmediato e inminente para la salud o seguridad de sí mismos o para los demás. Requiere la indicación de un médico psiquiatra y la autorización de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambas por escrito. En caso de extrema urgencia, la persona usuaria puede ingresar por indicación escrita del médico a cargo del servicio de admisión de la Unidad Hospitalaria, o
4. El ingreso por orden de autoridad se lleva a cabo cuando lo solicita la autoridad competente, siempre y cuando el paciente lo amerite de acuerdo con el examen médico psiquiátrico.

**Artículo 48.** En toda disposición de internamiento, dentro de las 48 horas siguientes a la admisión de la persona usuaria, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Iniciar la evaluación correspondiente para establecer el diagnóstico presuntivo, de situación y el plan de tratamiento. Será emitido un informe firmado por el médico psiquiatra precisando si están dadas las condiciones para continuar con el internamiento.
2. Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar;
3. Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. Sólo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará invalidado si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá procederse como si se tratase de un internamiento involuntario.

En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su identidad, la institución que realiza el internamiento, en colaboración con los organismos públicos que correspondan, debe realizar las averiguaciones tendientes a conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que la persona tuviese o indicase, o esclarecer su identidad, a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible. La institución debe brindar colaboración a los requerimientos de información que solicite el Comité institucional de Revisión.

**Artículo 49.** El ingreso de emergencia no debe prolongarse por más de 72 horas. Durante este período, si se estima por parte de los profesionales de salud mental que la persona requiere la extensión de la atención involuntaria, deberán cumplirse con los procedimientos sustantivos para el ingreso involuntario. Si el paciente no reúne las condiciones para el ingreso o tratamiento involuntarios, o si no se cumple con los procedimientos para retener o tratar al paciente como paciente involuntario, la persona debe ser externada inmediatamente después de finalizada la emergencia.

En cuanto las condiciones de la persona usuaria lo permitan, será informado de su situación de internamiento para que, en su caso, otorgue su consentimiento libre e informado y su condición cambie a la de ingreso voluntario.

Los pacientes internados que no reúnen las condiciones para el ingreso involuntario después de un ingreso de emergencia, pero que aún pueden obtener provecho del tratamiento, deben ser considerados usuarios voluntarios y sólo pueden ser tratados si prestan su consentimiento informado.

**Artículo 50.** El internamiento involuntario debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.

**Artículo 51.** Una persona sólo podrá ser ingresada de forma involuntaria en una institución psiquiátrica o ser retenida como paciente involuntario en una institución psiquiátrica a la que ya hubiera sido admitida como paciente voluntario cuando un médico calificado en salud mental determine que esa persona padece un trastorno mental y para que proceda, además de los requisitos comunes a todo internamiento, debe hacerse constar:

1. Dictamen profesional del profesional de salud mental que realice el internamiento. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, con la firma del profesional de la salud mental, que no tenga relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona;
2. Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento;
3. Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.
4. En el caso de una persona cuyo trastorno mental sea grave y cuya capacidad de juicio esté afectada, el dictamen que justifique el hecho de que si no se la admita o retenga puede llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le proporcione un tratamiento adecuado que sólo puede aplicarse si se admite al paciente en una institución psiquiátrica de conformidad con el principio de la opción menos restrictiva.

El ingreso involuntario sólo podrá tener propósitos terapéuticos y sólo será aplicable cuando no pueda utilizarse otras medidas menos restrictivas. Las personas que únicamente requieran de vigilancia no deben ser internadas en una institución psiquiátrica como pacientes involuntarios.

En todo caso, se debe consultar en lo posible a un segundo profesional de salud mental, independiente del primero. La admisión o la retención involuntaria no tendrán lugar a menos que el segundo profesional convenga en ello.Si no fuere posible llevar a cabo una segunda evaluación antes de la admisión inicial, ésta debe realizarse después del ingreso y antes de la administración de tratamiento.

**Artículo 52.** El internamiento involuntario debidamente fundado debe notificarse obligatoriamente en un plazo de 24 horas al Comité Institucional de Revisión, debiendo agregarse todas las constancias previstas en el artículo 51. El Comité Institucional de Revisión en un plazo máximo de tres días contados a partir de la notificación deberá:

1. Autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley;
2. Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si existen los supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema del internamiento involuntario y/o;
3. Denegar, en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para la medida de internamiento involuntario, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata.

**Artículo 53.** En el caso de internamiento involuntario, se deberá informar inmediatamente a los pacientes de los motivos del ingreso involuntario y que éstos se comuniquen también prontamente al representante legal del paciente y a sus familiares.

La persona usuaria tiene derecho a ser tratada con los procedimientos médicos necesarios, debiendo recibir información completa sobre el tratamiento terapéutico propuesto, incluyendo la información sobre efectos secundarios y sobre las alternativas disponibles. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además se procederá de acuerdo a la normativa nacional e internacional de protección integral de derechos.

En todo caso, los pacientes, sus familias y/o sus representantes legales tienen derecho a apelar la decisión de internamiento involuntario ante el Comité Institucional de Revisión y solicitar la externación en cualquier momento.

**Artículo 54.** Habiendo autorizado la internación involuntaria, el Comité Institucional de Revisión debe solicitar informes con una periodicidad no mayor a 30 días naturales a fin de reevaluar si persisten las razones para la continuidad de dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer su inmediata externación. Si transcurridos los primeros 90 días y luego del tercer informe continuase el internamiento involuntario, el Comité Institucional de Revisión deberá designar un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia de criterio, optará siempre por la que menos restrinja la libertad de la persona internada.

**Artículo 55.** El mantenimiento de la internación sólo se justifica si persiste el trastorno mental, con la gravedad y en la forma que desencadenaron el ingreso involuntario. Si han cesado las circunstancias que justificaron la internación involuntaria, el paciente puede ser externado a consideración del profesional de salud mental, según lo dispuesto por esta ley.

Los pacientes pueden pasar a ser considerados pacientes voluntarios para continuar la atención y el tratamiento en situación de internación o como paciente ambulatorio, según lo elijan.

**Artículo 56.** El tratamiento involuntario no debe ser administrado por un período de tiempo superior al necesario y debe ser revisado sistemáticamente por el profesional de la salud tratante y periódicamente por el Comité Institucional de Revisión.

**Artículo 57.** Todo internamiento debe ser comunicado por el director, responsable o encargado del establecimiento sea público, social o privado a los familiares de la persona o representante legal si los tuviere, y al juez de la causa si correspondiere, así como a otra persona que el paciente indique. En caso de que sea un menor de edad o el internamiento sea por orden de autoridad judicial, además se deberá informar de oficio al Ministerio Público.

**Artículo 58.** En todo internamiento se deberá de contar con una cédula de identidad del paciente, la cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

1. Evaluación y diagnóstico de las condiciones de la personainternada;
2. Datos acerca de su identidad y su entorno socio-familiar;
3. Información de su cobertura médico asistencial;
4. Motivos que justifican la internación, y
5. Autorización de la persona internada, en su caso, de su familiar o representante legal cuando corresponda.

**Artículo 59.** Dentro de los quince días hábiles de ingresada la persona usuaria y de manera constante cada treinta días, será evaluada por el equipo de salud mental del establecimiento; el médico psiquiatra certificará la evolución y asentará en la historia clínica su valoración sobre la continuidad de tratamiento hospitalario o ambulatorio.

**Artículo 60.** En todos los casos en que el internamiento voluntario se prolongue por más de sesenta días continuos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al Comité Institucional de Revisión, el cual deberá evaluar en un plazo no mayor de cinco días de ser notificado, si el internamiento continúa teniendo carácter voluntario o si el mismo debe pasar a considerarse involuntario, con los requisitos y garantías establecidos para esta última situación.

**Artículo 61.**Toda institución de carácter social y privado, cada treinta días naturales, deberá realizar y remitir al área de salud mental de la Secretaría, un informe que contenga el nombre de las personas internadas, las causas de su internamiento y el avance que tengan en su rehabilitación.

**Artículo 62.** Para el caso de que la persona usuariasea candidata para continuar su tratamiento ambulatorio, el médico psiquiatra, deberá realizar tal manifestación por escrito, debiendo contar con el aval y certificación del director del establecimiento. Dicho procedimiento se deberá de notificar a la Secretaría.

**Artículo 63.** El alta, externación o permisos de salida son facultad de los profesionales de salud mental que no requiere autorización del Comité Institucional de Revisión, aunque el mismo deberá ser informado si se tratase de un internamiento involuntario, o voluntario ya informada en los términos de la presente ley.

El equipo de salud está obligado a externar a la persona o transformar el internamiento en voluntario apenas cesa la situación de riesgo cierto e inminente. Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente artículo, las internaciones realizadas por orden de autoridad judicial.

**Artículo 64.** El egreso de la persona usuaria del servicio de hospitalización será avalado por el médico psiquiatra y podrá realizarse por los siguientes motivos:

1. Estabilización del cuadro clínico o curación;

1. Haberse cumplido los objetivos de la hospitalización;
2. Mejoría;
3. Traslado a otras instituciones;
4. Voluntario a solicitud de la persona usuaria, cuando se trata de ingreso voluntario;
5. A solicitud de los familiares legalmente autorizados y con el consentimiento de la persona usuaria, con excepción de los casos de ingreso involuntario, y
6. Por resolución de la autoridad judicial competente.

**Artículo 65.** Además de la atención clínica, el Gobierno del Estado promoverá mecanismos de apoyo para que las personas con trastornos de salud mental accedan de forma segura a los servicios necesarios para la supervivencia y para una vida digna, incluyendo de forma enunciativa salud, educación, empleo y vivienda.

**Artículo 66.-** Las instituciones sociales y privadas de internación de personas con trastornos mentales se considerarán dentro de los establecimientos señalados en las Normas Oficiales en la materia y la Ley de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza, debiendo cumplir con los requisitos señalados en dicha Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 67.** A los efectos de garantizar los derechos humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental, los integrantes, profesionales y no profesionales del equipo de salud mental y de éstas instituciones, son responsables de informar al Comité Institucional de Revisión sobre cualquier sospecha de irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de su autonomía. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persistiera. Dicho procedimiento se podrá realizar bajo reserva de identidad y contará con las garantías debidas del resguardo a su fuente laboral y no será considerado como violación al secreto profesional.

**CAPÍTULO SEXTO**

**DE LOS DERECHOS DE LOS FAMILIARES Y OTROS CUIDADORES**

**DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES**

**Artículo 68.** Para la aplicación de esta Ley es fundamental el papel que desempeñe el núcleo familiar en el desarrollo de las potencialidades de las personas con trastornos mentales, por lo que para ello deberá:

1. Suministrar los cuidados, el apoyo, la educación, la protección a la salud, la alimentación suficiente y adecuada;
2. Garantizar la igualdad y no discriminación en el ejercicio de sus derechos, respetando los principios de autonomía individual, independencia y autodeterminación;
3. Recibir capacitación y orientación por parte de las instituciones públicas, sociales y privadas, y
4. Participar en actividades culturales, recreativas, deportivas y de esparcimiento, que contribuyan al desarrollo integral de las personas con trastorno mental.

La Secretaría es la encargada de proporcionar a las personas que integren el núcleo familiar la debida asistencia, asesoría, orientación, capacitación y adiestramientonecesario para enfrentar dicha enfermedad.

Para la aplicación de la presente Ley se entiende por integrante del núcleo familiar a quien se encuentre unida a la persona con trastorno mental por una relación de matrimonio, concubinato, pacto civil de solidaridad o por un lazo de parentesco consanguíneo, en línea recta ascendiente o descendente en segundo grado, colateral o afinidad en primer grado.

**Artículo 69.** Los familiares y las personas que cuidan y apoyan a personas con trastorno mental tienen derecho a recibir información general sobre las mejores maneras de ejercer la labor de cuidado, tales como contenidos psicoeducativos sobre los trastornos mentales, la discapacidad y sus tratamientos.

**Artículo 70.** Los familiares de personas con trastorno mental tienen derecho a organizarse para abogar por sus necesidades y las de las personas a quienes cuidan, a crear instancias comunitarias que promuevan la inclusión social, y a denunciar situaciones que resulten violatorias de los derechos humanos.

**Artículo 71**. Los familiares y las personas que están a cargo del cuidado de las personas con trastornos mentales tienen los siguientes derechos

1. Derecho al acceso a la información necesaria sobre la enfermedad y tratamiento, con el objeto de orientar el cuidado adecuadamente a su familiar con trastorno mental y adicciones;
2. Derecho a recibir cursos de psico-educación sobre la enfermedad y el tratamiento de su familiar, posterior, al establecimiento del diagnóstico de algún trastorno mental y adicciones;
3. Derecho a ser involucrado en la formulación e implementación del tratamiento de su familiar;
4. Derecho a mantener contacto y comunicación con su familiar cuando este internado, siempre y cuando este contacto no se contraproducente para la salud del paciente;
5. Derecho a apelar ante el responsable médico o ante la autoridad judicial, sobre las decisiones del internamiento y tratamiento involuntarios a favor y beneficio de su familiar;
6. Derecho a solicitar el egreso de su familiar, y
7. Derecho a participar en las políticas y programas de salud mental.

**TÍTULO TERCERO**

**DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**DEL CONSEJO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES**

**PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**Artículo 72.** El Consejo de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Coahuila de Zaragoza es un órgano técnico de consulta, análisis, asesoría y participación, en coordinación con los sectores público y privado, que tiene por objeto la promoción, prevención y atención de la salud mental y las adicciones, para reducir la morbilidad, mortalidad y la discapacidad atribuida a los trastornos mentales, así como para el desarrollo de planes, programas y proyectos que en materia de salud mental aplique el Gobierno del Estado, y estará integrado por:

1. Una Presidencia, a cargo de la persona titular de la Secretaría de Salud;
2. Una Secretaría Técnica, que será designada por la persona titular de la Presidencia;
3. Vocales, previa invitación de la persona titular de la Presidencia y aceptación correspondiente, que será un representante de:
4. La Secretaría de Gobierno;
5. La Secretaría de Educación;
6. La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social;
7. La Secretaría del Trabajo;
8. La Secretaría de Seguridad Pública;
9. La Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza;
10. El Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Coahuila;
11. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
12. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza;
13. El Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila;
14. La Cruz Roja Mexicana, Institución de Asistencia Privada;
15. El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza;
16. El Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila;
17. El Consejo Estatal contra las Adicciones;
18. La Sexta Zona Militar;
19. Una institución médica privada;
20. Dos universidades públicas o privadas en el Estado;
21. Dos asociaciones civiles, con actividades que tengan relación con el objeto del Consejo.

Todos los cargos del Consejo serán honoríficos, por los que sus titulares no recibirán emolumento alguno por su desempeño.

A las sesiones podrán asistir personas expertasinvitadas en materia de salud de los sectores público, social y privado que el Pleno del Consejo considere pertinente para emitir opiniones, aportar información, o apoyar acciones sobre el tema que se defina.

El Presidente del Consejo podrá ser suplido en sus ausencias por quien éste determine y los vocales por quienes designen como suplentes, siempre que tengan la jerarquía inmediata inferior. Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto.

Las facultades de los integrantes del Consejo, se establecerán en su reglamento interno que para tal efecto se expida.

El Reglamento determinará los lineamientos de operación del Consejo.

**Artículo 73.** El Consejo tendrá las siguientes funciones:

1. Emitir las opiniones y recomendaciones que en la esfera de su competencia le sean solicitadas por las autoridades competentes, relacionadas con los planes y programas de salud mental y adicciones;
2. Mantener estrecha comunicación y coordinación con la Secretaría de Salud Federal;
3. Difundir los lineamientos y la normatividad en relación a la salud mental y adicciones;
4. Apoyar la promoción de las acciones de los sectores público y privado en materia de salud mental y adicciones;
5. Proponer y coadyuvar en la evaluación de los programas relativos a la salud mental y las adicciones, así como promover la difusión e implementación de modelos innovadores para su atención;
6. Definir los procesos, procedimientos y actividades técnicas y administrativas que permitan prestar adecuadamente la atención a la salud mental y las adicciones;
7. Proponer políticas de prevención y atención integral en materia de salud mental y adicciones;
8. Proponer medidas que sean necesarias para garantizar la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integridad de los servicios que se otorgan a las personas con problemas de salud mental y adicciones;
9. Promover el respeto a los derechos humanos de las personas que padecen algún trastorno mental o de adicciones;
10. Examinar, discutir y aprobar en su caso, los planes de trabajo que se propongan, así como los informes de actividades;
11. Autorizar la creación y bases de funcionamiento de subcomités o grupos de trabajo que ayuden al cumplimiento del objeto del Consejo;
12. Promover, facilitar y vigilar el cumplimiento de la legislación y la reglamentación federal y estatal en materia de salud mental y adicciones, a efecto de presentar ante las instancias competentes, observaciones y propuestas en la materia;
13. Fomentar la participación comunitaria y de las organizaciones de la sociedad civil, para coadyuvar al desarrollo de los programas en materia de salud mental y adicciones;
14. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Federación, el Estado y los municipios, para la eficaz ejecución de los programas en materia de salud mental y adicciones;
15. Fomentar las acciones de sensibilización entre la población acerca de la salud mental y las adicciones, y convocar a la comunidad a participar en la prevención de problemas de salud mental y adicciones, así como en la rehabilitación y reinserción social de las personas con problemas de este tipo;
16. Expedir el reglamento interior del Consejo;
17. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de su objeto, así como aquellas que le asignen otras disposiciones aplicables.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**DEL CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL**

**Y EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PARRAS DE LA FUENTE**

**Artículo 74.** El CESAME y el Hospital Psiquiátrico de Parras de la Fuente tendrán las siguientes funciones:

1. Planear y evaluar políticas de prevención y atención integral en materia de promoción a la salud mental, educación para la salud mental, prevención de suicidios, atención integral médico-psiquiátrica, rehabilitación integral y participación ciudadana, así como analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la atención de la salud mental;
2. Seleccionar y asignar el personal especializado en atención integral para cada uno de los trastornos que requieran atención prioritaria en base al presupuesto asignado;
3. Sensibilizar a la sociedad sobre los trastornos mentales y las alternativas para la solución de sus problemas como son terapias, pláticas y orientación en los Módulos de Atención en Salud Mental, Centros Hospitalarios, Centros de Salud y demás espacios para la atención de su problema;
4. Motivar a la comunidad a la realización de acciones y proyectos que benefician a la salud;
5. Llevar un registro actualizado de los Grupos de Autoayuda existentes en el Estado, a fin de vigilar, asesorar y fortalecer las acciones comunitarias que aseguren los factores de protección;
6. Diseñar y llevar a cabo campañas que reduzcan los factores de riesgo;
7. Participar en las acciones de atención a personas afectadas en situación de emergencia o desastre en el Estado;
8. Asesorar en la instalación, administración y operación de los Módulos Comunitarios de Atención en Salud Mental, y
9. Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables.

**CAPÍTULO TERCERO**

**DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE REVISIÓN DEL TRATAMIENTO**

**Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL**

**Artículo 75.** Las personas usuarias de los servicios de salud mental en el Estado tienen derecho a disponer de un procedimiento de revisión para cualquier decisión adoptada por los responsables de la toma de decisiones, sean funcionarios, representantes o prestadores de la atención de la salud.

Para tal fin, se constituye el Comité Institucional de Revisión del Tratamiento y Atención de la Salud Mental como un órgano colegiado de revisión de las decisiones aplicadas por los profesionales de la salud mental, relativas al tratamiento prescrito para la atención de los trastornos mentales, así como las relativas al internamiento de pacientes en las instituciones que prestan servicios de salud mental en el Estado, tanto públicas como privadas.

El Reglamento interior del Comité Institucional de Revisión determinará los lineamientos de operación.

**Artículo 76.** En el caso de una decisión que afectan el tratamiento y/o el internamiento con un efecto de larga duración, deberá realizarse de oficio una revisión periódica. De igual forma todos los casos de ingreso y tratamiento involuntario serán revisados de forma automática y periódica por el Comité Institucional de Revisión.

**Artículo 77.** El Comité Institucional de Revisión se conformará de la siguiente forma:

1. El titular de la Secretaría, quien lo presidirá;
2. El Director del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral;
3. El Director del Centro Estatal de Salud Mental de Saltillo;
4. El Director del Hospital Psiquiátrico de Parras de la Fuente;
5. Tres profesionales médicos-psiquiatras, quienes serán propuestos por los Colegios de profesionistas médicos en el Estado.

**Artículo 78.** El Comité Institucional de Revisión tiene a su cargo la de supervisar de oficio o por solicitud del paciente, sus familiares y/o representantes las condiciones de internación por razones de salud mental, así como las siguientes atribuciones:

1. Tramitar y resolver las quejas, solicitudes de revisión y apelación interpuestas por el paciente y/o sus familiares o representantes por decisiones de los profesionales de la salud mental relacionadas con su tratamiento;
2. Revisar de oficio los casos de ingreso y/o tratamiento involuntario, y dar seguimiento de forma periódica mientras éste continúe;
3. Revisar periódicamente los casos que impliquen la administración de tratamiento y/o internamiento de larga duración;
4. Revisar las decisiones y/o medidas médicas que impliquen restricciones a los derechos del paciente;
5. Conocer acerca de las quejas o denuncias interpuestas por cualquier irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o internamiento;
6. Las demás previstas en esta ley y su reglamento.

**TÍTULO CUARTO**

**DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA**

**Y EVALUACIÓN EN SALUD MENTAL**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**DEL SISTEMA**

**Artículo 79.** El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental funcionará como un centro de información técnico, permanente y estratégico de consulta cuyo objetivo principal será llevar a cabo estudios científicos en materia de salud mental, dirigido hacia la población del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de salud mental y de conformidad con lo establecido en la Ley de Salud y demás ordenamientos aplicables.

Su integración y funcionamiento será determinado en el Reglamento de la presente Ley.

**Artículo 80.** El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental tendrá las siguientes funciones:

1. Elaborar y desarrollar los métodos científicosde información e investigación sobre los trastornos mentales en el Estado de Coahuila de Zaragoza con la finalidad de fortalecer las acciones para la atención de la salud mental;
2. Crear la Base de Datos con la información relacionada a suicidios ocurridos en el Estado, sus características y datos relevantes con la finalidad de contar con el perfil suicida para la prevención de este acto;
3. Plantear y coordinar programas de actualización y capacitación para servidores públicos y privados para la atención a los usuarios en salud mental;
4. Proponer mecanismos de coordinación entre instancias de Gobierno Federal, instituciones públicas, sociales y privadas;
5. Brindar asesoría y proporcionar información al Consejo, órganos centrales y desconcentrados de la Administración Pública Federal, del Estado de Coahuila de Zaragoza y a los organismos sociales, públicos y privados en los temas que le requieran;
6. Elaborar y difundir encuestas, estudios, investigaciones, informes y demás trabajos que sobre salud mental se realicen;
7. Llevar un censo de los suicidios ocurridos en el Estado;
8. Mantener la confidencialidad y protección de los datos e información de los derechos de las personas con algún trastorno mental, atendiendo en todo momento lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás legislación aplicable, y
9. Las demás que le confiera la presente ley y demás disposiciones aplicables.

La información para la alimentación de la base de datos a que se refiere la fracción II del presente artículo deberá ser proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, de conformidad con las disposiciones aplicables.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**DE LAS SANCIONES Y DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD**

**Artículo 81.** Las violaciones a los preceptos de esta ley, su y demás disposiciones legales que de ella emanen, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría de conformidad con las leyes aplicables.

**Artículo 82.** Se podrán interponer recursos de inconformidad a los que hace referencia la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, contra los actos que cometa la Secretaría en el ejercicio de sus funciones, y que consideren que ha vulnerado las disposiciones de esta Ley o de sus derechos que consagran las disposiciones legales.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.** La Secretaría de Salud contará con un plazo de 180 días para emitir el Programa de Salud Mental, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto.

**TERCERO.** En un término de 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá quedar instaladoel Consejo Estatal de Salud Mental y el Comité Institucional de Revisión previstos en la presente ley.

**CUARTO.**  El Consejo contará con un plazo de 90 días, contados a partir de su instalación, para aprobar su reglamento interno.

**QUINTO.** La Secretaría de Salud, conforme a la suficiencia presupuestal asignada, instrumentará las acciones establecidas en la presente Ley.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de abril de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE SALUD MENTAL Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA.**

**Dictamen con vista del sentir de los ayuntamientos** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, a cargo de las y los Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, y la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, le fue turnado el expediente que contiene diversos oficios, emitidos el 03 de abril de 2020, mediante los cuales el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, hizo del conocimiento a los 38 Presidentes Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la iniciativa de Decreto por el cual se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís; a fin de cumplir con lo dispuesto por los Artículos 196, fracciones V y VI, y 197 del referido ordenamiento y en los Artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

En esa tesitura, toda vez que se comunicó a los 38 Ayuntamientos del Estado sobre la reforma en comento, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 196, fracción IV, y 197 de la Constitución Política del Estado y en los Artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; es menester referir que se recibió la opinión de un total de 24 Ayuntamientos, con 23 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, emitiendo opinión favorable los ayuntamientos de Allende, Arteaga, Candela, Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Lamadrid, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, Sierra Mojada, Torreón, Viesca y Zaragoza; y recibiéndose una opinión en sentido negativo por parte del ayuntamiento de Acuña, cumpliéndose así con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 197 de la Constitución Local. Consecuentemente atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 196 fracción V del referido ordenamiento, debe procederse a la declaración del Congreso con el sentir afirmativo de la mayoría absoluta de los Ayuntamientos.

**SEGUNDO.-** Que dichos oficios fueron turnados a esta comisión, a fin de que emitiera el dictamen respecto a la declaratoria de aprobación de la citada reforma, una vez analizado el expediente de referencia; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que el texto del Artículo 196 de la Constitución Política local, que da el sustento al procedimiento de reforma constitucional, es del tenor literal siguiente:

***Artículo 196.*** *La Ley Suprema Coahuilense puede ser adicionada o reformada por el Congreso del Estado. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del bloque de la constitucionalidad local, deben observarse los requisitos siguientes:*

***I.*** *Iniciativa suscrita por el Gobernador o por uno o varios Diputados, a la que se le dará una lectura y se turnará a la Comisión correspondiente.*

***II.*** *Dictamen de la Comisión respectiva al que se le dará una lectura.*

***III.*** *Discusión del dictamen y aprobación del mismo, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes.*

***IV.*** *Publicación del expediente por la prensa.*

***V.*** *Que la adición o reforma sea aprobada por la mayoría absoluta de los ayuntamientos del Estado.*

***VI.*** *Discusión del nuevo dictamen, que se formará con vista del sentir de los ayuntamientos, la Comisión que conoció de la iniciativa, pronunciándose en sentido afirmativo o negativo, según el sentir de la mayoría absoluta de los respectivos ayuntamientos.*

***VII.*** *Declaración del Congreso, con vista y discusión del dictamen de la comisión.*

**SEGUNDO.-** Que en la sesión celebrada el día 13 de abril de 2020, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, a cargo de las y los Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, y la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, al tenor literal siguiente:

**D E C R E T O:**

**ÚNICO.-** Se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 55.** …

De manera excepcional, en caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas especiales lo acuerde el Pleno por mayoría calificada, las sesiones se podrán realizar de forma virtual, por medios electrónicos, para desahogar los asuntos concretos acordados.

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de abril de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso H de la fracción II del artículo 2-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 06 del mes de noviembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 08 de noviembre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso H de la fracción II del artículo 2-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso H de la fracción II del artículo 2-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICION DE MOTIVOS.**

*Como todos sabemos, el Impuesto al Valor Agregado mejor conocido como IVA, es una carga fiscal indirecta que se aplica al costo final de diversos bienes y servicios, cuya obligación de pago es, en principio, de forma igualitaria para todos los mexicanos con algunas excepciones dependiendo de la región donde vivamos o bien el tipo de producto o servicio que se adquiera y utilice.*

*El Impuesto al Valor Agregado, fue implementado por primera vez en México en 1980, bajo el gobierno del entonces presidente José López Portillo[[23]](#footnote-23), sustituyendo al impuesto general sobre ingresos mercantiles que desde 1947 se aplicaba a la compraventa de bienes, así como los impuestos estatales sobre giros comerciales y patentes. El efectuar un impuesto único al costo de los bienes y servicios, contribuyó de manera importante a modernizar el sistema fiscal mexicano, permitiendo una mayor y mejor recaudación de impuestos. [[24]](#footnote-24)*

*Hoy, a casi cuarenta años de su creación, el IVA sigue siendo una de las principales fuentes de recaudación fiscal en México y uno de los pilares sobre el cual descansa el sistema financiero mexicano. No obstante, los tiempos cambian y las necesidades económicas de las y los ciudadanos lo hacen también, sobre todo en aquellos que se encuentran en una situación de desventaja social como lo es el caso de las y los campesinos.*

*En la actualidad el sector agrícola de nuestro país y con ello nuestra soberanía alimentaria atraviesa por un período complejo debido a la disminución del campesinado mexicano, pues mientras que en 1957, más del 50% de la población se dedicaba a actividades agrícolas, en el 2010 se estimaba que era menos del 23%, de acuerdo a datos del INEGI y sigue en decremento esa cifra.*

*Esto ha afectado de manera directa la producción agrícola nacional, al grado de que más del 70% de las unidades de producción rural actualmente es atendido por pequeños productores, o por campesinos que poseen superficies de apenas cinco hectáreas o menos, esto sin contar que gran parte de su producción lo utilizan a satisfacer sus necesidades básicas de consumo.*

*Desafortunadamente se tienen cifras de que un 6% de los productores agrícolas son empresarios que consiguen introducir su producción en el mercado nacional e internacional; lo que obviamente no favorece a las necesidades de consumo que tiene el país, tanto de productos alimentarios como de insumos o materias primas provenientes de la agroindustria.*

*Además, las diferencias tecnológicas, económicas y de estímulos fiscales que los agricultores mexicanos tienen frente a sus pares extranjeros, en especial los de los Estados Unidos de América, hacen muy difíciles las condiciones de competencia con los productos que vienen desde el exterior, provocando aún más que miles de campesinos abandonen su actividad económica para buscar una mejor vida en las ciudades nacionales o incluso en el extranjero.*

Lo anterior, nos obliga a buscar medidas idóneas para fortalecer nuestra producción agrícola y establecer mejores condiciones para las y los campesinos a través de políticas públicas que protejan e impulsen de manera efectiva el campo mexicano y nuestra soberanía alimentaria.

De ahí que la propuesta que hoy traemos a su consideración busque equilibrar las condiciones para el sector campesino del país, a través de una reducción a tasa del 0% del impuesto al valor agregado para suministro de agua para riego, equiparándolo a la tasa que ya se tiene para el suministro de agua para uso doméstico.

*Cabe mencionar que la reducción del IVA como política legislativa para incentivar el crecimiento y el desarrollo económico ya se ha utilizado con anterioridad por la actual administración, como lo ha sido la reducción del IVA al 8% en la franja fronteriza, y recientemente el Senado de la República ha aprobado reducirlo también en los estados del Pacífico Sur (Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas) como incentivo para impulsar la economía.[[25]](#footnote-25)*

*Desde esa perspectiva, creemos conveniente realizar una medida legislativa similar a las antes mencionadas para permitir que el sector agrícola continúe desarrollándose de forma positiva evitando cualquier acción que pueda poner en riesgo el crecimiento de un sector tan importante en nuestro país como lo es la producción agropecuaria.*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso H de la fracción II del artículo 2-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, misma que tiene por objeto *equilibrar las condiciones para el sector campesino del país, a través de una reducción a tasa del 0% del impuesto al valor agregado para suministro de agua para riego, equiparándolo a la tasa que ya se tiene para el suministro de agua para uso doméstico.*

Lo anterior de acuerdo a la promovente, se encuentra motivado en que “ [e*]n la actualidad el sector agrícola de nuestro país (…) atraviesa por un período complejo debido a la disminución del campesinado mexicano, pues mientras que en 1957, más del 50% de la población se dedicaba a actividades agrícolas, en el 2010 se estimaba que era menos del 23%, de acuerdo a datos del INEGI y sigue en decremento esa cifra,* lo cual *“ha afectado de manera directa la producción agrícola nacional, al grado de que más del 70% de las unidades de producción rural actualmente es atendido por pequeños productores, o por campesinos que poseen superficies de apenas cinco hectáreas o menos, esto sin contar que gran parte de su producción lo utilizan a satisfacer sus necesidades básicas de consumo”.*

En este sentido la iniciadora considera necesario promover medidas legislativas tendientes a favorecer a los productores agrícolas.

Quienes formamos parte de esta dictaminadora una vez efectuado el estudio y análisis de la iniciativa consideramos procedente la propuesta legislativa, a efecto de generar mejores condiciones para los productores agrícolas de nuestro país.

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso H de la fracción II del artículo 2-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,para quedar en la forma siguiente:

* **ÚNICO.-** Se reforma el inciso H de la fracción II del artículo 2-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

**Artículo 2o.-A.-** …:

I.- …

II.- …

a).- al g).- …

**h*).-*** *Los de suministro de agua para uso doméstico* ***y para riego agrícola.***

III.- a la IV.- …

...

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Por lo expuesto y fundado, instrúyase a la Oficialía Mayor de este Congreso, para que la presente propuesta de iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burcuaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de abril de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la fracción XI, recorriendo su contenido y se agrega la fracción LXVII al artículo 3; se agrega una porción normativa al artículo 12 bis; y se reforma la fracción XXXII, recorriendo su contenido agregando la fracción XXXIV al artículo 12 bis 6 a la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de noviembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 02 de diciembre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, propuesta de iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la fracción XI, recorriendo su contenido y se agrega la fracción LXVII al artículo 3; se agrega una porción normativa al artículo 12 bis; y se reforma la fracción XXXII, recorriendo su contenido agregando la fracción XXXIV al artículo 12 bis 6 a la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la fracción XI, recorriendo su contenido y se agrega la fracción LXVII al artículo 3; se agrega una porción normativa al artículo 12 bis; y se reforma la fracción XXXII, recorriendo su contenido agregando la fracción XXXIV al artículo 12 bis 6 a la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICION DE MOTIVOS.**

*El Derecho Humano al Agua se ha convertido, desde hace años, en un tema de interés internacional, por ser un derecho que permite la subsistencia de los ecosistemas naturales y de la raza humana. Si bien es cierto que la autoridad debe implementar las acciones necesarias para proteger al vital líquido, se debe considerar, de igual modo, la recuperación y la preservación del Caudal Ecológico.*

*Este se define como un régimen hidrológico para mantener procesos ecológicos (reproducción, migración, alimentación, sucesión de especies, etc.), la conectividad en toda la cuenca y el balance hidrológico a largo plazo, de lo que depende la disponibilidad de agua para todos. Es un instrumento de gestión que permite acordar un manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos, que establece la calidad, cantidad y régimen del flujo de agua requerido para mantener los componentes, funciones, procesos y la resiliencia de los ecosistemas acuáticos que proporcionan bienes y servicios a la sociedad. Acorde con el principio de sustentabilidad hidrológica, el Caudal Ecológico concilia la demanda económica, social y ambiental del agua, reconoce que los bienes y servicios de las cuencas hidrológicas dependen de procesos físicos, biológicos y sociales, y que únicamente conservando el agua que éstos necesitan, se puede garantizar su provisión futura.*

*En la práctica, el Caudal Ecológico, busca reproducir en alguna medida el Régimen Hidrológico Natural (RHN), conservando los patrones estacionales de caudales mínimos y máximos -temporada de sequías y lluvias, respectivamente-, su régimen de crecidas y tasas de cambio -de especial interés para la gestión de infraestructura hidráulica o hidroeléctrica. Estos componentes del régimen determinan la dinámica de los ecosistemas acuáticos y su relación con los ecosistemas terrestres.*

*Con respecto a lo anterior, la recuperación y conservación del Caudal Ecológico trae en sí, beneficios ambientales importantes, ya que de esta manera, se conserva la Biocenosis, que es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado Biotopo, que es un área de condiciones ambientales uniformes que provee el espacio vital a un conjunto de flora y fauna. Esto obliga al Estado a preservar los espacios naturales, independientemente de la infraestructura hidráulica que se construya en sus cercanías.*

*Debido a su importancia, podemos mencionar la norma oficial mexicana número “NMX-AA-159-SCFI-2012, Que Establece el Procedimiento para la Determinación del Caudal Ecológico en Cuencas Hidrológicas”, donde aduce que para mantener el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, así como permitir la protección de los ecosistemas riparios, ecosistemas acuáticos terrestres y costeros, es necesario que se garantice un régimen de caudal ecológico en las corrientes y escurrimientos.*

*Hoy en día, las leyes en materia de recursos hídricos deben adecuarse a la realidad, no solo para garantizar la cantidad, calidad y frecuencia del vital líquido, sino también, restaurar y preservar las fuentes naturales donde fluye el mismo, generando un impacto positivo al medio ambiente y a los ecosistemas subsistentes. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estableceremos las acciones legislativas pertinentes para que exista un óptimo aprovechamiento de los recursos naturales y evitar el deterioro del ecosistema, que es la fuente natural de los recursos hídricos que nos benefician a todos.*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, realizamos el estudio y análisis del contenido y alcances de la iniciativa de lo cual se desprende que, la misma tiene por objeto la actualización de la Ley de Aguas Nacionales, en importantes conceptos como lo son el concepto ecológico, y también el otorgamiento de diversas facultades a los organismos operadores y autoridades en la materia, facultades como la de ejecutar toda acción relacionada a la recuperación y conservación del caudal ecológico, con base en lo establecido en las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia y la de regular la transmisión de los derechos de agua**.**

El iniciador encuentra motivación en que **“**[e*]l Derecho Humano al Agua se ha convertido, desde hace años, en un tema de interés internacional, por ser un derecho que permite la subsistencia de los ecosistemas naturales y de la raza humana. Si bien es cierto que la autoridad debe implementar las acciones necesarias para proteger al vital líquido, se debe considerar, de igual modo, la recuperación y la preservación del Caudal Ecológico”.*

En similar sentido refiere que el régimen *hídrico “[e]s un instrumento de gestión que permite acordar un manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos, que establece la calidad, cantidad y régimen del flujo de agua requerido para mantener los componentes, funciones, procesos y la resiliencia de los ecosistemas acuáticos que proporcionan bienes y servicios a la sociedad.* *Acorde con el principio de sustentabilidad hidrológica, el Caudal Ecológico concilia la demanda económica, social y ambiental del agua, reconoce que los bienes y servicios de las cuencas hidrológicas dependen de procesos físicos, biológicos y sociales, y que únicamente conservando el agua que éstos necesitan, se puede garantizar su provisión futura”.*

En este sentido quienes conformamos esta comisión dictaminadora consideramos que si bien es ciertoen el año 2004 con la publicación de la Ley de Aguas Nacionales, se establecieron nuevas reglas para la interrelación más eficiente del uso del agua en México, su administración aún dista mucho de lograr este objetivo, ya que todos los aspectos de la cadena administrativa para el otorgamiento de este servicio sufren, en mayor o menor medida algún tipo de carencia, desde su extracción hasta su consumo final en las distintas áreas en que es utilizada, como consumo humano, actividades de producción agropecuarias, industriales, etcétera y en todas ellas existen múltiples problemas que hoy en día han hecho del agua una de las principales preocupaciones mundiales. La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha propuesto algunas de las principales directrices a seguir, muchas de las cuales han sido acordadas en encuentros internacionales, como el Foro Mundial del Agua, realizado en México en el año 2006.

Los postulados relativos al agua y de otras inquietudes de relevancia mundial, que tienen el mismo objetivo de procurar una vida mejor para las generaciones futuras, fueron recogidos en el documento denominado: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en el que la propia organización a manera de decálogo describe los retos a alcanzar en el año 2015, en este marco, el problema medioambiental se describe en el objetivo 7, y específicamente el del agua, en la meta 10.

La mayoría de los diagnósticos contenidos en este tipo de documentos suelen coincidir, sin importar su origen institucional, es así como estudios de organismos oficiales, como de investigadores universitarios o de la sociedad civil concluyen que la disponibilidad del agua se encuentra amenazada para las futuras generaciones en diversas regiones del mundo, y nuestro país, aunque en menor medida, no es la excepción. En ciertas zonas del territorio nacional, la gravedad de este problema es ya una dificultad presente, que hace apremiante la intervención de todos los sectores involucrados para tratar de revertir esa realidad.

El fenómeno del cambio climático, la contaminación del agua, la desertificación de bosques y selvas que rompen el ecosistema hidráulico, el uso irracional del líquido en las labores de producción, la concentración urbana y el desorden territorial de la misma que sobreexplota mantos acuíferos, así como la falta de cultura transversal entre el diseño normativo y la sociedad, son referentes exógenos de dicha problemática.

Lo anterior y la emisión de normativa en la materia como es el caso de la norma oficial mexicana número “NMX-AA-159-SCFI-2012 y otras, hacen indispensable la adecuación y modernización de las disposiciones legales, por lo que los integrantes de esta comisión estimamos que la propuesta legislativa es conducente.

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una propuesta de iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la fracción XI, recorriendo su contenido y se agrega la fracción LXVII al artículo 3; se agrega una porción normativa al artículo 12 bis; y se reforma la fracción XXXII, recorriendo su contenido agregando la fracción XXXIV al artículo 12 bis 6 a la Ley de Aguas Nacionales, **para quedar en la forma siguiente:**

**ÚNICO.-** Se reforma la fracción XI, recorriendo su contenido y se agrega la fracción lXVII al artículo 3; se agrega una porción normativa al artículo 12 bis; y se reforma la fracción XXXII, recorriendo su contenido agregando la fracción XXXIV al artículo 12 bis 6 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 3.** …

I a la X…

**XI. “Caudal Ecológico”: Es el caudal mínimo que debe mantenerse de un curso de agua en la construcción de cualquier infraestructura hidráulica, sin alterar las condiciones naturales del biocenosis y biotopo del mismo, preservando los valores ecológicos en el cauce del rio, como los hábitats naturales de flora y fauna, las funciones ambientales como la disolución de contaminantes, amortiguación de los extremos climáticos e hidrológicos y la conservación del paisaje.**

**XII**.

…

…

**LXVII.**

**….**

**ARTÍCULO 12 BIS.** En el ámbito de las cuencas hidrológicas, regiones hidrológicas y regiones hidrológico - administrativas, el ejercicio de la Autoridad en la materia, ***la gestión integrada de los recursos hídricos, la recuperación y conservación del caudal ecológico,*** incluyendo la administración de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, "la Comisión" las realizará a través de Organismos de Cuenca de índole gubernamental y se apoyará en Consejos de Cuenca de integración mixta en términos de Ley, excepto en los casos previstos en la Fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley.

…

**ARTÍCULO 12 BIS 6.** …

del I al XXXI …

**XXXII. Ejecutar toda acción relacionada a la recuperación y conservación del caudal ecológico, con base en lo establecido en las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia.**

**XXXIII. Regular la transmisión de los derechos de agua, y**

**XXXIV. Realizar las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias.**

**….**

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO. -** Se derogarán todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente decreto.

**T R A N S I T O R I OS**

**PRIMERO.-** Por lo expuesto y fundado, instrúyase a la Oficialía Mayor de este Congreso, para que la presente propuesta de iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de abril de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 90 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, presentada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de noviembre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 02 de diciembre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 90 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, presentada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 90 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, presentada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*El tema que vamos a exponer es recurrente en nuestra entidad, especialmente en los municipios considerados de menor población. Aunque, también se da el caso en municipios de mayor tamaño y densidad poblacional.*

*Nos referimos al incumplimiento de parte de los ayuntamientos para citar al mínimo de sesiones a celebrarse por mes, que es de dos, de acuerdo al Código Municipal del Estado de Coahuila, que en el artículo 90, establece:*

*… En las sesiones ordinarias el ayuntamiento tratará los asuntos de su competencia y de su funcionamiento y celebrará el número de ellas que señale su reglamento interior pero no podrán ser menos de dos sesiones ordinarias públicas al mes.*

*Pero, ¿cuál es la importancia de que exista un mínimo de sesiones de cabildo al mes?*

*La respuesta es tan simple como amplia: En primer lugar, las sesiones de cabildo son el medio por el cual el ayuntamiento, de manera colegiada, aprueba o desaprueba, según la votación para cada caso, los actos que tienen relación con la vida institucional del municipio y con sus gobernados. Entre otros y solo por ilustrar:*

*I.- Contratos de obra pública.*

*II.- Planeación Municipal.*

*III.- Asignaciones o modificaciones presupuestales.*

*IV.- Entrega de concesiones.*

*V.- Nombramientos o remociones de servidores públicos, cuando se trata de los funcionarios que deben pasar por cabildo para los efectos señalados.*

*VI.- Aprobación de legislación municipal, es decir, reglamentos.*

*VII.- Asuntos relacionados con la concesión de bienes y servicios.*

*VIII.- Modificaciones a las leyes de ingresos.*

*IX.- Aplicación de beneficios y exenciones fiscales.*

*X.- Regulación del patrimonio inmueble municipal.*

*XI.- Regulación de la tenencia de la tierra.*

*XII.- Afectaciones de inmuebles.*

*XIII.- Contratación de créditos.*

*XIV.- Autorización para que el acalde celebre a nombre del municipio convenios y contratos de todo tipo.*

*XV.- Entrega o revocación de concesiones de transporte.*

*XVI.- Creación o modificación de programas sociales.*

*XVII.- Acuerdos sobre los organismos descentralizados municipales.*

*XVIII.- Aprobación del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos.*

*XIX.- Acuerdos sobre protocolos y ceremonias solemnes.*

*XX.- Acuerdos relacionados con los servicios que presta el municipio.*

*XXI.- Aprobación de obras públicas no contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal.*

*Etcétera.*

*Este tipo de asuntos, y muchos más que no citamos para abreviar, forman parte de la agenda que debe ser tratada por el cabildo no solo cada mes, sino cada semana. No es posible ni creíble que durante un mes, dos o tres, no exista ningún tema que tratar en cabildo.*

*No celebrar las reuniones mínimas que establece el Código Municipal genera tres cosas:*

1. *Que el municipio opere con ilegalidad al no atender ni resolver conforme a derecho los asuntos que ameritan su atención y resolución.*
2. *Que se incurra en arbitrariedades en perjuicio de los gobernados y de terceras personas, por no resolver los temas urgentes o que no admiten demora.*
3. *Vació de derecho, al dejar a la discrecionalidad ilegal de las autoridades la toma de decisiones que debieron acordarse en cabildo, y no de manera individual por parte del alcalde o sus directores.*

*En los años recientes, de hecho durante las últimas tres legislaturas, el Diario de los Debates da cuenta de diversas proposiciones con punto de acuerdo que se han presentado en esta Tribuna, y se han aprobado de forma unánime, exhortando a los municipios del Estado a cumplir con los dispuesto en el Código Municipal en materia de sesiones mínimas a celebrar.*

*Sin embargo, el fenómeno se sigue verificando en diversos municipios de la entidad, de acuerdo a los reportes que nos llegan de regidores, síndicos y ciudadanos. Una verdad que no podemos esconder ni soslayar.*

*Una pregunta que empieza a ser reiterada de parte de los afectados es la siguiente: ¿Y qué pasa si no citan para cumplir con el mínimo de sesiones? ¿A quién acudimos, a quien se castiga?*

*Sin duda, en los términos de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas debe existir responsabilidad objetiva para los infractores, que pueden ser el alcalde o los mismos regidores y síndicos, ya que de acuerdo al Código Municipal del Estado, uno y otros son los que pueden citar a sesiones, el primero de forma unilateral, y los segundos ejerciendo la mayoría que establece dicho ordenamiento.*

*Consideramos necesario robustecer este apartado de nuestro Código Municipal, para vincular la omisión de citar a las sesiones mínimas de cabildo con el régimen de responsabilidades vigente.*

**TERCERO.-** Quienes integramos la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, realizamos el estudio y análisis del contenido y alcances de la iniciativa y de las consideraciones en las que se motiva, de lo cual se desprende que tiene por objeto el establecer en el artículo 90 del Código Municipal relativo al contenido y periodicidad en la que habrán de celebrarse las sesiones ordinarias el ayuntamiento para fijar que *“[l]a inobservancia del mínimo de sesiones por mes será sancionada en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.*

Ello encuentra motivación en una problemática recurrente en los ayuntamientos del Estado, consistente en que las sesiones del ayuntamiento no se celebran con la periodicidad establecida por la ley rectora en materia municipal de dos sesiones ordinarias al mes.

En este sentido la iniciadora refiere que *“[e]n los años recientes, de hecho durante las últimas tres legislaturas, el Diario de los Debates da cuenta de diversas proposiciones con punto de acuerdo que se han presentado en esta Tribuna, y se han aprobado de forma unánime, exhortando a los municipios del Estado a cumplir con los dispuesto en el Código Municipal en materia de sesiones mínimas a celebrar”.*

Lo que trae consecuencias negativas como:

* *Que el municipio opere con ilegalidad al no atender ni resolver conforme a derecho los asuntos que ameritan su atención y resolución.*
* *Que se incurra en arbitrariedades en perjuicio de los gobernados y de terceras personas, por no resolver los temas urgentes o que no admiten demora.*
* *Vacío de derecho, al dejar a la discrecionalidad ilegal de las autoridades la toma de decisiones que debieron acordarse en cabildo, y no de manera individual por parte del alcalde o sus directores.*

En este orden de ideas quienes dictaminamos coincidimos en la necesidad de erradicar la problemática identificada por esta legislatura que efectivamente ha emitido distintos exhortos con la finalidad de que los cabildos se conduzcan apegados a derecho, y celebran las sesiones en tiempo y forma.

Del mismo modo estimamos al igual que la promovente, oportuno remitir a la Ley General de Responsabilidades, puesto que es el ordenamiento que a partir de la reforma en materia de combate a la corrupción contiene el catálogo de faltas administrativas y sus sanciones, sin embargo coincidimos en la necesidad de fijar los casos de excepción a esta regla, proponiendo se adicione la porción normativa siguiente: “excepto en aquellos casos en que las sesiones no se celebren por causa justificada”.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se adiciona un segundo párrafo al artículo 90 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:

ARTÍCULO 90. …

La inobservancia del mínimo de sesiones por mes será sancionada en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, excepto en aquellos casos en que las sesiones no se celebren por causa justificada.

**TRANSITORIO**

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de abril de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso I, a la fracción IX, del artículo 12 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 09 del mes de octubre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 11 de octubre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso I, a la fracción IX, del artículo 12 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso I, a la fracción IX, del artículo 12 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*Desde sus inicios la protección civil surge del apoyo gubernamental, con la finalidad de ayudar a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables para hacer frente a los desastres naturales, protegiendo la integridad física de la población, su patrimonio y el medio ambiente.*

*Las acciones que se llevan a cabo para cumplir con el objetivo de salvaguardad la vida de la población ante una alerta o una situación de emergencia, versa sobre las siguientes etapas:*

*1.- Prevención, a largo, mediano y a corto plazo;*

*2.- Declaración de emergencia, y,*

*3.- La reconstrucción, una vez pasada la situación de emergencia.*

*Por lo que respecta a la* ***Etapa de prevención****, se subdivide en las siguientes fases:*

* *Fase de información: las actividades que aquí se desarrollan son para informar y educar a la población, para que conozcan sobre los desastres, sus consecuencias y los daños que se podrían evitar si se cumple con la prevención que indican las autoridades.*
* *Fase de preparación: aquí se ponen en marcha los simulacros, que son acciones que se llevan a cabo imitando un suceso real para tomar las medidas necesaria de seguridad en caso de ocurra realmente.*
* *Fase de alerta: es una etapa constante, en la que se vigila cualquier alerta de desastre, listo para informar al pueblo y recurrir a auxilio.*

*En cuanto a la* ***Etapa de Emergencia****, que es específicamente durante el desastre, en esta etapa se llevan a cabo los medios y las actividades preventivas aprendidas durante el simulacro, se ha conocido como la fase de supervivencia, que tendrá éxito si la población ha llevado a cabo los simulacros, ya que sabrán salir cuidadosamente sin dañar a los demás, pudiendo ayudar con ello a las autoridades como coadyuvantes en el desastre.*

*Por último en la* ***Etapa de Reconstrucción,*** *que esta se puede desarrollar en partes, como lo son el restablecimiento de los servicios básicos como primera premisa a atender, en la que se abaste de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, recolección y tratamiento de las aguas servidas, la rehabilitación de la infraestructura existente antes de la ocurrencia del daño, o mediante sistemas provisorios, que seguirán operando durante la fase siguiente de reconstrucción, la parte medular de la reconstrucción queda a cargo de otra autoridad.*

*Estas etapas son importantes recordar, para entender lo fundamental que son las acciones de prevención, inmersas en la etapa de prevención (valga el pleonasmo), que evitan que un siniestro cause daños mayores, ya que una vez que sucede, sus actores saben cómo actuar, teniendo como consecuencia efectos menos graves.*

***Etapa de prevención*** *que no se cumplió y que trajo resultados fatales, en el caso de “Andresito”, el pequeño de 5 años, quien falleciera en el mes de julio, en la piscina donde asistía a un campamento de verano, en nuestra ciudad.*

*Está situación nos demuestran que resulta necesario reforzar los mecanismos en particular para la prevención, autorización y supervisión de actividades, cursos o campamentos de verano que realizan escuelas, club o particulares, que en algunos casos llevan a cabo actividades acuáticas o terrestres que puedan incluir un riesgo tanto para sus colaboradores, como para las niñas y los niños que disfrutan de estas actividades.*

*Nuestra iniciativa de reforma tiene como objetivo, que los cursos o campamentos de verano, cuenten con una autorización por la autoridades competentes y que sean inspeccionadas independientemente de que cuenten con el dictamen de seguridad y operación de un giro en particular, expedido por la Autoridad competente, con el objetivo de que estas actividades extraordinarias prevean cualquier tipo de situaciones que pongan en riesgo la salud de sus participantes.*

*¿Por qué es de relevancia trascendental contar con la autorización por parte de las autoridades de protección civil?*

*Porque con ella, se conoce si la infraestructura es la más adecuada, se identifican y evalúan los riesgos, se revisa que se cuente el equipo mínimo indispensable para atender la situación de emergencia, hacer la planeación, señalización y evaluación de dichos riesgos y de las áreas de seguridad, se les hace colocar señalamientos de rutas de evacuación, de salidas de emergencias y se elaboran anotaciones diversas que apoyen en una planeación de evacuación y ejercicio de simulacros.*

*Por lo que con esta reforma se incrementa la cultura de la protección civil basada en la prevención, previsión y autoprotección que crea comunidades resilientes y capaces de recuperarse de manera eficiente ante los embates de catástrofes naturales y otros riesgos que por su naturaleza se impliquen en alguna actividad.*

*En otro orden de ideas, la reforma planteada ante este Pleno, va más allá de una autorización, que como venimos comentando, es fundamental para evitar o reducir al mínimo los riesgos en el desarrollo de estas actividades, cursos o campamentos de verano.*

*Para contextualizar el alcance de la misma, hay que mencionar que estos cursos o campamentos de verano, son por su naturaleza, actividades dirigidas a las niñas y los niños, donde tienen la oportunidad de convivir con niñas y niños de sus edad, en la realización de actividades lúdicas que son de su agrado, aprenden a convivir, compartir, respetarse y otras habilidades sociales, desarrollan competencias y aptitudes relacionadas con actividades formativas-físicas, intelectuales, culturales- en un contexto relajado y amigable.*

*Por todos estos beneficios que produce llevar a cabo dichas actividades, es vital que se proteja en todos los sentidos a los infantes, por eso es que priorizamos la protección al interés superior de los menores de edad con esta iniciativa, considerándolo primordial para la toma de decisiones donde va involucrada la integridad física de las niñas y los niños coahuilenses.*

*Justificando la presente Iniciativa mencionamos los criterios de la Suprema Corta de Justicia de la Nación, con el firme objetivo de dar sustento a lo que estamos proponiendo como Grupo Parlamentario, los cuales se transcriben a continuación:*

***Tesis: P/J.7/2016 (10a.) Pleno***

***Gaceta del Semanario Judicial de la Federación: Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I***

***Décima Época: Pag. 10***

***2012592 1 de 1: Jurisprudencia (Constitucional).***

***INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES.***

*El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.*

*Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en contra de la forma en que se abordan, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, con reservas en el tratamiento, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.*

*El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 7/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.*

***Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.) Segunda Sala***

***Semanario Judicial de la Federación: Publicación: viernes 16 de agosto de 2019 10:24 h***

***Décima Época: Ubicada en publicación semanal.***

***2020401 3 de 568***

***Reiteración (Jurisprudencia Constitucional)***

***DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE.***

*El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.****SEGUNDA SALA***

*Amparo en revisión 203/2016. Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.*

*Amparo en revisión 800/2017. Martha Patricia Martínez Macías y otra. 29 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.*

*Amparo directo 16/2018. Guadalupe García Olguín y otros. 10 de octubre de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones José Fernando Franco González Salas y con reserva de criterio Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.*

*Amparo directo 22/2016. Francisco López Espinoza, en su carácter de tutor legal del menor Francisco David Alonso López. 5 de diciembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos en relación con el criterio contenido en esta tesis; votó en contra de algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipeliski Nischli.*

*Amparo en revisión 815/2018. Julia Baltazar Granados, en representación del menor Fabio Ángel Baca Baltazar. 22 de mayo de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Disidente y Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.*

*Tesis de jurisprudencia 113/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de julio de dos mil diecinueve.*

*Puesto que los criterios antes señalados, nos reafirman la importancia de la protección y en su caso la prevención de situaciones que pongan en estado de vulnerabilidad la integridad de las niñas y los niños coahuilenses, concluimos que nuestra iniciativa, motivada por la pérdida de “Andresito”, llegará a buen término, aprendiendo con esto, la desgarradora lección que nos dejó dicho deceso.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en la que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto regular los cursos o campamentos de verano, con el fin de que cuenten con la debida autorización y con las medidas necesarias de seguridad, garantizando con ello la adecuada protección del interés superior de la niñez.

La protección civil es parte fundamental de una política de prevención y seguridad dentro de la población, definiéndose como un servicio público encaminado a evitar, reducir o corregir daños causados a las personas, sus bienes y el medio ambiente que los rodea, a causa de acontecimientos de riesgo o catástrofe, en la cual pueda peligrar la vida y la seguridad de los ciudadanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla la protección civil como un derecho humano visto desde un ámbito social, puesto que su finalidad es la de proteger los derechos y los intereses de grupos sociales determinados.

Por su parte, la Ley General de Protección Civil en su artículo 2, fracción XLIII, define la protección civil como *“la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente”.*

La Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente publicada en fecha 14 de mayo de 2010, es un instrumento que a pesar de que se ha ido reformando conforme a las necesidades de la entidad, contiene algunos aspectos que requieren de su actualización.

Es por ello, que el promovente de la presente propuesta de reforma, enfocado en la protección y cuidado de los menores, manifiesta en su exposición de motivos que “*resulta necesario reforzar los mecanismos en particular para la prevención, autorización y supervisión de actividades, cursos o campamentos de verano que realizan escuelas, club o particulares, que en algunos casos llevan a cabo actividades acuáticas o terrestres que puedan incluir un riesgo tanto para sus colaboradores, como para las niñas y los niños que disfrutan de estas actividades*”.

En base a lo anteriormente expuesto, el presente proyecto toma como principal herramienta de acción la importancia de un eficiente sistema de prevención y una adecuada coordinación para la protección de los menores, mediante la adición de un inciso l) a la fracción IX del artículo 12 de la Ley de Protección Civil del Estado, en la que se obliga a la autoridad competente de inspeccionar que las instalaciones donde se lleven a cabo campamentos, cursos o actividades de verano, cuenten con la autorización debida y las medidas de seguridad adecuadas “*con el objetivo de que estas actividades extraordinarias prevean cualquier tipo de situaciones que pongan en riesgo la salud de sus participantes”*.

En este contexto, quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos constitucionales y Justicia, coincidimos con el iniciador en la necesidad imprescindible de llevar a cabo acciones de prevención, que permitan ir fortaleciendo con mayores recursos humanos la reducción de la vulnerabilidad ante la presencia de situaciones de riesgo; y concordantes en la importancia de enfocarnos en la protección del interés superior de la niñez, es que reafirmamos el valor y el compromiso de salvaguardar la integridad de los menores de edad en nuestro Estado.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona el inciso l), a la fracción IX, del artículo 12 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 12. ….**

**I.** al **VIII. …**

**IX. ...**

1. al **k)…**

l) Instalaciones donde se desarrollan de manera temporal, las actividades, cursos o campamentos de verano, independientemente que dichas instalaciones cuenten con el dictamen de seguridad y operación de otro giro.

**X.** al **XXXVII. …**

**TRANSITORIOS**

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado; y

**Segundo.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de abril de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea el artículo 314 Bis del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 del mes de octubre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el 28 de octubre del año 2019, se turnó a esta Comisión un de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea el artículo 314 Bis del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea el artículo 314 Bis del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***EXPOSICIÓN DE MOTIVOS***

*La atención institucional del parto, conlleva en muchas ocasiones la violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres lo que Se manifiesta a través de regaños, burlas, ironías, insultos, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, omisión en la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, así como el manejo del dolor durante el parto, como castigo.*

*De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI), 38.1 % del total de nacimientos ocurren mediante cesáreas.*

*La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 refiere que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial (después de China, Brasil y Estados Unidos) en el uso de la práctica de cesáreas sin indicación médica.*

*Por otra parte, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en 2016 realizó un estudio que muestra que 29 de cada cien mujeres reportan algún tipo de abuso durante la atención del parto, 19 de cada cien refirieron algún tipo de abuso verbal, con frases intimidatorias y que limitan el derecho de las mujeres a expresar sus emociones y proceso natural de dolor que conlleva el trabajo de parto; pero sobre todo cuando analizaron el contexto en el cual se expresaron dichos comentarios, afirmaron se configura claramente el escenario de abuso al cual someten a las mujeres en la atención del Parto.*

*Retomo un testimonio de dicho estudio, en el cual las pacientes señalaron que el personal de salud les decía:*

*"... no llore, aguántese, acuérdese como lo estaba haciendo, ahí silo gozaba.....*

*En otro testimonio, el personal médico refirió:*

*..... por qué no lloró cuando abrió las piernas'"*

*La OMS afirma que en promedio las maternidades deberían tener entre un 10 Y un 15% de cesáreas; en este estudio de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a 50 % de las mujeres encuestadas se les realizó una cesárea.*

*Por ello, se ha buscado visibilizar el concepto de violencia obstétrica como un tipo de violencia que se genera en los servicios de salud públicos o privados que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto.*

*Esta violencia puede expresarse en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, en tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte del personal de salud, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.*

*La violencia obstétrica se genera en los servicios de salud públicos y privados y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. Aunado a que en muchas ocasiones la atención deficiente en la prestación de los servicios se debe a problemas estructurales en los sistemas de salud, como infraestructura insuficiente y la falta de capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y locales, para atender partos y urgencias obstétricas, así como los procesos de enseñanza para el personal médico que favorecen una visión autoritaria que fomenta el maltrato y en la que las opiniones de las mujeres no son tomadas en cuenta durante los procesos obstétricos.*

*La violencia obstétrica según expertos se presenta en dos modalidades:*

*1) Por un lado la física, la cual se configura cuando se realizan a la mujer prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico.*

*2) El trato deshumanizado, grosero, discriminatorio, humillante, cuando la mujer requiere atención médica, o en el transcurso de una práctica obstétrica.*

*En Coahuila, existen algunos hospitales y clínicas que no cuentan con recursos humanos y materiales necesarios para que el personal de salud efectúe su trabajo. La falta de estos recursos técnicos y humanos constituye un obstáculo para la adecuada atención médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, con lo cual el Estado estaría incumpliendo con la obligación de poner a disposición de toda la población los medios necesarios a fin de que pueda ejercer su derecho a la salud, lo que implica la existencia de responsabilidad institucional.*

*La ausencia de una atención gineco-obstétrica oportuna, debido a la escasez de médicos de base en turno para atender las emergencias, cubrir guardias, o suplir al personal; constituye también responsabilidad institucional.*

*La carencia de personal médico de base (obstetras), provoca que algunos tengan que doblar turno, lo que puede ocasionar el cansancio del personal, que puede impactar en la atención médica, del mismo modo, da lugar a que médicos residentes, efectúen sus labores sin la supervisión de un superior, situación que puede favorecer a los actos constitutivos de violencia obstétrica.*

*La Organización de las Naciones Unidas ha recomendado a México incluir el concepto de violencia obstétrica en las definiciones de violencia en la Ley General y las leyes locales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Afirman que es mediante el reconocimiento explícito de su práctica, que podrán encontrarse los mecanismos para su atención y erradicación.*

*Se reconoce la labor de los médicos de nuestra entidad y sus grandes aportaciones. No se pretende criminal izar la labor médica; sólo sancionar y erradicar conductas del personal de salud que violen los derechos humanos y reproductivos de las mujeres en la atención del embarazo, parto y puerperio.*

*Por lo anterior, y considerando que el articulo 4' de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en Su Recomendación General # 24, recalcó que: "es obligación de los Estados garantizar el derecho de la mujer a servicios de maternidad gratuitos y sin riesgos, a servicios obstétricos de emergencia, y deben asignarse a esos servicios el máximo de recursos disponibles; Se realiza esta propuesta.*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, realizamos el análisis del contenido y alcance de la iniciativa, de lo cual verificamos que la misma busca la finalidad de tipificar como delito en el Código Penal, la violencia obstétrica.

Así se propone la adición del artículo 314 bis al Código Penal del Estado, en el sentido siguiente:

*1.- COMETE EL DELITO DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA, EL PERSONAL DE SALUD, QUE CON SU CONDUCTA, ACCIÓN U OMISIÓN, EJERZA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, Y QUE AFECTE A LAS MUJERES DURANTE LOS PROCESOS DE EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO, EXPRESADA EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:*

*I. EFECTÚE PRÁCTICAS QUE NO CUENTEN CON EL CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO, EXPRESO E INFORMADO DE LA MUJER.*

*II. OMITA OTORGAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ EN EL EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO OEN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS.*

*III. OBSTACULICE SIN CAUSA MÉDICA JUSTIFICADA EL APEGO PRECOZ DEL NIÑO O NIÑA CON SU MADRE, NEGÁNDOLE LA POSIBILIDAD DE CARGARLO Y AMAMANTARLO INMEDIATAMENTE DESPUÉS OT NACER.*

*IV. ALTERE EL PROCESO NATURAL DE PARTO DE BAJO RIESGO, MEDIANTE EL ABUSO DE MEDICACIÓN, USO DE TÉCNICAS DE ACELERACIÓN, SIN OBTENER EL CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO, EXPRESO EINFORMADO DE LA MUJER; Y*

*V. PRACTIQUE EL PARTO VÍA CESÁREA CUANDO EXISTAN CONDICIONES PARA EL PARTO NATURAL SIN OBTENER EL CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO, EXPRESO E INFORMADO DE LA MUJER.*

*SE SANCIONARA CON PRISION DE DOS A SEIS AÑOS Y MULTA DE DIEZ A CINCUENTA DIAS MULTA AL PERSONAL DE SALUD QUE COMETA EL DELITO DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA.*

En este orden de ideas, es preciso señalar que este tema ha sido estudiado previamente por esta dictaminadora, resultando de ello la emisión de un dictamen de fecha 12 de marzo de 2019, en el que se resolvía la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza; el escrito de integrantes del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Saltillo A.C., mediante el cual realizan un análisis y solicitan sean escuchados en relación a la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en lo referente al Capítulo Cuarto denominado violencia obstétrica; así como el escrito del C. Francisco Cué Martínez, de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. mediante el cual envía consideraciones a la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza suscrita por el Ejecutivo del Estado.

Así, estimamos adecuado hacer alusión a las consideraciones que en los referidos trabajos legislativos formuló la presente comisión dictaminadora dado que el tema que nos ocupa es el mismo.

*Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, realizamos el estudio y análisis de la iniciativa, observando que la misma persigue dos finalidades, la primera de ellas es la de tipificar la violencia obstétrica como delito en el Código Penal y la segunda, aumentar las penas previstas para los delitos de carácter sexual. En este sentido se propone aumentar un año la pena de prisión mínima y máxima de los delitos de privación de la libertad con fines sexuales; violación; violación a cónyuge y a otras personas con vínculos similares; violación equiparada; violación impropia por instrumento o elemento distinto al natural; abuso sexual; abuso sexual de persona incapaz; violación equiparada en persona menor de quince años; violación impropia en persona menor de quince años; abuso sexual en persona menor de quince años; procuración sexual a menores de quince años; omisión de denuncia respecto a los delitos de violación, equiparado a la violación, violación impropia o abuso sexual, contra personas menores de edad; estupro; acoso sexual y hostigamiento sexual.*

*La propuesta se hace desde una perspectiva de derechos humanos, tomando en consideración instrumentos universales y regionales de derechos humanos y legislación nacional y estatal, como es el caso de las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en el mismo orden de ideas, es importante destacar que la propuesta nace desde el seno de las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo que se conformó a raíz de la Solicitud AVGM/06/2017 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Municipio de Torreón.*

*Para quienes dictaminamos resulta claro, de acuerdo a lo consignado en la exposición de motivos, que la violencia contra las mujeres es una problemática real que aqueja a las mujeres en nuestro país, y que la misma ya ha sido identificada y abordada en distintos ordenamientos legales, lo cual sin duda alguna, es un paso importante a efecto de hacer visible una problemática que ha sido invisibilizada a lo largo de los años.*

*También resulta más que evidente, en el nuevo marco normativo que rige en nuestro país en materia de derechos humanos, que el Estado Mexicano ha contraído diversas obligaciones con el propósito de garantizar la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas, lo que como legisladores se traduce en promover medidas legislativas adecuadas a efecto de darles cumplimiento.*

*El tema de violencia obstétrica, no ha sido la excepción, encontramos por ejemplo, además de los tratados internacionales que se abordan en la exposición de motivos, que en octubre de 2013 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluó a México por segunda ocasión a través del mecanismo de Examen Periódico Universal. Por primera vez, este órgano internacional emitió recomendaciones en materia de derechos reproductivos al país, las cuales fueron aceptadas por el Estado en marzo de 2014.*

*Al respecto resulta conveniente destacar, que Uruguay emitió las siguientes recomendaciones: Intensificar los esfuerzos para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, información y educación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, especialmente para adolescentes, así como aumentar los esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna, básicamente mediante la adopción de una estrategia de maternidad segura en la que se da prioridad al acceso a servicios de calidad de atención prenatal, postnatal y obstétrica.*

*Así para quienes dictaminamos es de vital importancia, efectuar las medidas precisas e idóneas para mitigar este problema.*

*En este orden lógico, cobró especial relevancia, el hecho de que a esta comisión dictaminadora se le hicieron llegar dos documentos, el primero de ellos, suscrito por médicos miembros del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Saltillo. De este escrito entre otras cosas resalta que, de acuerdo con el parecer de los médicos “la propuesta legislativa que se propone, no encuentra sustento legislativo ni jurídico,” además les parece “infundada la clasificación jurídica que se pretende adecuar al ordenamiento penal, ya que de acuerdo a la máxima autoridad en este tema: la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su documento “Prevención y erradicación de la falta de respeto y maltrato durante la atención del parto en los centros de salud” (2014), las estrategias necesarias para impedir violentar a las mujeres gestantes consisten en:*

*1.- Mayor respaldo de los gobiernos en relación con las investigaciones y acciones sobre el maltrato y la falta de respeto.*

*2.- Iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de la atención de la salud materna.*

*3.- Realzar el derecho de la mujer a recibir una atención de la salud digna y respetuosa en el embarazo y parto, mediante concientización y políticas que realcen la importancia de la atención materna respetuosa.*

*4.- Generar datos relacionados con la atención respetuosa e irrespetuosa, garantizando que los profesionales de la salud en todos los niveles cuenten con respaldo y capacitación para asegurar que las mujeres embarazadas sean tratadas con comprensión y dignidad.*

*5.- Involucrar a las partes interesadas, incluidas las mujeres, en los esfuerzos para mejorar la calidad de la atención, ejerciendo las medidas pertinentes a nivel local.*

*Por lo que hace al derecho de la mujer de tener un parto vaginal el escrito refiere que “contamos con el antecedente a nivel nacional del “Lineamiento técnico para la cesárea segura” publicado por la Secretaría de Salud (2013), en el que se puntualiza que la disminución de este procedimiento puede lograrse luego de resolver las siguientes necesidades:*

*1.- Educar a la mujer y familiares para que el inicio del trabajo de parto sea en forma espontánea y deje de concebirse al parto vaginal como un proceso que genera dolor. Considerar que tiene un progreso lento, implicando posibles riesgos y complicaciones no previsibles tanto para la paciente en trabajo de parto, como el recién nacido.*

*2.- Analizar las políticas de las compañías aseguradores que en muchos casos sólo cubren los gastos de operación cesárea y no de parto.*

*3.- Mejorar la vigilancia y valoración del trabajo de parto.*

*4.- Capacitar al personal de salud.*

*Por lo que este grupo de médicos concluye que “criminalizar el acto médico no pareciera ser la solución más factible para este grave problema que enfrentamos. Ningún organismo recomienda como efectiva la estrategia de volver delito penal al quehacer médico”.*

*El segundo de los escritos al que nos hemos referido con anterioridad, se hizo llegar a esta comisión dictaminadora por la asociación denominada Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). En dicho documento se realizan una serie de consideraciones a la iniciativa, y al mismo tiempo se hacen recomendaciones a este órgano legislativo.*

*Así, el GIRE, entre otras cosas señala que celebran que “el Gobernador reconozca la violencia obstétrica como una realidad que atenta contra los derechos humanos de las mujeres en el estado de Coahuila, así como la obligación que tiene el Estado en adoptar las medidas necesarias para combatirla. Lamentablemente, el Ejecutivo le ha propuesto al Congreso Estatal una* ***medida desproporcionada e ineficaz para tratar de corregir la situación: tipificar la violencia obstétrica en el Código Penal local****.*

*Por el contrario el GIRE sostiene que “tanto la doctrina como la experiencia han demostrado que la penalización de la violencia obstétrica es una medida ineficaz, excesiva y hasta contraproducente por los siguientes motivos:*

* ***Límites del Derecho Penal.*** *La función penal del Estado es la que implica las afectaciones más gravosas y trascendentales sobre las personas en quienes recae la sanción. Existe un vasto desarrollo doctrinal que advierte la necesidad de respetar los principios y limitaciones propios del Derecho Penal; recurrir de manera desproporcionada a éste para el tratamiento de problemas sociales de la más diversa índole y origen no es, en sí mismo, compatible con un Estado democrático de Derecho.*
* ***(…)***
* *Tipificar: salida fácil sin cambios reales. Se ha demostrado que la incidencia de la violencia obstétrica guarda una estrecha relación con un contexto específico caracterizado por cuestiones que escapan por completo a la misión del Derecho Penal, particularmente en un país como el nuestro, desbordado por la demanda y en el que la inversión en salud es baja.*
* *La sanción individual que el Derecho Penal plantea, en ningún modo soluciona las fallas estructurales que propician la existencia y permanencia de la violencia obstétrica, las cuales ocasionan que el personal médico deba desempeñar su trabajo en condiciones que merman su capacidad y la calidad de la atención que brindan.*
* *La tipificación de la violencia obstétrica en nada colabora a transformar, por ejemplo, las actitudes, prejuicios y rutinas dañinas que forman parte de la dinámica misma en que se forma y educa al personal médico en las facultades; o la falta de infraestructura, personal e insumos para ofrecer una atención adecuada a cada usuaria de los servicios de salud. De hecho, penalizar podría incluso agregar más cuestiones problemáticas antes que contribuir a proteger a las mujeres de este tipo de violencia.*
* *No está justificado recurrir al Derecho Penal cuando el Estado dispone de toda una variedad de medidas menos lesivas y que son capaces de abordar el conflicto de manera eficaz, atendiendo las causas que lo originan.*
* ***Las conductas más lesivas ya están contempladas en el Código Penal.*** *Existen conductas de la práctica médica que pueden configurarse efectivamente como delitos.*
* *En el caso del Código Penal de Coahuila de Zaragoza vigente. El cual contempla sanciones de prisión y multa para:*

1. *Esterilización no consentida o desinformada (Art 243)*
2. *Aborto no consentido o forzado (Art 192)*
3. *Amenazas (Arts. 265 y 266)*
4. *Lesiones por operaciones quirúrgicas ilícitas o simuladas (Art 208)*
5. *Suministro de receta o medicamento inadecuado (Art 209)*
6. *Negación de asistencia médica (Art 215)*
7. *Discriminación por odio, vejación o exclusión (Art 239, incluye el embarazo)*

* ***(Existencia de) Rutas Alternas para el Acceso a la Justicia.*** *En Coahuila, como en el resto del país, existe una variedad de procedimientos que pueden iniciarse ante situaciones de violencia obstétrica (por ejemplo):*
* ***Vía Administrativa:*** *Los juicios de responsabilidad administrativa (…) en casos en que esté involucrado personal de instituciones públicas (…).*
* *Además de las sanciones previstas para los prestadores de servicios públicos de salud, por medio de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (...), puede lograrse el reconocimiento del derecho a la indemnización ante un daño sufrido a consecuencia de una situación de violencia obstétrica, y exigir al Estado el pago de una indemnización. Sin embargo, es importante señalar que dicho procedimiento, además de considerar una reparación integral de la violación de derechos humanos, tampoco incluye garantías de no repetición, que modifiquen las causas estructurales que originan la incidencia de situaciones de violencia obstétrica.*
* ***Arbitraje Médico:*** *En el 2013 se creó la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, como un organismo público autónomo, destinado a resolver con imparcialidad los conflictos entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de dichos servicios, con motivo de una atención médica. Cuenta con facultades para fincar responsabilidades por dolo, impericia o mala práctica médica, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.*
* *(…)*
* ***Derechos Humanos:*** *La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones locales de derechos humanos están facultadas para conocer de quejas respecto de actos u omisiones violatorios de derechos humanos provenientes de funcionarios públicos, así como para emitir recomendaciones públicas, autónomas y no vinculantes, dado que no son instancias judiciales. Debido a esto último el cumplimiento de las misas depende en última instancia, de la voluntad política de la institución pública correspondiente.*
* *Sin embargo, a través de la realización de una investigación diligente y la formación clara de obligaciones a cargo de las instituciones públicas, puede contribuirse en la mejora de la actividad administrativa. En casos de violencia obstétrica las comisiones locales y nacional de derechos humanos pueden constituirse en piezas clave para ofrecer una vía de acceso a la justicia que ofrezca una reparación integral por las violaciones a los derechos humanos sufridas con motivo de violencia obstétrica, que incluya garantía de no repetición.*

*El documento finaliza con una serie de recomendaciones que refieren lo siguiente:*

* *En sentido contrario a la recomendación realizada al Estado de Coahuila por el Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Municipio de Torreón,* ***en GIRE consideramos que la tipificación penal de la violencia obstétrica es una medida desproporcionada y excesiva, toda vez que no está justificado recurrir al Derecho Penal cuando el Estado dispone de toda una variedad de medidas menos lesivas y que son capaces de abordar el conflicto de manera eficaz, atendiendo las causas que lo originan.***
* *Sostenemos que la respuesta no radica en engrosar el Código Penal para resolver la problemática existente, la autoridad no puede considerar que tipificando la violencia obstétrica se resuelven apremiantes situaciones que tendrían que solucionarse desde el terreno de la política pública en materia de salud, incluyendo la parte presupuestal, y el reforzamiento del marco normativo y de derechos humanos para la atención obstétrica.*
* *En virtud de lo anterior, respetuosamente* ***proponemos*** *al Congreso del estado de Coahuila:*
* ***NO ADICIONAR EL CÓDIGO PENAL de Coahuila de Zaragoza para tipificar la violencia obstétrica, como la ha propuesto el Gobernador en la Iniciativa de Decreto que Reforma diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, que remitió al Congreso el pasado 22 de mayo.***
* ***GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL efectivo de las mujeres que requieran servicios de salud obstétrica, particularmente en trabajo de parto, reforzando las disposiciones normativas y presupuestales necesarias para tal efecto.***
* ***PROMOVER QUE LAS MUJERES EMBARAZADAS y en trabajo de parto conozcan sus derechos, se reconozca su voluntad y se garantice que la prestación de los servicios de salud se provean con su consentimiento informado.***
* ***FORTALECER LOS SISTEMAS DE QUEJAS Y DE CONTRALORÍA INTERNA en los hospitales que atienden partos para favorecer el acceso a la justicia en casos de violencia obstétrica.***
* ***EXPEDIR UNA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL para el estado de Coahuila, que establezca las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sufran daños en su persona, sus derechos y en sus bienes como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.***
* ***FACULTAR A LA COMISIÓN COAHULINESE DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO para que además de fincar responsabilidades pueda exigir a los prestadores de servicios de atención médica la adopción de garantías de no repetición.***

*En este sentido, para quienes dictaminamos resaltan varias cuestiones:*

1. *La violencia obstétrica es una problemática real que aqueja a miles de mujeres en nuestro país, como se desprende de los datos proveídos por la ENDIREH (2016).*
2. *La comunidad internacional ha identificado la problemática, lo que ha derivado en la producción de instrumentos de derechos humanos, y recomendaciones en torno al mismo.*
3. *El Estado Mexicano debe hacer frente a los compromisos internacionales contraídos con respecto al tema.*
4. *Resulta indispensable para las autoridades tomar, en atención a sus atribuciones las medidas adecuadas a efecto de erradicarla.*

* *Partiendo de lo anterior, quienes dictaminamos debemos valorar, a efecto de poder determinar si la propuesta es viable, si una medida de esta naturaleza es la idónea para los propósitos que se buscan.*

*En este sentido, a efecto de mejor proveer, quienes dictaminamos recurrimos a la consulta de diversos documentos. El primero de ellos es el informe que hace el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) del año 2015.*

*Este documento ayuda a conocer la magnitud de una problemática, al respecto precisa que por lo que hace a casos de violencia obstétrica “en 2014 el sector salud fue el segundo con mayor número de quejas presentadas ante la CNDH con un total de 2,243” (2015).*

*Asimismo, se refiere que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “fue la institución más señalada como autoridad responsable en los expedientes de queja presentados ante la Comisión en los años 2012, 2013 y 2014. Tan sólo en el trimestre de enero a marzo de 2015, la CNDH recibió 402 quejas en contra del IMSS. “Si bien es importante reconocer que el IMSS atiende a un importante número de personas en el país, la magnitud de las quejas en su contra permite vislumbrar un problema estructural de deficiencias en la atención prestada” (GIRE,2015).*

*En este sentido se refiere que “los datos permiten entrever las constantes violaciones al derecho a la salud que enfrentan las personas en México, así como los problemas estructurales del sistema de salud público que deben atenderse para que dichas violaciones no sigan ocurriendo.*

*Así, la garantía del derecho a la salud en relación con el acceso y la calidad de los servicios de salud obstétrica implicaría una mejora estructural del sistema de salud y no sólo la atención de casos específicos cuando se presenten.*

*La violencia obstétrica, (…), es un tema de justicia social, en el que convergen múltiples factores de discriminación como el género, el nivel socioeconómico, el idioma y la etnia, provocando que las mujeres más vulnerables enfrenten también mayores abusos en su acceso a servicios de salud obstétrica” (GIRE, 2015).*

*En el citado informe se hace alusión a que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) ha identificado como elementos básicos del derecho a la salud los siguientes:*

*ACCESIBILIDAD: Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte.*

*ACEPTABILIDAD: Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados; es decir respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate.*

*CALIDAD: Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas.*

*NO DISCRIMINACIÓN: Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.*

*El Comité DESC también ha establecido que el derecho a la salud incluye la salud reproductiva. En este sentido, la SCJN ha retomado la interpretación del Comité:*

*Con respecto al derecho a la salud reproductiva y la no discriminación de las mujeres la Corte ha señalado que: “el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.*

*Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella.*

*El GIRE, del mismo modo identifica los derechos humanos violentados cuando se presentan este tipo de prácticas, haciendo referencia al derecho a la integridad personal, que se encuentra reconocido en los artículos 22 y 29 de la Constitución mexicana y en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en sus dos vertientes: el respeto a la integridad física, psíquica y moral y la prohibición de la tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.*

*Al respecto, se refiere que “Bajo estos parámetros se sostiene que: [...] la consagración de un derecho a la integridad personal revela dos aspectos de esta disposición: genera, por una parte, la obligación del Estado de no realizar ninguna acción u omisión de las prohibidas por el artículo 5 de la Convención y de impedir que otros las realicen; por otra parte, alude a la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, sin que nadie pueda, en principio, interferir con él o con sus decisiones respecto de él, sugiriendo, de este modo, que el individuo es el dueño de sí mismo, tiene autonomía personal y por lo tanto, está facultado para decidir a su respecto, sin que el Estado tenga, en principio, la facultad de impedírselo [...]*

*Respecto del contenido y alcance del artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el derecho a la salud, la COIDH ha considerado en las sentencias de los casos Artavia Murillo vs. Costa Rica y Suárez Peralta vs. Ecuador, que: […] en el marco del derecho a la integridad personal, ha analizado algunas situaciones de particular angustia y ansiedad que afectan a las personas, así como algunos impactos graves por la falta de atención médica o los problemas de accesibilidad a ciertos procedimientos en salud. […]*

***Por tanto, los derechos a la vida privada y a la integridad personal se hallan también directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud.***

***La falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave del derecho a la autonomía y la libertad reproductiva. Existe por tanto una conexión entre la autonomía personal, la libertad reproductiva y la integridad física y psicológica.***

*Por tanto, la Corte Interamericana ha señalado que, a efecto de dar cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal y a la salud, los Estados deben establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones.*

*Asimismo, el Estado debe “prever* ***mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para el damnificado, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto” (GIRE, 2015)***

*El informe asimismo, enuncia “que por su parte, el derecho a la salud se encuentra reconocido en el artículo 4º constitucional, así como en diversos ordenamientos internacionales que México ha suscrito, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).*

*Además de la vinculación del derecho a la integridad personal con el ejercicio del derecho a la salud, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia guarda una estrecha relación con la protección y garantía de la integridad personal. En este sentido cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), se entiende como violencia contra la mujer: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Dicho instrumento ordena a los estados obligaciones positivas para erradicar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres y establece que se debe prestar especial atención cuando la mujer que es objeto de violencia se encuentra embarazada.”*

*Uno de los apartados que resulta de particular interés para el estudio del tema que nos ocupa, es el análisis que este organismo de la sociedad civil hace de la tipificación penal sobre violencia obstétrica, en este orden de ideas, el documento alude que “una de las medidas propuestas para visibilizar, prevenir y sancionar la violencia obstétrica ha sido la de reformar los códigos penales para tipificarla como un delito, con sanciones privativas de la libertad y multas para el personal de salud que incurra en estas prácticas” (GIRE,2015).*

*En este sentido hasta mayo de 2015, en tres códigos penales se considera la violencia obstétrica un delito: Veracruz, Guerrero y Chiapas.*

*El Código Penal de Veracruz, en su artículo 363 establece que comete el delito de violencia obstétrica el personal de salud que:*

1. *No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas;*
2. *Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;*
3. *No obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía de cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;*
4. *Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad;*
5. *Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre, mediante la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente después de nacer; y*
6. *Aun cuando existan los medios necesarios para la realización del parto vertical, obligue a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas.*

* *Las penas contempladas van de tres a seis años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario mínimo para el caso de las fracciones i, ii, iii y iv; para quien incurra en los supuestos de las fracciones iv y v las sanciones van de seis meses a tres años de prisión y multa de hasta doscientos días de salario mínimo.*
* *“En este sentido, el informe precisa que “en seguimiento al impacto de esta medida legislativa, GIRE realizó una solicitud de acceso a la información pública a la Procuraduría General de Justicia y al Poder Judicial del estado acerca del número de denuncias presentadas, así como los procesos penales con motivo de este delito registrados de agosto de 2012 a diciembre de 2013, a lo que las* ***autoridades reportaron la existencia de seis denuncias y ningún proceso penal, con lo cual se mantiene la tendencia registrada desde la entrada en vigor del delito en marzo de 2012”*** *(GIRE,2015).*
* *Por su parte, con la publicación del Código Penal del estado de Guerrero el 1 de agosto de 2014 se tipificó de la siguiente manera el delito de violencia obstétrica.*
* *Artículo 202. Violencia de género: Se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo a quien por razones de género, cause a persona de otro sexo, daño o sufrimiento económico, físico, obstétrico, patrimonial, psicológico, sexual o laboral tanto en el ámbito privado como en el público, afectando los derechos humanos o la dignidad de las personas.*
* *Artículo 203. Definiciones. Para los efectos de este delito se entenderá por: iii. Violencia obstétrica: Acto u omisión que impida u obstaculice la atención oportuna y eficaz en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas o altere sus procesos reproductivos sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.*
* *En el caso de Chiapas, el 24 de diciembre de 2014 se publicó una reforma al código penal estatal en el que se establece el delito de violencia obstétrica de la siguiente forma:*
* *Artículo 183 Ter. Comete el delito de violencia obstétrica el que se apropie del cuerpo y procesos reproductivos de una mujer, expresado en un trato deshumanizador, abuso en el suministro de medicación o patologización de los procesos naturales, generando como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad.*
* *Con independencia de las lesiones causadas, al responsable del delito de violencia obstétrica, se le impondrá la sanción de uno a tres años de prisión y hasta doscientos días de multa, así como suspensión de la profesión, cargo u oficio, por un término igual al de la pena privativa de libertad impuesta, y el pago de la reparación integral del daño.*

*Artículo 183 Quater. Se equipará a la violencia obstétrica y se sancionará con las mismas penas a quien:*

1. *Omita la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas.*
2. *Obstaculice el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer.*
3. *Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.*
4. *Practique una cesárea, existiendo condiciones para el parto natural.*

* *Como parte de su análisis en el documento se establece que:*
* *“Desde GIRE se considera que la vía penal no es idónea para evitar prácticas de violencia obstétrica, ya que* ***podría inhibir la actuación del personal de salud y no promueve un cambio de mentalidad ni de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia obstétrica****, puesto que* ***no atiende a los problemas estructurales que subyacen en la perpetuación de dicha práctica****, como la enseñanza de la medicina como una disciplina donde el personal de salud toma las decisiones por las mujeres y no adopta una perspectiva de derechos humanos; el trato discriminatorio y deshumanizado del personal médico hacia las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, la falta de información de las mujeres sobre las opciones para parir y la importancia de la reducción de las cesáreas en los hospitales y, principalmente, la información para que las mujeres pueden tomar las decisiones que más les convengan respecto a su embarazo, parto y puerperio.*
* ***Por lo tanto, en lugar de criminalizar deberían buscarse medidas de tipo administrativo y de política pública que refuercen el marco normativo y de derechos humanos para la atención obstétrica.******En su caso, ciertos tipos de incumplimiento o violación de los derechos humanos tendrían que sancionarse por la vía administrativa o civil. En este sentido, se debe reconsiderar la reformulación del tipo penal propuesto, de forma que se sancionen conductas que son responsabilidad directa del personal de salud, como la esterilización forzada, que en la actualidad se sanciona sólo en los códigos penales de 15 entidades federativas****.*
* ***Para otro tipo de conductas, en lugar de fórmulas penales que podrían “engrosar” el poder criminalizador del Estado más que poner fin a la problemática estructural, habría que buscar alternativas o vías de solución que incluyan medidas administrativas y de política pública.***

*Derivado de lo anterior, el GIRE hace una serie de recomendaciones dirigidas tanto al Congreso de la Unión como a los Congresos Locales, al respecto en el informe se señalan las siguientes:*

* ***No reformar los códigos penales de las entidades federativas para incluir la violencia obstétrica como un delito.***
* *A LOS CONGRESOS LOCALES DE VERACRUZ, CHIAPAS Y GUERRERO: Reformar sus códigos penales para* ***eliminar el delito de violencia obstétrica.***
* *A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL: Publicar la nom 007-ssa2-2010, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido.*
* *IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, AL IMSS, AL ISSSTE Y A LAS SECRETARÍAS DE SALUD LOCALES: Identificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y de género reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en las leyes locales para erradicar su práctica. Garantizar el acceso universal a las mujeres que requieran servicios de salud obstétrica, particularmente en trabajo de parto.*
* *Promover que las mujeres embarazadas y en trabajo de parto conozcan sus derechos, se reconozca su voluntad y se garantice que la prestación de los servicios de salud se provean con su consentimiento informado.*
* *ACCESO A LA JUSTICIA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, AL IMSS, AL ISSSTE Y A LAS SECRETARÍAS DE SALUD LOCALES:*
* *Fortalecer los sistemas de quejas y de contraloría interna en los hospitales que atienden partos, para favorecer el acceso a la justicia en casos de violencia obstétrica.*
* *A LA CNDH, A LAS COMISIONES LOCALES DE DERECHOS HUMANOS Y A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA: Garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral a las víctimas de violencia obstétrica de acuerdo con los estándares más altos de derechos humanos y que tomen en cuenta las peticiones de las víctimas, dando seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones.*
* *A LA CONAMED Y A LAS COMISIONES LOCALES DE ARBITRAJE MÉDICO: Fortalecer los mecanismos de queja en casos de violencia obstétrica, eliminando obstáculos y facilitando el acceso a resoluciones de acuerdo con los estándares de derechos humanos.*

*Otro de los documentos en los que se apoyó esta comisión dictaminadora es la* ***Recomendación General no. 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, dirigida a secretarios de salud, de la defensa nacional y de marina; gobernadoras y gobernadores de las entidades federativas; jefe de gobierno de la Ciudad de México, y directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos.***

*Dentro de lo referido en dicho documento se establece que “en el marco de la atención obstétrica, algunos integrantes del personal de salud pueden incurrir en prácticas y omisiones que tienen por resultado el menoscabo de los derechos humanos de las mujeres, incluidos el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la información y libre consentimiento, a una vida libre de violencia, a la integridad, vida, y salud, en relación con la protección de la salud reproductiva. Particularmente la violencia sobre la salud reproductiva, se encuentra vinculada con la violencia de género, y tiene relación “con un modelo biomédico que desestima los elementos emocionales y sociales de la salud dando predominio al cuerpo y los elementos biológicos”.*

*Así, la recomendación señala que “en este contexto surge el término violencia obstétrica, con el objeto de visibilizar e identificar las causas que reproducen la violencia contra la mujer, ocurrida bajo dichas circunstancias; advirtiéndose que “éste es un problema que desde hace años afecta a algunas mujeres embarazadas. Tales violaciones, a partir de 1960, han dado lugar a movimientos sociales de emancipación de la mujer y a favor del parto respetado o humanizado, mismos que abogan por un procedimiento de nacimiento libre de presiones e injerencias externas y demandan el respeto de sus derechos y salud reproductiva (...).*

*Por lo que hace a sus orígenes la Comisión Nacional, se refiere que éstos radican en “las relaciones asimétricas de poder donde convergen el género, las jerarquías, la “lucha por la posesión del conocimiento legitimado”, la influencia del sexismo y el androcentrismo en el campo de la medicina, la preeminencia del parto medicalizado sobre el natural y el ejercicio de prácticas patriarcales y autoritarias sobre las decisiones y el cuerpo de la mujer.”*

*Esta recomendación se encuentra ampliamente justificada en instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos. Hace un estudio específico del tema en América Latina y en México, haciendo alusión a los ordenamientos legales y a Normas Oficiales Mexicanas.*

*El documento emitido por la Comisión Nacional asimismo hace una radiografía del marco normativo de las entidades federativas con respecto al tema. Manifestando que “partir del 2008, el concepto de violencia obstétrica fue incorporado en el orden jurídico de algunas entidades federativas, como los Estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Campeche, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Cabe destacar que en los Estados de Veracruz, Guerrero, Chiapas y Estado de México, esta conducta se encuentra tipificada como delito”.*

***Sobre el particular, este Organismo Constitucional considera, que “la criminalización y tratamiento por la vía penal de los casos vinculados a violencia obstétrica, resultan ser medidas poco efectivas para asegurar una atención obstétrica adecuada, ya que centra en la responsabilidad individual invisibilizando la institucional; lo que se requiere, es la reivindicación de los derechos de la mujer mediante estrategias encaminadas a la*** *erradicación de ideas y estereotipos que la posicionan en un segundo plano en el contexto del embarazo, parto y puerperio, restándoles protagonismo y autonomía”.*

* *Una vez precisado lo anterior, para quienes dictaminamos resulta indispensable enfatizar las características que tiene la violencia obstétrica, entre las* ***que destaca ser una modalidad de violencia******institucional y de género****, cometida por prestadores de servicios de la salud, por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo que genera una afectación física o psicológica, derivado de la prestación de servicios médicos, abuso de medicalización y patologización de procedimientos naturales, entre otros.*

*En este sentido, observamos que esta forma de violencia, provoca violaciones a múltiples derechos humanos como lo son el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la salud, el derecho a la autonomía corporal y a la vida privada, entre otros.*

*Este tipo de violencia constituye una problemática seria, preocupante y real, puesto que de acuerdo datos de la ENDIREH, en los últimos 5 años el 33.4% de las mujeres sufrió algún tipo de maltrato por quienes las atendieron.*

*En atención a todo lo referido, para quienes integramos esta comisión es preponderante* ***impulsar las medidas idóneas, adecuadas, y suficientes a efecto de garantizar los derechos de las Coahuilenses, no obstante ello, del análisis efectuado hemos llegado a la conclusión de que tipificar la violencia obstétrica, presenta múltiples desventajas, como lo son:***

1. *No se atiende al Derecho Penal como ultima ratio o derecho penal mínimo.*
2. *No se respetan los* ***Límites del Derecho Penal.*** *La función penal del Estado es la que implica las afectaciones más gravosas y trascendentales sobre las personas en quienes recae la sanción. Existe un vasto desarrollo doctrinal que advierte la necesidad de respetar los principios y limitaciones propios del Derecho Penal.*
3. ***Podría inhibir la actuación del personal de salud.***
4. ***No promueve un cambio de mentalidad ni de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia obstétrica****, puesto que* ***no atiende a los problemas estructurales que subyacen en la perpetuación de dicha práctica****.*
5. ***La criminalización y tratamiento por la vía penal de los casos vinculados a violencia obstétrica, resultan ser medidas poco efectivas para asegurar una atención obstétrica adecuada, ya que se centra en la responsabilidad individual invisibilizando la institucional.***
6. *No implica una mejora estructural del sistema de salud sino solo la atención de casos específicos cuando se presenten.*
7. *No atiende los factores que la originan como, la discriminación por género, el nivel socioeconómico, el idioma y la etnia, provocando que las mujeres más vulnerables enfrenten también mayores abusos en su acceso a servicios de salud obstétrica.*
8. *No garantiza la reparación integral del daño.*
9. *Omite garantías de no repetición.*
10. *Es una medida desproporcionada y excesiva, toda vez que no está justificado recurrir al Derecho Penal cuando el Estado dispone de toda una variedad de medidas menos lesivas y que son capaces de abordar el conflicto de manera eficaz, atendiendo las causas que lo originan.*
11. *No se resuelven apremiantes situaciones que tendrían que solucionarse desde el terreno de la política pública en materia de salud, incluyendo la parte presupuestal, y el reforzamiento del marco normativo y de derechos humanos para la atención obstétrica.*

*En este orden de ideas, y tomando en consideración que las conductas lesivas más gravosas, ya se encuentran previstas en nuestro código penal, consideramos que la tipificación de la violencia obstétrica poco abona a la solución de esta problemática al ser una medida no idónea e ineficaz.*

*Por lo que quienes dictaminamos decidimos no incluirla en el proyecto de decreto.*

Una vez estudiado el objeto y contenido de la iniciativa y las consideraciones vertidas en la exposición de motivos que la acompañan y al antecedente que sobre este tema existe en el seno de la presente comisión dictaminadora y que posteriormente fue aprobado por el pleno de este H. Congreso, quienes dictaminamos coincidimos en que el criterio previamente adoptado sigue siendo vigente, por lo que reiteramos que la tipificación de la violencia obstétrica no es una medida idónea y eficaz para los fines que se plantean en la iniciativa.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**D I C T A M E N**

**PRIMERO.-** Se considera no procedente expedir la reforma con proyecto de decreto que crea el artículo 314 Bis del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**SEGUNDO.-** Archívese el expediente correspondiente como asunto concluido.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisiones unidas de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, a 23 de abril de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea el numeral 1.9.5, del apartado 1 del artículo 9; y la creación del artículo 23 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 del mes de octubre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea el numeral 1.9.5, del apartado 1 del artículo 9; y la creación del artículo 23 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa Popular con proyecto de decreto que iniciativa popular con proyecto de decreto que crea el numeral 1.9.5, del apartado 1 del artículo 9; y la creación del artículo 23 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*El feminicidio se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre perpetrado por un hombre. Este tipo de asesinatos constituye una de las primeras causas de muerte de la población femenina en la actualidad. De ahí que el feminicidio haya dado lugar a leyes específicas para su condena en el país.*

*Los Feminicidios siempre responden alodio o desprecio por el género femenino, al placer sexual en el acto de la dominación a la mujer y/o al deseo de posesión, lo que implica que el asesino concibe a la mujer como una propiedad del hombre. En cualquiera de estos casos se trata de un crimen de odio de género, por ello, el feminicidio es el resultado de un proceso precedido por otras formas de maltrato hacia la mujer, sean eventuales o recurrentes, y sean perpetradas por un desconocido o un conocido. Entre las formas de maltrato se cuentan: violación, violencia psicológica, obstrucción del libre desarrollo y de la autonomia de la mujer, esclavitud sexual, maltrato físico, violencia doméstica, tortura, mutilación, desfiguración, persecución, privación de la comunicación y privación de libertad.*

*El feminicidio es consecuencia de la impunidad frente a la violencia sistemática contra la mujer, pues de hecho es el paso último de una escalada de violencia que no es denunciada (por la víctima o por su entorno) o, si es denunciada, es ignorada por las autoridades, al considerar dicha violencia como · un asunto “doméstico”, “natural” o “castigo merecido”.*

*Veamos claramente la diferencia entre homicidio/femicidio y feminicidio en el siguiente cuadro:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Asunto* | *Homicidio/Femicidio* | *Feminicidio* |
| *Concepto* | *Privación de la vida de un hombre o mujer respectivamente.* | *Privación de la vida de una mujer por razón de género.* |
| *Victimario* | *Cualquiera, sea hombre o mujer.* | *Siempre es un hombre o un grupo de hombres.* |
| *Tipo de asesinato* | *Accidental (homicidio culposo) o Intencional (homicidio doloso).* | *Siempre es intencional.* |
| *Motivación* | *Si es accidental: negligencia, impericia o imprudencia. Si es intencional: la víctima es un obstáculo para el victimario.* | *Misoginia (odio y desprecio de género), placer sexual en el acto de dominación o sentido de propiedad sobre la mujer.* |
| *Precedentes* | *Acto único, salvo en casos de ensañamiento por causas no imputables al género.* | *Siempre es consecuencia de: violación, violencia psicológica, violencia física, violencia doméstica, mutilación, desfiguración, privación de libertad, incomunicación o tortura.* |
| *Cuerpo* | *El cuerpo y las pruebas del delito se intentan esconder.* | *El cuerpo se exhibe deliberadamente para transmitir un mensaje de poder viril y castigo ejemplarizante.* |

*Las mujeres son objeto de múltiples formas de discriminación que violan los principios de igualdad de derechos y respeto de la dignidad humana. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité CEDAW) identificó la violencia basada en el género como una de las manifestaciones de la discriminación cuya causa principal es la desigualdad de género, esto es, las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres constituye una forma de discriminación que impide gravemente que la mujer goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.*

*La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer definió la violencia contra la mujer (VCM) como: "Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico, para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". Esta definición incluye hechos violentos dirigidos en contra de las mujeres por su pertenencia al sexo femenino, por razones de género, o que las afectan en forma desproporcionada. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en algunos sistemas penales .bajo la figura del "feminicidio" y en otros como homicidio agravado, constituye la forma más eirema de violencia contra la mujer. Ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado. Constituye una violación de varios derechos fundamentales de las mujeres, consagrados en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y sexual, y/o el derecho a la libertad personal.*

*Aunque sus manifestaciones ilustran diferentes interrelaciones entre normas y prácticas socioculturales, el feminicidio constituye un fenómeno global que ha alcanzado proporciones alarmantes en el mundo. Sus víctimas son las mujeres en diversas etapas de desarrollo, condiciones y situaciones de vida. Los informes disponibles revelan que en las muertes violentas de las mujeres se presentan manifestaciones del ejercicio de una violencia desmedida previa, concomitante o posterior a la acción delictiva, que evidencia una brutalidad particular en contra del cuerpo de las mujeres. En muchas ocasiones la muerte se produce como el acto final de un continuum de violencia, en particular, en los casos de feminicidio íntimo que son cometidos por el esposo, compañero permanente, novio, etc. Estos aspectos constituyen algunos de los elementos diferenciadores de dichas muertes con respecto a los homicidios comunes. Con la finalidad de combatir la Violencia contra las mujeres, el derecho internacional de los derechos humanos ha establecido un conjunto de normas y estándares que obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones sufridas. El deber de debida diligencia constituye un marco de referencia para analizar las acciones u omisiones de las entidades estatales responsables y evaluar el cumplimiento de sus obligaciones. El acceso a la justicia constituye un elemento central de esas obligaciones. El estándar de debida diligencia parte del supuesto de que los Estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguren a las mujeres víctimas de la violencia el acceso a los mecanismos de justicia penal y restaurativa.*

***El estudio del Secretario General de las Naciones Unidas “Poner fin a la violencia contra*** *la mujer” de 2006 se refirió al efecto que tiene la impunidad sobre la vida de las mujeres asi: La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza a los autores de actos de violencia y la sociedad tolera expresa o tácitamente a dicha violencia, la impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal. El**resultado de esa impunidad no consiste únicamente en la denegación de justicia a las distintas victimas/sobrevivientes, sino también en el refuerzo de las relaciones de género reinantes y asimismo reproduce las desigualdades que afectan a las demás mujeres y niñas.*

*En relación al número de Feminicidios que se registraron en Coahuila durante 2018, este año se duplicaron, informó el Fiscal de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos, en lo que va del 2019 en Coahuila se han acumulado 10 Feminicidios, en tanto que el 2018 cerró con 13 eventos de este tipo, en el estado, en los primeros 10 meses del año pasado habían ocurrido 5casos, es decir que en relación a ese dato, este año se ha incrementado la cifra en un 100%.*

*En el caso de abuso sexual, se registraron 7 incidencias; en el caso de hostigamiento se registraron otras 9, y en los incidentes de violación se registraron 16 casos; sin embargo, en el caso de las llamadas por violencia de pareja se registraron 444 casos de mujeres violentadas de manera física, sexual o emocional, y por otro lado, la clasificación de llamadas por violencia familiar, se registraron al menos 5 mil 674 casos entre enero y febrero de este año.*

**TERCERO.-** Para los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, es determinante el impulsar acciones que permitan una impartición de justicia efectiva y con perspectiva de género.

En este sentido es necesario partir de la idea de que el derecho a la no discriminación se desprende del principio de igualdad, y está reconocido en el artículo 1, párrafo quinto, de la Constitución General, y en diversas cláusulas antidiscriminatorias contenidas en los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Está incorporado también en el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), así como en diversas legislaciones locales que combaten la discriminación y en otros ordenamientos legales. Sin embargo, quienes dictaminamos coincidimos en que la incorporación del principio de igualdad y la prohibición de la discriminación en ciertos ordenamientos no es suficiente para prevenir y eliminar, de hecho y de derecho, la discriminación en México.

Así, uno de los pasos a seguir para alcanzar la igualdad de trato, de oportunidades, de protección y de capacidad, es visibilizar a los grupos en situación de discriminación, identificando la problemática que enfrentan con respecto al acceso a los diferentes derechos humanos, mismos que han sido o pueden ser restringidos por tratos desiguales en condiciones iguales, o tratos iguales en condiciones desiguales, como es el caso de las mujeres.

En este sentido en el Estado de Coahuila, se han implementado acciones en materia de derechos humanos en favor de las mujeres y otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad, sin dejar de admitir, como bien lo señala el promovente de la iniciativa objeto de estudio, aún persisten casos donde las mujeres y niñas experimentan violencia, acoso, hostigamiento y persecución debido a su género o su identidad de género.

En este contexto es que los integrantes de la presente comisión dictaminadora observamos que la presente reforma tiene por objeto la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres, Niñas, Niños y Grupos Vulnerables.

A la cual pretende dotársele de las facultades y atribuciones siguientes:

*l. La investigación y persecución de los delitos relacionados con* ***hechos de agresión, abuso sexual, hostigamiento y amenaza, en contra las mujeres, niñas, niños y grupos vulnerables.***

*II. La investigación de Feminicidios y homicidios de menores y homicidios por perspectiva de género.*

*III. La implementación en su caso, de acciones para prevenir y combatir los delitos de su competencia.*

*IV. Brindar la protección y atención necesaria a los denunciantes y a las víctimas.*

*V. Diseñar e implementar mecanismos de colaboración con diversas autoridades a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones.*

*VI. Las que le otorguen el Fiscal General, la Constitución General, la Constitución del Estado, esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables*.

En este orden de ideas, a efecto de pronunciarnos con respecto a la procedencia de la iniciativa realizamos un análisis de las disposiciones vigentes resultando las consideraciones que a continuación se expresan.

Así, cabe señalar que en virtud de la reforma a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de combate a la corrupción, publicada en el Periódico Oficial el pasado 14 de julio de 2017, se instituyó en nuestro Estado un nuevo régimen para la administración pública, dicha reforma vino a robustecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción**,** además se incorporaron las bases de autonomía del órgano encargado de la procuración de justicia en el Estado, buscando garantizar que el desempeño de sus funciones se realizara con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Es así, que el 12 de septiembre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ordenamiento jurídico bajo el cual se conduce la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y que permite el funcionamiento efectivo y eficaz del Ministerio Público, estableciendo las reglas básicas para su operación, sus funciones y principios rectores, precisando su estructura orgánica, las atribuciones de los agentes del ministerio público y de sus auxiliares, así como también regula lo concerniente a las relaciones administrativas y laborales de los servidores públicos y el servicio profesional de carrera, previendo el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

En este sentido los integrantes de esta dictaminadora, estimamos que Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, da sustento a la actuación de la Fiscalía General encomendada en la carta magna, al dotarle las atribuciones y responsabilidades necesarias para desarrollar su función.

En virtud de lo referido consideramos que la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza atiende no solo a los principios constitucionales de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos; si no también a otros referentes a la Unidad, Indivisibilidad, Independencia, Jerarquía, Buena Fe, Honradez, Gratuidad, Intervención, Oportunidad, Dirección de la Investigación, Colaboración, Lealtad, Regularidad, Transparencia y **Trato Digno.**

Cabe mencionar además, que la misma se compone de Fiscalías y Fiscalías Especializadas en la investigación y la persecución de delitos, en relación a las formas de manifestación de la delincuencia, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de aquéllas.

En ese sentido, podemos distinguir que en lo referente a las facultades que se le otorgan a la Fiscalía General del Estado, su Ley Orgánica establece lo siguiente:

***“Artículo 6. Facultades de la Fiscalía General***

*Corresponden a la Fiscalía General el ejercicio de las siguientes facultades:*

1. ***En materia de investigación y persecución del Delito:***
2. *Vigilar la observancia de los principios constitucionales en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las facultades que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas;*
3. *Conducir y mandar a las policías en la investigación de los delitos y coordinar los servicios periciales;*
4. *Investigar los delitos y ejercitar acción penal ante los órganos jurisdiccionales;*
5. *Colaborar con la Procuraduría o Fiscalía General de la República, con la Procuraduría General Militar, y con las Procuradurías o Fiscalías Generales de las entidades federativas del país, en la investigación de los delitos y en la persecución de los imputados, en los términos de los convenios de colaboración, bases y demás instrumentos que se formalicen al respecto;*
6. *Solicitar la colaboración, así como informes o documentos a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, y organismos autónomos del Estado, así como de otras entidades federativas y municipios de la República, en términos de lo señalado en la fracción anterior;*
7. *Requerir informes y documentos de los particulares, sujetándose a los términos previstos en las disposiciones legalmente aplicables;*
8. *Dictar las medidas adecuadas para combatir y erradicar la violencia contra la mujer, los niños y otros grupos vulnerables, desarrollando para tal efecto mecanismos institucionales;*
9. *Ejercitar las acciones legales en materia del Sistema Especializado de Justicia para Adolescentes;*
10. *Asegurar los bienes, instrumentos objetos o productos del delito, así como aquellos que tengan relación con éste, y disponer de ellos conforme a las reglas y procedimientos que establece el Código Nacional y la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados para el Estado de Coahuila de Zaragoza;*
11. *Orientar a los particulares respecto de asuntos que presenten ante el Ministerio Público que no constituyan delitos del orden común o que no sean de su competencia, sobre el trámite que legalmente corresponda al asunto de que se trate; y*
12. *Las demás que le confieran la presente Ley y otros ordenamientos legales.*
13. ***En materia de Atención a Víctimas y Ofendidos del delito:***
14. *Otorgar atención a las víctimas y ofendidos del delito;*
15. *Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las víctimas y los ofendidos de delitos, y vigilar que se garantice o se cubra la reparación del daño, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;*
16. *Canalizar a las víctimas y los ofendidos del delito, a las dependencias y entidades que proporcionen servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, médico, psicológico y educacional, vigilando su debida atención; y*
17. *Las demás que le confieran la presente ley y otros ordenamientos legales.*
18. ***En materia de derechos humanos:***
19. *Velar por el respeto de los derechos humanos y sus garantías reconocidos en la Constitución General, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado mexicano y en la Constitución del Estado, en la esfera de su competencia;*
20. *Fomentar entre los servidores públicos de la Fiscalía General una cultura de respeto a los derechos humanos y sus garantías;*
21. *Atender las visitas, quejas, y, en su caso, propuestas de conciliación y recomendaciones de los organismos protectores de derechos humanos conforme a la Constitución General y la Constitución del Estado, así como de organismos internacionales de protección de derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, conforme a las disposiciones aplicables;*
22. *Vigilar, a través de visitas, que el personal de la Fiscalía General cumpla con el ejercicio de la protección de los derechos humanos y la garantía de su aplicación;*
23. ***Promover que se aplique la perspectiva de género en la investigación******y persecución de delitos contra la mujer o de personas con preferencia sexual diferente; y vigilar que se brinde a menores de edad y a personas discapacitadas un trato acorde a sus circunstancias personales, sin demeritar la dignidad de los mismos;***
24. *Observar que los servidores públicos eviten incurrir en conductas que se relacionen con la tortura; en aquellos casos en que sea necesario el uso de la fuerza, ésta deberá ser aplicada observando los principios de legalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad;*
25. *Brindar atención y trato justo a toda persona que se introduzca a territorio estatal, por cualquier motivo, ya sea por un plazo prolongado o de manera transitoria, respetando los derechos humanos reconocidos en la Constitución General, los Tratados Internacionales y la Constitución del Estado;*
26. *Proporcionar información a los organismos protectores de derechos humanos conforme a la Constitución General y la Constitución del Estado, cuando la soliciten en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso la seguridad de personas, observando la legislación aplicable;*
27. *Garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos; y*
28. *Las demás que le confieran la presente ley y otros ordenamientos legales.*
29. ***En Materia Familiar y Civil***
30. *Intervenir ante los órganos jurisdiccionales del Estado en todo aquello que le competa, en su carácter de representante social, en los términos de las leyes aplicables;*
31. *Coadyuvar en la tramitación de los incidentes de reparación del daño exigibles a personas distintas del inculpado, ante los órganos jurisdiccionales competentes, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional, cuando la víctima u ofendido pertenezca a algún grupo vulnerable o indígena;*
32. *Promover, en su caso, la conciliación en asuntos de orden familiar, en términos de la legislación aplicable;*
33. *Tramitar el procedimiento relativo a la presunción de muerte, en términos de la legislación aplicable, cuando se trate de la desaparición o ausencia de una persona por actos derivados de la probable comisión de algún delito;*
34. *Coordinarse con instituciones públicas y privadas, cuyo objeto sea la asistencia a menores de edad e incapaces, a fin de brindarles protección en el ámbito de su competencia; y*
35. *Las demás que le confieran la presente ley y otros ordenamientos legales.*
36. ***En materia de coordinación en seguridad pública:***
37. *Integrar el Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública y cumplir con sus objetivos y fines;*
38. *Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;*
39. *Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en la Ley General y la Ley del Sistema Estatal;*
40. *Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas de seguridad pública en términos de las disposiciones aplicables;*
41. *Desarrollar las actividades específicas que se le asignen, como integrante de los sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, para el cumplimiento de sus fines;*
42. *Formar parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública;*
43. *Realizar acciones y operativos conjuntos con las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno;*
44. *Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas para coadyuvar con los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, a través de mecanismos eficaces;*
45. *Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública en el marco del Sistema Nacional y el Sistema Estatal; y*
46. *Las demás que señale esta ley, la Ley General, la Ley del Sistema Estatal y otros ordenamientos aplicables.*
47. ***En materia de Extinción de dominio:***

*En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, la Fiscalía General ejercerá las atribuciones siguientes:*

1. *Recabar copia de las constancias, diligencias y actuaciones que se hayan realizado con motivo de la investigación de los hechos delictivos a que se hacen referencia en la ley de la materia;*
2. *Solicitar a los órganos jurisdiccionales copia de los registros y expedientes de los procedimientos penales en que intervengan con motivo de los hechos delictivos;*
3. *Recabar del Ministerio Público de la Federación y demás instancias federales, así como de las autoridades estatales y municipales y de otras entidades federativas, copia de los expedientes, registros, actuaciones, constancias y demás información que tengan, que sea útil para acreditar los hechos delictivos y supuestos de extinción de dominio en los términos que se establezcan;*
4. *Recabar los medios de prueba necesarios para sustentar el ejercicio de la acción de extinción de dominio, respecto de los bienes de que se trate;*
5. *Realizar las diligencias de investigación necesarias para identificar y localizar al dueño de los bienes materia de la acción de extinción de dominio, o quien se ostente o comporte como tal, así como a los terceros; y*
6. *Las demás que señale esta ley, el Código Nacional, la Ley de Extinción de Dominio del Estado y otros ordenamientos aplicables.*
7. ***En materia de Protección de personas:***

*La Fiscalía General a través de la Unidad Administrativa creada para tal efecto, es la encargada de garantizar la protección de testigos y demás terceros involucrados en el proceso penal, que se encuentren en situación de riesgo y otorgar, a quienes considere pertinente las medidas de protección necesarias, con base en los criterios orientadores; sin perjuicio de las facultades que corresponden a la autoridad judicial, de conformidad con lo establecido en la legislación correspondiente, y el Código Nacional.*

1. ***En general:***
2. *Formar y actualizar a sus servidores públicos para la investigación y persecución de los delitos de su competencia; así como implementar el Servicio Profesional de Carrera;*
3. *Desarrollar e instrumentar un sistema de medidas de protección para sus servidores públicos y de las personas cuya salvaguarda sea relevante con motivo de las funciones de aquéllos;*
4. *Promover iniciativas de reformas constitucionales o legales en el ámbito de su competencia ante el Congreso del Estado;*
5. *Opinar y participar en los proyectos de iniciativas de reformas constitucionales o legales que estén vinculadas con las materias de su competencia;*
6. *Constituir y administrar el Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia a través de las Reglas que al efecto emita el Fiscal General;*
7. *Administrar, así como realizar las funciones que deriven de las disposiciones aplicables, respecto de la constitución y administración de los demás fondos que le competan;*
8. *Administrar sus recursos humanos, materiales, financieros, así como su patrimonio y presupuesto conforme a las disposiciones aplicables;*
9. *Adquirir, arrendar y contratar bienes, servicios y obras públicas de conformidad con las disposiciones aplicables;*
10. *Promover la celebración de acuerdos interinstitucionales en asuntos relacionados con sus atribuciones;*
11. *Establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de sus actividades. Se reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo la seguridad de las personas que intervienen en un procedimiento penal o las investigaciones que realice el ministerio público y mantendrá la confidencialidad de los datos personales, en los términos que disponga la normatividad aplicable;*
12. *Difundir entre los servidores públicos de la Fiscalía General los beneficios que conlleva divulgar la información pública, los deberes que deban asumirse para su buen uso y conservación, y las responsabilidades que traería consigo la inobservancia de la ley;*
13. *Poner en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado los criterios contradictorios que lleguen a sustentarse entre los juzgados y las salas, a fin de que se decida el criterio a seguir;*
14. *Informar a las autoridades competentes acerca de los hechos que, no siendo constitutivos de delito, afecten a la administración pública del Estado;*
15. *Informar a los interesados acerca de los procedimientos legales en los trámites de las quejas que hubiesen formulado contra servidores públicos, por hechos no constitutivos de delito, pero sí susceptibles de ser sancionados mediante el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades;*
16. *Aplicar normas de control y evaluación técnico-jurídicas en las unidades integrales y administrativas de la Fiscalía General, mediante la práctica de visitas de inspección y vigilancia; y*
17. *Las demás que señale esta ley y otros ordenamientos aplicables.”*

De lo anterior se desprende, que dentro del ejercicio de las facultades otorgadas en materia de derechos humanos, se prevé velar por el respeto de los derechos humanos y sus garantías reconocidos en la Constitución General, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en la Constitución del Estado, en la esfera de su competencia*;* así como el promover que se aplique **la perspectiva de género en la investigación y persecución de delitos contra la mujer o de personas con** **preferencia sexual diferente; y vigilar que se brinde a menores de edad y a personas discapacitadas un trato acorde a sus circunstancias personales, sin demeritar la dignidad de los mismos, entre otras.**

En el mismo sentido se observa que dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía General se encuentra la Fiscalía de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos, que cuenta con las unidades administrativas que a continuación se enuncian.

**2.3.1** Dirección General de Investigaciones Especializadas.

**2.3.2** Dirección General de Delitos de Alto Impacto y cometidos en agravio de Migrantes.

**2.3.3** Dirección General de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos.

**2.3.4** Dirección General de Protección a Testigos y Terceros Involucrados en el Proceso Penal.

**2.3.5** Coordinación Estatal para la Investigación del Delito de Secuestro.

**2.3.6** Las subdirecciones, coordinaciones y unidades administrativas necesarias.

Dicha Fiscalía tiene entre sus atribuciones según lo previsto en el artículo 28 de la multicitada Ley Orgánica, las siguientes:

*Esta Fiscalía tendrá los deberes y atribuciones que le correspondan en materia de procuración de justicia, la investigación de los delitos y el análisis de la incidencia delictiva y la implementación en su caso, de acciones para prevenir y combatir el delito, de acuerdo con lo establecido en la Constitución General, en la Constitución del Estado, en esta ley y los demás ordenamientos aplicables, y específicamente en lo relativo a:*

***I. La investigación de los delitos cometidos en agravio de mujeres por razón de género;***

***II.*** *La investigación de los delitos cometidos en agravio de la libertad de expresión de personas físicas y morales que ejerzan la actividad periodística;*

***III. Los casos en que debido a la naturaleza, gravedad y complejidad de los hechos constitutivos de delito o de las personas o derechos tutelados vulnerados, se requiera de un tratamiento especializado;***

*IV. La investigación y persecución de los delitos cometidos en agravio de defensores de derechos humanos;*

***V.*** *La investigación y persecución de los delitos cometidos en agravio de migrantes;*

***VI.*** *La investigación y persecución del delito de secuestro;*

***VII.*** *La atención y protección de víctimas, ofendidos, testigos y demás terceros Involucrados en el Proceso Penal;*

1. *Las demás que se establezcan en el reglamento de esta ley y demás ordenamientos jurídicos.*

Es por ello, que una vez agotado el análisis de la iniciativa, llegamos a la conclusión de que resulta innecesario establecer una Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres, Niñas, Niños y Grupos Vulnerables, toda vez que ya se ejercen por parte de la Fiscalía de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos,ampliasfacultades de investigación y persecución de delitos cometidos contra las mujeres, personas con preferencia sexual diversa, migrantes, y todos aquellos casos que debido a la naturaleza, gravedad y complejidad de los hechos constitutivos de delito o de las personas o derechos tutelados vulnerados, se requiera de un tratamiento especializado, por lo que consideramos que la creación de la unidad administrativa en los términos planteados, traería como consecuencia una duplicidad de funciones.

Otro criterio que se consideró por esta dictaminadora es la falta de un estudio de impacto presupuestal, con respecto a la creación de todo un conjunto de unidades administrativas.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**D I C T A M E N**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se considera no procedente la iniciativa popular con proyecto de decreto que crea el numeral 1.9.5, del apartado 1 del artículo 9; y la creación del artículo 23 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de abril de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 972.74 M2., ubicado en la colonia “Valle Hermoso” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, con objeto de dar certeza jurídica al predio donde actualmente se encuentra el edificio del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, garantizando su existencia y funcionamiento, el cual fue desincorporado con Decreto número 204 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de febrero de 2019.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso, de fecha 12 de febrero de 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 30 de enero de 2020, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 972.74 M2., ubicado en la colonia “Valle Hermoso” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, el cual fue desincorporado con Decreto número 204 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de febrero de 2019.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción de terreno municipal del lote 002, manzana 202, sector 003, ubicado en colonia “Valle Hermoso” de esa ciudad, con una superficie de 972.74 M2., el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Este mide19.85 metros y colinda con Calzada Coahuila, al Norte mide 49.65 metros, al Oeste mide 19.85 metros y colinda con Lote n° 1, al Sur mide 48.45 metros y colinda con el Lote n°. 3.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento de Matamoros, en las oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 54241, Libro 543, Sección I de fecha 08 de febrero de 2006, por transmisión de propiedad a título gratuito.

**TERCERO.** La autorización de esta operación es con objeto única y exclusivamente para dar certeza jurídica al predio donde actualmente se encuentra el edificio del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, garantizando su existencia y funcionamiento. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Matamoros, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, logrando así la posibilidad de dar certeza jurídica al predio donde actualmente se encuentra el edificio del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, garantizando su existencia y funcionamiento, el cual otorgará un beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 972.74 M2., ubicado en la colonia “Valle Hermoso” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, el cual fue desincorporado con Decreto número 204 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de febrero de 2019.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción de terreno municipal del lote 002, manzana 202, sector 003, ubicado en colonia “Valle Hermoso” de esa ciudad, con una superficie de 972.74 M2., el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Este mide19.85 metros y colinda con Calzada Coahuila, al Norte mide 49.65 metros, al Oeste mide 19.85 metros y colinda con Lote n° 1, al Sur mide 48.45 metros y colinda con el Lote n°. 3.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento de Matamoros, en las oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 54241, Libro 543, Sección I de fecha 08 de febrero de 2006, por transmisión de propiedad a título gratuito.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es con objeto única y exclusivamente para dar certeza jurídica al predio donde actualmente se encuentra el edificio del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, garantizando su existencia y funcionamiento. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de marzo de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 192,143.89 M2., ubicados en la “Congregación Hidalgo” en ese municipio, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 309, con objeto de llevar a cabo la construcción del plantel educativo identificado como CBTA No.309, el cual fue desincorporado con Decreto número 343 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 24 de septiembre de 2019.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso, de fecha 12 de febrero de 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 30 de enero de 2020, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 192,143.89 M2., ubicados en la “Congregación Hidalgo” en ese municipio, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 309, el cual fue desincorporado con Decreto número 343 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 24 de septiembre de 2019.

El lote de terreno antes mencionados se identifica como lote 001 de la manzana 01 de la zona 02, (actualmente sector 15) ubicado en el Poblado Congregación Hidalgo y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 989.94 metros y colinda con parcelas del Ejido Congregación Hidalgo.

Al Sureste: mide 200.00 metros y colinda con terrenos particulares.

Al Suroeste: mide 957.11 metros y colinda con terrenos particulares.

Al Noroeste: mide 200.00 metros y colinda con asentamientos humanos de Congregación Hidalgo.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Matamoros, en las oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 147101, Libro 1472, Sección I de fecha 5 de abril de 2011 por adquisición, y bajo la Partida 220400, Libro 2204. Sección I de fecha 24 de mayo de 2016 por lotificación parcial.

**TERCERO.** La autorización de esta operación es con objeto única y exclusivamente para llevar a cabo la construcción del plantel educativo identificado como CBTA No.309. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Matamoros, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, logrando así la posibilidad de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo para llevar formación y una educación digna a los habitantes de ese sector, el cual otorgará un beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 192,143.89 M2., ubicados en la “Congregación Hidalgo” en ese municipio, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 309, el cual fue desincorporado con Decreto número 343 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 24 de septiembre de 2019.

El lote de terreno antes mencionados se identifica como lote 001 de la manzana 01 de la zona 02, (actualmente sector 15) ubicado en el Poblado Congregación Hidalgo y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 989.94 metros y colinda con parcelas del Ejido Congregación Hidalgo.

Al Sureste: mide 200.00 metros y colinda con terrenos particulares.

Al Suroeste: mide 957.11 metros y colinda con terrenos particulares.

Al Noroeste: mide 200.00 metros y colinda con asentamientos humanos de Congregación Hidalgo.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Matamoros, en las oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 147101, Libro 1472, Sección I de fecha 5 de abril de 2011 por adquisición, y bajo la Partida 220400, Libro 2204. Sección I de fecha 24 de mayo de 2016 por lotificación parcial.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es con objeto única y exclusivamente para llevar a cabo la construcción del plantel educativo identificado como CBTA No.309. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de marzo de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 33,405.99 M2., ubicado en la colonia “21 de Marzo” conocido como “El Despepite” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, para ser destinado a la Secretaría de Salud, con objeto de llevar a cabo la construcción de un centro de salud mental, el cual fue desincorporado con Decreto número 345 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 24 de septiembre de 2019.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso, de fecha 12 de febrero de 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 30 de enero de 2020, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 33,405.99 M2., ubicado en la colonia “21 de Marzo” conocido como “El Despepite” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, para ser destinado a la Secretaría de Salud, el cual fue desincorporado con Decreto número 345 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 24 de septiembre de 2019.

El lote de terreno antes mencionados se identifica como fracción del lote 001, manzana 060 del sector 005, ubicado en la calle Constitución N°. 100 entre la calle 21 de marzo y Blvd. Miguel de la Madrid, en la colonia “21 de marzo” conocido como “El Despepite” de esa ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 192.68 metros y colinda con Av. Primavera.

Al Sur: mide 96.18 metros y colinda con carretera Matamoros-Matamoros (Periférico)

Al Oriente: mide 248.39 metros y colinda con Lotes 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 y 48.

Al Poniente: mide 229.71 metros y colinda con la fracción del lote 01.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor superficie a favor del R. Ayuntamiento de Matamoros, en las oficinas del Registro Público de la ciudad de Matamoros del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 221483, Libro 2215, Sección I de fecha 7 de junio de 2016.

**TERCERO.** La autorización de esta operación es con objeto única y exclusivamente para llevar a cabo la construcción de un centro de salud mental. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Matamoros, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la enajenación de la superficie en mención, logrando así la posibilidad de llevar a cabo la construcción de un centro de salud mental, en virtud de las necesidades que demanda la población coahuilense, siendo de suma importancia para las actividades encaminadas a la consolidación de un sistema de atención de salud mental pública con la participación solida del municipio, dándole cobertura a la región, el cual otorgará un beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 33,405.99 M2., ubicado en la colonia “21 de Marzo” conocido como “El Despepite” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, para ser destinado a la Secretaría de Salud, el cual fue desincorporado con Decreto número 345 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 24 de septiembre de 2019.

El lote de terreno antes mencionados se identifica como fracción del lote 001, manzana 060 del sector 005, ubicado en la calle Constitución N°. 100 entre la calle 21 de marzo y Blvd. Miguel de la Madrid, en la colonia “21 de marzo” conocido como “El Despepite” de esa ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 192.68 metros y colinda con Av. Primavera.

Al Sur: mide 96.18 metros y colinda con carretera Matamoros-Matamoros (Periférico)

Al Oriente: mide 248.39 metros y colinda con Lotes 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 y 48.

Al Poniente: mide 229.71 metros y colinda con la fracción del lote 01.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor superficie a favor del R. Ayuntamiento de Matamoros, en las oficinas del Registro Público de la ciudad de Matamoros del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 221483, Libro 2215, Sección I de fecha 7 de junio de 2016.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es con objeto única y exclusivamente para llevar a cabo la construcción de un centro de salud mental. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de marzo de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, “mediante el cual se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del estado, para que promuevan políticas sobre el arte urbano y se brinden espacios públicos específicos para que los jóvenes exhiban sus expresiones artísticas”.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2019, se trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo presentada por las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, planteada por la Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, “mediante el cual se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado, para que promuevan políticas sobre el arte urbano y se brinden espacios públicos específicos para que los jóvenes exhiban sus expresiones artísticas”, y en virtud de que no fue considerada como de urgente y obvia resolución se dispuso que fuera turnada a esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a lo anterior, la Oficialía Mayor de este H. Congreso turnó a esta Comisión, el 17 de enero del presente año, la Proposición con Punto de Acuerdo a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que en la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, señala que existen distintas organizaciones colectivas culturales que se dedican a impulsar el arte urbano como una manera de reintegrar a los jóvenes a la cultura y que además pueden encontrar una motivación para dejar de lado sus problemas ya que mediante el arte urbano los jóvenes encuentran una forma de expresar lo que sienten plasmándolo de una forma artística.

Así mismo se desprende de la Proposición con Punto de Acuerdo que son diferentes ciudades de nuestro país que se han convertido en máximos referente de arte urbano. Que en el municipio de Saltillo se han promovido programas mediante los cuales se ha convocado a artistas de todo el país con el objetivo de hacer murales en espacios públicos y se ha logrado realizar murales en algunos lugares de la ciudad, buscando crear conciencia a los ciudadanos que habitan estos lugares, respecto a la posibilidad de convertir el entorno en un lugar mejor, y hacerlos partícipes del proceso que esto conlleva. Mediante este proyecto dio paso a crear una conexión entre las personas, contar la historia del barrio, produciendo un cambio positivo, y a su vez convirtiéndolo en un lugar atractivo o un punto turístico de la ciudad.

Se desprende del documento en cuestión que recientemente se realizaron diversos trabajos sobre los edificios de la Escuela de Psicología de la UA de C, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, depósitos de Aguas de Saltillo, y otros lugares de la ciudad con un grupo de artistas llamado Tripulaczión, siendo uno de los más prolíficos en cuanto al arte mural.

En virtud de ello, solicita a esta soberanía solicitar a los 38 municipios del Estado, se garantice la creación de políticas públicas que favorezcan la inclusión de jóvenes, para un mejoramiento del tejido social, dotando de áreas específicas, realizando concursos o programas de arte urbano, para que los jóvenes puedan expresarse mediante diversas formas artísticas como el muralismo.

**TERCERO.-** Una vez analizado la solicitud a que hace referencia en la Proposición con Punto de Acuerdo, podemos reconocer que muchos de los movimientos artísticos alrededor del mundo surgieron por una necesidad de expresar, trasmitir pensamientos y creencias sociales y culturales.

Además de que este tipo de arte ayuda a descubrir talentos locales que traen consigo una nueva visión, y la creatividad pura que se representa por medio de sus trazos, colores y dibujos. Al plasmar esta visión en un espacio público, también se logra enviar un mensaje a la sociedad.

En el pasado este tipo de manifestación artística era considerada como “vandalismo”, sin embargo, poco a poco ha tomado fuerza y lugar dentro de nuestra sociedad, convirtiendo las calles en un gran museo lleno de color. Cuando este arte se practica sobre edificios olvidados, los revive y embellece. Tiene el mismo efecto en construcciones o grandes zonas de concreto, provocando que las personas observen con mayor detenimiento lugares que antes pasaban desapercibidos.

Sin dejar de lado que la transformación de un espacio a través del arte urbano tiene como principal objetivo la participación y cooperación activa de los ciudadanos, que en su mayoría son jóvenes buscando una forma de alejarse de los problemas sociales. Por ello es importante buscar la interacción y uso del diálogo que se logra dar al participar en este tipo de movimientos de arte, y lograr crear fuertes lazos entre los miembros de la comunidad.

En ese sentido, esta Comisión estima que la Proposición con Punto de Acuerdo puede aprobarse en un sentido positivo, solicitando a los Ayuntamientos de nuestro Estado promuevan políticas públicas sobre el arte urbano, además de que en la medida de lo posible coadyuven y apoyen en la creación o asignación de espacios públicos para la exhibición de dicho arte.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se exhorta a los Ayuntamientos del Estado de Coahuila a que promuevan políticas públicas sobre el Arte Urbano y se brinden en la medida de sus posibilidades espacios públicos específicos para que los jóvenes exhiban sus expresiones artísticas.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a marzo de 2020.

**POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN(SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |

**Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la** **Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Josefina Garza Barrera, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se** **adiciona el artículo 33 Bis, a la Ley para la Protección de los No Fumadores en el Estado de Coahuila, con objeto de prohibir el uso y comercialización de cigarros electrónicos en la Entidad.**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Honorable Pleno del Congreso del Estado, el día 16 de octubre de 2019, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de dicha iniciativa con proyecto de decreto.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, la iniciativa contenida en el presente dictamen, para efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 Bis, a la Ley para la Protección de los No Fumadores en el Estado de Coahuila, con objeto de prohibir el uso y comercialización de cigarros electrónicos en la Entidad, conforme a la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*La popularidad de los cigarrillos electrónicos que permiten la inhalación de líquidos con nicotina y saborizantes ha generado una gran alerta a los legisladores de todo el mundo, y se dice que esta tendencia es la puerta de entrada a nuevas adicciones para los jóvenes.*

*Además de los riesgos a la salud que los sistemas electrónicos de nicotina representan, estos son indudablemente dañinos y deben forzosamente estar sujetos a regulación.*

*No solamente en México se está hablando de la adicción y daños a la salud que están causando los vaporizadores electrónicos o cigarros electrónicos. En España, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social inició una campaña contra el tabaquismo en todas sus presentaciones incluyendo el vapeo.*

*En los Estados Unidos de América el Presidente Donald Trump y tras constatarse una serie de muertes y enfermedades relacionadas al uso de cigarrillos electrónicos, anunció este pasado mes de septiembre que su gobierno planea prohibir los vapeadores.*

*La Organización Mundial de la Salud ha incitado a los países a prohibir el uso de los cigarros electrónicos, en tanto las investigaciones científicas no arrojen más luz sobre los riesgos de estos productos.*

*En Europa, muchos son los Estados que se rigen por su legislación general sobre el tabaco. Mientras que, en países como Argentina y México la venta y la promoción de los vaporizadores están prohibidas, sin embargo, su uso no.*

*En nuestro país su comercialización se encuentra prohibida, ya que el artículo 16 fracción VI de la Ley General para el Control del Tabaco establece la prohibición para comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco. Denotándose que lo que no está prohibido es su consumo, lo cual deja la facilidad de que continúe la venta de estos productos en vez de frenarla.*

*Por ello es común encontrar negocios que se dedican exclusivamente a la promoción de productos y accesorios para vapear, inclusive en estos lugares se permite y se invita a los consumidores a probar los dispositivos electrónicos.*

*En el Estado de Coahuila contamos con la Ley para la Protección de los No Fumadores, misma que entre sus objetivos se encuentra el establecer acciones que procuren reducir los daño a la salud de las personas derivado del consumo de productos del tabaco; y también establece la prohibición de la venta de tabaco a menores de edad, entre otras disposiciones.*

*Además, el artículo Cuarto Transitorio de la Ley General para el Control del Tabaco establece la obligación de los Estados de la Republica Mexicana de adecuar las leyes y demás disposiciones jurídicas con la finalidad de ser congruentes con dicha ley.*

*En ese contexto es de gran importancia que se incluya y se adecue en nuestra legislación la prohibición contemplada en la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe la comercialización de los objetos que no son producto del tabaco, es decir los cigarrillos electrónicos, además de prohibir su uso, tomando en cuenta las alertas generadas por los daños a la salud que están causando estos sistemas electrónicos o vapeadores a nivel mundial.*

*Es decir, buscamos impedir que las personas no fumadoras y los jóvenes adopten el hábito de utilización de este tipo de dispositivos, proteger a terceros y especialmente a menores en el entorno de las emisiones del vapor generado por los cigarrillos electrónicos, erradicar los riesgos para la salud que generan dichos dispositivos, y restringir su uso y libre venta ante los cuestionamientos a las afirmaciones sin fundamento de las supuestas propiedades saludables de estos productos, que se utilizan claramente para su fácil comercialización.*

*Permitamos que sea nuestro Estado un ejemplo a nivel nacional en la prohibición del uso de los cigarrillos electrónicos o vapeadores que están ocasionando graves daños a la salud de las personas.*

**TERCERO. –** Que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición, convenimos en que el presente planteamiento contiene bases suficientes, no sólo para prohibir en Coahuila su proliferación y consumo, sino también para armonizar, en tal sentido, la Ley para la Protección de los No Fumadores del Estado Coahuila de Zaragoza con la Ley General para el Control del Tabaco.

Este último ordenamiento, en su Título Segundo, sobre *Comercio, Distribución, Venta y Suministro de los Productos del Tabaco*, establece textualmente lo siguiente: *Artículo 16. Se prohíbe: (...) VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco*.

La razón de fondo para establecer dicha prohibición en la Entidad estriba en que está comprobado fehacientemente en varios países que el consumo de dicho producto representa serios riesgos para la salud.

Ello motivó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a advertir reiteradamente acerca de que la venta de cigarrillos electrónicos es Ilegal en México, toda vez que ninguno ha sido avalado como dispositivo seguro para los fumadores, así mismo, tampoco se ha comprobado científicamente que sean útiles para dejar de fumar.

Por consiguiente, en algún momento el organismo también emitió cartas de advertencia a tiendas departamentales y autoridades sanitarias estatales y suspendió la publicidad y venta de cigarrillos electrónicos en algunas páginas de internet, entre ellas la denominada “Vapeadores Electrónicos”, por infringir precisamente lo dispuesto en el artículo 16, fracción VI de la Ley General para el Control del Tabaco.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa contenida en el presente dictamen, por lo que expide y, a su vez, pone a consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se adiciona el Artículo 33 BIS a la Ley para la Protección de los No Fumadores del Estado Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 33 BIS. - Se prohíbe el uso, comercio, venta, distribución, exhibición, así como la promoción o producción de cigarros electrónicos o cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.**

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados y Diputadas que integran la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la LXI Legislatura del Congreso del Estado: José Benito Ramírez Rosas (coordinador), Zulmma Verenice Guerrero Cázares (secretaria), Josefina Garza Barrera, Rosa Nilda González Noriega y Fernando Izaguirre Valdés.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 25 de marzo de 2020.**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la Honorable LXI Legislatura del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, por el que se** **adicionan la fracción V del artículo 3º, la fracción XXVII del artículo 11 y la fracción XI del artículo 25, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de arborización.**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Honorable Pleno del Congreso del Estado, el día 30 de octubre de 2019, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de dicha iniciativa con proyecto de decreto.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, la iniciativa contenida en el presente dictamen, para efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción V del artículo 3, la fracción XXVII del artículo 11 y la fracción XI del artículo 25, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de arborización, al tenor de la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*Es obligación de esta soberanía, como órgano que por antonomasia representa los intereses de las y los coahuilenses, construir una legislación que considere al árbol como parte integral de la ciudad, con el fin de hacer frente a las problemáticas ambientales que estamos padeciendo a nivel mundial, que se traducen, entre otras cosas, en el calentamiento del planeta, el cual genera otros problemas de impacto en el aire, agua, suelo, plantas y animales.*

*En una inercia paralela, es fundamental que este órgano legislativo en conjunto con los gobiernos - en sus tres niveles: federal, local y municipal-, implementen acciones para desarrollar y fomentar estrategias dirigidas a tratar de minimizar la crisis ecológica que pone en riesgo la vida misma y la estabilidad del planeta.*

*Así reconoce y establece el Ejecutivo Estatal en el Programa de Medio Ambiente 2017-2023 donde reconoce la importancia de áreas verdes en zonas urbana:*

*“En el estado las áreas verdes urbanas son un elemento importante para la población ya que representan zonas de recreación, contribuyen en la mejora de calidad de aire, son áreas que disminuyen en un porcentaje la contaminación, regulan el microclima urbano y funcionan como hábitat de la fauna. Sin embargo, el crecimiento de la mancha urbana, sin considerar la creación de suficientes áreas verdes, son factores que influyen en el escaso número de estas zonas que son de vital importancia.*

*“Otro de los problemas que se suscitan es el uso de especies introducidas que a largo plazo resultan desfavorables, ya que generalmente requieren mayor mantenimiento y son susceptibles a plagas y enfermedades. Por ello, es necesario consolidar programas de reforestación urbana con el uso de especies nativas, así como establecer acciones de mantenimiento de las áreas”.*

*En ese sentido y atendiendo la voluntad del Ejecutivo Estatal y los municipios de fortalecer un marco jurídico que fortalezca el cuidado del medio ambiente, es que consideramos que la arborización de las zonas urbanas de cada uno de los municipios de nuestra entidad, en consonancia con otras estrategias complementarias, es una solución para combatir los problemas ambientales y poder lograr un equilibrio ecológico del planeta.*

*De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por arborizar “poblar de árboles un terreno”. Etimológicamente, esta palabra procede del latín “arbor” o del sustantivo “árbol” y del sufijo “izar” que indica poner en el estado de.*

*Así, un árbol es una planta formada por la raíz, tronco, hojas, ramas y la copa. Entre sus principales funciones son: reducción de la contaminación del aire y sonora, regulación hídrica y térmica, regulación del clima, hábitats de animales y plantas, entre otras funciones de equilibrio natural.*

*Los árboles, como bien sabemos, tienen un sinnúmero de beneficios para la subsistencia de la especie humana. Entre ellos, los árboles batallan contra muchos problemas del medio ambiente como el calentamiento global, la erosión, desertificación, combustibles fósiles, contaminación del aire, la deforestación, incendios forestales, entre muchos otros que están terminando con la calidad y el oxígeno de la tierra.*

*Por lo tanto, ante la deforestación, tala de árboles y la contaminación ambiental, el planeta necesita urgentemente de árboles que permitan conseguir oxígeno y mantener una calidad ambiental para la supervivencia de todas las especies que habitan este mundo. Los árboles son los pulmones del planeta absorbiendo los gases invernaderos y se convierten en ecosistemas para la diversidad biológica.*

*En consecuencia, dado lo indispensable que resultan los árboles para conservar un medio ambiente adecuado, atendiendo al adverso contexto climático que se vive a nivel mundial, es importante planificar, desde el ámbito municipal, planes específicos y estratégicos que promuevan la plantación de árboles garantizando en todo momento que cuenten con el espacio adecuado para establecerse y lograr un correcto desarrollo.*

*Los planes de arborización municipal tienen como objeto garantizar a la población urbana del estado la protección de su derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo de sus actividades y la mejora de su calidad de vida asegurando que los municipios del estado puedan enfrentar los efectos del cambio climático mediante una política que asegure la educación ambiental de la población así como la conservación, mantenimiento, protección, restitución, fomento y desarrollo de los árboles urbanos.*

*Sin embargo, las actividades tendientes a la plantación de árboles requieren de un plan debidamente estructurando, que cuente con una metodología de plantación de árboles en áreas urbanas. Existen diversos factores que determinan el éxito de una arborización. En primer lugar, es necesario planificar la arborización en términos de ordenar las actividades, y los recursos humanos, financieros y materiales para alcanzar los objetivos propuestos, los cuales están en relación a las potencialidades y limitaciones de un área determinada.*

*Hay tres variables que debemos considerar para alcanzar los éxitos de un programa de arborización: 1) cuál es el objetivo del programa; 2) determinar las características del sitio o lugar donde se implementará el mismo y 3) las características de la especie que se utilizará para lograr el objetivo.*

*Al analizar las tres variables se desprende el proceso de selección que se resume en una gran pregunta que es: ¿Qué planta posee las características que cumpla con los objetivos y que adapte las características del lugar de plantación?, es decir, la selección del árbol apropiado para el sitio apropiado respetando los objetivos propuestos.*

*Para asegurar el éxito de cualquier proyecto es necesario conocer las características esenciales de cada especie, ya que cada una tiene distintos requerimientos de agua, suelo, luz, temperatura y espacio, por lo tanto, el lugar que esta ocupará en terreno, así como también la época, los materiales y herramientas necesarias para realizar una buena plantación deben ser considerados antes de adquirir las plantas.*

*Consideremos que en este contexto lo más probable es que el espacio o sitio disponible nos oriente la especie a seleccionar, es decir, analizar las actividades de pre plantación de la planta, el tipo de contenedor y la calidad de la planta, así como también el transporte y prácticas o técnicas de plantación y cuidados post plantación.*

*Por supuesto, como en todo proyecto de esta naturaleza, existen factores limitantes como la ecofisiología del árbol, la calidad de la planta, el suelo y las adecuadas prácticas de plantación como determinantes del éxito de la plantación; el espaciamiento, la normativa vigente, la producción y comercialización de la planta en vivero, y el transporte.*

*En este sentido, cada uno de los ayuntamientos, con el fin de implementar un plan para arborizar eficaz, deberán hacer un análisis del suelo, las características climáticas del sitio y potencial genético de la planta, seleccionar la especie y forma de producción que mejor se adapte al sitio y cumpla con los objetivos propuestos e implementar la estrategia para un adecuado transporte de la misma.*

*Finalmente, es necesario abordar las técnicas adecuadas de plantación y cuidados posteriores de los árboles, como los son el riego, la fertilización y la poda y, en su caso, el derribo o trasplante.*

*Marco jurídico*

*La Declaración de Estocolmo, de 1972, resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano también conocida como “Una sola Tierra”, busca dar solución a los problemas ambientales que comenzaron a ser percibidos con preocupación por parte de los estados en particular y de la comunidad internacional en general, como la degradación del ambiente, mediante la pérdida creciente de la calidad y disponibilidad de los recursos naturales.*

*Entre sus principios fundamentales, que fueron emitidos con el fin de que los Estados parte emprendieran las acciones necesarias para atenderlos, encontramos los siguientes: la preservación de los recursos naturales; mantener la capacidad de la tierra para producir recurso renovables; la contaminación no debe exceder la capacidad propia del medio ambiente; el desarrollo es indispensable para mejorar la calidad del medio ambiente; deben aplicar la planificación de asentamientos humanos con miras a eliminar problemas ambientales; las instituciones nacionales competentes deben planificar la utilización de los recursos ambientales naturales en los Estados y la necesidad de ofrecer educación ambiental.*

*En esta misma lógica, la Organización de las Naciones Unidas emitió el Programa 21, el cual se gestó en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro, en 1992, conocida también como la “Cumbre de la Tierra”, cuyos tres objetivos primordiales giran en torno a la sostenibilidad medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico. En cuanto a la agenda medioambiental el programa tiene como objetivos: la protección de la atmósfera; la planificación y ordenación de los recursos de la tierra; la lucha contra la deforestación; la lucha contra la desertificación y la sequía; el desarrollo sostenible de las zonas de montaña y la conservación de la diversidad biológica.*

*México es firmante de ambos instrumentos internacionales, por lo que, como entidad federativa, estamos obligados a emprender las políticas, acciones y actividades tendentes a la consecución de sus objetivos.*

*En el ámbito nacional, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Agrega que el Estado garantizará el respeto a este derecho, y que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.*

*Por su parte el artículo 172 de la Constitución Política para el Estado de Coahuila de Zaragoza establece que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Asimismo, dispone que el Estado y los Municipios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Por último, señala que para quienes violen lo antes señalado, se establecerán sanciones penales, o en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño.*

*Por su parte, el artículo 67, fracción XXXII de la Constitución local dispone que es atribución del Poder Legislativo expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Estado y los Municipios, en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico.*

*El artículo 158-U del mismo ordenamiento, establece que los Ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones respecto a preservar, conservar y restaurar el medio ambiente.*

*En cuanto al Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza, el artículo 102, fracción III, párrafo 5, señala que los municipios tienen como facultad preservar, conservar y restaurar el medio ambiente.*

*Asimismo, el artículo 142, fracción V, del referido marco legal, dispone que la planeación del desarrollo municipal tiene los objetivos, entre otros, promover la protección y conservación del medio ambiente. Además, el artículo 163 señala que el desarrollo urbano municipal, se entiende como el desenvolvimiento integral de los asentamientos humanos ubicados en el territorio municipal, e implica la preservación y mejoramiento del suelo y del medio ambiente que propicie el bienestar general de la población. Es un proceso en que se coordinan los gobiernos federal, estatal y municipal, correspondiendo a este último planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación de la urbanización y de los asentamientos humanos, de acuerdo con el desarrollo socio-económico del municipio y enmarcado dentro del orden jurídico establecido.*

*Por otro lado, el artículo 7, fracción IV de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, señala que son autoridades en materia ecológica los ayuntamientos de la entidad por conducto de sus presidentes municipales, a través de los órganos o unidades administrativas de los propios municipios.*

**TERCERO. –** Que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición, estamos de acuerdo con sus términos, mismos que coinciden con las siguientes consideraciones:

Tanto por razones inherentes al calentamiento global, fenómeno que es urgente contrarrestar, como por la necesidad de cumplir con una serie de ordenamientos legales en materia ecológica, urbanismo y de derechos humanos, como los señalados en el planteamiento en cuestión, convenimos en que es importante promover dentro el marco legal correspondiente lo que toca a la arborización de las zonas urbanas del Estado, que, en general, registran un marcado déficit en el renglón de áreas verdes.

Por otra parte, consideramos que el concepto de arborización en la ley es adoptado en un buen momento, con la idea, incluso, de verlo reflejado en la ejecución de los planes municipales para la plantación de árboles, esto, bajo la normatividad establecida para tal efecto por las instancias respectivas.

Según el Documento Diagnóstico de Rescate de Espacios Públicos, publicado por la Secretaría de Desarrollo Social, hoy en día existe un importante déficit de espacios públicos y áreas verdes en prácticamente todo el país, lo que afecta negativamente el bienestar de las personas.

Por ejemplo, en Saltillo se tienen registrados 6.5 m2 de áreas verdes por habitante (no todas suficientemente arborizadas); en la Ciudad de México la relación es de 5.4m2, en Chihuahua de 4.9m2, en Juárez 4.8m2, en Guadalajara 4.7m2, en Querétaro 4.6 m2, en Monterrey 3.9m2 y en Naucalpan 3.1m2, cuando el parámetro internacional es 9 m2 por habitante.

Esta situación adquiere mayor relevancia al analizar la estructura poblacional del país en la que el grupo de entre 5 y 20 años de edad representa aproximadamente el 31% de la población total. La gran cantidad de niños y jóvenes hace que la insuficiencia de espacios públicos para el esparcimiento y la recreación sea aún más crítica, si consideramos que en muchos casos esas áreas no cuentan con árboles suficientes.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa contenida en el presente dictamen, por lo que expide y, a su vez, pone a consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se adicionan la fracción V del artículo 3º, recorriéndose las fracciones subsecuentes; la fracción XXVII del artículo 11, recorriéndose la fracción subsecuente; y la fracción XI del artículo 25, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar de la forma siguiente:

ARTICULO 3º. - Para los efectos de esta ley se entiende por:

(…)

**V.- Arborizar: Poblar de árboles con las especificaciones prevista en la Ley.**

ARTICULO 11.- Para lo dispuesto en esta ley, los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:

(…)

**XXVII.- Expedir el plan de arborización del municipio.**

XXVIII.- Atender los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente determine esta ley u otros ordenamientos aplicables.

ARTICULO 25.- El Programa de Ordenamiento Ecológico municipal deberá contener:

(…)

**XI.- El plan de arborización municipal, atendiendo las características particulares de cada municipio y tomando en consideración las condiciones del suelo, el sitio o lugar adecuado para arborizar, condiciones climáticas, de equipamiento urbano, la selección de la especie, la calidad del árbol, el medio para transportarlas, las técnicas de plantación particulares y los procedimientos para implementar los cuidados posteriores.**

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** Las presentes adiciones de la fracción V del artículo 3º, la fracción XXVII del artículo 11 y la fracción XI del artículo 25, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Los ayuntamientos deberán actualizar, dentro de un periodo máximo de 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Programa de Ordenamiento Ecológico municipal con el fin de incluir el plan de arborización municipal.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 25 de marzo de 2020.**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la Honorable LXI Legislatura del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se adiciona el artículo 16 Bis a la Ley para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso y la Obesidad para el Estado de Coahuila, con el objeto de reforzar las acciones de prevención de la obesidad infantil y juvenil.**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Honorable Pleno del Congreso del Estado, el día 16 de octubre de 2019, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de dicha iniciativa con proyecto de decreto.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, la iniciativa contenida en el presente dictamen, para efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 16 Bis a la Ley para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso y la Obesidad para el Estado de Coahuila, con el objeto de reforzar las acciones de prevención de la obesidad infantil y juvenil, en función de la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*La obesidad infantil y juvenil es uno de los más graves problemas de salud pública del siglo XXI. Su prevalencia va aumentando con un ritmo realmente alarmante. El sobrepeso y la obesidad entre las niñas, niños y adolescentes que rondan entre los cinco y los diecinueve años de edad se ha multiplicado por diez durante los últimos cuatro últimos decenios. En tanto, el número de niños obesos o con sobrepeso de 5 años o menos aumentó de 32 millones en el año 1990 a 41 millones en el 2016 de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si continúan las tendencias actuales, el número de niños con sobrepeso u obesos en ese grupo de edad podría aumentar a 70 millones para el año 2025.*

*Por lo que hace a las cifras en México, 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años, y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y en comunidades urbanas.*

*Entre la población infantil y juvenil es más frecuente que se presente la obesidad nutricional a consecuencia de una ingesta excesiva de energía y un reducido gasto calórico, seguida de la obesidad orgánica que se encuentra asociada frecuentemente a síndromes dismórficos, patologías del sistema endocrino y lesiones del sistema nervioso central.*

*Para combatir la obesidad en la infancia y la adolescencia es necesario examinar el contexto ambiental y los tres periodos cruciales del curso de vida: la pregestación y el embarazo; la lactancia y la primera infancia; y los años posteriores de la infancia y la adolescencia. Además, es importante tratar a los niños que ya son obesos, por su propio bienestar y por el de sus descendientes.*

*Ante esto, es de suma importancia señalar que cada aspecto del entorno en que el sector infantil y juvenil se desarrolla juega un papel primordial en su bienestar, siendo las escuelas y espacios educativos instituciones privilegiadas para sentar los cimientos para el bienestar nutricional de los menores en esta edad formativa.*

*La publicidad y mercadotecnia de alimentos y bebidas que ronda las instituciones académicas, principalmente al sector estudiantil, suele centrarse en productos ricos en grasas, azúcar o sal lo que influye en las preferencias alimenticias y las pautas de consumo de este sector de la población.*

*En este sentido, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado para alentar a los países a esforzarse por modificar los factores del entorno que aumentan el riesgo de sobrepeso y obesidad en las niñas, niños y adolescentes.*

*La presente iniciativa es congruente con la recomendación formulada en la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimenticio, Actividad Física y Salud aprobada por la Asamblea de la Salud en 2004, y su objetivo principal es consolidar a las escuelas, guarderías, centros de cuidado infantil, centros deportivos y demás entornos de desarrollo de los niños y jóvenes como ambientes de alimentación sana, eliminando la promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres o sal. Con ello reduciremos la exposición de los niños y adolescentes a la promoción e influencia de alimentos poco nutritivos o con elevado contenido de grasas y azúcar.*

*Las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", somos conscientes de la necesidad de integrar y fortalecer las estrategias de prevención de las enfermedades no transmisibles.*

*La obesidad infantil socava el bienestar físico, social y psicológico de los niños y es un conocido factor de riesgo para diversas enfermedades en la edad adulta. Si se combate este problema desde la primera infancia y la adolescencia, avanzaremos hacia una sociedad más sana.*

*Es menester atender esta problemática de salud pública con acciones inmediatas a través de estrategias de prevención y sumar a todas las instituciones involucradas en el desarrollo de niños y jóvenes para reconocer su responsabilidad y actuar en nombre de los niños para reducir el riesgo de obesidad, apoyando un régimen alimentario saludable en las escuelas y al interior del núcleo familiar.*

**TERCERO. –** Que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición de motivos, convenimos en general respecto de que, según estudios muy serios, realizados por expertos en nutrición e impacto publicitario, es un hecho que, de algún modo, la publicidad también engorda.

La industria alimentaria, como cualquier otro sector interesado en comercializar sus productos y servicios, ha redoblado sus esfuerzos para aprovechar al máximo lo que tiende a ser un segmento de ventas cautivo, como es la población infantil, para lo cual emplea toda clase de trucos promocionales y cualquier medio o espacio para anunciar sus alimentos, generalmente carentes de nutrientes y sobrecargados de ingredientes que causan peso excesivo y obesidad en los infantes que los consumen.

*El exceso de peso se ha convertido en una losa terrible, asociada a todo tipo de dolencias y enfermedades que acortan la vida, y que ningún país logra conjurar. Un mal que se inocula cuando todavía somos niños y que se transmite con especial virulencia a través de la pantalla televisiva (y ahora también por internet) engorda*, advirtió recientemente la revista The Lancet, en una publicación especial sobre el tema, aportando un dato escalofriante: *Los menores reciben 7 mil 500 impactos al año de mensajes que les dicen que coman productos que no son saludables*.

*“Son muchísimas las evidencias científicas del gran poder de influencia que la publicidad tiene sobre la alimentación de los menores”*, asegura Miguel Ángel Royo-Bordonada, investigador académico sobre este problema.

Cuando hablamos de alimentos dañinos para los menores, nos referimos, por ejemplo, a golosinas, galletas, cereales azucarados para el desayuno, panecillos, batidos, helados y otros lácteos, cacao y golosinas, comida rápida, aperitivos salados y refrescos, todos por lo general ricos en calorías, bajos en nutrientes y con alto contenido en azúcar, grasa y sal.

Un escolar de entre seis y doce años ve 25 anuncios de comida cada día y el 75% son de productos que no debería consumir habitualmente, pero termina haciéndolo, casi siempre porque sus progenitores caen en reclamos que les confunden cuando quieren comprar lo más saludable a sus hijos.

Así, entonces, es tiempo de cumplir con el criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), referente a retirar de las pantallas tres cuartas partes de los anuncios, como lo ha señalado Royo-Bordonada. Ante esto, persiste el planteamiento de por qué no retirar también de la vista de los menores los anuncios de comida no nutritiva que se colocan en los centros educativos o en torno a estos.

Un estudio británico encontró que, por cada hora adicional de televisión observada los fines de semana con cinco años aumentaba en un 7% el riesgo de obesidad en la edad adulta. Se ha calculado que hasta un tercio de los niños con sobrepeso y obesidad no lo serían si no estuvieran expuestos a la publicidad alimentaria, que luego se reproduce impresa.

Es pertinente destacar que diversos estudios revelan que el desarrollo de enfermedades crónicas se establece durante la infancia y la adolescencia, por lo que un estilo de vida saludable durante estas etapas es fundamental para prevenir padecimientos futuros.

Según la Organización Mundial de la Salud en 2016 había más de 381 millones de niños y adolescentes que tenían sobrepeso o eran obesos. En el caso de México, la edición 2016 de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), realizada de manera conjunta por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud Federal, reportó que 3 de cada 10 menores de entre 5 y 11 años padecen sobrepeso u obesidad y que casi 4 de cada 10 adolescentes 12 a 19 años presenta sobrepeso u obesidad.

El artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De igual manera, dispone que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, éste velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Reconocemos el interés del proponente en cuanto a coadyuvar a garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes y atendiendo el interés superior de la niñez, a través de prohibir la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética a la que puedan estar expuestas las personas menores de edad, particularmente en los centros escolares, donde este asunto había pasado un tanto desapercibido.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa contenida en el presente dictamen, por lo que expide y, a su vez, pone a consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se adiciona el artículo 16 Bis a la Ley para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso y la Obesidad para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar de la siguiente manera:

**Artículo 16 Bis. El Estado y los ayuntamientos promoverán que los entornos educativos y sus respectivas áreas de esparcimiento para niñas, niños y adolescentes estén libres de toda forma de promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres o sal. Dichos entornos incluyen, sin carácter limitativo, escuelas, guarderías, centros de cuidado infantil, terrenos escolares, centros deportivos, recreativos y culturales.**

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados y Diputadas que integran la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la LXI Legislatura del Congreso del Estado: José Benito Ramírez Rosas (coordinador), Zulmma Verenice Guerrero Cázares (secretaria), Josefina Garza Barrera, Rosa Nilda González Noriega y Fernando Izaguirre Valdés.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 25 de marzo de 2020.**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se** **adiciona la fracción VI al artículo 56 de la Ley Estatal de Salud, a fin de proteger la salud materno infantil.**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Honorable Pleno del Congreso del Estado, el día 23 de octubre de 2019, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de dicha iniciativa con proyecto de decreto.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, la iniciativa contenida en el presente dictamen, para efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 56 de la Ley Estatal de Salud, a fin de proteger la salud materno infantil, al tenor de la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*Cada día mueren en todo el mundo aproximadamente 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Tan solo en el año 2015 se estimaron alrededor de 303,000 muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos; sin duda el número más alto de muertes maternas en algunas áreas del mundo refleja inequidad en los accesos a los servicios de salud y la mayoría de ellas podrían haberse evitado.*

*Muchas mujeres mueren por complicaciones que suelen aparecer durante el periodo de gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria a la mujer.*

*De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) las principales causas directas de defunciones maternas, representando el 75 por ciento, son las hemorragias graves, en su mayoría tras el parto; las infecciones, generalmente tras el parto; complicaciones en el parto; los abortos peligrosos y la hipertensión gestacional, conocida como preeclampsia y eclampsia. Estos últimos se consideran a nivel mundial como las causas que reflejan del 12 por ciento al 25 por ciento del total de defunciones.*

*Se calcula que anualmente mueren en el mundo 50,000 mujeres por preeclampsia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que cada siete minutos muere una mujer por esta causa. Por su parte, en nuestro país la preeclampsia representa hasta 34% del total de las muertes maternas, por lo que constituye la principal causa de muerte asociada a complicaciones del embarazo. Cabe mencionar que las tres principales causas de muerte materna debidas a la preeclampsia son las hemorragias cerebrales (46%), el síndrome de HELLP (12%) y las coagulaciones intravasculares diseminadas.*

*Generalmente la preeclampsia y la eclampsia suelen manifestarse a partir de la vigésima semana del embarazo y su frecuencia aumenta conforme avanza la edad gestacional, por lo que se estima que la mitad de los casos ocurren en los embarazos de término. Sin embargo, cuando estas complicaciones aparecen de manera prematura a menudo se trata de casos de mayor severidad.*

*Dentro de las complicaciones de esta enfermedad se encuentra la eclampsia, definida como la presencia de convulsiones o estado de coma en pacientes con preeclampsia después de la semana 20 de gestación, parto o en las primeras 6 semanas después de éste, en ausencia de otras causas de convulsiones.*

*Ante este grave panorama, la preeclampsia debe ser detectada, atendida y tratada adecuadamente antes del comienzo de convulsiones (eclampsia) o de otras complicaciones que ponen en riesgo la vida de la madre y su bebé. Para reducir la mortalidad materno-infantil se requiere del acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto y a la atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto.*

*La mayoría de las muertes maternas son evitables mediante la aplicación de soluciones efectivas para la prevención, atención y tratamiento de las complicaciones durante el periodo gestacional. Es menester beneficiar en todas las mujeres los cuidados de la salud materno-infantil y reforzar las acciones para el acceso a los servicios del cuidado maternal.*

*Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario “Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, pretendemos con la siguiente iniciativa con proyecto de decreto prevenir los trastornos hipertensivos del embarazo que comúnmente avanzan a etapas más complicadas de la enfermedad, evitando la concurrencia de lamentables consecuencias.*

**TERCERO. –** Que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición, estamos de acuerdo con sus términos, mismos que coinciden con las siguientes consideraciones:

Es sabido que la mortalidad materna en México, como en muchos otros países del mundo en desarrollo, constituye un problema real de salud pública, y es motivo de gran preocupación para los gobiernos, las instituciones y la sociedad.

Efectivamente, la preeclampsia-eclampsia continúa siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad materno-fetal, debido a los efectos y consecuencias que ocasiona en órganos y sistemas corporales, como el nervioso central, hígado, corazón, riñón y en la coagulación.

Según información de la Secretaría de Salud, aunque la etiología de la preeclampsia/eclampsia aún no se conoce con precisión, la prevención y tratamiento oportuno juegan un papel muy importante para evitar la muerte por esta patología.

Debe ponerse especial atención, primeramente, en acciones educativas y de autocuidado que permitan la detección oportuna para realizar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. En este sentido, el control prenatal, la referencia de los casos y la atención de la urgencia obstétrica revisten una vital importancia, señalan los especialistas en el tema.

Los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaría de Salud para la prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia-eclampsia, han dado pie a la actualización permanente de los prestadores de servicios para beneficio de las condiciones de salud de la población, pero esta relevante tarea nunca será suficiente.

En tal virtud, se considera de suma importancia el planteamiento del promovente, enfocado precisamente a reducir a su mínima expresión los riesgos que podría conllevar una atención inadecuada o fuera de tiempo a las pacientes con preeclampsia y eclampsia.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa contenida en el presente dictamen, por lo que expide y, a su vez, pone a consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se adiciona la fracción VI artículo 56 de la Ley Estatal de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 56. …

I. a la V. …

**VI. La prevención de la** **preeclampsia y eclampsia. En el caso de la detección de estas enfermedades canalizar a la mujer a instituciones de salud especializadas para su oportuna atención y tratamiento.**

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados y Diputadas que integran la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la LXI Legislatura del Congreso del Estado: José Benito Ramírez Rosas (coordinador), Zulmma Verenice Guerrero Cázares (secretaria), Josefina Garza Barrera, Rosa Nilda González Noriega y Fernando Izaguirre Valdés.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 25 de marzo de 2020.**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional” con el objeto de que esta Soberanía realice un respetuoso exhorto al Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Ingeniero Salvador Hernández Vélez, así como a las Universidades Privadas del Estado, y a las que se aglutinan en el Organismo denominado Comunidad de Instituciones de Educación Superior de la Laguna, “CIESLAG”, a través de su Presidenta la Maestra Martha Silvia Argüelles, para que en sus planes académicos puedan implementar las carreras técnicas o profesionales que se requieren para atender a aquellas personas que padecen del trastorno Autista en nuestro Estado, dada la falta de profesionistas certificados para atender a los que padecen la condición del Autismo, lo anterior con base en las siguientes:**

**CONSIDERACIONES:**

Tal y como lo ha declarado la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de sus distintos titulares, el Autismo es una condición permanente que afecta a millones de personas en todo el mundo, pero lamentablemente tal padecimiento aún no está bien comprendido en muchos países, incluido entre ellos México, en donde evidentemente todavía existen comunidades donde se excluye a las personas Autistas.

Esas actitudes, además de constituir una grave violación a los derechos humanos de las personas con esa condición, tales conductas además de reprobables conllevan a una posible y real perdida del potencial humano que poseen los Autistas, puesto que dichos sujetos poseen de forma natural una amplia gama de capacidades y competencias que dejan huella en las distintas áreas que son de su interés, en las que mediante su inteligencia y voluntad aportan mucho a la comunidad para hacer de este mundo un mundo mejor.

**Ahora bien, el día 02 de abril de cada año, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo,** ocasión propicia que nos brinda la oportunidad para honrar la creatividad de las personas con trastornos del espectro autístico, y de renovar nuestro compromiso de ayudarlas a realizar su gran potencial, de ahí, que valga la pena resaltar que este órgano parlamentario a través de la Junta de Gobierno, hayan autorizado que durante el mes de abril, se ilumine la fachada de nuestro congreso con el color distintivo del espectro autista.

En ese sentido, ahora merecen toda nuestra atención, no nada más las personas afectadas por el autismo, sino también sus padres, hijos, maestros y amigos. Su fortaleza es fuente de inspiración y merecen todas las oportunidades posibles de educación, empleo e integración.

Para medir cuánto han prosperado nuestras sociedades, debemos examinar cuán bien hemos integrado como miembros plenos y valiosos a las personas con capacidades diferentes, incluidas las personas con autismo.

La educación y el empleo son fundamentales para todos; la escuela conecta al niño con su comunidad, y el empleo conecta al adulto con su sociedad. Las personas con autismo merecen recorrer el mismo camino. Al incluir en escuelas ordinarias y especializadas a niños con diferentes capacidades de aprendizaje, podemos cambiar las actitudes y promover el respeto. Creando empleos adecuados para adultos con autismo, los integramos en la sociedad.

En estos momentos de dificultades económicas, los gobiernos deberían seguir invirtiendo en servicios que beneficien a las personas con autismo, al empoderarlas, beneficiamos a las generaciones actuales y futuras.

Lamentablemente, en muchas partes del mundo, se les niegan a esas personas sus derechos humanos fundamentales; deben afrontar la discriminación y la exclusión. Incluso allí donde se garantizan sus derechos, muy a menudo han de luchar para obtener servicios básicos.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proporciona un marco sólido para la adopción de medidas encaminadas a crear un mundo mejor para todos.

En ese sentido, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo no tiene nada más por único objeto generar comprensión; es también una llamada a la acción a todas las partes interesadas a participar en la promoción de los avances prestando apoyo a programas de educación, oportunidades de empleo y otras medidas que ayuden a hacer realidad el ideal común de un mundo más inclusivo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, y atendiendo las justas y legítimas propuestas de los familiares de personas autistas de la Región Lagunera, quienes, en voz de uno de sus integrantes, el Licenciado Fernando Vázquez Camacho, quien preside la agrupación denominada **“SONRISA AZUL LAGUNA A. C.”**, que a iniciativa de él y otros padres y madres de familia de esas región, aglutinaron sus esfuerzos para sensibilizar, concientizar, e inspirar a todos nosotros para lograr una sociedad más justa y favorable para las personas con autismo, ciudadanos que con su noble vocación de servicio, ahora cuentan con una fundación en la ciudad de Torreón, Coahuila, en donde dan atención integral a las personas diagnosticadas con esa condición, nobles personas que a través del suscrito están pidiendo el apoyo de todos y cada uno de los Diputados y Diputadas integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura, para que coadyuvemos junto con ellos y otras asociaciones relacionadas con el autismo, para que se pueda lograr el anhelado propósito de materializar la inclusión plena a la vida, social, cultural, educativa, económica y productiva de todas las personas autistas, ahora mediante un llamado de auxilio, para que tanto en las Universidades Públicas como Privadas del Estado, se realicen acciones concretas de impacto social que cristalicen el diseño e implementación de programas de estudio, y apertura de las carreras técnicas o profesionales que se requieran para la atención integral, y necesaria rehabilitación en todas sus áreas de las personas que se encuentran bajo la condición del espectro autista en el estado, dado que en la actualidad existe una demanda importante de dichos especialistas, que puedan facilitar la atención y rehabilitación de dichas personas, de ahí, que presente a esta Soberanía la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. Túrnese la presente a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, y de la Defensa de los Derechos Humanos, a fin de que en el momento procesal oportuno consideren, mediante acuerdo o dictamen, someter a la aprobación del Pleno la realización de un respetuoso exhorto al Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Ingeniero Salvador Hernández Vélez, así como a las Universidades Privadas del Estado, y a las que se aglutinan en el Organismo denominado Comunidad de Instituciones de Educación Superior de la Laguna, “CIESLAG”, a través de su Presidenta la Maestra Martha Silvia Argüelles, para que en sus planes académicos puedan implementar las carreras técnicas o profesionales que se requieren para atender a aquellas personas que padecen del trastorno Autista en nuestro Estado, dada la falta de profesionistas certificados para atender a los que padecen la condición del Autismo.**

**ATENTAMENTE,**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 25 DE MARZO DE 2020.**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS BERINO GRANADOS, CON EL OBJETO DE EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES DEL IMSS Y DEL ISSSTE EN COAHUILA, PARA QUE DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID-19, IMPLEMENTEN EN LOS HOSPITALES DE NUESTRA ENTIDAD, UN MECANISMO MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE DE MANERA OPORTUNA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES E INMUNODEPRIMIDOS, SIN TENER QUE ACUDIR DIRECTAMENTE A LOS NOSOCOMIOS O CLÍNICAS QUE ATIENDEN A ENFERMOS DE COVID-19, PUES SON LOS MÁS VULNERABLES DE CONTAGIO.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jesús Berino Granados, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Desde que la Organización Mundial de la Salud calificó al nuevo brote de coronavirus como pandemia, los gobiernos de todos los países impulsaron diversas estrategias para hacer frente al COVID-19, siendo la más efectiva la del aislamiento en casa para reducir el número de contagios.

¡Quédate en casa! Es quizá la medida preventiva más infalible para contener la propagación del coronavirus COVID-19 y evitar un colapso en los sistemas de salud, pues entre menos personas contagiadas mayor capacidad habrá para atenderlas.

Como sabemos, actualmente en nuestro país estamos en la fase dos de la pandemia del coronavirus, es decir que el contagio ahora es local y por lo tanto el aumento del número de contagios será más rápido, debido a ello los hospitales del sector público se avocarán principalmente a la atención de personas contagiadas.

No obstante, es necesario seguir brindando atención a los asegurados o familiares de los derechohabientes, principalmente en lo que respecta al suministro de medicamentos que ordinariamente requieren pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, cáncer, así como a pacientes con enfermedades cardiovasculares e inmunodeprimidos, pues debido a su condición médica son más vulnerables de contagio.

Es por ello, que hacemos un llamado a las autoridades estatales del ISSSTE y del IMSS en Coahuila, para que durante el tiempo que continúe la contingencia sanitaria por el Covid-19, implementen un mecanismo mediante el cual se garantice de manera oportuna la entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, cardiovasculares e inmunodeprimidos, sin tener que acudir directamente a los nosocomios y o clínicas que atienden a pacientes con esta enfermedad, pues esto los coloca en riesgo inminente de contagio.

Actualmente debido a las medidas preventivas para contener la propagación del coronavirus, muchos de los pacientes de enfermedades crónicas degenerativas, cardiovasculares e inmunodeprimidos, por el temor al contagio han tenido que adquirir sus medicamentos en farmacias comerciales, para no acudir a los hospitales, pues esto representa un riesgo aún mayor a su salud por la contingencia sanitaria, erogando un gasto que no tenían contemplado realizar; otros más, la gran mayoría de estos enfermos no han podido adquirir sus medicamentos por el alto costo que algunos tienen, sumando a ello que una gran mayoría de trabajadores no están recibiendo su salario completo, representando un problema que es necesario atender.

Esto es grave, ya que como sabemos, las personas con este tipo de enfermedades no pueden dejar de tomar sus medicamentos o suspender su tratamiento, sin tener repercusiones serias en su salud.

Ante ello, hacemos un llamado Urgente para que las autoridades del IMSS y del ISSSTE, garanticen de inmediato el suministro y entrega de medicamentos a estos pacientes, en lugares alternos y fuera de hospitales y centros de salud, que, por las condiciones de la contingencia sanitaria, solo se debe acudir por imperiosa necesidad de atención de alguna emergencia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para que sea turnado a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, y una vez analizada, de considerarlo procedente, aprueben lo siguiente:

**PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN COAHUILA, PARA QUE DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID-19, IMPLEMENTE UN MECANISMO MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE DE MANERA OPORTUNA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES E INMUNODEPRIMIDOS, SIN TENER QUE ACUDIR DIRECTAMENTE A LOS NOSOCOMIOS U HOSPITALES QUE ATIENDEN A ENFERMOS DE COVID-19, PUES SON LOS MÁS VULNERABLES DE CONTAGIO.**

**SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL ISSSTE EN COAHUILA, PARA QUE DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID-19, IMPLEMENTE UN MECANISMO MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE DE MANERA OPORTUNA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES E INMUNODEPRIMIDOS, SIN TENER QUE ACUDIR DIRECTAMENTE A LOS NOSOCOMIOS U HOSPITALES QUE ATIENDEN A ENFERMOS DE COVID-19, PUES SON LOS MÁS VULNERABLES DE CONTAGIO.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 22 abril de 2020**

**DIPUTADO JESÚS BERINO GRANADOS**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** | | |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOCON EL OBJETO DE EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES DEL IMSS Y DEL ISSSTE EN COAHUILA, PARA QUE DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID-19, IMPLEMENTEN EN LOS HOSPITALES DE NUESTRA ENTIDAD, UN MECANISMO MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE DE MANERA OPORTUNA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, CARDIOVASCULARES E INMUNODEPRIMIDOS, SIN TENER QUE ACUDIR DIRECTAMENTE A LOS NOSOCOMIOS, PUES SON LOS MÁS VULNERABLES DE CONTAGIO.

**H. PLENO DEL CONGRESO**

**DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con objeto de que este H. Pleno solicite al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que explique lo siguiente: 1) El total de dinero que se ha generado durante la administración actual por concepto de combate a la corrupción; 2) El total de dinero que se ha generado durante el mismo periodo por concepto de planes y acciones de austeridad; 3) El destino o aplicación que se ha dado a los recursos obtenidos; 4) Los motivos por los que el Presidente decidió extinguir una gran cantidad de fidecomisos; y 5; el destino o aplicación que se dará a los recursos obtenidos de estos fideicomisos; lo anterior con base en la siguiente:**

**Exposición de Motivos**

El día 02 de abril del presente año, y en plena crisis por el Covid-19, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto “por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.”, expedido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el documento destaca lo siguiente:

“…CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dispone como uno de sus principios rectores el de "Economía para el bienestar", a través del cual el Gobierno Federal se compromete a retomar el camino del crecimiento **con austeridad y sin corrupción**, **disciplina fiscal, cese del endeudamiento**, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación;

Que en ese sentido, es propósito del Gobierno de México que la Administración Pública Federal se conduzca con Austeridad Republicana, lo que **implica combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados**, y

Que en congruencia con lo señalado, resulta necesario analizar la permanencia de fideicomisos y fondos públicos, por lo que he determinado que los recursos públicos que los integren sean enterados en términos de las disposiciones aplicables a la Tesorería de la Federación y se lleven a cabo los procesos para su extinción, ello salvaguardando en todo momento los derechos de terceros, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO 1.- Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los Tribunales Agrarios, para que a la entrada en vigor del presente Decreto y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes. Los derechos y obligaciones derivados de dichos instrumentos serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con cargo a su presupuesto autorizado, de conformidad con las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 2.- Se instruye a los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, coordinen las acciones que correspondan con las instituciones fiduciarias, mandatarias o comisionistas, para que a más tardar el día 15 de abril del presente ejercicio fiscal, concentren en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos o análogos referidos en el artículo anterior.” **Fin de la cita textual.**

Como se aprecia en el texto del decreto y en el discurso frecuente del presidente, aduce motivos de austeridad, ahorro, combate a la corrupción, y acciones para evitar el despilfarro de recursos del erario.

Sin embargo, todo esto no concuerda con su otro discurso, con sus “otros datos”, que se refieren a que el país tiene finanzas sanas. No concuerda con la grave crisis sanitaria que empezó con la creación del INSABI, y se extendió con la pandemia del Covid-19; no es coherente con un sistema de salud totalmente colapsado y caótico.

No concuerda con el discurso de un presidente que se niega a implementar medidas fiscales para reducir el impacto de la crisis económica y conservar el mayor número de empleos.

No concuerda con un presidente que enarbola la bandera de “primero los pobres”, pero no está haciendo absolutamente nada para apoyar a las personas que menos tienen para subsistir durante la cuarentena, hablamos todas las personas de clase media baja y baja, de aquellos que se encuentran en pobreza y pobreza extrema. Un presidente que no quiere realizar acción alguna para proteger a las PyMES que son las que dan empleo a la mayor parte de los mexicanos.

Vamos por partes:

**Las contradicciones y mentiras en los “ahorros”**

El 24 de marzo de 2020, AMLO dijo a los medios que se contaba con un fondo de 400mil millones de pesos para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias, dejando entrever que era producto del combate a la corrupción y/o de la austeridad.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/24/contamos-con-400-mil-millones-extras-para-enfrentar-contingencia-amlo-4300.html

Sin embargo, los datos no concuerdan. El 27 de diciembre de 2019, AMLO declaró que se habían ahorrado 230 mil millones, gracias a la austeridad republicana.

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-de-amlo-ahorro-230-mil-mdp-gracias-la-austeridad-republicana>

Pero, el 18 de febrero de 2020, el Financiero da a conocer información oficial de la SHCP que refiere que el gobierno logró ahorrar por concepto de austeridad 5 mil 942 millones de pesos. Una cantidad muchas veces menor a la expresada por el Presidente. Incluso en la misma nota se señala que para nada se pudo lograr la meta de 500 mil millones anuales de ahorro que prometió en campaña.

<https://www.elfinanciero.com.mx/economia/austeridad-en-gasto-publico-de-la-4t-dejo-ahorros-por-5-942-mdp-en-2019>

Hasta aquí, su eterno discurso de finanzas sanas, todo perfecto, bonanza, “otros datos”, etc.

Sin embargo, las preguntas, entre muchas que se hacen todos los mexicanos, destacan las siguientes: ¿cómo es que con finanzas sanas y ahorros de miles de millones no tiene capacidad para hacer frente a las necesidades del sector salud, cómo es que no puede decretar la reducción de ningún tipo de impuesto durante la contingencia?

De acuerdo a un documento publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, el Fondo de Estabilización de los ingresos Presupuestarios (FEIP) es un instrumento de previsión y estabilización fiscal del Estado Mexicano que opera como un mecanismo contracíclico que permite compensar las posibles disminuciones en la captación de ingresos respecto de la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

Tiene como antecedente la creación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros en 2001- el Fondo de Estabilización de los ingresos Presupuestarios, se creó mediante Decreto el 31 de octubre de 2014.

El 01 de noviembre de 2019, la SHCP, advirtió que utilizaría 150 mil millones de pesos, del total de 260 mil millones del FEIP, para hacer frente a la baja recaudación del 2019.

<https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-recorte-al-gasto-si-se-agota-fondo-de-estabilizacion>

Las preguntas empiezan, y son muy simples y lógicas:

Si tenemos finanzas sanas, ¿Por qué usar el Fondo de Estabilización?

Si se ahorraron 230 mil millones en 2019, como lo dijo públicamente el Presidente; ¿Por qué tocar el Fondo de Estabilización?

Si las finanzas están tan bien como dice el Presidente, ¿Por qué hablar de baja recaudación y pérdidas fiscales?

Si tenemos un guardado de 400 mil millones (declarado por AMLO); ¿Por qué no se puede resolver la crisis sanitaria, invirtiendo una parte de ello en su solución, y la otra parte en medidas económicas para proteger a las PyMES?

No tenemos que ser expertos en finanzas para darnos cuenta de que los números no cuadran y las declaraciones del presidente, de la SHCP y de los expertos son todas diferentes.

Ahora, además, el Presidente ordena la extinción de docenas fideicomisos públicos para hacerse con los recursos correspondientes, no importándole las reglas de operación de los mismos, las razones y objetivos para los que fueron creados, todo en un ánimo de hacerse de dinero por cualquier medio, casi con desesperación, y además con total opacidad.

Es mucho lo que debe aclararse al respecto, y la presidencia de la República debe ofrecer todas las respuestas a los mexicanos. Debemos conocer en forma exacta cuál es el estado financiero del país.

. Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente:

**Proposición con Puntos de Acuerdo:**

**Que por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.**

**ÚNICO.- Este H. Pleno solicita al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que explique lo siguiente: 1) El total de dinero que se ha generado durante la administración actual por concepto de combate a la corrupción; 2) El total de dinero que se ha generado durante el mismo periodo por concepto de planes y acciones de austeridad; 3) El destino o aplicación que se ha dado a los recursos obtenidos; 4) Los motivos por los que el Presidente decidió extinguir una gran cantidad de fidecomisos; y 5; el destino o aplicación que se dará a los recursos obtenidos de estos fideicomisos**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

*ATENTAMENTE*

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de abril de 2020**

DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS | DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON OBJETO DE QUE ESTE H. PLENO SOLICITE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE EXPLIQUE LO SIGUIENTE: 1) EL TOTAL DE DINERO QUE SE HA GENERADO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL POR CONCEPTO DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN; 2) EL TOTAL DE DINERO QUE SE HA GENERADO DURANTE EL MISMO PERIODO POR CONCEPTO DE PLANES Y ACCIONES DE AUSTERIDAD; 3) EL DESTINO O APLICACIÓN QUE SE HA DADO A LOS RECURSOS OBTENIDOS; 4) LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL PRESIDENTE DECIDIÓ EXTINGUIR UNA GRAN CANTIDAD DE FIDECOMISOS; Y 5; EL DESTINO O APLICACIÓN QUE SE DARÁ A LOS RECURSOS OBTENIDOS DE ESTOS FIDEICOMISOS

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PARA QUE INSTRUYA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE AUTORICE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS INDISPENSABLES PARA QUE LAS INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS PUEDAN ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID 19.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 21 fracciones VI y VII, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través de la que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal Lic. Andrés Manuel López Obrador para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que autorice la utilización de los recursos indispensables para que las instituciones de salud públicas puedan adquirir los insumos necesarios para enfrentar la pandemia Covid 19.

**MOTIVOS DE ESTA PROPOSICIÓN.**

En días pasados el periódico El Universal, publicó una nota en la cual daba cuenta de cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitaba a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la autorización con carácter de urgente, para utilizar de sus reservas financieras un total de 5 mil 048 millones 800 mil pesos, para hacer frente a la pandemia covid19, a través de la compra de diversos insumos[[26]](#footnote-26).

De acuerdo con el oficio 09 52 17 1000/0360 de fecha del 8 de abril de 2020, la institución solicita utilizar las citadas reservas para la compra de 3 mil 459 monitores de signos vitales para pacientes en terapia intensiva, e 979 ventiladores adulto-pediátricos, 264 unidades radiológicas portátiles, 600 carros rojos con equipo completo para reanimación, 9 mil oxímeros de pulso portátil, 126 equipos de ultrasonido básico, 423 camas clínicas hospitalarias para adultos, 100 camas para cuidado intensivo, 18 monitores de signos vitales y seis camas-camilla radiotransparentes.

En el citado documento, el Instituto Mexicano del Seguro Social apeló al artículo 73 de la Ley de General de Protección Civil para acceder a los recursos pues argumentó que dada su magnitud, el covid-19 puede asemejarse a un desastre natural, “por lo que se requiere atención inmediata del fenómeno epidemiológico mediante los insumos necesarios para su atención inmediata”[[27]](#footnote-27).

Además de acuerdo con una nota de Vanguardia, esta se trata de la segunda solicitud a Hacienda para adquirir equipo médico, pues el 30 de marzo pasado, el IMSS pidió dos mil 201 millones 700 mil pesos para ventiladores artificiales y mil 407 millones de pesos para monitores de signos vitales para Triage.[[28]](#footnote-28)

Si bien es cierto que el uso de las reservas de cualquier institución pública constituye una medida extraordinaria que debe ser utilizada con estricto apego a los principios de necesidad y proporcionalidad, también lo es la etapa de pandemia que vivimos amerita la aplicación de tales acciones lo antes posible, para evitar daños más graves a la población y al mismo sistema de salud.

De ahí que, desde la fracción parlamentaria a la que pertenezco, me sumo a las peticiones del IMSS a fin de que se autorice el uso de las reservas antes mencionadas, pero no sólo en esta institución, sino en todas las instituciones de salud públicas que lo estimen conveniente dada la magnitud de la pandemia de covid-19.

Es por estas razones que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, VII, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar ante esta H. Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

Misma que solicitamos sea tramitada como de urgente y obvia resolución.

**ÚNICO.-** Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal Lic. Andrés Manuel López Obrador para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que autorice la utilización de los recursos indispensables para que las instituciones de salud públicas puedan adquirir los insumos necesarios para enfrentar la pandemia Covid 19.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de abril de 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.**

Proposición con punto de acuerdo **que presenta el suscrito, Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” de la Honorable LXI Legislatura del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con objeto de que se exhorte** **atentamente a los 38 ayuntamientos de la Entidad** **a que, a través de sus respetivos organismos operadores, implementen las estrategias necesarias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, los cuales resultarían inadmisibles, ante al inicio de la temporada de calor, pero, sobre todo, en vista de la actual pandemia por coronavirus, así mismo, se envíe un enérgico extrañamiento a la administración del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, por la suspensión, de hasta cuatro días de la semana antepasada, del abasto de agua potable a decenas de colonias de la ciudad, en plena cuarentena por coronavirus, y se le exhorte, por las razones expuestas, a que en lo consecutivo el organismo operador Aguas de Saltillo (Agsal) se abstenga de volver a interrumpir el suministro del vital recurso.**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**Considerando:**

1. Que la Comisión Nacional del Agua informó que para este 2020 en Coahuila la temperatura aumentará en uno o dos grados respecto del año anterior, no obstante que se registrarán lluvias por encima del promedio.
2. Que, según información oficial, a esta fecha ya existen claras condiciones de sequía en 31 municipios de 8 estados, incluido el nuestro, ante la extrema falta de lluvias en los pasados meses de enero y febrero.
3. Que el coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, Luis Ugarte Lomas, reportó que la actual temporada de lluvias ha sido insuficiente, por lo que se precisa de acciones en el campo y zonas urbanas, tanto preventivas, como correctivas, para mitigar los efectos de la falta de precipitaciones pluviales.
4. Que el Día Mundial del Agua, celebrado, como cada año, el pasado 22 de marzo (hace apenas tres días), deja mucho que desear en Coahuila respecto de su cometido de sensibilizar a la población acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla, a fin de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.
5. Que todavía carecemos de una cultura sobre el cuidado del agua, derivada, entre otros factores, de la ausencia de campañas oficiales realmente efectivas sobre el correcto aprovechamiento de este recurso no renovable entre los diversos sectores de la sociedad coahuilense, y...
6. Que los actuales tiempos de contingencia sanitaria, con motivo de la pandemia por coronavirus (o Covid-19), reclama el suministro ininterrumpido de agua potable para prevenir, a través de constantes actos de higiene personal, el contagio de dicha enfermedad.

El de la voz se permite plantear, de manera muy enfática, la urgente necesidad de impulsar todas las acciones que estén al alcance, a efecto de contribuir a contrarrestar en nuestro país, pero particularmente en Coahuila, la pandemia que no cesa de azotar al mundo.

Una de las maneras más efectivas, además de seguir las indicaciones del sector salud relacionadas con el uso de cubrebocas y la sana distancia, consiste precisamente en el lavado de manos, por considerarse que, del cuerpo humano, estas son las más susceptibles de contaminarse y, así, contribuir a la propagación del virus.

Pero, entre la población, sobre todo entre los saltillenses, hay quienes últimamente se ha estado preguntando, por ejemplo: *“¿de qué sirven estas instrucciones, si en mi casa no hay agua desde hace cuatro días?”*.

Por eso es que hoy hago un enérgico apercibimiento al presidente municipal de la capital coahuilense, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por fallarle a sus conciudadanos en su responsabilidad de cumplir con la observancia del derecho humano al agua, consagrado en nuestra Carta Magna, y en su compromiso, contraído expresamente ante el Consejo Municipal de Salud, ahora en sesión permanente, de *“tomar medidas rápidas, responsables y eficientes para proteger la salud de los saltillenses ante el coronavirus”*, según se lee en un comunicado emitido por su administración.

Mientras tanto, a las autoridades municipales de Saltillo les recuerdo lo que tantas veces les han señalado expertos en la materia: la solución al crónico problema de escasez y desabasto de agua potable no se soluciona con la sobreexplotación de los mantos acuíferos o abriendo nuevos pozos, pues gran parte de estos se encuentran prácticamente colapsados, sino invirtiendo también en la reparación y/o reposición de la red de distribución, cosa que Aguas de Saltillo se niega a realizar, argumentando, en lo oscurito, que esto no es negocio para ellos; mientras tanto, más de la mitad del volumen que se canaliza a la ciudad se pierde a través de innumerables fugas.

Según diversas versiones periodísticas, desde el pasado miércoles 18 de marzo, y hasta por cuatro días, a miles de saltillenses se les privó del suministro de agua potable, lo que afectó a por lo menos 37 colonias, como son:

Guayulera, Bellavista, Progreso, Sierras del Poniente, Buitres, Girasol, Jesús García Corona, Valle Escondido, Landín, Chapultepec, 23 de Noviembre, 26 de Marzo, Balcones, Buenos Aires, Puerto de la Virgen, San Miguel, Valle de San Antonio, Ciudad Las Torres, Saltillo 2000, Agua Nueva.

Así mismo: Australia, El Bosque, La Madrid, Parajes de Santa Elena, Lomas del Refugio, Lomas de Santa Cruz, El Morillo, Valle de Lourdes, Lourdes, Héroes de Nacozari, Eulalio Gutiérrez, Fraccionamiento El Álamo, Rincón de Salazar, Burócratas del Estado, Colinas del Sur, Satélite Sur y la Zona Centro.

De acuerdo con Aguas de Saltillo, *“hubo un problema con una expulsora y entraron en reparación durante la noche del miércoles, por lo que* --prometió la paramunicipal-- *el suministro será restablecido a la brevedad”*. Debido a ello, y a que las pipas con agua prometidas por el munícipe fueron insuficientes, muchas familias se vieron obligadas a acudir a dispensadores de agua, en donde se les cobra alrededor de diez pesos llenar cada cubeta o garrafón.

Es claro que no debería faltar agua en casas habitación y centros de trabajo de ninguna población de la entidad. ¿Entonces en qué consiste la falla? Por otra parte, ¿quiénes son los responsables de esta deficiencia?

Concretamente, el párrafo sexto del Artículo 4º, comprendido en el Capítulo de los Derechos Humanos y Garantías, establece, de manera muy clara, lo siguiente: *Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines*.

El abasto y saneamiento son reconocidos como un derecho humano incluso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, según su Resolución 64/292, emitida el 28 de julio de 2010.

Pero este desacato tan recurrente no es exclusivo de las autoridades municipales de Saltillo y su paramunicipal española Aguas de Saltillo (Agsal), sino también de otros organismos operadores de la Entidad, principalmente los de sus ciudades más representativas, como: Torreón, Monclova, Piedras Negras y San Pedro de las Colonias.

Por ejemplo, el 4 de julio de 2018, el de la voz leía en esta misma tribuna el siguiente reporte: *“Con el inicio de la temporada de calor, respecto de la cual la Secretaría del Medio Ambiente ya había previsto temperaturas muy altas y, por consiguiente, intensas sequías en diferentes regiones de la entidad, sobrevino, junto con más de 50 incendios forestales, el drama del desabasto de agua potable en los hogares coahuilenses”*.

En 2019, la historia no fue diferente. También pude atestiguar constantes periodos de desabasto del vital recurso en los hogares coahuilenses, como si las autoridades pretendieran acostumbrarnos a sus negligencias, que, en el contexto de la actual pandemia, adquieren una gravedad de gigantescas proporciones. Ni siquiera los tandeos en el suministro son suficientes para la preparación oportuna de alimentos y la realización de labores de limpieza y aseo personal. Por cierto, un servicio de tercera no corresponde a las tarifas de lujo que suelen cobrar algunos organismos operadores del agua.

Sin embargo, a pesar de que a los gobiernos municipales les corresponde una participación importante en las materias de salud y agua potable, no se está realizando lo suficiente en favor de los gobernados y sus familias.

Si los diputados somos observadores, solidarios y responsables de nuestro quehacer, y advertimos que debemos extremar las medidas de higiene y salud en lo personal, y lo vigilamos en la sociedad coahuilense, nos percataremos de que la salud requiere del importante apoyo de las instituciones municipales y de las entidades que de ellas dependen, particularmente de los organismos operadores del agua y saneamiento, sean estos municipales, paramunicipales o cualquiera que fuere la naturaleza jurídica que tengan.

Los diputados y los integrantes de los ayuntamientos hemos sido electos con el voto ciudadano, así que sería pueril que nosotros y los cabildos no hiciéramos la tarea que corresponde para garantizar en esta etapa que los hogares de Coahuila tengan el mínimo vital de agua, garantizado en la Constitución general, por un descuido imperdonable de las autoridades, a efecto de que pueda hacer frente a las medidas de salud que impidan la pérdida de vidas humanas derivadas del contagio del coronavirus COVID-19.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para que sea turnado a la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, y una vez analizada, de considerarlo procedente, aprueben lo siguiente:

**PRIMERO. -** Se exhorta atentamente a los 38 ayuntamientos de la Entidad a que, a través de sus respetivos organismos operadores, implementen las estrategias necesarias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, los cuales resultarían inadmisibles, en vista del inicio de la temporada de calor, pero sobre todo por la actual pandemia por coronavirus, que amenaza con prolongarse, por lo que es necesario contar de manera permanente con agua, elemento indispensable dentro de las medidas para prevenir el contagio por dicho virus.

**SEGUNDO. -** Se envía un enérgico extrañamiento a la administración del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, por la suspensión, de hasta cuatro días de la semana antepasada, del abasto de agua potable a decenas de colonias de la ciudad, en plena cuarentena por coronavirus, y se le exhorta, por la misma razón, a que en lo consecutivo el organismo operador Aguas de Saltillo (Agsal) se abstenga de volver a interrumpir el suministro del vital recurso.

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de abril de 2020.**

***“Por el Camino de la Cuarta Transformación”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”**

**H. PLENO DEL CONGRESO**

**DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas Blanca Eppen Canales y Zulmma Verenice Guerrero Cazares, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, así como la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con objeto de que este H. Pleno solicite al Cabildo del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, aplicar las sanciones que correspondan al C. Hugo Jurado Estrada, director de comunicación social de ese ayuntamiento, por emitir públicamente expresiones misóginas, discriminatorias y violatorias de derechos humanos en contra de las mujeres, en este caso, de las madres solteras; lo anterior con base en la siguiente:**

**Exposición de Motivos**

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

*Artículo 1o…*

*…*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*…*

*Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades,* ***la condición social****, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el* ***estado civil*** *o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas…*

Por su parte y en concordancia con estas disposiciones, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dispone:

*Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:*

*….*

*III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;*

*IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;*

*…*

*VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución;*

Finalmente, todo funcionario en Coahuila, de acuerdo a nuestra Constitución local, está obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes en su ámbito de competencia y, a observar todas las disposiciones legales en materia de derechos humanos y garantías individuales.

Consta en diversos medios de comunicación, que el domingo 19 de este mes de abril, se dio a conocer la noticia de que el C. Hugo Jurado Estrada, director de comunicación social del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, por medio de la red social conocida como Facebook, de manera expresa y sin lugar a confusiones o dudas, emitió una expresión profundamente misógina, ofensiva y discriminatoria en contra de las madres solteras. La expresión en concreto fue la siguiente; misma que no leeremos por respeto:

*“Las madres solteras no deberían recibir apoyo del gobierno, deberían de buscar a sus ex para que las mantengan. Es muy fácil estirar la mano pero que tal abrieron las piernas. Bola de mantenidas”.*

La expresión refleja, como se aprecia, un gran desprecio hacia las mujeres en dicha situación, además de estigmatizarlas y degradarlas públicamente.

Si bien todo ciudadano, sea no servidor público debe observar el respeto a los derechos humanos de todos, y evitar expresiones de odio, descalificación y en general que causen daño moral a los demás, este deber es mayor y sujeto a sanciones legales inmediatas, previa comprobación de los hechos, cuando se trata de servidores públicos. El funcionario debe cuidar las expresiones, enunciados y opiniones que emite en medios públicos tal y como lo señalan las leyes, algunas de ellas ya citadas en esta proposición.

Que el C. Hugo Jurado Estrada haya borrado su publicación no lo exime de responsabilidad, máxime que no fue para por lo menos ofrecer una disculpa pública al sector agraviado.

. Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente:

**Proposición con Puntos de Acuerdo:**

**Que por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.**

**ÚNICO.- Este H. Pleno solicita al Cabildo del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, aplicar las sanciones que correspondan al C. Hugo Jurado Estrada, director de comunicación social de ese ayuntamiento, por emitir públicamente expresiones misóginas, discriminatorias y violatorias de derechos humanos en contra de las mujeres, en este caso, de las madres solteras.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 102 fracción IV, 104 fracción III, 180 y 182 párrafo segundo de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

*ATENTAMENTE*

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 22 de abril de 2020**

DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO**

**“GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ**

**DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA**

**DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**

**DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA DIP. JESÚS BERINO GRANADOS**

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “BRÍGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”,**

**DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA**

**DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO”**

**DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**

**DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo en la Vía de Urgente y Obvia Resolución, que presenta el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, con el objeto de que esta Soberanía haga un exhorto oportuno al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, para que en su calidad de Mandatario Estatal, a la brevedad posible pueda convocar a las Instituciones Bancarias acreedoras de los adeudos contraídos con motivo de la Mega deuda que padece nuestra entidad, para el efecto de que se analice la posibilidad y viabilidad de celebrar un convenio modificatorio o “ADENDUM”, de las reestructuraciones de la misma, para que durante todo el periodo que dure la emergencia sanitaria y económica que está provocando en el estado la Pandemia del Virus denominado Covid-19, se omitan los pagos de las mensualidades pactadas, así como sus respectivos intereses, sin ninguna penalidad o acumulación de dichas prestaciones, porque dadas las circunstancias actuales que padecemos los Coahuilenses, este apoyo que se les solicita resulta necesario e indispensable para atemperar las graves condiciones que se nos avecinan, y este es el justo momento para que dichos bancos sean solidarios con nuestro pueblo, en aras de que tales recursos que puedan ahorrarse se destinen específicamente al apoyo del sector salud y productivo de nuestra entidad, porque hoy más que nunca es cuando necesitamos dicho numerario, lo anterior con base en las siguientes:**

**CONSIDERACIONES:**

Conforme a la propuesta que se contiene en el presente punto de acuerdo, respecto de solicitar a los Bancos acreedores de la Mega deuda de Coahuila, la posibilidad de que se pueda celebrar un Convenio Modificatorio o “ADENDUM”, en el que las Instituciones Bancarias en solidaridad con el Gobierno y el Pueblo de Coahuila, pudieran auxiliarnos con una moratoria del pago de la deuda que asfixia a los ciudadanos, durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria y de crisis económica originada por la Pandemia del virus denominado “COVID -19”, sin ningún tipo de penalidad contractual ni de acumulación de mensualidades, para el efecto de destinar esos recursos que se pudieran disponer al fin exclusivo de dotar al sector salud del estado de todas aquellas necesidades materiales y humanas para hacer frente a esa pandemia, así como para apoyar al sector más vulnerable del comercio de la entidad con motivo crisis económica que se avizora por el cierre de pequeñas y medianas empresas, así como de la lamentable pérdida de empleos de muchos coahuilenses, tales circunstancias gravísimas se aumentan aún más con la pesada losa que representa la Mega deuda que indebidamente se le indilgo a los ciudadanos, y que ahora en solidaridad y corresponsabilidad de los Bancos acreedores de dicha deuda, puedan mostrar su buena voluntad de auxiliar a los ciudadanos mediante esa pauta en el pago de los créditos que mensualmente nos agobian.

A este respecto, resulta oportuno destacar que tal convenio o **“Adendum”** es totalmente viable y legitimo el poderlo celebrar dado que el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, en donde toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro a la salud generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

En ese mismo sentido, el Artículo 25, establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Ahora bien, también conviene resaltar que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, en donde el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio, y el estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, así mismo llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución.

Para el desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

En ese sentido, y conforme al texto Constitucional y sus Leyes Reglamentarias, es pertinente destacar que el Banco de México tiene la potestad para determinar las tasas de intereses y otros conceptos análogos que deben cumplir las operaciones activas que realicen los bancos, en donde las operaciones bancarias deben sujetarse a las disposiciones emitidas por el Banco de México y a su ley orgánica, consistentes en fijar las disposiciones de carácter general a las cuales deben sujetarse determinados actos, en los que es parte un banco, en donde también las partes pueden pactar libremente el tipo, modo y condiciones en que se causarán, determinarán y pagarán los intereses tanto ordinarios como moratorios que se originen con motivo de un crédito contratado, toda vez que de conformidad con el artículo 78 del Código de Comercio, en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

Del anterior precepto se desprende el principio de libertad contractual en las convenciones mercantiles, sin que este precepto haga distinción o excepción alguna, es decir, no excluye a las convenciones mercantiles en las que sea parte un banco; por lo tanto, debe aplicarse a todas las convenciones de carácter mercantil, incluyendo aquéllas en la que es parte un banco.

Además de lo anterior, debe señalarse que no existe disposición legal que prohíba a las partes de un contrato mercantil acordar la forma y términos en que se causarán y determinarán el pago de las mensualidades incluidos los intereses ordinarios y moratorios que se generen por un adeudo contratado, por lo que debe entenderse que, si no está prohibida tal concertación, entonces está permitida para las partes.

Por lo tanto, y debido a tal principio jurídico de la libertad contractual de que lo que no está jurídicamente prohibido está permitido, es que en base a la emergencia sanitaria y económica que enfrentamos los coahuilenses, que se ve agravada por la enorme deuda que indebidamente se nos heredó a los ciudadanos, es que ahora le toca a los bancos acreedores acudir en apoyo del pueblo y gobierno de Coahuila, con la legitima declaratoria de moratoria del pago de la deuda que aquí se les solicita.

Fortalece y robustece lo anteriormente expuesto, el decreto promulgado por el Presidente de la Republica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se declaran las acciones extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional, en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus identificado como **COVID-19**, mediante el cual se efectuarían acciones inmediatas y extraordinarias para utilizar todos los elementos auxiliares que sean necesarios, tanto de los sectores públicos y privados que resulten indispensables para hacer frente a esa contingencia objeto de ese decreto, así como el acuerdo del Consejo de Salubridad General, decretado el pasado 30 de Marzo del presente año, en el cual se determinan las acciones extraordinarias en materia de salubridad general para todo el territorio nacional, con el propósito de prevenir, controlar y combatir la transmisión de dicha pandemia, de ahí, que presente a esta Soberanía en la Vía de Urgente y de Obvia Resolución la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. Que esta Soberanía haga un exhorto oportuno al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, para que en su calidad de Mandatario Estatal, a la brevedad posible pueda convocar a las Instituciones Bancarias acreedoras de los adeudos contraídos con motivo de la Mega deuda que padece nuestra entidad, para el efecto de que se analice la posibilidad y viabilidad de celebrar un convenio modificatorio o “ADENDUM”, de las reestructuraciones de la misma, para que durante todo el periodo que dure la emergencia sanitaria y económica que está provocando la Pandemia del Virus denominado Covid-19, se omitan los pagos de las mensualidades pactadas, así como sus respectivos intereses, sin ninguna penalidad o acumulación de dichas prestaciones, porque dadas las circunstancias actuales que padecemos los Coahuilenses, este apoyo que se les solicita resulta necesario e indispensable para atemperar las graves condiciones que se nos avecinan, y este es el justo momento para que dichos bancos sean solidarios con nuestro pueblo, en aras de que tales recursos que puedan ahorrarse se destinen específicamente al apoyo del sector salud y productivo de nuestra entidad, porque hoy más que nunca es cuando necesitamos dicho numerario.**

*ATENTAMENTE*

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de abril de 2020**

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ**

**DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**

**DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO**

**DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

Proposición con punto de acuerdo **que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, a fin de que esta Soberanía solicite respetuosamente al Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, el otorgamiento de créditos, derivados del cobro de adeudos fiscales a importantes consorcios del país, a las micro, pequeñas y medianas empresas de Coahuila, pero de manera preferencial a las que operan en sus regiones Centro y Carbonífera, con objeto de reactivar la economía estatal, al tenor de la siguiente...**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Con su reciente anuncio de que, a partir del próximo 4 de mayo, serán otorgados un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno a empresas pequeñas y formales que no hayan despedido, ni reducido el sueldo a sus trabajadores, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre el diseño de mecanismos que permitirán a los interesados acceder a dichos apoyos financieros, que suman 25 mil millones de pesos.

En la misma conferencia de prensa matutina del 16 de abril, el jefe de la nación también abrió la posibilidad de ampliar al doble, e incluso al triple, dicho fondo crediticio, a través de aprovechar el producto del cobro de adeudos fiscales a 15 grandes empresas, que en total ascienden a 50 mil millones de pesos, de los que ya se obtuvieron $15 mil millones.

*“En mayo y junio se destinará la mayor cantidad de dinero* (a una tasa de interés que irá del 6.5 al 10 por ciento, según el número de empleados inscritos en el IMSS, con un plazo de 3 años para pagarse y sin que medie garantía alguna por parte del beneficiario), esto... *para que se reactive la economía”.* El fondo *“se obtendrá de las empresas que ya se han puesto al corriente en el pago de los impuestos”*, ha explicado el presidente.

El propio director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dijo que, efectivamente, *“a todas las empresas que durante esta epidemia de Covid-19 en el país no dieron de baja a sus trabajadores y les proporcionaron sueldos, se les ofrecerá un crédito de hasta 25 mil pesos”*.

Por otra parte, del total de empresas registradas en el país, 623 mil 136 de ellas, es decir, el 67.5%, tienen de uno a 5 trabajadores; 125 mil 141 (o sea 13.6%), entre 6 y 10; el 8.3% tienen de 10 a 20 trabajadores; el 5.8%, de 20 a 50, y 45 mil 12 empresas (es decir, 4.9%) tienen más de 50 trabajadores.

Y, según información de la Secretaría de Economía, Coahuila cuenta con aproximadamente 8 mil 400 micro, pequeñas y medianas empresas, a las que se agregan 170 que son clasificadas como grandes.

Todo lo anterior es parte de la estrategia para reactivar la economía del país, luego que esta ha empezado a sufrir los estragos de la semiparalización de la actividad productiva nacional, con motivo de la cuarentena a la cual ha obligado la actual pandemia por coronavirus, fenómeno que, además, amenaza con prolongarse más de lo previsto. Tentativamente, la contingencia sanitaria se mantendrá en todo el país hasta el 1 de junio y, en más de 900 municipios, hasta el 17 de mayo.

Esto anuncia un desastre económico para Coahuila, pues a la crisis del carbón, producto de su falta de comercialización, la cual mantiene en serio peligro la subsistencia de miles de familias coahuilenses, se suma la actual contingencia sanitaria, que nos obliga a la interrupción de la actividad industrial, comercial y de servicios en la entidad, en perjuicio del trabajador, que, cuando no pierde su empleo, ve cómo se desmoronan sus ingresos.

El de la voz reconoce ampliamente los esfuerzos que la Federación realiza para atenuar los daños colaterales de la actual cuarentena, como es por ejemplo este proyecto de apoyo crediticio a los micro, pequeños y medianos empresarios, pero también deseo llamar respetuosamente su atención en cuanto a que nuestro Estado requiere en lo particular una estrategia específica de rescate, sobre todo en las regiones Centro y Carbonífera, donde también el Covid-19 ha causado el mayor daño en la Entidad.

Así, pues, me permito plantear que una importante proporción de esos 25 mil millones de pesos de derrama crediticia sea canalizada al impulso de los negocios de baja escala en nuestra Entidad, considerando que no son únicamente 15 los empresarios que adeudan al fisco, por lo que el cobro se puede hacer extensivo a empresas de menor tamaño que han omitido el pago de sus impuestos o de sus multas.

Un fuerte respaldo crediticio a la planta productiva de Coahuila significaría un importante detonante, y es perfectamente viable si consideramos que, de acuerdo con información oficial, los grandes contribuyentes registraron, al cierre del 2019, una deuda fiscal por 231 mil 787 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro. Este segmento representa 32.5% de todos los adeudos fiscales que tienen los pagadores de impuestos con el fisco.

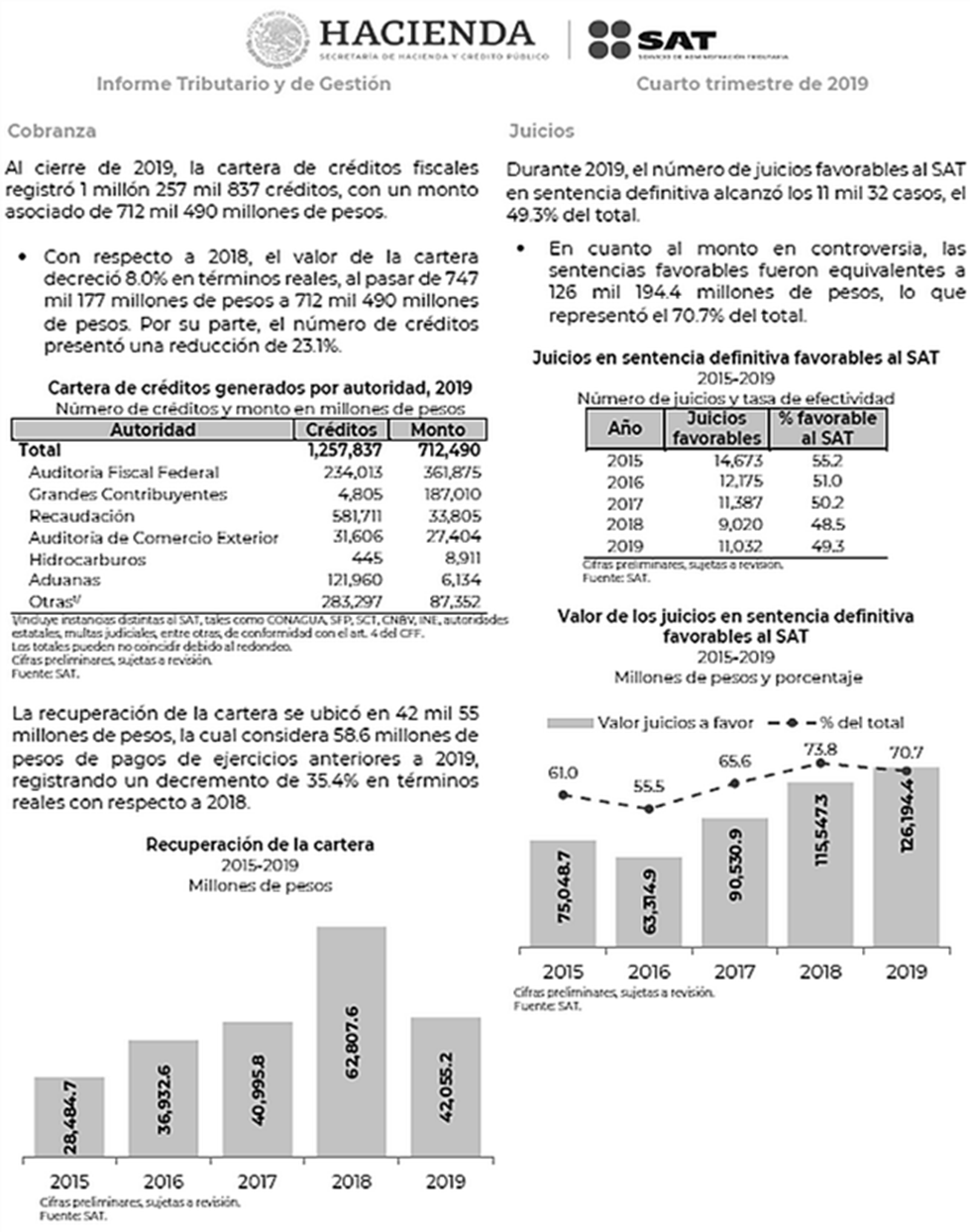
Los grandes contribuyentes son aquellas empresas, incluso, personas físicas, con gran volumen de operaciones y utilidades.

En total, el SAT tiene registrado a 46 mil 539 grandes contribuyentes en su padrón, de los cuales 37 mil 725 son personas físicas y sólo 8 mil 814 son personas morales. Este tipo de contribuyentes apenas representa 0.06% del total de causantes registrados, que asciende a poco más de 77.4 millones.

Por lo demás, al 13 de abril de 2020, la totalidad del sector empresarial adeuda al SAT más de 548 mil millones de pesos, sin contar el pago que la autoridad hacendaria les exige por 361 mil 875 millones de pesos, derivados de auditorías realizadas a las empresas durante 2019

En general, y de acuerdo con las cifras al cierre del primer bimestre del año en curso, el universo de causantes adeuda al Servicio de Administración Tributaria 740 mil156 millones de pesos, con todo y que la cartera de créditos fiscales cayó 8.4% anual en febrero pasado. Del total que no se ha reportado al erario público, $458 mil 264 millones están en controversia, lo que representa el 61% del adeudo total, que es por impagos o multas.

Mientras tanto, un total de 213 mil 487 millones de pesos de créditos fiscales son factibles de cobro, y otros $68 mil 403 millones tienen una baja probabilidad de ser cobrados por el fisco. Más concretamente, al cierre de 2019 había una cartera de créditos fiscales de 4 mil 805 con grandes contribuyentes con un monto asociado de 187 mil 10 millones de pesos, como se explica en la tabla que se anexa al presente planteamiento:



Considerando que los deudores fiscales son mucho más numerosos que las 15 grandes empresas a las que se ha hecho sujetas de cobro, de modo que la cantidad de créditos a pequeños negocios pueden multiplicarse exponencialmente y determinar el desarrollo nacional, estoy proponiendo a este Honorable Pleno que el Gobierno Federal, no sólo amplíe el cobro de impuestos adeudados, sino también canalice, en la medida necesaria, estos recursos crediticios al rescate económico de Coahuila.

Por todo lo expuesto hasta aquí, y en apego a lo establecido en los Artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza, presento ante este Honorable Pleno, con el objeto de que, por las características del caso esgrimido, sea tramitada con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con...

**PUNTO DE ACUERDO**

**PRIMERO. - Se solicita atentamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y a la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, que procedan cuanto antes a requerir el pago de impuestos y multas, no sólo a las 15 grandes empresas morosas con cuyas contribuciones, por 50 mil millones de pesos, se busca ampliar el fondo crediticio recién anunciado por el jefe del Ejecutivo Federal para apoyar a los negocios de baja escala del país, sino también al resto de los grandes contribuyentes que adeudan al fisco 231 mil 787 millones de pesos, con objeto de fortalecer el financiamiento al desarrollo de las pequeñas empresas; y...**

**SEGUNDO. - Se solicita de la manera más respetuosa al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el otorgamiento de empréstitos derivados del fondo federal por 25 mil millones de pesos y del producto del cobro de adeudos fiscales y multas a grandes consorcios, a las 8 mil 400 micro, pequeñas y medianas empresas de Coahuila, pero de manera preferencial a las que operan en sus regiones Centro y Carbonífera, a fin de reactivar la economía estatal, cuyo deterioro tiende a acentuarse con motivo de la actual cuarentena nacional por la pandemia de coronavirus.**

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de abril de 2020.**

***“Por el Camino de la Cuarta Transformación”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo en la Vía de Urgente y Obvia Resolución, que presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional” con el objeto de que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Presidente de la Republica, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que a la brevedad posible realice en términos económicos una restructuración de los Programas Sociales del Gobierno Federal, y mediante un mejor manejo del gasto público, de manera urgente se orienten y destinen mayores recursos monetarios, para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la Pandemia Mundial del virus denominado Covid-19, particularmente para que se materialicen incentivos económicos o bonos extras que pudieran ser de hasta un 100 % o más, del salario actual que perciben todos y cada uno de los trabajadores del sector público de la salud, particularmente para aquellos que están atendiendo a la población que ha sido víctima de esa enfermedad, entre los que se encuentran Médicos, Enfermeras, Camilleros, Técnicos, así como el personal de Cocina, Limpieza, Choferes de Ambulancias y Mantenimiento, de aquellos nosocomios donde se está atendiendo esa enfermedad, ya que tales personas heroicamente todos los días están arriesgando su salud e inclusive su propia vida, y como consecuencia la de sus seres queridos, dada la gravedad de los contagios, más aún, porque tales seres humanos vienen a ser el primer frente de contención y atención sanitaria de dicha Pandemia, lo anterior con base en las siguientes:**

**CONSIDERACIONES:**

El espíritu plasmado en el Artículo 123 de nuestra Constitución Federal, categóricamente establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

Asimismo, tal disposición tiene expresamente estipulado que los empleadores, inclusive el propio Estado como patrón, serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.

En ese mismo sentido, nuestra Constitución establece que todo patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su fuente de trabajo, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores.

Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso, siendo de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares.

Ahora bien, los trabajadores en todo tiempo tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que el artículo 123 Constitucional les consagra, y su seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

**a)** Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

**b)** En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

En ese sentido, desarrollar una actividad laboral representa una de las facetas más importantes de la vida de un ser humano, ya que nuestro crecimiento y superación se encuentra íntimamente ligado a nuestras actividades productivas, tener un buen clima laboral con la debida protección de la salud en una fuente de trabajo, es lo que nos hace sentirnos motivados y valorados, y como el trabajo está estrictamente vinculado al esfuerzo y al desarrollo profesional, las actividades productivas que realizamos incidirá en la vida familiar, escolar y recreativa del trabajador y de sus seres queridos, y como en un mundo donde existen distintas limitantes laborales, el poder desenvolverse en un favorable ambiente productivo, eso sería la mejor forma de labrarse un futuro mejor.

Conforme a lo anterior, se puede definir al trabajo ya sea de la salud o de cualquier otra índole, como aquel conjunto de actividades manuales o intelectuales que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas, a cambio de una compensación económica, y gracias al trabajo de las personas estos comienzan a conquistar su propio espacio, así como el respeto y la consideración de todos los demás, lo cual contribuye y mejora la autoestima, la satisfacción personal y la realización profesional, además de que mediante el trabajo se brinda un valioso aporte a la sociedad.

Bajo las anteriores premisas, a todas las personas les asiste el derecho al trabajo digno, saludable y bien remunerado, dado que este derecho es la base para la realización de los otros derechos humanos que conllevan a una vida digna, íntimamente ligado al derecho del trabajo debe de reconocerse y materializarse el derecho a trabajar en condiciones equitativas, justas, salubres y satisfactorias, dado que el trabajo es esencial para todas las personas en una organización social, puesto que contribuye no solo a la formación de los individuos, sino que también es necesaria para que cada uno pueda hacerle frente tanto a sus propias necesidades como a las de su familia.

Ahora bien, en atención a que en todo el mundo y particularmente en nuestro País, estamos viviendo la desgracia provocada por la **Pandemia del Virus denominado Covid-19,** cuya enfermedad ya a cobrado la vida de muchos seres humanos, connacionales y extranjeros, y que lamentablemente la propagación de ese padecimiento va en aumento, en donde la única forma de auxiliar a esas personas que tristemente ya están contagiadas, y de aquellas que se siguen contagiando, **es la de atender urgentemente los llamados de auxilio que en todos los hospitales públicos de nuestra nación están haciendo los trabajadores de la salud,** desde los médicos especialistas, hasta la de todos los que trabajan de una u otra forma en los hospitales en los que se está atendiendo esa emergencia; grito de auxilio que ya se está convirtiendo en un justo y legal reclamo, el cual debe de ser atendido con prontitud para hacerles llegar todos los materiales e insumos necesarios para privilegiar la salud y la integridad no nadas más de los pacientes, sino de los mismos trabajadores de los nosocomios, personas con una gran nobleza en su vocación de servicio para la protección de la salud de los mexicanos, no importándoles las inadecuadas condiciones en las que laboran y que ponen en riesgo su salud y la de sus familiares, ellos siguen adelante haciéndole frente a ese virus que nos tiene a todos atemorizados, hombres y mujeres valientes que aun con su propio salario están adquiriendo los insumos que utilizan para darnos atención médica.

A dichos trabajadores de la salud, a tales héroes anónimos, además de rendirles un hoy un merecido reconocimiento a su gran labor, ellos ahora merecen todo el apoyo y respaldo del Estado, sus Instituciones, y de la sociedad en general, por lo que, por dicha razón, sería justo que desde este momento tan grave que están padeciendo, y durante todo el tiempo que continúe esa pandemia en nuestro país y su debido control o contención, **todos los que integramos esta Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Coahuila, como una sola voz debemos de proponer al Ejecutivo Federal, que a todos los trabajadores de la salud donde se está haciendo frente al Coronavirus, se les otorgue un incentivo económico o bono extra en su salario, mismo que demuestre la solidaridad y apoyo del Gobierno Mexicano a su excelsa labor de estar en el primer frente de batalla de esa peligrosa enfermedad que nos asecha.**

A manera de ejemplo, las famosas becas de “Jóvenes construyendo futuro”, tiene presupuesto este año 2020, de 46 mil millones de pesos, por otra parte, de acuerdo con el INEGI, en este país hay 365 mil 980 personas ocupadas como médicos, que trabajan 40 horas a la semana y ganan en promedio, al mes,12, 388 pesos. De acuerdo con esas cifras, el presupuesto anual en sueldos para personal médico es de 54 mil 405 millones 122 mil 880 pesos. Tan solo de un programa social, es factible, justo y humano duplicarles el sueldo, de ahí, que presente a esta Soberanía en la Vía de Urgente y de Obvia Resolución la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. Que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Presidente de la Republica, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que a la brevedad posible realice en términos económicos una restructuración de los Programas Sociales del Gobierno Federal, y mediante un mejor manejo del gasto público, de manera urgente se orienten y destinen mayores recursos monetarios, para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la Pandemia Mundial del virus denominado Covid-19, particularmente para que se materialicen incentivos económicos o bonos extras que pudieran ser de hasta un 100 % o más, del salario actual que perciben todos y cada uno de los trabajadores del sector público de la salud, particularmente para aquellos que están atendiendo a la población que ha sido víctima de esa enfermedad, entre los que se encuentran Médicos, Enfermeras, Camilleros, Técnicos, así como el personal de Cocina, Limpieza, Choferes de Ambulancias y Mantenimiento, de aquellos nosocomios donde se está atendiendo esa enfermedad, ya que tales personas heroicamente todos los días están arriesgando su salud e inclusive su propia vida, y como consecuencia la de sus seres queridos, dada la gravedad de los contagios, más aún, porque tales seres humanos vienen a ser el primer frente de contención y atención sanitaria de dicha Pandemia,**

*ATENTAMENTE*

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de abril de 2020**

DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO con el objeto de que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Presidente de la Republica, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que a la brevedad posible realice en términos económicos una restructuración de los Programas Sociales del Gobierno Federal, y mediante un mejor manejo del gasto público, de manera urgente se orienten y destinen mayores recursos monetarios, para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la Pandemia Mundial del virus denominado Covid-19, particularmente para que se materialicen incentivos económicos o bonos extras que pudieran ser de hasta un 100 % o más, del salario actual que perciben todos y cada uno de los trabajadores del sector público de la salud, particularmente para aquellos que están atendiendo a la población que ha sido víctima de esa enfermedad, entre los que se encuentran Médicos, Enfermeras, Camilleros, Técnicos, así como el personal de Cocina, Limpieza, Choferes de Ambulancias y Mantenimiento, de aquellos nosocomios donde se está atendiendo esa enfermedad, ya que tales personas heroicamente todos los días están arriesgando su salud e inclusive su propia vida, y como consecuencia la de sus seres queridos, dada la gravedad de los contagios, más aún, porque tales seres humanos vienen a ser el primer frente de contención y atención sanitaria de dicha Pandemia

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con objeto de que este H. Pleno solicite al titular de la Secretaría de Salud Federal y al Titular del Seguro Social (IMSS) lo siguiente: La implementación inmediata de un plan de medidas para proteger la salud y la integridad de todo el personal que labora en las instituciones de salud del país, especialmente del IMSS y de los hospitales donde se atiende a pacientes de Covid-19.**

**Asimismo, que informen a este poder legislativo lo siguiente: 1) El total de recursos o partidas asignadas a proveer de insumos y equipo a los hospitales del IMSS y en su caso, a los demás, para hacer frente al Covid-19; 2) El tipo de insumos, materiales y equipos comprados para los hospitales del IMSS; y, 3) El plan o medidas que ha implementado la dirección del IMSS para proteger al personal de los hospitales; lo anterior con base en la siguiente:**

**Exposición de Motivos**

La crisis sanitaria generada en nuestro país por el Covid-19, ha impactado terriblemente al personal de las instituciones médicas, especialmente de los hospitales del IMSS, donde los médicos, enfermeras, técnicos, camilleros y afanadores reportan que no poseen ni siquiera los insumos y equipos mínimos para proteger su salud y a la vez atender a los pacientes.

Con el gobierno federal y las autoridades del IMSS tratando de negar y ocultar todo, la verdad sale a la luz con las muertes que hemos visto de doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros de esta institución; tan solo en Coahuila se registran de forma comprobadas varios de estos decesos, que, a decir de expertos y del sentido común, pudieron y debieron evitarse si el IMSS hubiese implementado no solo los protocolos de rigor, si no haber dotado del equipo profesional y adecuado de protección a todo su personal.

A esto se llama aquí y en China negligencia gubernamental, y debe ser incluso sancionada penal y administrativamente.

¿Qué origina que se presenten este tipo de situaciones?

Lo vamos a decir deletreado: C.O.R.R.U.P.C.I.Ó.N. E I.N.E.F.I.C.I.E.N.C.I.A

Si, la misma corrupción que AMLO aseguró que su gobierno iba a erradicar por arte de magia y con “buena voluntad”, la misma para la cual (el combate a la corrupción) no ha sido capaz ni él, ni sus legisladores de crear la o las leyes e instituciones que se encarguen de dicho combate.

Con AMLO cuando algo sale mal, siempre empeora más, se supera para mal, y tuvimos que soportar y seguir aguantando al espantoso fracaso de la puesta en marcha del INSABI y sus terribles consecuencias para más de 50 millones de mexicanos, y ahora, el fracaso, la indiferencia y la indolencia de su gobierno ante la crisis sanitaria y económica generada por el Covid-19.

El 09 de abril de este año, conocimos la siguiente noticia:

<https://www.proceso.com.mx/625148/sindicato-del-imss-compra-sus-propios-insumos-y-reclama-proteccion>

**Sindicato del IMSS compra sus propios insumos y reclama protección**

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) informó que compró y repartió 545 mil 622 insumos para apoyar a los trabajadores de la salud del IMSS, dependencia a la que reclamó protección eficiente para el personal.

“Las 37 Secciones Sindicales y el Comité Ejecutivo Nacional compramos hasta ahora 545 mil 622 insumos a nivel nacional. Es un primer apoyo. Daremos más”, informó el secretario general del SNTSS, Arturo Olivares Cerda.

El desglose de los insumos es: 355 mil 800 cubrebocas, 86 mil 134 pares de guantes, 38 mil 168 mascarillas N95, 31 mil 6 caretas, 30 mil litros de alcohol gel, 247 litros de aerosol box para intubación, 4 mil 241 goggles y 26 burbujas transportadoras de pacientes.

“Es indispensable que los insumos que ya se compraron lleguen a todas las unidades donde enfrentaremos el covid-19”, consideró.

Asimismo, aseguró que el SNTSS da seguimiento a trabajadores infectados en Monclova, Coahuila; Tlalnepantla, Estado de México; Cabo San Lucas, Baja California Sur y Cuernavaca, Morelos, para su pronta recuperación.

“El SNTSS demanda la protección inmediata del personal que estará en la primera línea de contacto”, exigió.

Olivares Cerda lamentó que la falta de equipamiento y de cuidado provoquen que los trabajadores de la salud se contagien.

“Siempre habrá un riesgo, pero si tenemos todos los instrumentos para enfrentar al coronavirus, los riesgos disminuyen considerablemente”, apuntó.

Los representantes de las 37 Secciones Sindicales del país recorren continuamente cada unidad médica para verificar que se tenga lo necesario para el combate de covid-19.

“Cuando encontramos deficiencias, las reportamos de inmediato a las autoridades del IMSS. Siempre hemos encontrado la disposición para atender esos requerimientos con prontitud”, afirmó.

Recordó que el IMSS y el SNTSS lanzaron masivamente una capacitación a todos los trabajadores que estarán atendiendo a derechohabientes con covid-19, pero se vuelve indispensable que los insumos adquiridos lleguen lo más rápido posible.” **Fin de la cita textual.**

Por otra parte, el 13 de abril del presente, el IMSS reconoce que “apenas”, lanzará las convocatorias nacionales e internacionales para la compra de insumos y equipos. Destacamos lo siguiente:

“El IMSS lanzó licitaciones internacionales por adjudicación directa para la adquisición de insumos para el arrendamiento, mantenimiento y reparación de ventiladores, gafas protectoras, cubrebocas, guantes, gel antibacterial y ropa quirúrgica para el personal médico en 17 estados. De acuerdo con información en Compranet, Veracruz, Edomex, Jalisco, NL, Morelos, Durango, Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, BC, CdMx, Zacatecas, Querétaro, Michoacán, QR, Guerrero y Campeche emitieron licitaciones del 6 al 15 de abril para la compra de equipos y materiales de aseo para desinfectar sus instalaciones médicas…” Fin de la cita.

¿Cómo es posible esto, hasta bien avanzada la pandemia, ya casi para entrar a la fase siguiente, apenas se intentan las compras del equipo e insumos necesarios? Esto es gravísimo, es una burla, e negligencia criminal, es la mediocridad total de un gobierno incapaz, sin planes, sin previsión, sin visión, sin nada.

El chiste se cuenta solo, la desgracia brilla por sí misma, veamos:

El 25 de marzo, el IMSS aseguraba ser la primera institución del país preparada para la contingencia y presumió de contar con un Plan Estratégico y con los insumos necesarios para el personal y los enfermos.

Anotemos o subrayemos la fecha: 25 de marzo. Ahora comparemos…Sí, todo era mentira. Era falso que estaba preparado el IMSS, que tenían medios, insumos, materiales y un Plan. Lo que debe importar graves responsabilidades para sus directivos.

Señoras y señores, se trata de una pandemia. Un virus que, a diario, cada hora, cada minuto se expande en volumen de afectados, se transmite de unos a otros, que cada minuto puede contagiar a un nuevo médico, a una enfermera, al camillero, a la afanadora, al guardia de seguridad de la entrada, y, desde luego a las personas en general. No es posible que ante eventos así el gobierno federal se tome su tiempo, la piense, juegue, diga mentiras, esperen todos las mañaneras a ver qué nueva barbaridad dice el presidente, mientras el mal avanza a paso veloz.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para que sea turnado a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, y una vez analizada, de considerarlo procedente, aprueben lo siguiente:

**Primero. -**  Este H. Pleno solicite al titular de la Secretaría de Salud Federal y al Titular del Seguro Social (IMSS) lo siguiente: La implementación inmediata de un plan de medidas para proteger la salud y la integridad de todo el personal que labora en las instituciones de salud del país, especialmente del IMSS y de los hospitales donde se atiende a pacientes de Covid-19.

**Segundo.-** Asimismo, que informen a este poder legislativo lo siguiente: 1) El total de recursos o partidas asignadas a proveer de insumos y equipo a los hospitales del IMSS y en su caso, a los demás, para hacer frente al Covid-19; 2) El tipo de insumos, materiales y equipos comprados para los hospitales del IMSS; y, 3) El plan o medidas que ha implementado la dirección del IMSS para proteger al personal de los hospitales.

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**ATENTAMENTE**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de abril de 2020**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ**

**DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**

**DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO**

**DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo en la Vía de Urgente y Obvia Resolución, que presenta el Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional” y las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de que esta Soberanía exhorte tanto al Titular del Gobierno Federal, Licenciado Andes López Obrador, como al responsable de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Doctor Arturo Herrera Gutiérrez, para que a la brevedad posible liberen los recursos que tengan a su alcance, para destinarlos inmediatamente al mantenimiento y óptimo funcionamiento de los centros y refugios para la protección y cuidado de la integridad de las mujeres que son víctimas de violencia, debido a que con las actuales condiciones de la cuarentena decretada por el propio Gobierno Federal, dichas personas en situación de vulnerabilidad, pueden ser receptoras del incremento de la violencia al estar en el mismo domicilio de sus agresores, lo anterior con base en las siguientes:**

**CONSIDERACIONES:**

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, categóricamente dispone que dicho ordenamiento tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tambien ordena que sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana, en donde la Federación, las entidades federativas,y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

En ese mismo sentido, todas las medidas que se deriven de dicha ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida, en donde sus principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, mismos que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:

**I.** La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;

**II.** El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

**III.** La no discriminación, y

**IV.** La libertad de las mujeres.

Conforme a lo anteriormente referido, se entiende como violencia contra las Mujeres cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, entendiéndose también como violencia familiar aquel acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

Por virtud de lo anterior, los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las Entidades Federativas, y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración el deber de proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia;brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al Agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia, así como favorecer la separación y alejamiento del Agresor con respecto a la Víctima.

Conforme a las obligaciones anteriores, el Estado Mexicano está obligado a favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios seguros a las víctimas y sus hijas e hijos, cuya información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia.

En ese sentido, y conforme a los lineamientos expresos de propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, les corresponde a los refugios

**I.** Aplicar el Programa;

**II.** Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos;

**III.** Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada;

**IV.** Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita;

**V.** Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención;

**VI.** Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia, y realizar todas aquellas acciones inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren en ellos, en donde tales refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos, debiéndoseles prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos deHospedaje,Alimentación,Vestido y calzado, Servicio médico,Asesoría jurídica, Apoyo psicológico,Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada,Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral, y Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten.

Derivado de lo anterior, y no obstante la obligación imperativa del Estado Mexicano de brindar oportuna y eficientemente ese tipo de servicios de operar centros o refugios para las mujeres que son y pueden ser víctimas de violencia hacia ellas o sus descendientes, no es posible comprender, como de manera indiferente y hasta criminal, **el Gobierno Federal de Morena a través de su titular el Presidente Andrés Manuel López Obrador,** injustificada e ilegalmente hayan decidido de forma totalmente arbitraria e indiferente suspender los subsidios del presupuesto hacendario, a las organizaciones de la sociedad civil que solidariamente apoyaban las tareas que le corresponden al gobierno de instalar y mantener en funcionamiento los centros y refugios para las mujeres que son víctimas de violencia, de ahí, **que este sea el momento más oportuno para llamar a la cordura a la Presidencia de la Republica y particularmente al Secretario de Hacienda Federal, Doctor Arturo Herrera Gutiérrez,** para que a la brevedad posible liberen los recursos que tengan a su alcance, para destinarlos inmediatamente al mantenimiento y óptimo funcionamiento de los centros y refugios para la protección y cuidado de la integridad de las mujeres, debido a que con las actuales condiciones de la cuarentena decretada por el propio Gobierno Federal, las mujeres y sus hijos e hijas en situación de vulnerabilidad, pueden ser receptoras del incremento de la violencia al seguir conviviendo en el mismo domicilio de sus agresores, de ahí, que presente a esta Soberanía en la Vía de Urgente y de Obvia Resolución la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. Que esta Soberanía exhorte tanto al Titular del Gobierno Federal, Licenciado Andes López Obrador, como al responsable de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Doctor Arturo Herrera Gutiérrez, para que a la brevedad posible liberen los recursos que tengan a su alcance, para destinarlos inmediatamente al mantenimiento y óptimo funcionamiento de los centros y refugios para la protección y cuidado de la integridad de las mujeres que son víctimas de violencia, debido a que con las actuales condiciones de la cuarentena decretada por el propio Gobierno Federal, dichas personas en situación de vulnerabilidad, pueden ser receptoras del incremento de la violencia al estar en el mismo domicilio de sus agresores.**

**ATENTAMENTE,**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 23 DE ABRIL DE 2020.**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS |

HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO con el objeto de que esta Soberanía exhorte tanto al Titular del Gobierno Federal, Licenciado Andes López Obrador, como al responsable de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Doctor Arturo Herrera Gutiérrez, para que a la brevedad posible liberen los recursos que tengan a su alcance, para destinarlos inmediatamente al mantenimiento y óptimo funcionamiento de los centros y refugios para la protección y cuidado de la integridad de las mujeres que son víctimas de violencia, debido a que con las actuales condiciones de la cuarentena decretada por el propio Gobierno Federal, dichas personas en situación de vulnerabilidad, pueden ser receptoras del incremento de la violencia al estar en el mismo domicilio de sus agresores

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO**

**“GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ**

**DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA**

**DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**

**DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA DIP. JESÚS BERINO GRANADOS**

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO**

HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO con el objeto de que esta Soberanía exhorte tanto al Titular del Gobierno Federal, Licenciado Andes López Obrador, como al responsable de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Doctor Arturo Herrera Gutiérrez, para que a la brevedad posible liberen los recursos que tengan a su alcance, para destinarlos inmediatamente al mantenimiento y óptimo funcionamiento de los centros y refugios para la protección y cuidado de la integridad de las mujeres que son víctimas de violencia, debido a que con las actuales condiciones de la cuarentena decretada por el propio Gobierno Federal, dichas personas en situación de vulnerabilidad, pueden ser receptoras del incremento de la violencia al estar en el mismo domicilio de sus agresores

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ, CON EL OBJETO DE EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA QUE EN SU PÁGINA OFICIAL PUBLIQUE MATERIAL DIGITAL DESTINADA A ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, COMO LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO, QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER EL APRENDIZAJE DESDE CASA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Graciela Fernández Almaraz, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Como ya sabemos, durante este periodo, en el cual se ha declarado una pandemia, se han implantado distintas estrategias encaminadas a prevenir y garantizar que los niñas, niños, adolescentes y jóvenes, estén protegidos e informados respecto el Covid-19.

Por su parte la Secretaría de Educación Pública Federal, a fin de evitar la propagación del virus, siendo el principal objetivo cuidar la salud de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ha optado por decretar un receso escolar, comprometiéndose a recuperar el aprendizaje de los contenidos para lograr cumplir con los planes y programas establecidos durante dichos días.

Evidentemente toda la sociedad se ha esforzado para acatar todas las medidas y recomendaciones que ha emitido la Organización Mundial de la Salud, a fin de contener las afectaciones de dicho virus.

Al inicio de la propagación del virus, el Titular de la Secretaría de Educación Pública solicitó se instalara una comisión de salud dentro de los consejos de Participación Escolar, con el objetivo de que se acataran las indicaciones sanitarias, se establecieran filtros en escuelas y contrarrestar la propagación de la pandemia.

Luego en el Acuerdo número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación, se tomó la decisión de suspender clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública

Consecuentemente la SEP estableció que, para lograr contener el impacto masivo, la comunidad educativa que es conformada por diversos sectores en materia de investigación y enseñanza a nivel nacional implementaría un sistema de educación a distancia electrónica y digital, para la recuperación de contenidos de aprendizaje.

Sin embargo, además de los cierres de las escuelas, necesitamos implementar nuevas estrategias para mitigar los efectos negativos al aprendizaje y bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en consecuencia de dichas medidas, haciendo posible efectuar algunos métodos de aprendizaje a distancia, ya sea estableciendo estrategias de educación en línea o emitir radialmente contenido académico, siempre tomando en cuenta que dichos receptores cuenten con los servicios básicos para poder obtener dicha información.

La UNICEF ha exhortado a escuelas, para proporcionar educación a distancia, pero sobre todo un apoyo integral, en el cual se les instruya información vital sobre la prevención de dicho virus, pero también ha considerado necesario otras medidas para facilitar el apoyo a la salud mental de la familia.

Debido a lo anteriormente señalado, consideramos necesario hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública Federal para que en su página oficial publique material digital, ya sea libros, o material didáctico, a fin de fortalecer y facilitar el aprendizaje desde casa, ya que es imprescindible efectuar planes sólidos para que garantizar la continuidad del aprendizaje, implementando métodos de educación a distancia, pero sobre todo se garantice el derecho a la educación, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México.

Actualmente hay muchos niños, que no se les ha dado algún programa o tipo de seguimiento a su educación por falta de recursos para utilizar internet, ante ello requerimos se garantice la educación mediante estrategias, no solo en línea sino diversos medios de comunicación, durante esta contingencia sanitaria, hasta que los centros educativos sean reabiertos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para que sea turnado a la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, y una vez analizada, de considerarlo procedente, aprueben lo siguiente:

**PRIMERO.– SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA QUE EN SU PÁGINA OFICIAL PUBLIQUE MATERIAL DIGITAL, DESTINADO A ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, COMO LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO, QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER EL APRENDIZAJE DESDE CASA.**

**SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE SE GARANTICE LA EDUCACIÓN MEDIANTE ESTRATEGIAS, NO SOLO EN LÍNEA SINO DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DURANTE ESTA CONTINGENCIA SANITARIA, HASTA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS SEAN REABIERTOS.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, abril de 2020.**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON EL OBJETO DE EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA QUE EN SU PÁGINA OFICIAL PUBLIQUE MATERIAL DIGITAL, DESTINADO A ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, COMO LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO, QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER EL APRENDIZAJE DESDE CASA.

Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Partido Unidad Democrática de Coahuila conjuntamente con el Diputado, Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor por el que propone medidas para prevenir la violencia familiar.

Con su venia Diputado Presidente.

H. Pleno del Congreso del Estado.

Presente. -

La Suscrita Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, conjuntamente con quienes suscriben este punto de acuerdo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180; 181; 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente:

Ha pasado un mes desde que inicio la medida de quedarnos en casa como una forma de prevenir contagios del virus COVID-19. Desde entonces dinámicas sociales y de convivencia han ido cambiando y evolucionando.

La tecnología para quienes contamos con ella en estos días se volvió una herramienta indispensable para comunicarnos con nuestros trabajos y familiares lejanos.

Pero también el encierro de acuerdo a especialistas cambiamos comportamientos, rutinas y la convivencia constante se vuelve extraña. No solo en México sino en todo el mundo se han incrementado los casos de violencia contra mujeres y la niñez.

De acuerdo con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en México las denuncias han incrementado en un 120%.

*“La*[*violencia contra mujeres y menores de edad dentro de los hogares*](https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-hogares-no-son-ajenos-a-la-politica-publica-la-violencia-debe-ser-prioridad-en-la-crisis-especialistas-20200415-0062.html)*aumentó en 120% desde la declaratoria de emergencia y confinamiento para evitar contagios con la nueva cepa del****coronavirus****(****Covid-19****); 9 de cada 10 personas que son violentadas en el hogar son de mujeres, y 1 de cada 4 es testigo de otras mujeres violentadas. El 66% es por violencia física y 22% por violencia psicoemocional*”, dato aportado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.[[29]](#footnote-29)

Otro dato es que se estima que han asesinado a 209 mujeres en la cuarentena en México.

Imagínense vivir encerradas las 24 horas del día con el agresor y no poder hacer nada.

La propia ONU destaca que mientras avanza la cuarentena la violencia contra las mujeres gana terreno.

Algunas cifras en el mundo proporcionadas por la ONU hace dos semanas:

En Francia las denuncias por violencia de genero aumentaron en un 30%.

En España la primera semana aumentaron las denuncias en un 12.7% y las consultas en la pagina web incrementaron en un 270%.

En México aumentaron las denuncias en un 60% y las llamadas de asilo en refugios incrementaron un 30%.

En caso de nuestra entidad aumentaron en un 53% las denuncias por violencia familiar detallo la Fiscalía General del Estado.

*“Coahuila, es una de las entidades con mayor número de reportes en esta incidencia, ocupando la quinta tasa a nivel nacional con 327 llamadas al 911 por cada 100 mil mujeres coahuilenses, y aunque no todas las llamadas concluyen en denuncias formales, sólo entre enero y febrero, este mismo número de seguridad recibió un total de 5 mil 277 de violencia familiar”[[30]](#footnote-30).*

En marzo pasado también el [Comité de Expertas](http://www.oas.org/es/mesecvi/Expertas.asp) del Mecanismo de Seguimiento de la [Convención de Belém do Pará](http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf) ([MESECVI](http://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp)),  emitió un documento donde hizo notar que muchas de las medidas que se están tomando para mitigar las consecuencias del COVID-19 pueden tener un efecto desproporcionado en relación con las mujeres y las niñas, y, en algunos casos, pueden exacerbar la violencia en su contra.

*“El Comité hace notar que un porcentaje muy alto de las mujeres y niñas en la región son violentadas por sus parejas, sus familiares o por las personas con las que conviven cotidianamente. En este sentido, el aislamiento forzoso que conllevan las cuarentenas enfrenta a las mujeres a un riesgo muy alto de que se extreme la violencia en su contra al convivir tiempo completo con sus victimarios, así como que las y los niños y otras personas vulnerables se expongan a la misma de forma directa o indirecta”.* [[31]](#footnote-31)

Y para ello ha emitido una serie de recomendaciones que como autoridades legislativas, municipales, estatales y federales debemos tomar en cuenta, entre ellas:

* El establecimiento de albergues y refugios dignos en los que las mujeres, sus hijas e hijos, las y los adultos mayores y cualquier otra persona en riesgo de vivir violencia puedan acceder durante las cuarentenas que sean establecidas para la mitigación del COVID-19;
* Se faciliten y se difundan estratégicamente los medios para denunciar la violencia de género, a través, por ejemplo, de mensajes de texto, de páginas de internet o de estrategias en las farmacias, supermercados o cualquier otro establecimiento a los que sí se pueda acceder en caso de cuarentena o de cualquier otro medio que no ponga en riesgo a la mujer al ser vista o escuchada por sus victimarios;
* Se establezcan células de reacción inmediata para atender eficazmente las denuncias y los casos de violencia de género;
* Se fortalezcan las medidas de protección para las mujeres y niñas en riesgo;
* **S**e evite la venta de alcohol, drogas, armas y cualquier otro detonante de la violencia de género durante los periodos de aislamiento;
* **S**e mantengan activas todas las acciones y servicios necesarios para prevenir, atender, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Tendríamos que abordar el tema que las mujeres duplican o triplican esfuerzos en las jornadas de trabajo dentro del hogar; como cuidadoras de hijas e hijos, adultos mayores, labores domésticas o personas enfermas.

Pero donde también que las empresas, instituciones y organizaciones permitan que las mujeres puedan hacerse cargo de los hijos mientras la escuela está cerrada y sin que esto represente la afectación laboral.

**El tema de los contagios está escalando y si bien no se ha decretado una cuarentena generalizada es necesario implementar planes de contingencia** para que las labores que realizan las mujeres y hombres que tienen a cargo el cuidado de otras personas puedan ser subsumidos por otras personas u otros medios sin que esto afecte su ingreso o sus derechos laborales;

Son muchas las vertientes que podríamos abordar hoy sobre el cómo podemos fortalecer con acciones, medidas y recomendaciones para prevenir la violencia contra la mujer y garantizar su protección.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para que sea turnado a la Comisión de Igualdad y No Discriminación, y una vez analizada, de considerarlo procedente, aprueben lo siguiente:

PRIMERO. – Se exhorte respetuosamente al Ejecutivo del Estado para que a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres active un programa estatal de prevención de violencia contra las mujeres en Coahuila ante la emergencia del COVID-19 e involucre a las autoridades municipales y el sector privado y empresarial establecido en Coahuila con las características que requieren la situación social actual.

SEGUNDO- Se exhorte a la Secretaria de Economía y a las Cámaras Empresariales para aplicar protocolos y políticas que faciliten al personal femenino que está a cargo en farmacias, clínicas y hospitales o en la atención de comercios necesarios para abastecer bienes esenciales o en cualquier otro establecimiento o servicio prioritario que requiera de su servicio activo en periodos de cuarentena.

**Atentamente**

**Por un Gobierno de Concertación Democrática**

**Grupo Parlamentario Unidad Democrática de Coahuila “Brigido Ramiro Moreno Hernández”**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**SALTILLO, COAHUILA  22 DE ABRIL DE 2020**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES Y ESTATALES A QUE SE ABSTENGAN DE PUBLICAR INFORMACIÓN FALSA O DESAUTORIZAR, CONTRARIAR O INVITAR A DESOBEDECER LAS RECOMENDACIONES DE SALUD Y CONTINGENCIA REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEL PAIS.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 21 fracciones VI y VII, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través de la que se exhorta respetuosamente a los medios de comunicación nacionales y estatales a que se abstengan de publicar información falsa o desautorizar, contrariar o invitar a desobedecer las recomendaciones de salud y contingencia realizadas por las autoridades sanitarias del país.

**MOTIVOS DE ESTA PROPOSICIÓN.**

A casi un mes de que se decretara la declaración de alerta sanitaria en el país por el virus Covid 19, las autoridades mexicanas de todos los niveles siguen realizando acciones con la finalidad de detener la propagación del virus y así evitar un colapso masivo del sistema de salud en México.

Incluso en nuestra región los mandatarios estatales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han venido trabajando de manera conjunta a través de medidas de contención y apoyos para las empresas que se han visto afectadas, así como una constante campaña de sensibilización para que la gente no salga de sus hogares, esta última a su vez, se ha visto reforzada por las autoridades de la federación en especial por el Subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell quien de manera reiterada nos ha pedido a las y los mexicanos que nos quedemos en nuestra casas, pues sólo así podemos evitar que este virus de extienda de forma incontrolable.

Desgraciadamente, una de las problemáticas más graves que hemos tenido que afrontar como sociedad en este contexto de pandemia, es el cúmulo de noticias falsas que se han viralizado aún más que la misma enfermedad tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación tradicional, desinformando a la población y creando dudas sobre el impacto y la peligrosidad del virus, así como llamando a la sociedad a desobedecer las indicaciones sanitarias.

En este último caso, encontramos las desafortunadas declaraciones del periodista Javier Alatorre, titular de un espacio noticioso de la cadena TV Azteca, pues el día 17 de abril pasado declaró públicamente en su noticiero lo siguiente:

“Como todas las noches el subsecretario de salud, Hugo López Gatell encabezó la conferencia sobre el covid-[[32]](#footnote-32)19. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más se lo decimos con todas las palabras, ya no le haga caso a Hugo López- Gatell”.

Desde luego, tales afirmaciones nos parecen sumamente irresponsables, pues en el contexto de una pandemia en la que no existe todavía una cura probada, el hecho de desobedecer las indicaciones de las autoridades en nada ayudar a combatir la enfermedad, sino por el contrario confunde, descalifica y desinforma a la sociedad, pues la ciudadanía puede dar por cierta la información de un medios de comunicación considerado serio por un alto número de mexicanos.

Es cierto que las declaraciones del conductor se hicieron contrastando los datos estadísticos de la Secretaría de Salud con los del gobernador de Baja California, sin embargo, en lugar de desautorizar la información y llamar a desobedecer las indicaciones del gobierno federal, se debió solicitar que tal información fuera aclarada puntualmente con el objeto de dar certeza a la ciudadanía.

Respetamos la libertad de expresión de los medios pues tal derecho constituye una base fundamental para las instituciones democráticas, sin embargo y dada la situación que vivimos en estos momentos, se vuelve indispensable que los medios contribuyan con información clara, veraz y oportuna que contribuya a combatir la pandemia de manera efectiva.

Es por estos motivos que el día de hoy hacemos un atento exhorto a los medios de comunicación a que eviten la emisión de información falsa, confusa o poco sustentada y a que atiendan e inviten a la ciudadanía a atender las indicaciones de las autoridades sanitarias, pues solo así con esa responsabilidad compartida entre la sociedad, el gobierno, la iniciativa privada y los medios de comunicación podremos afrontar de la mejor manera la crisis sanitaria por la que actualmente pasamos.

Es por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para que sea turnado a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y una vez analizada, de considerarlo procedente, aprueben lo siguiente:

**PRIMERO.-** Se hace un atento exhorto a los medios de comunicación nacionales y estatales a que se abstengan de publicar información falsa, confusa que pueda desautorizar, contrariar o invitar a desobedecer las recomendaciones de salud y contingencia realizadas por las autoridades sanitarias del país.

**SEGUNDO.-** Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus competencias realice una investigación y determine las posibles sanciones aplicables para los medios de comunicación como radio y televisión que distribuyan y emitan información falsa o que pueda desautorizar, contrariar o invitar a desobedecer las recomendaciones de salud y contingencia realizadas por las autoridades sanitarias del país.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de abril de 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA “CON EL OBJETO DE EXHORTAR AL INSTITUTO COAHUILENSE DEL ADULTO MAYOR Y A LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL, PARA QUE COORDINEN ACCIONES Y REALICEN VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS ASILOS Y CASAS DE REPOSO DE ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN Y QUE CUENTEN CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR Y PREVENIR EL COVID 19.”**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada María Esperanza Chapa García, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar ante este H. Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando que la misma sea considerada de **urgente y obvia resolución** en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

*“Las cosas se les salieron de las manos, coronavirus invade hogares de ancianos en E.U”…* este es el encabezado de la agencia de noticias El Universal de fecha 2 de abril de 2020[[33]](#footnote-33).

Si bien no hay cifras del gobierno de los Estados Unidos, existe un recuento que hizo la AP (Prensa Asociada) en base a informes de prensa y datos de los departamentos de salud de los Estados, indica que hubo al menos 450 muertes y 2.000 infecciones en hogares de ancianos[[34]](#footnote-34).

Insistimos que los adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, representan el sector de la población más vulnerable frente al COVID-19 debido a un sistema inmunológico más debilitado, incluso muchas personas son portadoras del virus y son asintomáticas; por lo que a nivel federal y en nuestro Estado se ha solicitado seguir extremando los cuidados y medidas para evitar los riesgos de sufrir complicaciones por la enfermedad del virus, sobre todo en los grupos más vulnerables.

Sin embargo, como lo menciono las casas de reposo o asilos son sitios que tienen a su cuidado, las 24 horas del día, a una gran cantidad de personas adultas mayores y que debido a que su edad o condición médica no pueden valerse por sí mismos, por lo que requieren cuidados especiales y particularmente en esta situación de pandemia que estamos viviendo, es necesario reforzar los cuidados y alimentarlos debidamente para fortalecer su sistema inmunológico. En redes sociales hemos visto publicaciones en las que solicitan ayuda para diversas casas de albergue para adultos mayores, como la casa de reposo La Gloria del municipio de Saltillo, está solicitando apoyos como alimentos, pañales y otros insumos, por mencionar alguno.

Además de lo anterior, es importante actuar anticipadamente y prevenir que como en los Estados Unidos, se presenten casos de contagio en los asilos, es decir se tiene que examinar tanto a los residentes de estos lugares como al personal que los atiende para poder detectar y aislar a tiempo cualquier caso de riesgo para estos grupos tan vulnerables.

Ante ello y dando cumplimiento al artículo 26 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza, es que nos permitimos realizar un atento llamado al Instituto Coahuilense del Adulto Mayor para que en coordinación con la Secretaría de Salud, realicen visitas de inspección a las instituciones públicas y privadas que operen como casas de reposo o asilos, con la finalidad de verificar las condiciones de funcionamiento y calidad de vida con la que están operando en esta contingencia sanitaria, y se garantice que tanto las personas adultos mayores y el personal que se encuentra en dichos lugares cuenten con los insumos necesarios para enfrentar el Covid-19, además de verificar el estado de salud de ellos y descartar cualquier caso sospechoso de las personas que en estos lugares residen o laboran.

Aprovecho también para exhortar a mis compañeras y compañeros Diputados a que pongamos atención en los asilos y casas de reposo que se encuentran en nuestros Distritos y que siguen brindando atención al adulto mayor, y les apoyemos ahora más que nunca, con insumos que puedan requerir en esta época de pandemia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para que sea turnado a la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y una vez analizada, de considerarlo procedente, aprueben lo siguiente:

**ÚNICO. - SE ENVÍE ATENTO EXHORTO AL INSTITUTO COAHUILENSE DEL ADULTO MAYOR Y A LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL, PARA QUE COORDINEN ACCIONES Y REALICEN VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS ASILOS Y CASAS DE REPOSO DE ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN Y QUE CUENTEN CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR Y PREVENIR EL COVID 19.”**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, Abril de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |  | **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO “CON EL OBJETO DE ENVIAR UN ATENTO EXHORTO AL INSTITUTO COAHUILENSE DEL ADULTO MAYOR Y A LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL, PARA QUE COORDINEN ACCIONES Y REALICEN VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS ASILOS Y CASAS DE REPOSO DE ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN Y QUE CUENTEN CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR Y PREVENIR EL COVID 19.”

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA, MEDIANTE EL CUAL RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA ASEGURAR QUE LOS NIÑOS MENORES DE EDAD RECIBAN LAS VACUNAS QUE LA SECRETARÍA DE SALUD ESTIME NECESARIAS, DE MANERA OPORTUNA, PARA PREVENIR FUTUROS BROTES DE ENFERMEDADES COMO SARAMPIÓN.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Nuestro país está atravesando una de las peores crisis sanitarias de su historia. A la fecha, se han presentado más de mil quinientos casos de personas diagnosticadas con el virus COVID-19[[35]](#footnote-35). Sin embargo, esta terrible enfermedad no es la única que pone en peligro la salud de quienes vivimos en México.

Desde el mes de enero, se han reportado numerosos casos de sarampión en México. Esta enfermedad es muy contagiosa y grave. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2 o 3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de dos millones de muertes[[36]](#footnote-36).

Según los reportes de las autoridades sanitarias, se han reportado 101 casos de esta enfermedad en 2020. La Secretaría de Salud Federal informó que, del total de casos registrados hasta este momento, solo 16 personas tienen antecedente de vacunación contra el sarampión.

De las personas contagiadas, 40 son mujeres y 61 hombres, mientras que 11 no tienen ni un año[[37]](#footnote-37). Cabe destacar que en México no se habían presentado brotes de esta enfermedad desde hace más de 20 años[[38]](#footnote-38).

La Organización Mundial de la Salud explica que el primer síntoma del sarampión es la fiebre alta, que comienza de 10 a 12 días después de la exposición al virus y dura entre 4 y 7 días. En la fase inicial, el paciente puede presentar nariz congestionada, tos, ojos llorosos y rojos, y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

Al cabo de unos tres días aparecen erupciones en la piel, generalmente en el rostro y la parte superior del cuello, que se van extendiendo, acabando por afectar a las manos y pies. Estas marcas duran de 5 a 6 días, y luego se desvanecen. El intervalo entre la exposición al virus y la aparición de las manchas, oscila entre 7 y 18 días[[39]](#footnote-39).

Esta enfermedad es muy contagiosa y se transmite por la tos y los estornudos, el contacto personal íntimo o el contacto directo con secreciones nasales. El sarampión puede producir epidemias que causan muchas muertes, especialmente entre los niños pequeños.

Si bien no existen tratamientos antivirales contra el sarampión, las campañas de vacunación contra este virus, combinadas con campañas de inmunización masiva en países con elevada incidencia y mortalidad, son estrategias de salud pública fundamentales para reducir el número de muertes por esta enfermedad.

La vacuna contra el sarampión, que se aplica desde hace más de 50 años, se utiliza por todos los países, es segura, eficaz y barata. Inmunizar a un niño contra el sarampión cuesta aproximadamente menos de un dólar[[40]](#footnote-40).

Las vacunas tienen la capacidad no sólo de salvar vidas, sino también de transformarlas, pues brindan a nuestras niñas y niños la oportunidad de crecer sanos, ir a la escuela y mejorar sus perspectivas de futuro.

Bajo este supuesto, hace unas semanas, presenté ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa que reforma la Ley Estatal de Salud, para establecer el derecho de los niños y niñas a la salud, específicamente, en la obligatoriedad de sus padres de acudir a las instituciones de salud pública o privada para que los pequeños puedan recibir todas sus vacunas contra enfermedades transmisibles como el sarampión.

A pesar de su obligatoriedad, que garantiza el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes, han surgido movimientos que se oponen a la aplicación de vacunas en niñas y niños menores, debido a la desinformación. A esto se le suma el desabasto de vacunas contra esta enfermedad en los hospitales públicos del país[[41]](#footnote-41).

El doctor Pablo Mireles, médico pediatra, destaca que el reciente brote de esta enfermedad en nuestro país, se debe a que existe un movimiento en el que los padres no quieren vacunar a sus hijos, lo que hace tener *“hoyos en la inmunidad colectiva”* [[42]](#footnote-42).

Por su parte, Andrea Domínguez, epidemióloga del hospital ABC, indicó que *“ante la epidemia del coronavirus COVID-19, hay que minimizar riesgos, pues si un niño no está vacunado contra el sarampión, el riesgo de adquirir dos enfermedades no sólo graves, sino simultáneas, se duplica”[[43]](#footnote-43).*

Es indispensable que el sistema de salud federal, dote a todos los hospitales públicos del país con las vacunas necesarias para enfrentar posibles brotes como el que se está dando actualmente de sarampión.

No olvidemos que desde 1993 se impulsaron las Semanas Nacionales de Salud, para proveer a la población menor de 14 años un paquete de salud con acciones integrales de atención primaria, cuyo eje central son las acciones de vacunación.

Sin embargo, en los últimos dos años el gobierno federal ha descuidado el tema, pues la escasez de insumos, de medicamentos básicos y vacunas, ha sido el pan de cada día en los hospitales públicos de nuestro país.

Todos los días llegan a nosotros las exigencias de miles de coahuilenses que piden se les garantice el acceso a la salud. Debe ser de suma importancia para quienes hoy legislamos, exigir al Gobierno Federal que no se le reste importancia a esta crisis sanitaria, pues la forma en que han confrontado la epidemia del virus COVID-19, deja mucho que desear.

Es indispensable que hagamos lo conducente, para que las autoridades de salud federales, realicen las acciones que se requieren para prevenir más brotes de enfermedades transmisibles. Hoy el brote es de sarampión, pero si no exigimos y le damos importancia, mañana podemos tener niños y niñas infectadas por rubéola u otras enfermedades.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para que sea turnado a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, y una vez analizada, de considerarlo procedente, aprueben lo siguiente:

**ÚNICO. -** **ENVÍESE UN ATENTO EXHORTO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA ASEGURAR QUE LOS NIÑOS MENORES DE EDAD RECIBAN LAS VACUNAS QUE LA SECRETARÍA DE SALUD ESTIME NECESARIA, DE MANERA OPORTUNA, PARA PREVENIR FUTUROS BROTES DE ENFERMEDADES COMO SARAMPIÓN.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, abril de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA ASEGURAR QUE LOS NIÑOS MENORES DE EDAD RECIBAN LAS VACUNAS QUE LA SECRETARÍA DE SALUD ESTIME NECESARIAS, DE MANERA OPORTUNA, PARA PREVENIR FUTUROS BROTES DE ENFERMEDADES COMO SARAMPIÓN.

**PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, A FIN DE RECONOCER LA GRAN LABOR QUE EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD REALIZA PARA COMBATIR EL PROBLEMA DEL COVID-19.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El incierto panorama que pinta para México, y en específico para Coahuila, con relación al Covid-19 y sus estragos sociales, es claramente notorio. Se habla por aquí y por allá de lo que en el presente está causando dicha pandemia viral, e inclusive, emitimos juicios personales, por experiencia o simplemente por opinar, y nos atrevemos a “decretar” las posibles consecuencias que le deparan a nuestra sociedad en los próximos años.

Todos estamos en el tema, lo analizan expertos del sector salud, económico y social, lo aborda la opinión pública y medios de comunicación, nosotros mismos como funcionarios públicos, o en el rol de padres o madres; nuestros amigos y familiares, todos absolutamente hablamos del coronavirus, buscamos respuestas, adoptamos posturas de prevención y aporte, vemos cómo y qué hacer para frenar este mal que está atacando a la población y del cual todos nos preocupamos.

Es cierto, afortunadamente podemos decir que estamos en una etapa donde contamos con la mayoría de la voluntad y disposición de la ciudadanía para prevenir la propagación, aportamos cada uno desde nuestras esferas individuales de acción para disminuir las posibilidades de contagio, y, además, sumémosle que el sector salud Federal, pero sobre todo el Estatal, se han dedicado en atender, en la medida que les corresponde y a sus posibilidades, esta problemática de salud.

Y qué bueno que se hace desde ya y no cuando el problema es indetenible, que se implementaron los mecanismos a tiempo y se previno su crecimiento, ya que no podemos negar que, si se llegase a números tan extremos como los que vive Estados Unidos o España, por ejemplo, nos veríamos rebasados por mucho del soporte que tiene el sector salud para brindar atención médica a la población, traduciéndose a desastre sin igual.

Es ahí donde resaltamos la actividad invaluable de nuestros profesionales del sector salud, donde encarecidamente aplaudimos su compromiso y dedicación diaria, su gran labor dentro de sus centros de trabajo para prevenir la propagación del virus, para atender aquellos casos detectados con Covid-19, buscar una solución pronta y tratar de poner fin a esta pandemia.

Haciendo un paréntesis, no podemos dejar de lado que la apatía y falta de profesionales y trabajadores del sector salud público se ha venido acrecentando en los últimos años, inclusive desde antes del brote de coronavirus, tanto en Coahuila como en todo el país; es lamentable que la ausencia del recurso humano sea otro problema más que se suma a las problemáticas sector salud.

Sin embargo, sabemos que los y las enfermeras, técnicos, médicos, y demás personal y trabajadores del sector salud que hoy se encuentren laborando y prestando sus servicios, están más que firmes, cimentados sobre sus convicciones y con la disposición de hacer lo que esté en sus manos para salvar vidas.

Hoy en día debemos de dar más que las gracias a todas aquellas personas que anteponen el bien común y la salud colectiva, que dejan en segundo plano sus intereses personales con tal de brindar bienestar a la sociedad.

Nuestro más grande reconocimiento a todos esos doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, técnico auxiliar y personal que trabaja en el sector salud y de atención médica; porque a pesar de estar conscientes que pueden poner en riesgo su salud y la de sus seres queridos, les gana ese espíritu de beneficencia y ayuda al prójimo.

Es cuanto

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, abril de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, A FIN DE RECONOCER LA GRAN LABOR QUE EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD REALIZA PARA COMBATIR EL PROBLEMA DEL COVID-19.

Pronunciamiento **que presenta el suscrito, Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” de la LXI Legislatura del Honorable Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en relación con el informe presentado el domingo, 05 de abril, por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador.**

Compañeras Diputadas y compañeros Diputados:

Me congratulo este día en poder compartir con ustedes las buenas noticias derivadas del informe que, de cara a la nación y *“con absoluto apego a la verdad”*, presentó el domingo, 05 de abril, el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal, además de ofrecer resultados contundentes de su gestión, amplió sus compromisos, incluso para enfrentar la actual crisis sanitaria, restablecer la salud y reactivar la economía.

Comparto su convicción de que *“a pesar de los pesares, saldremos adelante”*, pues nuestras fortalezas soy mayores que nuestras desventajas.

*“La cultura de nuestro pueblo* --afirmó-- *siempre nos ha salvado y nos ha permitido reponernos de terremotos, huracanes, inundaciones, epidemias, tiranías, malos gobiernos y de la corrupción, que ha sido la más trágica y funesta de las pestes y calamidades de México”*.

*“Ahora primero es el bienestar del pueblo, y después lo mismo, el bienestar del pueblo y nunca, jamás, los privilegios, la corrupción, el saqueo y la impunidad”*, sentenció enfático.

He aquí el reporte de su administración:

Se adelantó el pago de cuatro meses de la pensión para 8 millones de adultos mayores a través de bancos, y la entrega personal de 42 mil millones de pesos. Lo mismo se hizo con las pensiones de niñas y niños pobres con discapacidad.

Se están entregando 10 millones 500 mil becas a estudiantes de todos los niveles escolares y en las Universidades Benito Juárez, donde estudian 15 mil 151 alumnos, y están laborando 870 docentes.

Se han otorgado a pequeños negocios familiares 356 mil créditos del programa Tandas para el Bienestar y, en lo que falta del año, se agregarán 450 mil tandas más, con una inversión de tres mil 400 millones de pesos.

Actualmente, 230 mil sembradores cuentan con empleo permanente y están ocupados en cultivar sus parcelas.

740 mil jóvenes trabajan como aprendices y reciben un salario mínimo.

Desde el inicio del gobierno se entregaron apoyos para 47 mil 500 pescadores.

Se estableció el Precio de Garantía para maíz, arroz, trigo, frijol y leche, en beneficio de 107 mil productores.

El programa de Producción para el Bienestar, antes Procampo, se extendió a comunidades indígenas y a productores de caña y de café, con una inversión de 11 mil millones de pesos. Reciben este apoyo 2 millones 145 mil comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios.

Este año, los productores pobres de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México se sumarán a los de Guerrero, como beneficiarios de fertilizantes gratuitos.

Se entregaron de forma directa 4 mil millones de pesos a las sociedades de madres y padres de familia, para el mantenimiento de 23 mil escuelas.

Se seguirán construyendo caminos de concreto con la participación de las comunidades de Oaxaca; se llevan 25 terminados y se trabaja en 84 más.

Se avanzó en la construcción de caminos rurales y el mantenimiento, construcción y modernización de carreteras en las 32 entidades federativas de país con una inversión global de 28 mil millones de pesos.

Se continúa con la construcción del Tren Toluca-Ciudad de México, y ya se terminó la Línea 3 de Zapopan a Guadalajara.

Prosigue el programa de construcción de presas y canales de riego.

Sigue operando el programa de reconstrucción en pueblos afectados por los sismos de 2017 y se han mejorado los espacios urbanos en 324 colonias de 14 municipios, tanto de la frontera como de centros turísticos del país.

El Infonavit ha otorgado 619 mil créditos, ha reestructurado 186 mil y ha quitado deudas a 53 mil trabajadores que habían pagado el 90 por ciento de sus créditos, a los cuales ya se les están entregando sus escrituras.

El programa de rehabilitación o construcción de vivienda ha beneficiado a 17 mil 800 familias de zonas marginadas.

El programa Internet para Todos ya conectó a 22 mil comunidades y este año quedarán comunicadas por este medio 75 mil localidades. En 2022 se cumplirá la meta de cubrir todo el territorio nacional.

Ya se inició la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar para acercar este servicio a la gente, entregar tarjetas y dejar de manejar dinero en efectivo para los programas sociales.

**En materia de seguridad:**

De enero a marzo de este año bajaron los homicidios en 0.3 por ciento, el secuestro en 25.8 por ciento, el robo de vehículo en 11.1 por ciento y el robo en general en todas sus modalidades 6.6 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La estrategia para garantizar la paz se sustenta en atender las causas que originan la violencia; es decir, que no haya pobreza, que no haya desintegración familiar, que no haya pérdida de valores culturales, morales, ni espirituales.

Se ha erradicado la tortura, se sigue apoyando a las víctimas de la violencia y el Estado mexicano no está asociado a la delincuencia y ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos.

Se están ejerciendo mil millones de pesos para convertir el Bosque de Chapultepec, incluida la antigua Residencia Oficial de Los Pinos, en el espacio artístico y cultural muy importante.

**En materia de salud:**

Desde antes de la aparición del coronavirus, el presidente López Obrador ya había recorrido 80 hospitales del IMSS-Bienestar en zonas marginadas de 19 estados de la República, tomando la decisión de superar el estado ruinoso en el que el anterior régimen dejó el sistema de salud pública.

Se terminó la construcción de 72 centros de salud y hospitales que estaban inconclusos. Se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, para garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social.

Se trabaja para que no falten medicinas, ni personal de salud, mientras se siguen mejorando instalaciones hospitalarias y dando prioridad a la conclusión de obras abandonadas.

Se hizo el compromiso de otorgar en este sexenio la base laboral a más de 80 mil trabajadores de la salud que trabajan como eventuales.

Todo ello respaldado con la aprobación presupuestal de 40 mil millones de pesos adicionales para el sector salud, de modo que cuando llegó el coronavirus ya se estaba trabajando en mejorar el sistema de salud pública.

Se cuenta ya con 6 mil 425 camas de terapia intensiva, con sus respectivos ventiladores y con el personal de enfermería de médicos especializados.

Las Secretarías de la Marina y de la Defensa Nacional recibieron 5 mil millones de pesos, y ya se están invirtiendo; pronto se tendrá como respaldo mil 399 camas, equipos y personal médico especializado para atender en terapia intensiva a enfermos del COVID-19.

**Acciones para enfrentar la epidemia:**

Hace tres meses, antes que otros gobiernos en el mundo, se informó a la población y se emitieron recomendaciones preventivas, con el propósito de evitar la saturación de hospitales y mayores pérdidas de vidas humanas.

México es, después de la India, el país con menos infectados, y el tercer país con menos defunciones por número de habitantes.

**Reactivación económica:**

No aumentarán los precios de los combustibles. Ahora, Pemex vende la gasolina en 30% menos que antes de la pandemia.

Este año se invertirán 25 mil millones de pesos más para la introducción de agua potable, drenaje, pavimento y la construcción y mejoramiento de 50 mil viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país, lo cual permitirá crear 228 mil empleos directos, además de los beneficios a los habitantes.

El programa Sembrando Vida que da empleo permanente a 230 mil sembradores, se ampliará para 200 mil campesinos más, con el propósito de que tengan trabajo de inmediato.

A partir del mes próximo, 190 mil pescadores recibirán apoyos directos.

Este año se entregarán apoyos adicionales a las sociedades de padres y madres de familia para el mantenimiento de 31 mil planteles escolares.

Se tienen los recursos para contratar de manera adicional a 45 mil médicos y enfermeras en estos nueve meses.

Se va a reclutar a 31 mil elementos que pasarán a formar parte del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

Se dispondrá de un fondo de 35 mil millones de pesos del ISSSTE para entregar créditos personales, que van de 20 mil a 56 mil pesos por crédito, esto en beneficio de 670 mil trabajadores al servicio del Estado.

El Fovissste y el Infonavit destinarán 177 mil millones de pesos para otorgar créditos de vivienda durante estos nueve meses, en beneficio de 442 mil 500 trabajadores, acción de vivienda que generará al mismo tiempo 270 mil nuevos empleos.

Continuará el programa de estímulos fiscales y bajos precios de gasolinas y otros energéticos en la zona fronteriza del norte del país.

No aumentarán los impuestos, ni se crearán nuevos.

Se cumplirá el compromiso de devolver rápidamente el IVA a los causantes, como lo solicitaron los representantes del sector empresarial.

El tiempo fiscal o el tiempo oficial, dedicado a publicidad del gobierno, se entregará a los medios de comunicación.

Continúa la construcción del aeropuerto de Santa Lucía “Felipe Ángeles”, la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

Ahora que se cayó el precio del petróleo crudo, se aumentará la producción de gasolinas en el país. Se destinarán a ese propósito 400 mil barriles diarios adicionales para no malbaratar todo el petróleo de exportación y bajar la compra de combustibles en el extranjero.

Pemex dispondrá de un recurso extra de 65 mil millones de pesos porque se le reducirá la carga fiscal.

La Comisión Federal de Electricidad cuenta con financiamiento suficiente para construir las plantas termoeléctricas que se necesitan en la península de Yucatán, en Baja California y en otras regiones del país. Está asegurado en todo el territorio nacional el abasto de energía eléctrica.

Inició la modernización y ampliación del ferrocarril del Istmo y puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, creándose, este año, 7 mil 300 empleos.

El 30 de abril se firmará el contrato de construcción del primer tramo del Tren Maya, y en mayo se acordará la construcción de cuatro tramos más, sólo quedarán pendientes, para 2022, 485 kilómetros que se construirán con la participación de los ingenieros militares, una vez que terminen la obra del Aeropuerto “General Felipe Ángeles” de Santa Lucía.

Este año, en los cinco tramos que comprenden mil 43 kilómetros de construcción del Tren Maya, se generarán 80 mil empleos y habrá una derrama económica de 35 mil millones de pesos en los estados del sureste.

En suma, los programas sociales y el desarrollo promovido por el gobierno este año llegará a 22 millones de beneficiarios.

Se otorgarán 2 millones 100 mil créditos personales de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e informal de la economía.

Se van a crear en nueve meses dos millones de nuevos empleos.

A la mitad de los hogares del país ya está llegando al menos un programa de bienestar, mientras 95% de las familias pobres de México reciben cuando menos un apoyo o beneficio.

El 1º de diciembre de este año se podrá decir que todos los pobres de México ya cuentan con protección y amparo del gobierno que represento y de la sociedad solidaria que es México.

Se aprobó la reforma al artículo 4º constitucional para otorgar, por mandato de ley, pensiones a todos los adultos mayores del país, pensiones a niñas y niños pobres con discapacidad, becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos en todos los niveles escolares. Con esta reforma, se garantiza también a todos los mexicanos el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos.

Esta es, sin duda, la reforma social más importante que los últimos tiempos. En términos generales, se apoya a los más necesitados, a los pobres, y a la población más vulnerable ante la epidemia del coronavirus.

Para financiar este plan sin aumentar impuestos ni decretar gasolinazos, se recurrirá a utilizar los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos. La Federación también se apoyará en la banca de desarrollo, pero, sobre todo, seguirá con la misma política de liberar recursos, porque continuará, con mayor rigor, el plan de austeridad republicana.

Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el del presidente de la República; se reducirán los gastos de publicidad del gobierno; se reducirá la partida de viáticos, los gastos de operación y se ahorrará más en compras a proveedores y en los costos de las obras públicas que se contratan con empresas constructoras o de servicios.

No habrá despido de trabajadores al servicio del Estado en ningún nivel, pero eso sí, se demandará más eficiencia, más entrega, más espíritu de servicio, mayor austeridad y honestidad total.

Se tiene el apoyo y colaboración del sector privado, así que la semana próxima se dará a conocer un programa de inversión pública, privada y social para el sector energético por un monto aproximado de 339 mil millones de pesos.

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de abril de 2020**

***“Por el Camino de la Cuarta Transformación”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”**

Pronunciamiento que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, con relación al día internacional de la Madre Tierra**.**

**H. Pleno del Congreso del**

**Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.-**

El día de la Tierra (oficialmente Día Internacional de la Madre Tierra), es un día celebrado en muchos países el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.

Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres vivos que la habitamos

Sin lugar a dudas, la Madre Tierra claramente nos pide que actuemos, pues la naturaleza sufre, situaciones como los incendios en Australia, los mayores registros de calor terrestre y la peor invasión de langostas en Kenia... Ahora nos enfrentamos a COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema.

El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos (enfermedades zoonóticas).

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses. De estas enfermedades, el 75% proviene de animales. Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental.

El impacto visible y positivo del virus, ya sea a través de la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no es más que temporal, ya que se debe a la trágica desaceleración económica y la angustia humana.

Actualmente el brote de coronavirus representa un riesgo enorme para la salud pública y la economía mundial, pero también para la diversidad biológica. Sin embargo, la biodiversidad puede ser parte de la solución, ya que una diversidad de especies dificulta la propagación rápida de los patógenos.

Este Día de la Madre Tierra, coincidiendo con el Súper Año de la Biodiversidad, se centra en el papel de la diversidad biológica como indicador de la salud de la Tierra.

Igualmente, cada vez más evidente su impacto en la salud humana,  los cambios en la biodiversidad afectan al funcionamiento de los ecosistemas y pueden ocasionar alteraciones importantes de los bienes y servicios que estos proporcionan.

Los vínculos específicos entre la salud y la biodiversidad incluyen posibles impactos en la nutrición, la investigación sanitaria y la medicina tradicional, la generación de nuevas enfermedades infecciosas así como cambios significativos en la distribución de plantas, patógenos, animales e incluso asentamientos humanos, algo que puede ser alentado debido al cambio climático.

A pesar de los esfuerzos actuales, la biodiversidad se está deteriorando en todo el mundo a un ritmo sin precedentes en la historia humana. Se estima que alrededor de un millón de especies animales y vegetales se encuentran actualmente en peligro de extinción.

Con este panorama general y el escenario del coronavirus, nuestra prioridad inmediata es evitar la propagación de COVID-19, pero a largo plazo, es importante abordar la pérdida de hábitat y biodiversidad.

En efecto, este día que conmemoramos el día internacional de la Tierra, se debe generar conciencia entre los seres humanos, los cambios en las formas de convivencia y movilización durante este tiempo de aislamiento social y sus visibles efectos en la naturaleza, lo cual nos debe llevar a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones, por tanto el cuidado de la Tierra es responsabilidad colectiva debiéndose fomentar esta armonía.

Recordemos más que nunca en este Día Internacional de la Madre Tierra que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta.

Promovamos la armonía con la naturaleza y la Tierra, sin olvidar que estamos en esta lucha juntos con nuestra Madre Tierra.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 21 de Abril del 2020.**

**Dip. Edgar Sánchez Garza**

Fuente.-

<https://www.un.org/es/observances/earth-day>

<https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Tierra>

**PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO "GRAL. ANDRÉS S. VIESCA", DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA HACER UN MERECIDO RECONOCIMIENTO AL GOBERNADOR ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, POR LA EXTRAORDINARIA MANERA CON QUE HA CONDUCIDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

Previo a la Declaración de Emergencia para el Estado, ante la inminencia de un desastre sanitario, derivado de la pandemia provocada por el COVID-19, el Gobierno del Estado ya había emitido la alerta epidemiológica en relación con el COVID 19, esta alerta puso a trabajar de manera interna a todo nuestro sistema estatal de salud, con la intención de que a través de las 8 jurisdicciones que lo componen, iniciaran el monitoreo de los posibles casos, haciendo de su conocimiento los protocolos y medidas de prevención, detección, atención y control emitidos por la OMS y de las autoridades federales.

Desde ese momento y hasta el día de hoy, Gobernador del Estado, el Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, no ha cesado en acciones y estrategias para la atención de esta pandemia.

Como resultado de la alerta epidemiológica, inició un proceso de preparación para lo que hoy estamos viviendo, con la adquisición de más de 1 millón de insumos y equipo de protección personal (batas, overoles, mascarillas N95, etc.), para que fueran distribuidos en todo el Estado.

Simultáneamente se dio capacitación a 2 mil 500 médicos y enfermedades, a lo largo y ancho del Estado, y se inició la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y centrales de autobuses.

Todo ello en el marco del Plan Estatal de Control y Prevención COVID19 COAHUILA.

Llegamos ya con un buen camino recorrido a la declaración de emergencia para el Estado, por parte del Gobernador del Estado, publicada en el Periódico Oficial el 19 de marzo del año en curso, adelantándose con ello a tomar acciones de la fase 2 de la epidemia, que aún no se tomaban por el Gobierno Federal.

Se crea el **Comité Técnico para la Prevención, Atención y Control del COVID- 19,** con el objeto de establecer las medidas generales de prevención, atención y control de infecciones para disminuir el riesgo de trasmisión de virus respiratorios emergentes como el COVID- 19, dirigidos a nivel comunitario, como en los centros de atención a la salud, el cual inicia sus funciones el 20 de marzo.

Con el ánimo de seguir sumando y a la vez intentar aminorar los casos de contagios en nuestro Estado, se emitieron los lineamientos para el funcionamiento de supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de comestibles, farmacias y comercio en general; así como la guía para la prevención para centros de trabajo industrial, pequeñas y medianas empresas y centros de trabajo en general, y los lineamientos para el funcionamiento de los servicios funerarios.

De forma paralela a la emisión de dichos lineamientos, el Gobernador siguió con paso firme ante el panorama sombrío que avecinaba llegar, se reunió con todos los sectores empresariales, restauranteros, hoteleros, autoridades municipales, de todas y cada una de las regiones de nuestro Estado, para fomentar lazos inquebrantables entre la sociedad y gobierno.

Asimismo, el Gobernador ha llevado a cabo innumerables reuniones con sus homólogos de los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, e inclusive con las autoridades del vecino país, reuniones que se han realizado con el objeto de establecer medidas inmediatas y coordinadas para unidos hacer frente a esta pandemia.

Se instaló el 14 de abril, aquí en esta ciudad capital el Centro Estatal de Contingencias COVID 19, en el C-4, entrando en funciones al día siguiente, el cual estará al mando del General Enrique Covarrubias López, Comandante de la Sexta Zona Militar.

Todas estas acciones dejan de manifiesto la importancia que para nuestro Gobernador representa la salud de los coahuilenses, anticipándose y previendo acciones para tratar de controlar los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Esta pandemia no solo ha traído efectos negativos en la salud de las personas, sino que también ha impactado en la economía, ante esa situación, el Gobernador con el firme propósito de apoyar a todos los Coahuilenses, autorizó una serie de estímulos fiscales como lo son:

1. El pago de impuestos establecidos en la Ley de Hacienda, se realizará sin el pago de recargos.
2. En materia de derechos de control vehicular:

* El pago de los derechos de control vehicular establecidos en los artículos del 96 al 103 de la Ley de Hacienda, de igual manera será sin el pago de recargos.
* Para las personas físicas y morales, propietarias o usuarias de vehículos registrados en el Estado, que tengan adeudo del año 2019 y anteriores, más el pago correspondiente del presente año, el laminado, el pago del impuesto a la Contribución Especial para el Fomento a la Educación y a la Seguridad Pública, autorizó que pudieran realizarse convenios para el pago en parcialidades que se celebren durante el mes de abril, debiendo establecerse como último pago el día 30 de noviembre del año en curso, sin que esto cause recargos ni actualizaciones sobre las parcialidades establecidas en dichos convenios;
* A los propietarios de vehículos que ya se encuentren registrados en el Estado, se les otorga el estímulo fiscal del 100% del impuestos sobre enajenación de vehículos de motor y el 50% de los derechos por concepto de adquisición de las placas, y
* Para los propietarios de vehículos que no se encuentran registrados en el Estado, en cuanto a vehículos particulares, solo pagan los derechos de control vehicular 2020, más sus accesorios, independientemente del vehículo de que se trate.

Así mismo, autorizó suspender los actos de fiscalización relativos a las contribuciones estatales que lleven a cabo las autoridades, con respecto a las personas físicas o morales en el Estado.

Para los empresarios de nuestro Estado, que contribuyen a que nuestra economía sea fuerte ante estas adversidades, el Gobernador puso en marcha el “PROGRAMA IMPULSO ECONÓMICO EMPRESARIAL COAHUILA (PIEEC)”, otorgando créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de Nacional Financiera (NAFIN) y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), con una bolsa total de 400 millones de pesos, así como con tasas preferenciales por convenios con estas dos instituciones, por ejemplo:

* Con NAFIN, los créditos para las empresas de los sectores estratégicos, son por un monto que van desde los 50 mil pesos hasta 2.5 millones de pesos, sin garantía hipotecaria, y
* Con FIRA, los créditos para las empresas relacionadas con el sector agroindustrial en las localidades de más de 50 mil habitantes (12), y en el resto del Estado, para todos los sectores (26), los montos van desde 100 mil pesos hasta 3 millones de pesos.

En cuanto al apoyo al comercio local, ha promovido a través de la Secretaría de Economía, la campaña “FUERTE COAHUILA ES EN EL COMERCIO LOCAL”, cuyo objetivo es impulsar al comercio local fuertemente afectado por esta contingencia, a través de las redes sociales y con el “PROGRAMA EMERGENTE DE CONTINGENCIA LABORAL”, se contará con becas para los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, hasta por un monto de 3 mil 696.6 pesos, que equivale a 1 salario mínimo durante 1 mes por única ocasión.

En beneficio de 700 mil coahuilenses, dedicados al comercio informal, organizados o no organizados, entre ellos los tianguis, los puestos semifijos, así como en apoyo a los vendedores ambulantes, músicos, boleros, limpia vidrios, artistas de la calle y más, se les hará llegar un apoyo mediante la entrega de despensas de abarrotes y alimentos, a través de las acciones coordinadas entre la Secretaría de Inclusión y Desarrollo del Estado y los alcaldes de nuestros municipios, esto con motivo del arranque el pasado 14 de abril del programa “PAQUETE QUEDES EN CASA”, que tuvo a bien llevar a cabo el Gobernador de nuestro Estado.

Este lunes 20 de abril, el Gobernador hizo entrega de 600 mil Kits de limpieza e higiene anticovid 19, como parte del programa antes mencionado, esta entrega será para los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, para que en sus casas creen un entorno más saludable.

En ese mismo día, se dio inicio del regreso virtual a clases, “APRENDE EN CASA”, en todos los niveles de educación, para lo cual, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, realizaron la entrega de guías de estudios, para aquellos estudiantes que no tuvieran acceso a internet en sus casas y para las comunidades rurales.

Como vemos nuestro Gobernador ha demostrado estar combatiendo por todos los frentes, las calamidades que esta crisis sanitaria nos trajo, lo que reconocemos y agradecemos infinitamente.

Como lo hemos reconocido anteriormente, su ánimo, su entrega, su motivación, su certeza y convicción al tomar las decisiones correctas, así como su liderazgo, harán que unidos salgamos adelante, porque “Fuerte Coahuila es!!”.

Es cuanto.

**LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PRONUNCIAMIENTO PARA HACER UN MERECIDO RECONOCIMIENTO AL GOBERNADOR ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, POR LA EXTRAORDINARIA MANERA CON QUE HA CONDUCIDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19.

1. Acuerdo General INE/CG83/2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rodríguez Fuentes, Óscar. (2 de abril de 2020). Elecciones en tiempo del coronavirus, ¿constitucionalidad vs. decisión Estado? Vanguardia. Disponible en: https://vanguardia.com.mx/articulo/elecciones-en-tiempo-del-coronavirus-constitucionalidad-vs-decision-estado. [↑](#footnote-ref-2)
3. Para una mayor referencia sobre este tema revisar: Mata Quintero Gerardo y Oscar Daniel Rodríguez Fuentes (2020). “Elecciones y pandemias: la suspensión de comicios en Coahuila e Hidalgo”, Nexos, cobertura especial en materia electoral. Disponible en: <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11292> [↑](#footnote-ref-3)
4. Coordinación General de Planeación y Evaluación (2015): *Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015* Gobierno de la República y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, pág. 40. [↑](#footnote-ref-4)
5. Gobierno de Coahuila (2013): *Diagnóstico situacional de las mujeres en las tribus Kikapú y Negros Mascogos de Múzquiz, Coahuila*, Secretaría de las Mujeres, Coahuila. Disponible en: <http://www.coahuilatransparente.gob.mx/otrainfonew/documentos_otrainfo/Diagnostico_Mujeres_Indigenas_de_Coahuila.pdf>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Consejo de Derechos Humanos (2018): *Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México (A/HRC/39/17/Add.2)*, Asamblea General de las Naciones Unidas, Ginebra. [↑](#footnote-ref-6)
7. Coordinación General de Planeación y Evaluación (2015): *Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015*. Gobierno de la República y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, pág. 18. [↑](#footnote-ref-7)
8. Acuerdo General INE/CG83/2020. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rodríguez Fuentes, Óscar. (2 de abril de 2020). Elecciones en tiempo del coronavirus, ¿constitucionalidad vs. decisión Estado? Vanguardia. Disponible en: https://vanguardia.com.mx/articulo/elecciones-en-tiempo-del-coronavirus-constitucionalidad-vs-decision-estado. [↑](#footnote-ref-9)
10. Para una mayor referencia sobre este tema revisar: Mata Quintero Gerardo y Oscar Daniel Rodríguez Fuentes (2020). “Elecciones y pandemias: la suspensión de comicios en Coahuila e Hidalgo”, Nexos, cobertura especial en materia electoral. Disponible en: <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11292> [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28806.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. Fernández Ruiz, Jorge (2016): *Derecho Administrativo*. Ed. IIJ.UNAM *et al*: México, Pág. 132 [↑](#footnote-ref-12)
13. www. Eleconomista.com.mx [↑](#footnote-ref-13)
14. mexico.unwomen.org ONU MUJERES [↑](#footnote-ref-14)
15. www.gob.mx.inmujeres.com.mx [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://consaludmental.org/general/onu-aprueba-resolucion-especifica-salud-mental-derechos-humanos/> [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/SaludMentalOneUNWeb.pdf> [↑](#footnote-ref-17)
18. <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/estreslaboral/1erjornada/07-Panorama-Trastornos-Mentales.pdf> [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://www.inegi.org.mx/temas/salud/> [↑](#footnote-ref-19)
20. Boletín epidemiológico de la Seestadistcretaría de Salud, 2018. <https://newsweekespanol.com/2018/10/datos-y-retos-de-la-salud-mental-en-coahuila/> [↑](#footnote-ref-20)
21. Encuesta Nacional de los Hogares 2017. [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://www.who.int/mental_health/policy/legislation/WHO_Resource_Book_MH_LEG_Spanish.pdf> [↑](#footnote-ref-22)
23. García-Alba Iduñate, Pascual (2006). La estructura del IVA en México. Revista de Análisis Económico. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/413/41304807.pdf> [↑](#footnote-ref-23)
24. Gerardo Gil Valdivia (SF). Notas sobre la Introducción al Impuesto al Valor Agregado en México. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2338/9.pdf> [↑](#footnote-ref-24)
25. Comunicación Social del Senado de la República. (2019). Plantean Reducir 50% el IVA en Región el Pacifico Sur. Disponible en: <http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46142-plantean-reducir-50-por-ciento-el-iva-en-estados-de-la-region-del-pacifico-sur.html> [↑](#footnote-ref-25)
26. El Universal (17 abril de 2020). “IMSS solicita 5 mil millones de pesos para insumos”. Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/imss-solicita-5-mil-millones-para-insumos> [↑](#footnote-ref-26)
27. Vanguardia (17 de abril de 2020). “IMSS solicita de manera ‘urgente’ 5 mil mdp para insumos contra COVID-19”. Disponible en: <https://vanguardia.com.mx/articulo/imss-solicita-de-manera-urgente-5-mil-mdp-para-insumos-contra-covid-19> [↑](#footnote-ref-27)
28. Vanguardia, Ibidem. [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Segob-violencia-intrafamiliar-aumento-120-desde-la-emergencia-del-Covid-19-20200416-0111.html> [↑](#footnote-ref-29)
30. <https://vanguardia.com.mx/articulo/sube-53-violencia-familiar-en-coahuila-durante-la-cuarentena-lidera-saltillo-reportes> [↑](#footnote-ref-30)
31. <https://mailchi.mp/dist/comunicado-covid-19-y-el-reforzamiento-de-acciones-para-la-prevencin-y-atencin-de-la-violencia-de-gnero?e=148d9c4077&fbclid=IwAR30CErOQRGy88_bHnubArcbQJCIQeALyYWYgi_raSEBFSG34y0O6T7oROE> [↑](#footnote-ref-31)
32. Ver video en el siguiente link: <https://www.youtube.com/watch?v=UnPvFmJFl68> [↑](#footnote-ref-32)
33. <https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-invade-hogares-de-ancianos-de-estados-unidos-0> [↑](#footnote-ref-33)
34. <https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article241712556.html#storylink=cpy> [↑](#footnote-ref-34)
35. Redacción. *México llega a los mil 510 casos de coronavirus; tiene ya 50 muertos*. El Universal. Consultado en: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-2-de-abril-mexico-llega-los-mil-510-casos-de-covid-19-tiene-ya-50-muertos> [↑](#footnote-ref-35)
36. Organización Mundial de la Salud. *Sarampión*. Consultado en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles> [↑](#footnote-ref-36)
37. Redacción. *Los casos de sarampión se extienden: CDMX y Edomex con 101*. Forbes. Consultado en: <https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/01/los-casos-de-sarampion-se-extienden-cdmx-y-edomex-con-101> [↑](#footnote-ref-37)
38. Arturo Ordaz Díaz. *‘Antivacunas’, posible razón del brote reciente de sarampión en la CDMX*. Forbes México. Consultado en: <https://www.forbes.com.mx/antivacunas-posible-razon-del-brote-reciente-de-sarampion-en-la-cdmx/> [↑](#footnote-ref-38)
39. Organización Mundial de la Salud. *Sarampión*. Consultado en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles> [↑](#footnote-ref-39)
40. ibíd [↑](#footnote-ref-40)
41. Redacción. *¿Por qué regresó el sarampión después de 20 años a la CDMX?.* El Universal. Consultado en: <https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/por-que-regreso-el-sarampion-despues-de-20-anos-la-cdmx> [↑](#footnote-ref-41)
42. Alida Piñón. Ante brote de sarampión, especialistas recomiendan priorizar vacuna en niños y jóvenes. El Universal. Consultado en: <https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/sarampion-especialistas-recomiendan-priorizar-vacuna-en-ninos> [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibíd [↑](#footnote-ref-43)